

# Gaceta Parlamentaria

Apartado Uno



# Iniciativas

San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de febrero de 2018

*2018, "Año de Manuel José Othón"*

**CC. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO EL ESTADO,  
P R E S E N T E S.**

El que suscribe, Manuel Barrera Guillén, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado; 130 de la Ley Orgánica; y 61, 62 y 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, vengo a presentar iniciativa que intenta modificar diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

### **Exposición de motivos**

Los ordenamientos que integran un sistema jurídico deben irse adecuando a los cambios y modificaciones que van teniendo la sociedad a la que regulan, pues de lo contrario los mismos dejan de tener positividad y eficacia en su aplicación y observancia. En ese tenor, es pertinente que a dichos conjuntos normativos se les hagan las adecuaciones indispensable para que puedan tener plena vigencia en el ámbito material, espacial y temporal a los que fueron destinados.

De esta manera, es que a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, requiere de la implementación de ajusten que la hagan más completa, integra y efectiva, que permita su debida armonización con la normativa constitucional y secundaria en el ámbito federal y estatal.

En ese sentido, se establece que el Gobierno del Estado y los municipios en la planeación para el desarrollo de la Entidad, debe ser esta equitativa, incluyente, sustentable y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género, con el propósito de que las acciones de estos ámbitos gubernamentales vayan encaminados a combatir la desigualdad, la pobreza y la falta de atención de grupos vulnerables.

Es relevante contar con un marco jurídico en materia de planeación, que permita prever e implementar las estrategias indispensables y necesarias para orientar el destino y aplicación de los recursos públicos a fines y objetivos más pertinentes y oportunos, en aras de solventar, fortalecer y consolidar el desarrollo y crecimiento económico de la Entidad.

En esa vertiente, es que mediante la planeación se fomente el cuidado de un medio ambiente sano, duradero y próspero.

Otro aspecto importante que plantea esta propuesta, es que la planeación estratégica que realicen los entes del gobierno local promuevan, respetan, protejan y garantizan los derechos humanos que prevén los ordenamientos fundamentales.

De igual manera, se plantea que los instrumentos de planeación que utilicen los órganos de gobierno estatal y municipal, den pleno cumplimiento en materia de derechos y cultura indígena que prevé el artículo 2° de las Carta Magna Federal.

Por otro lado, se fija que debe de existir congruencia del gasto público con los objetivos de los planes de desarrollo, al autorizar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y de los municipios, la Iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado; en ese sentido, se precisa que es a las iniciativas y no a las leyes, o en su caso a la propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado.

Sin contraponerse al plazo previsto para la vigencia del Plan Estatal de Desarrollo, éste contendrá consideraciones y proyecciones a por lo menos dieciocho años, para lo cual se tomarán en cuenta los objetivos generales a largo plazo.

En la etapa de formulación del Plan Estatal de Desarrollo se integra a los organismos constitucionales autónomos, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa.

Finalmente se establece el nombre correcto del instrumento de difusión oficial del Gobierno del Estado, pues ahora la denominación es de Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”; en esa tesitura se sugiere el ajuste.

## **INICIATIVA DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se **REFORMA** los artículos 3° en su párrafo primero y fracciones I, II y III, 4° en su párrafo segundo, 5°, 6° en su fracción III, 8° en su fracción I en su inciso c), 12 en su párrafo primero, 13, 18 y 28; se **ADICIONA** a los artículos 3° las fracciones V y VI, y 11 un párrafo segundo; y las actuales fracciones V y VI del precepto 3° pasan como fracciones VII y VIII, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 3°.** La planeación estratégica deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y los municipios en el desarrollo **equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible** de la Entidad, **con perspectiva de interculturalidad y de género**, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, económicos, sociales, **ambientales** y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del Estado de San Luis Potosí. Para ello, la planeación estatal estará basada en los siguientes principios:

I. El fortalecimiento de la autonomía del Estado en lo político, lo económico, lo social, lo **ambiental** y lo cultural, en el marco del pacto federal;

II. La consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social, cultural y **de un medio ambiente sano** de la sociedad, impulsando la participación activa de sus sectores y organizaciones en la planeación, ejecución y vigilancia de los programas de desarrollo;

III. La igualdad de derechos **entre las personas, la no discriminación**, la atención de las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, particularmente de los grupos sociales que no disponen de los satisfactores esenciales;

IV. ...

V. La obligación del Gobierno del Estado y los municipios de **promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano**;

VI. Al cumplimiento de lo previsto por el artículo 2° Constitucional, en materia de **derechos y cultura indígena**;

VII. El equilibrio de los factores productivos, que proteja y promueva el empleo y la inversión, en un marco de estabilidad económica y social, y

VIII. De igualdad entre mujeres y hombres.

#### **ARTÍCULO 4°.** ...

Los objetivos y prioridades de la planeación estatal y **municipal** serán congruentes con los establecidos en la planeación nacional.

**ARTÍCULO 5°.** Los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; asimismo, serán la base para la coordinación de acciones entre los tres ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. Estos planes y programas estarán sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización que permita ajustarlos a la realidad cambiante del Estado y sus regiones, **así como de los municipios.**

#### **ARTÍCULO 6°.** ...

I a la II. ...

III. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las normas administrativas, presupuestarias, contables, **patrimoniales** y jurídicas, y que la ejecución de los programas logre los objetivos y prioridades de los planes;

IV a la VI. ...

#### **ARTÍCULO 8°.** ...

I. ...

a)-b). ...

c) Procurar la congruencia del gasto público con los objetivos de los planes de desarrollo, al autorizar la **Iniciativa** de Ley de Ingresos del Estado y de los municipios, la **Iniciativa** de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, así como las cuentas públicas estatal y municipales, y

d). ...

II a la VI. ...

**ARTÍCULO 11. ...**

**Sin contraponerse al plazo previsto para su vigencia en el párrafo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo deberá de contener consideraciones y proyecciones a por lo menos dieciocho años, para lo cual se tomará en cuenta los objetivos generales a largo plazo.**

**ARTÍCULO 12.** En la formulación del Plan Estatal de Desarrollo intervendrán las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, **los organismos constitucionales autónomos**, los sectores social y privado, y **las personas** interesadas, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa organizada por el Gobierno del Estado.

. ...

**ARTÍCULO 13.** El Plan Estatal de Desarrollo contendrá las estrategias; objetivos prioritarios **de desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible de la Entidad**; las previsiones generales sobre los recursos a utilizar; la definición de instrumentos; responsables de su ejecución; y los lineamientos de política general, sectorial y regional.

**ARTÍCULO 14 Bis.** Los programas derivados del Plan deberán contener cuando menos, los siguientes elementos:

I. Un diagnóstico general sobre la problemática

**ARTÍCULO 18.** La publicación del Plan Estatal, los planes municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales se hará en el Periódico Oficial del Estado **“Plan de San Luis”**.

. ...

**ARTÍCULO 28.** El Ejecutivo Estatal ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado **“Plan de San Luis”**, de los convenios que se suscriban con los gobiernos municipales.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado **“Plan de San Luis.”**

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Atentamente

**DIP. MANUEL BARRERA GUILLÉN**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone **REFORMAR** el artículo 124 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; los artículos 199, 200 y 201 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí y los artículos 34 y 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, con base en la siguiente:

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
------------------------------

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada como nueva ley en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y la propia del Estado de San Luis Potosí, del 20 de marzo de 2003, constituyeron acciones dispuestas para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública.

Posteriormente, se eleva a rango constitucional el derecho de las personas de acceder a la información en posesión del gobierno, con la reforma del 20 de julio de 2007 que adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, mediante reforma del 3 de marzo del 2016, se dota de autonomía a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, en la fracción III del artículo 17 de la Constitución Política del Estado San Luis Potosí.

En dicha disposición constitucional se prevé que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es *un organismo especializado, imparcial, y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información, y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados*, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la Ley General que

establece las bases, principios generales, y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Señala también, dicha disposición, que dependiente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública habrá *un Sistema Estatal de Documentación y Archivos*, responsable de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información, en posesión de las entidades públicas.

Es ineludible que el tópico de manejo de información se encuentra íntimamente ligado al tema de administración de archivos y documentos, pues éstos últimos deben estar organizados adecuadamente para la óptima gestión del derecho de “acceso a la información”.

Es por ello, que la regulación para el ejercicio de esta importante prerrogativa hizo necesario que se dictaran disposiciones destinadas a la conservación de los documentos en archivos administrativos actualizados; tal y como se desprende de lo preceptuado por la fracción V del párrafo segundo del artículo 6° constitucional; base que es adoptada por la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, a través de la fracción IV de su artículo 2°.

Ahora bien, la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 20 de octubre del 2012, supone que todos los sujetos obligados *cuenten con una estructura que pueda satisfacer las necesidades que se presentan en cuanto a la administración de documentos*.

Dos figuras de gran relevancia que se desprenden de dicha Ley son: el **“Comité de Información”** que prevé el artículo 7°, fracción XIV, y que serán *los órganos colegiados integrados en cada entidad pública para vigilar la custodia material de los acervos documentales de cada sujeto obligado*, y el **“Coordinador de Archivos”** a que se refiere el artículo 13 del Ordenamiento en comento, y que serán, por su parte, *los responsables de supervisar la organización de los archivos al interior de sus dependencias y de elaborar los instrumentos de control archivístico, de acuerdo a los manuales y lineamientos que se elaboren para tal efecto por el Comité Técnico de Archivo*.

El Comité de Información a que nos referimos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, será responsable además de la elaboración del reglamento interno en materia de archivos, así como de los manuales operativos necesarios para el manejo eficiente de los archivos.



Cabe destacar, que del Diagnóstico de los Archivos Públicos del Estado de San Luis Potosí, publicado en el año 2010 por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se desprende que pocos de los sujetos obligados se han preocupado por asignar un responsable de custodiar la documentación y administrarla.

En el caso particular del Poder Legislativo el Estado de San Luis Potosí, revisando nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, advertimos que se prevé a un Encargado del Archivo Administrativo e Histórico del Congreso.

En el caso de Ley Orgánica del Poder Legislativo, podemos advertir que en el artículo 119, fracción V (que se adicionó el 13 de mayo del 2014) se prevé un “Comité de Información”, y en el artículo 124 ter, adicionado en la misma fecha, se señala que dicho Comité estará integrado y actuará en términos y conforme a las funciones establecidas *en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí*.

Sin embargo de un análisis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, nos percatamos que en todo su texto no se encuentra previsto el “Comité de Información”, por lo que resulta inconcuso que nuestro artículo 124 ter emita a tal Ordenamiento.

La Ley General de Acceso a la Información Pública prevé a los “Comités de Transparencia”, que también deberá integrar cada sujeto obligado, pero que indiscutiblemente se trata de un órgano colegiado de diversa naturaleza y con diversas funciones a lo que la Ley de Archivo del Estado de San Luis Potosí prevé para los “Comités de Información”.

Los “Comités de Transparencia” procesarán solicitudes en materia de información pública, según se advierte del artículo 44 de Ley General de Acceso a la Información Pública, y los “Comités de Información” vigilarán y dictaminarán los procesos de depuración, transferencia y valoración documental; evalúan qué documentos pueden obtener la Declaratoria de Patrimonio Documental Histórico y Cultural, así como cuáles reportan valor histórico, administrativo, jurídico o económico, según se advierte del artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

La remisión del artículo 124 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, resultaba adecuada en el 2014 en que adicionó dicha disposición, tomando en consideración que en esa fecha cobraba vigencia la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de octubre del 2007, y tal Ordenamiento, en ese entonces, si preveía a los “Comités de Información”, en su artículo 3º, fracción IX:

*“IX. Comité de información: órgano colegiado que se integrará en cada una de las entidades públicas, para resolver sobre la información que deberá clasificarse como reservada y confidencial;”*

Sin embargo, la nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de mayo del 2016, que vino a derogar a la del 18 de octubre del 2007, no prevé en todo su texto a tales “Comités de Información”.

De ahí que resulte imperativo adecuar, no tan solo el artículo 124 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sino los artículos 34 y 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, que también remiten en su texto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Ocurre lo mismo con lo previsto en el artículo 199 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí (reformado el 7 de mayo del 2012), que prevé un “Encargado del Archivo Administrativo e Histórico del Congreso”, cuando de los artículos 13 y 22, fracción V de la Ley de Archivos del Estado (20 octubre 2012), se advierte que las funciones que se enumeran en el diverso artículo 201 son las correspondientes al “Coordinador de Archivos”.

En el mismo sentido, los Lineamientos Generales para la Gestión de Archivo emitidos por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, publicados el 14 de febrero del 2013 en el Periódico Oficial del Estado prevén en su capítulo III, todo lo relativo al “Coordinador de Archivos”.

Si tomamos en consideración el contenido del artículo 203 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, podemos concluir que el diverso 124 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, debe remitirse en cuanto a las funciones el Comité de Información a la Ley de Archivos del Estado y no a la Ley de Transparencia que no prevé a dichos Comités.

Otro aspecto que es importante puntualizar es que conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Archivos del Estado, el Comité de Información es la instancia responsable de la elaboración del Reglamento Interno en materia

de Archivos del sujeto obligado al que pertenezca, así como los manuales operativos necesarios para el manejo eficiente de los archivos, instrumentos de los que carecemos en el Poder Legislativo del Estado, toda vez que no debe entenderse como cumplido con tal extremo, con el hecho de que en el apartado de “transparencia” de la página virtual del Congreso se encuentre una *“guía simple de archivos”*, a fin de satisfacer, tanto el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado como el 14 de la Ley de Archivos del Estado, pues la ley exige con precisión *“un reglamento interno”* y un *“manual operativo para el manejo eficiente de los archivos”*.

No es óbice para no proceder a emitir un reglamento interno y un manual operativo para el manejo eficiente de los archivos, el hecho de que existan instrumentos como los *“Lineamientos Generales para la Gestión de Archivo”* emitidos por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, publicados el 14 de febrero del 2013 en el Periódico Oficial del Estado, pues pese a tal instrumento, podemos observar que el Poder Judicial del Estado si cuenta con un Reglamento General de Archivos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del 2013 y con lineamientos generales para la gestión de archivos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero del 2013.

En tal virtud es menester que quede precisado, en el artículo 124 ter, dentro de las atribuciones del “Comité de Información”, lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Archivos del Estado, y en consecuencia, proceder a emitir los instrumentos en referencia.

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
<p data-bbox="240 1482 771 1549"><b>Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado</b></p> <p data-bbox="214 1591 799 1808"><b>ARTICULO 124 TER.</b> El Comité de Información estará integrado y actuará en términos y conforme a las funciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.</p> <p data-bbox="224 1850 789 1915"><b>Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado</b></p>	<p data-bbox="850 1482 1382 1549"><b>Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado</b></p> <p data-bbox="824 1591 1404 1808"><b>ARTICULO 124 TER.</b> El Comité de Información estará integrado y actuará en términos y conforme a las funciones establecidas por <b>los artículo 35, 36 y 56</b> de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.</p> <p data-bbox="834 1850 1395 1915"><b>Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado</b></p>

<p><b>ARTÍCULO 199.</b> Dependiente de la Oficialía Mayor habrá un <del>Archive Administrativo e Histórico del Congreso</del>, encargado de ejecutar y vigilar la aplicación de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí al interior del Poder Legislativo, así como vincularse con el Sistema Estatal de Documentación y Archivo</p> <p><b>ARTICULO 200.</b> Para ser <del>encargado del Archive Administrativo e Histórico</del> del Congreso se requiere:</p> <p>I a la VI...</p> <p><b>ARTICULO 201.</b> Corresponde al <del>encargado del Archive Administrativo e Histórico</del> del Congreso:</p> <p>I a IV...</p> <p style="text-align: center;"><b>Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTÍCULO 34. Los sujetos obligados para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de esta Ley, se auxiliarán del Comité de Información <del>a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.</del></p> <p>ARTÍCULO 35. El Comité de Información, <del>además de las establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado,</del> tendrá las atribuciones siguientes:</p> <p>I a V...</p>	<p><b>ARTÍCULO 199.</b> Dependiente de la Oficialía Mayor habrá un <b>Coordinador de Archivo</b> del Congreso, encargado de ejecutar y vigilar la aplicación de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí al interior del Poder Legislativo, así como vincularse con el Sistema Estatal de Documentación y Archivo</p> <p><b>ARTICULO 200.</b> Para ser <b>Coordinador de Archivo</b> del Congreso se requiere:</p> <p>I a la VI...</p> <p><b>ARTICULO 201.</b> Corresponde al <b>Coordinador de Archivo</b> del Congreso:</p> <p>I a IV...</p> <p style="text-align: center;"><b>Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTÍCULO 34. Los sujetos obligados para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de esta Ley, se auxiliarán del Comité de Información.</p> <p>ARTÍCULO 35. El Comité de Información, tendrá las atribuciones siguientes:</p> <p>I a V...</p>
--	---

Por lo expuesto, presento ante esta Asamblea el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se reforma el artículo 124 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; los artículos 199, 200 y 201 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí y los artículos 34 y 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, para quedar como siguen:

### **Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado**

**ARTICULO 124 TER.** El Comité de Información estará integrado y actuará en términos y conforme a las funciones establecidas por **los artículo 35, 36 y 56 de la Ley de Archivos** del Estado de San Luis Potosí.

### **Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado**

**ARTÍCULO 199.** Dependiente de la Oficialía Mayor habrá un **Coordinador de Archivo** del Congreso, encargado de ejecutar y vigilar la aplicación de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí al interior del Poder Legislativo, así como vincularse con el Sistema Estatal de Documentación y Archivo

**ARTICULO 200.** Para ser **Coordinador de Archivo** del Congreso se requiere:

I a la VI...

**ARTICULO 201.** Corresponde al **Coordinador de Archivo** del Congreso:

I a IV...

### **Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí**

**ARTÍCULO 34.** Los sujetos obligados para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de esta Ley, se auxiliarán del Comité de Información.

**ARTÍCULO 35.** El Comité de Información, tendrá las atribuciones siguientes:

I a V...

### **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

**SEGUNDO.**-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone **REFORMAR** el artículos 1° y **ADICIONAR** el artículo 7°, fracción XIV, de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, con base en la siguiente:

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
------------------------------

Como legisladores, tenemos la responsabilidad de adecuar y corregir los textos jurídicos, a fin de mantener cierta “decencia” en la expresión escrita, en razón de que los mismos gozan de “publicidad”, y hacer público algo, incrementa la exigencia de exactitud y perfección en redacción y semántica, por la multitud de personas que van a tener acceso a dichos documentos legislativos.

Es menester mejorar la calidad de la redacción de nuestros textos jurídicos, publicando sin erratas, sin indeterminaciones ni vaguedades, y de manera completa, esencialmente por a quien van dirigidos los mismos.

Así pues, conscientes de la importancia de ello, es que mediante la presente iniciativa propongo corregir el error de redacción del artículo 1° de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial del Estado el sábado 20 de octubre del 2012, así como completar la fracción XIV del artículo 7° del mismo Ordenamiento.

El artículo primero del Ordenamiento en comento tiene un “error de dedo” al señalar “San **Lis** Potosí”, que debe adecuarse a una correcta redacción del nombre de nuestro Estado, esto es, “San Luis Potosí”.

Por su parte, la fracción XIV del artículo 7° de la misma Ley, al definir al “Comité de Información” señala de manera incompleta que es un órgano colegiado integrado en las entidades públicas para resolver la información que “deberá”...y no termina la idea.

Revisando el artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, podemos percatarnos de que dicho Órgano Colegiado, además de las atribuciones establecidas

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, **deberá** vigilar y dictaminar los procesos de depuración, transferencia y valor documental; evaluar los documentos propuestos para obtener declaratoria de patrimonio documental histórico y cultural y llevar el registro de la evaluación de los documentos que reporten valor histórico, administrativo, jurídico o económico y emitir dictámenes respecto de las baja documentales.

Luego entonces, resulta imperativo llevar estas acciones a la redacción de la fracción XIV del artículo 7° para que quede completa la definición de tal disposición.

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
<p>ARTÍCULO 1°. La presente Ley es de orden público, interés general y observancia general en el Estado de San Luis Potosí, y tiene por objeto establecer los mecanismos de regulación, organización, difusión, y conservación de la documentación e información generada o bajo resguardo de los sujetos obligados, que contengan y constituyan la información pública y el Acervo Documental Histórico y Cultural del Estado; así como establecer el funcionamiento de las autoridades en materia de archivos en la entidad.</p>	<p>ARTÍCULO 1°. La presente Ley es de orden público, interés general y observancia general en el Estado de San Luis Potosí, y tiene por objeto establecer los mecanismos de regulación, organización, difusión, y conservación de la documentación e información generada o bajo resguardo de los sujetos obligados, que contengan y constituyan la información pública y el Acervo Documental Histórico y Cultural del Estado; así como establecer el funcionamiento de las autoridades en materia de archivos en la entidad.</p>
<p>ARTÍCULO 7°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:</p>	<p>ARTÍCULO 7°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:</p>
<p>I a la XIII...</p>	<p>I a la XIII...</p>
<p>XIV. Comité de información: Órgano colegiado integrado en las entidades públicas, <del>para resolver la información que</del> <b>deberá</b></p>	<p>XIV. Comité de información: Órgano colegiado integrado en las entidades públicas, <b>encargada de vigilar la custodia y seguridad jurídica y material de los acervos que conformen la memoria documental de dichas entidades.</b></p>
<p>XV a la XL</p>	<p>XV a la XL</p>

Por lo expuesto, presento ante esta Asamblea el siguiente:



## PROYECTO DE DECRETO

**ÚNICO:** Se reforma el artículo 1° y se adiciona la fracción XIV del artículo 7°, ambos de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1°. La presente Ley es de orden público, interés general y observancia general en el Estado de San Luis Potosí, y tiene por objeto establecer los mecanismos de regulación, organización, difusión, y conservación de la documentación e información generada o bajo resguardo de los sujetos obligados, que contengan y constituyan la información pública y el Acervo Documental Histórico y Cultural del Estado; así como establecer el funcionamiento de las autoridades en materia de archivos en la entidad.

ARTÍCULO 7°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I a la XIII...

XIV. Comité de información: Órgano colegiado integrado en las entidades públicas, **encargada de vigilar la custodia y seguridad jurídica y material de los acervos que conformen la memoria documental de dichas entidades.**

XV a la XL

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

### ATENTAMENTE

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone **ADICIONAR** una fracción al artículo 2° de la Ley para la Inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de San Luis Potosí, con base en la siguiente:

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
------------------------------

Los modelos y concepciones sobre la discapacidad han evolucionado a través del tiempo, y de esta manera han transitado desde la perspectiva de entenderla como un impedimento o restricción de un individuo para ser parte de una sociedad, hasta la perspectiva rehabilitadora, que aborda la discapacidad desde el punto de vista científico y humano, promoviendo la inclusión social.

Con ello, arribamos a un modelo social, íntimamente ligado a los derechos humanos, en el que el planteamiento esencial nos lleva a concluir y reconocer que las causas que originan la discapacidad son preponderantemente sociales, es decir, no son las limitaciones individuales las que impiden acceder a la sociedad, sino las limitaciones de la propia sociedad, las que impiden tal acceso, con esa indiferencia en la prestación de servicios apropiados para asegurar su adecuada adaptación social.

De ahí que la aceptación “a la diferencia” sea fundamental para la plena inclusión de las personas con discapacidad a su entorno.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, precisamente incluye tal perspectiva, al reconocer en su preámbulo al respecto que *“la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”*.

En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus Observaciones finales sobre el informe inicial del Estado Mexicano recomendó que se redoblaran *“los esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología peyorativa de los derechos de las personas con discapacidad”*.

En ese sentido, del análisis de las definiciones que contiene el artículo 2° de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado (publicada el 13 de septiembre del 2013 y cuya última reforma se publicó el 20 de septiembre del 2016), a fin de corroborar que la relativa a “discapacidad” concuerda con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, advertimos que no contamos con tal definición, pues nuestro texto legal se limita a definir la “discapacidad auditiva”, no obstante que dicho Ordenamiento se refiere a todas las personas con discapacidad, no exclusivamente a las que tengan ese tipo de discapacidad.

En consecuencia, la presente iniciativa propone introducir en la Ley para la Inclusión de las personas con discapacidad en el Estado, el concepto “general” de discapacidad contenido en los estándares internacionales, en cumplimiento a la recomendación emitida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Estado Mexicano.

Cabe puntualizar que la adecuada definición de discapacidad trascenderá de manera importante a otros ordenamientos como lo es la “Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí”, en razón de que dentro de los principios de “no discriminación” a que alude el mismo en su artículo 1° encontramos precisamente “las discapacidades”.

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

<b>TEXTO VIGENTE</b>	<b>PROPUESTA</b>
ARTICULO 2°. Para los efectos de la presente Ley, además de las definiciones establecidas; tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México forma parte, como en el artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y los	ARTICULO 2°. Para los efectos de la presente Ley, además de las definiciones establecidas; tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México forma parte, como en el artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de Personas con

<p>artículos 3° y 4° de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se entenderá por:</p> <p>I al III...</p> <p>IV. Discapacidad auditiva: pérdida auditiva con relación a la lesión del oído medio o interno, o bien a la patología retro coclear en la cual se puede presentar hipoacusia reversible o permanente;</p> <p>V a la VIII...</p>	<p>Discapacidad y los artículos 3° y 4° de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se entenderá por:</p> <p>I al III...</p> <p><b>IV. Discapacidad: Es el resultado de la interacción entre las personas con diversidad funcional y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;</b></p> <p>V. Discapacidad auditiva: pérdida auditiva con relación a la lesión del oído medio o interno, o bien a la patología retro coclear en la cual se puede presentar hipoacusia reversible o permanente;</p> <p>VI a la VIII...</p>
--	---

Por lo expuesto, presento ante esta Asamblea el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se incluye una fracción al artículo 2° de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de San Luis Potosí, por lo que se reforma la fracción IV y se recorre la numeración de las restantes, para quedar como sigue:

ARTICULO 2°. Para los efectos de la presente Ley, además de las definiciones establecidas; tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México forma parte, como en el artículo 2° de la Ley

General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y los artículos 3° y 4° de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se entenderá por:

I al III...

**IV. Discapacidad: Es el resultado de la interacción entre las personas con diversidad funcional y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;**

V. Discapacidad auditiva: pérdida auditiva con relación a la lesión del oído medio o interno, o bien a la patología retro coclear en la cual se puede presentar hipoacusia reversible o permanente;

VI a la VIII...

## **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

## **A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone **ADICIONAR** una fracción al artículo 8° de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí, con base en la siguiente:

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
------------------------------

En la actualidad, es una práctica generalizada de las Instituciones Bancarias y Financieras, agradecer la confianza de sus clientes y premiar su preferencia mediante una serie de beneficios exclusivos en servicios como recibir atención “ágil” en cualquiera de sus sucursales.

Dicha política hace evidente que dichas Instituciones conceden un tratamiento distinto a sus “clientes” que a sus “usuarios”, y la clave está en tener dinero y en querer invertirlo en esa entidad.

Por tanto, quien cumple con dicha condicionante, de gozar de cierto poder adquisitivo, puede lograr un trato “diferente” y “preferente” al del resto de los usuarios “normales” y convertirse en un cliente “mimado” que, entre otras cosas, se olvidará de hacer filas y tener que esperar su turno

En México el 56% de la ciudadanía no cuenta con algún tipo de cuenta bancaria de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) que presentaron INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por tanto, estamos hablando de que más de la mitad de la ciudadanía que requiere hacer pagos a quienes sí son clientes de Instituciones Bancarias, son usuarios “normales” y deben esperar, siempre, a ser atendidos con posterioridad a los clientes “mimados”, independientemente de haberse levantado temprano o no, u organizar su día para liquidar cuentas.

A menudo somos testigos de innumerables casos en los que decenas de personas toman su turno en las filas de sucursales bancarias para poder efectuar algún movimiento y mientras ello sucede, suele ocurrir que en el espacio correspondiente a clientes preferentes, sin que exista gran número de personas formadas son llamados para ofrecerles la atención en lo inmediato.

Frente a ello, miles de usuarios de bancos muestran su disgusto pues consideran injusto que no se les respete el tiempo dedicado a la espera para ser atendidos en ventanilla, por el simple hecho de *no contar con un contrato o testimonio* que lo acredite como cuentahabiente asiduo o titular de una cuenta bajo las siglas de la institución bancaria donde se encuentre en ese momento.

Esto, sin lugar a dudas, constituye una estrategia discriminatoria y clasista, al hacer uso de medidas distintivas y preferenciales entre clientes y usuarios.

Partiendo del principio de la *“dignidad humana”* que deriva del artículo 1° de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí Esta Ley, como derecho de toda persona a *“no ser discriminada”* en razón de, entre otros motivos, su *condición social o económica*, y del concepto de “discriminación” a que se refiere el artículo 7° del mismo Ordenamiento, queda claro que el trato “preferencial” otorgado por las Instituciones Bancarias es a todas luces discriminatorio en razón de que “distingue”, “excluye” y “restringe” basándose en la condición económica de un individuo.

El derecho de todo individuo a no ser discriminado constituye una garantía individual, consagrada en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala que *“todo acto de discriminación debe ser prohibido tan sólo por ser contrario a los derechos básicos de las personas, así pueda entenderse en el ámbito público como en el privado”*.

En este sentido, resulta menester erradicar prácticas discriminatorias como esta, por ser violatoria a los preceptos constitucionales en la materia.

Cabe puntualizar que de manera alguna se puede confundir la distinción de una atención preferente con las facilidades que derivan de Ley y se anteponen a cualquier derecho, tratándose de personas con discapacidad, pues ello no se pone en tela de juicio, ni constituye materia de la presente propuesta.

La presente iniciativa pretende más bien, la construcción de nuevos escenarios con disposiciones que refuercen la protección de los derechos humanos,

independientemente de las políticas internas para la actuación y desarrollo de labores institucionales de particulares.

Dicho de otra manera: la autonomía de voluntad de la que goza todo sujeto particular para poner en práctica aquellas acciones que más le convengan, no puede rebasar los derechos inherentes de cualquier persona, pues precisamente, forma parte del propósito de las normas, mitigar cualquier conducta discriminatoria.

Luego entonces, esta iniciativa, en concordancia con los preceptos constitucionales y legales existentes, pretende inhibir actos degradantes a la dignidad de las personas mediante normas que fomenten el respeto entre la población en general; ahora atendidas en ámbitos tanto públicos como particulares, previniendo aspectos tales como la distinción, exclusión, o trato preferencial por los motivos que sean.

Es indiscutible que la autonomía de la voluntad de los particulares deberá ceder siempre, cuando se ponga en juego *la dignidad de la persona humana*.

Por lo tanto, debemos erradicar costumbres y patrones de conducta ya generalizados en instituciones dedicadas a la atención y recepción de grandes números de personas por medio de los cuales se muestra radicalmente un trato diferencial y excluyente.

Por lo antes expuesto, propongo adicionar como conducta discriminatoria de las que prevé el artículo 8° de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí la consistente en *“establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y privadas”*.

Para tales efectos, se reforma la fracción XXXVIII del artículo 8° de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí y se adiciona una XXXIX para recorrer la actual XXXVIII.

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

<b>TEXTO VIGENTE</b>	<b>PROPUESTA</b>
ARTICULO 8. Ningún órgano público, federal, estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral, realizará actos o conductas que	ARTICULO 8. Ningún órgano público, federal, estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral, realizará actos o conductas que



<p>discriminen a cualquier persona, por lo que, para efectos de esta Ley, de forma enunciativa, más no limitativa, se consideran conductas discriminatorias aquéllas que en razón del origen étnico, de la edad, del género, de la discapacidad, de la condición social o legal, de la nacionalidad o calidad migratoria, de las condiciones de salud, de la religión, de las opiniones, de las preferencias sexuales, del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, ejecuten las siguientes acciones:</p> <p>I a la XXXVII...</p> <p>XXXVIII. En general, cualquier otra conducta que atente contra la dignidad de la persona.</p>	<p>discriminen a cualquier persona, por lo que, para efectos de esta Ley, de forma enunciativa, más no limitativa, se consideran conductas discriminatorias aquéllas que en razón del origen étnico, de la edad, del género, de la discapacidad, de la condición social o legal, de la nacionalidad o calidad migratoria, de las condiciones de salud, de la religión, de las opiniones, de las preferencias sexuales, del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, ejecuten las siguientes acciones:</p> <p>I a la XXXVII...</p> <p><b>XXXVIII. Establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y privadas</b></p> <p>XXXIX. En general, cualquier otra conducta que atente contra la dignidad de la persona.</p>
---	---

Por lo expuesto, presento ante esta Asamblea el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se adiciona una fracción al artículo 8° de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí, y se recorre la numeración para que la actual XXXVIII pase a ser la XXXIX, y quedar como sigue:

ARTICULO 8. Ningún órgano público, federal, estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral, realizará actos o conductas que discriminen a cualquier persona, por lo que, para efectos de esta Ley, de forma enunciativa, más no limitativa, se consideran conductas discriminatorias aquéllas que en razón del origen étnico, de la edad, del género, de la discapacidad, de la condición social o legal, de la nacionalidad o calidad migratoria, de las condiciones de salud, de la religión, de las opiniones, de las

preferencias sexuales, del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, ejecuten las siguientes acciones:

I a la XXXVII...

**XXXVIII. Establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y privadas**

XXXIX. En general, cualquier otra conducta que atente contra la dignidad de la persona.

## **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

## **A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa que propone **ADICIONAR** los artículos 5°, Apartado “A” de la Ley de Salud y 2° de la Ley de Bebidas Alcohólicas, ambas del Estado de San Luis Potosí, con base en la siguiente:

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
------------------------------

La obesidad es un problema de Salud Pública en el mundo, ya que se ha incrementado en forma importante en la última década. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012) para el año 2008 había aproximadamente 1,400 millones de adultos con sobrepeso.

En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 muestran que 48.6 millones de personas padecen de sobrepeso u obesidad en nuestro país, equivalente a un 71.3% de la población.

En San Luis Potosí, de acuerdo a dicha encuesta ENSANUT 2012 (por entidad federativa) la población con sobrepeso u obesidad por grupos de edad es del: 7.3% en los niños menores de 5 años, 27.2% en los niños de 5 a 11 años de edad; 30.9% en los adolescentes (12 a 19 años de edad) y 65.2% en los adultos.

La Obesidad definida como una “alteración de naturaleza metabólica, caracterizada por un aumento excesivo de la grasa del cuerpo, que ocasiona otras enfermedades de tipo cardiovascular, cardiorrespiratoria, hipertensión y diabetes”.

No solo es un problema estético, sino una enfermedad grave, que disminuye seis años el promedio de vida de las mujeres y 7.2 años el de hombres,

además de tener implicaciones genéticas, económicas, sociales y ser generadora de una gran carga de discriminación y estrés para quien la sufre.

Este padecimiento, se encuentra entre las causas de mortalidad más frecuentes en México, lo que lo convierte en un problema alarmante para la salud de la sociedad mexicana, pues cada día es mayor el porcentaje de personas que sufren y padecen de esta enfermedad.

Con el fin de abatir estas tendencias y procurar la salud y el buen hábito alimenticio de la población potosina, es nuestro deber como legisladores y representantes de la sociedad, establecer las medidas necesarias y congruentes para atacar este fenómeno y contar con una estrategia definida, clara y amplia que permitan establecer el control de la obesidad y el sobrepeso en el Estado.

Una buena alimentación implica la ingesta adecuada, en cantidad y calidad, de alimentos que requiere nuestro organismo para mantenernos sanos y llenos de energía, por tanto, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo requiere, conduce al aumento de peso y el cuadro de obesidad.

Al respecto, se han tomado medidas relativas, en otras partes del mundo, como es el caso, del Reino Unido, en donde desde 2009 se acordó con las cadenas de restaurantes publicar las calorías en sus menús; y en la ciudad de Nueva York se estableció en 2008 la obligatoriedad, con al menos 15 franquicias.

La cadena de comida rápida Mc. Donald's incorporó la información en el menú con el objetivo de ayudar a los clientes a elegir lo que comen, y están elaborando nuevos menús con vegetales frescos. Otras cadenas como Carl's Junior inclusive contemplan en sus menús hamburguesas sin pan. Dentro de estas empresas que han firmado un compromiso para desplegar la información calórica en sus establecimientos también podemos encontrar a la cadena de pollo frito "Kentucky Fried Chicken".

Un estudio llevado a cabo por el Departamento de Salud de Nueva York, realizó una encuesta con más de 7.000 personas en 2007 -antes de la introducción de dicha medida de informar contenido calórico- y otra encuesta en 2009, cuando ya se había puesto en práctica, en 168 establecimientos pertenecientes a 11 de las principales cadenas de restaurantes de la ciudad.

Aproximadamente 15% informó que había utilizado la información calórica, lo cual condujo a que compraran alimentos con menos calorías.

En algunos restaurantes como McDonald's el promedio de calorías por comida se redujo 5,3%. Considero que incluso una reducción de 100 calorías por comida marca una diferencia importante, de ahí el impacto positivo que la presente propuesta representaría para la sociedad potosina.

Cabe puntualizar que el Senado de la República en 2014 entro al análisis de una reforma para la emisión **de una Norma Oficial Mexicana que obligaría a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos, sobre todo de comida rápida, a publicar en sus menús el contenido calórico de los alimentos y productos que ofrezcan.**

La iniciativa de reformas fue presentada por senadores de todos los partidos, y prevé publicar información sobre las calorías, de forma destacada, en sus cartas.

En los argumentos de la iniciativa en México se plantea incorporar las enfermedades atribuibles o asociadas a la obesidad como materia de salubridad general.

Prevé, asimismo, **fomentar la expedición de Normas Oficiales Mexicanas en materia nutricional para contribuir a mejorar los hábitos alimenticios y prevenir enfermedades como obesidad y diabetes.**

Cristina Díaz y Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Mayans y Miguel Barbosa, del de la Revolución Democrática, y César Octavio Pedroza, de Acción Nacional, entre otros, destacaron la urgencia de ampliar las facultades del Ejecutivo en la emisión de normas que controlen esos males.

“En el régimen transitorio, la iniciativa propone que la Secretaría de Salud dicte una Norma Oficial Mexicana para requerir a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que se dediquen a la venta y el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que publiquen y exhiban en sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos a la venta”.

Se añade que la información deberá ser clara, legible y estar escrita en al menos el mismo tamaño que el precio, además de especificar el porcentaje que las calorías representan de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el tiempo de ejercicio necesario para “quemar” dichas calorías.

Se precisa que para la formulación de la Norma Oficial Mexicana, la Secretaría podría invitar a que participen las organizaciones de la sociedad involucradas en el tema, así como expertos de los institutos nacionales de Nutrición y de Salud Pública.

La iniciativa señala que se excluiría de la regulación a los pequeños negocios y microempresas, al tiempo que se contemplaría la posibilidad de otorgar apoyos a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Se aclara que la propuesta tiene fines exclusivamente de carácter sanitario, por lo que es importante cuidar y preservar las fuentes de empleo.

También se plantea un ajuste dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sintonía con los cambios propuestos para la Ley General de Salud.

En el mismo sentido que dichas propuestas lo sostienen, indiscutiblemente es necesario contrarrestar la obesidad porque es un factor de riesgo de padecer diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, asma, inflamación crónica, hígado graso y cálculos biliares, entre otras complicaciones, ello sin considerar que, esa enfermedad provoca baja autoestima, depresión y desórdenes alimentarios".

Una de las formas para que la población potosina tome decisiones asertivas cuando come en la calle, es acercarle la información nutrimental de los platillos en los **menús** de los restaurantes.

En tal virtud, resulta imperativo que la sociedad potosina conozca, y esté debidamente informada, sobre el valor alimenticio y nutricional de la comida que consume diariamente en restaurantes y demás establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, así como de la ingestión diaria recomendada de calorías por persona.

Por tal motivo, y en razón de los anteriores argumentos se propone reformar la Ley de Salud y la Ley de Bebidas Alcohólicas, ambas del Estado, con el fin de obligar a los establecimientos mencionados para que en sus cartas de menú, señalen las calorías que contienen por platillo los alimentos que ofrecen al público, así como las calorías promedio a consumir diariamente.

Con esta propuesta, la sociedad potosina estará informada y tendrá la capacidad de decidir sobre los alimentos que ingiere en base al valor alimenticio y nutricional de los mismos, mejorando así, sus hábitos alimenticios.

Decretar la obligatoriedad de publicar la información nutricional pretende dos grandes efectos. Primero, que los consumidores ingieran menos calorías, grasa, azúcar y sodio al momento de ir a los restaurantes. Segundo, incentivar indirectamente a que los restaurantes reformulen sus productos de forma tal que contengan menos calorías, azúcares, grasas y sodio”.

De esta manera, en cuanto a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, se pretende adicionar un último párrafo al artículo 2° para fijar esta obligación para todos los establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos en el Estado.

En cuanto a la Ley de Salud del Estado se pretende adicionar en el artículo 5°, apartado “A”, una fracción “XI ter” que, en materia de salubridad general corresponda al Estado “vigilar, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias”.

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

<b>TEXTO VIGENTE</b>	<b>PROPUESTA</b>
<p align="center"><b>Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTÍCULO 2°. Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por: I a la XVIII...</p> <p>XIX. Centros o clubes sociales, deportivos y recreativos: establecimientos de asociaciones civiles o sociedades mercantiles, que dan acceso y servicio a socios e invitados, y que dentro de sus instalaciones destinan áreas para restaurante, bar, centro nocturno o salón y/o jardín de fiestas y eventos;</p> <p>XX...</p> <p>XXI. Cine: establecimiento que se dedica a la proyección de, películas o</p>	<p align="center"><b>Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTÍCULO 2°. Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por: I a la XVIII...</p> <p>XIX. Centros o clubes sociales, deportivos y recreativos: establecimientos de asociaciones civiles o sociedades mercantiles, que dan acceso y servicio a socios e invitados, y que dentro de sus instalaciones destinan áreas para restaurante, bar, centro nocturno o salón y/o jardín de fiestas y eventos;</p> <p>XX...</p> <p>XXI. Cine: establecimiento que se dedica a la proyección de, películas o</p>

cortometrajes; eventos especiales; o cualquier otro tipo de producción afín, con propósito de explotación comercial, en el que cuentan con salas con equipamiento e infraestructura, servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXII a la XXXII...

XXXIII. Restaurantes y restaurantes-bar: establecimientos cuya actividad preponderante es la transformación y venta de alimentos para su consumo en los mismos o fuera de ellos, que deben funcionar por lo menos seis días a la semana; en forma accesoria, podrán dentro de dichos establecimientos, expendirse bebidas alcohólicas, presentar variedad, música en vivo o grabada, exclusivamente ambiental; no contarán con pista de baile, ni se cobrará el acceso a los mismos;

XXXIV y XXXV...

XXXVI. Teatro: establecimiento que se dedica a la proyección o escenificación de eventos especiales, artísticos, culturales, o cualquier otro tipo de producción afín, con el propósito de explotación comercial o cultural, y que cuenta con equipamiento e infraestructura de servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXXVII y XXXVIII...

XXXIX. Terrazas: espacios ubicados en el exterior de los establecimientos a que se refieren las fracciones, XXVI, XXVII, y XXXIII de este artículo, los que, para su operación, deberán contar con las autorizaciones que correspondan de uso de suelo y funcionamiento otorgadas por la autoridad municipal. Debiendo, en su caso, garantizar la cobertura de reparación o reposición de los daños que, por su funcionamiento, se pueda causar a los espacios públicos en los que se ubiquen.

cortometrajes; eventos especiales; o cualquier otro tipo de producción afín, con propósito de explotación comercial, en el que cuentan con salas con equipamiento e infraestructura, servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXII a la XXXII...

XXXIII. Restaurantes y restaurantes-bar: establecimientos cuya actividad preponderante es la transformación y venta de alimentos para su consumo en los mismos o fuera de ellos, que deben funcionar por lo menos seis días a la semana; en forma accesoria, podrán dentro de dichos establecimientos, expendirse bebidas alcohólicas, presentar variedad, música en vivo o grabada, exclusivamente ambiental; no contarán con pista de baile, ni se cobrará el acceso a los mismos;

XXXIV y XXXV...

XXXVI. Teatro: establecimiento que se dedica a la proyección o escenificación de eventos especiales, artísticos, culturales, o cualquier otro tipo de producción afín, con el propósito de explotación comercial o cultural, y que cuenta con equipamiento e infraestructura de servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXXVII y XXXVIII...

XXXIX. Terrazas: espacios ubicados en el exterior de los establecimientos a que se refieren las fracciones, XXVI, XXVII, y XXXIII de este artículo, los que, para su operación, deberán contar con las autorizaciones que correspondan de uso de suelo y funcionamiento otorgadas por la autoridad municipal. Debiendo, en su caso, garantizar la cobertura de reparación o reposición de los daños que, por su funcionamiento, se pueda causar a los espacios públicos en los que se ubiquen.



<p style="text-align: center;"><b>Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTICULO 5°. En los términos de la Ley General de Salud, y de la presente Ley, corresponde al estado:</p> <p>A. En materia de salubridad general:</p> <p>I a la XI bis...</p> <p>XII a la XXXVII</p>	<p><b>Los establecimientos señalados en las fracciones XIX, XXI, XXXIII, XXXVI y XXXIX, que prestan servicios de restaurante, esto es, que su actividad preponderante es la transformación y venta de alimentos para su consumo, deberán publicar y exhibir en sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos a la venta. La información deberá ser clara, legible y estar escrita en al menos el mismo tamaño que el precio, además de especificar el porcentaje que las calorías representan de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el tiempo de ejercicio necesario para “quemar” dichas calorías.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí</b></p> <p>ARTICULO 5°. En los términos de la Ley General de Salud, y de la presente Ley, corresponde al estado:</p> <p>A. En materia de salubridad general:</p> <p>I a la XI bis...</p> <p><b>XI ter. Vigilará, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias</b></p> <p>XII a la XXXVII</p>
--	---

Por lo expuesto, presento ante esta Asamblea el siguiente:

<b>PROYECTO DE DECRETO</b>
----------------------------

**ÚNICO:** Se adicionan los artículos 5°, Apartado "A" de la Ley de Salud y 2° de la Ley de Bebidas Alcohólicas, ambas del Estado de San Luis Potosí, para quedar como siguen:

**Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí**

ARTÍCULO 2°. Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por:

I a la XVIII...

XIX. Centros o clubes sociales, deportivos y recreativos: establecimientos de asociaciones civiles o sociedades mercantiles, que dan acceso y servicio a socios e invitados, y que dentro de sus instalaciones destinan áreas para restaurante, bar, centro nocturno o salón y/o jardín de fiestas y eventos;

XX...

XXI. Cine: establecimiento que se dedica a la proyección de, películas o cortometrajes; eventos especiales; o cualquier otro tipo de producción afín, con propósito de explotación comercial, en el que cuentan con salas con equipamiento e infraestructura, servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXII a la XXXII...

XXXIII. Restaurantes y restaurantes-bar: establecimientos cuya actividad preponderante es la transformación y venta de alimentos para su consumo en los mismos o fuera de ellos, que deben funcionar por lo menos seis días a la semana; en forma accesorio, podrán dentro de dichos establecimientos, expendirse bebidas alcohólicas, presentar variedad, música en vivo o grabada, exclusivamente ambiental; no contarán con pista de baile, ni se cobrará el acceso a los mismos;

XXXIV y XXXV...

XXXVI. Teatro: establecimiento que se dedica a la proyección o escenificación de eventos especiales, artísticos, culturales, o cualquier otro tipo de producción afín, con el propósito de explotación comercial o cultural, y que cuenta con equipamiento e infraestructura de servicio de restaurante completo, donde se venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y en el interior del mismo;

XXXVII y XXXVIII...

XXXIX. Terrazas: espacios ubicados en el exterior de los establecimientos a que se refieren las fracciones, XXVI, XXVII, y XXXIII de este artículo, los que, para su operación, deberán contar con las autorizaciones que correspondan de uso de suelo y funcionamiento otorgadas por la autoridad municipal. Debiendo, en su caso, garantizar la cobertura de reparación o reposición de los daños que, por su funcionamiento, se pueda causar a los espacios públicos en los que se ubiquen.

**Los establecimientos señalados en las fracciones XIX, XXI, XXXIII, XXXVI y XXXIX, que prestan servicios de restaurante, esto es, que su actividad preponderante es la transformación y venta de alimentos para su consumo, deberán publicar y exhibir en sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos a la venta. La información deberá ser clara, legible y estar escrita en al menos el mismo tamaño que el precio, además de especificar el porcentaje que las calorías representan de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el tiempo de ejercicio necesario para “quemar” dichas calorías.**

### **Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí**

ARTICULO 5º. En los términos de la Ley General de Salud, y de la presente Ley, corresponde al estado:

A. En materia de salubridad general:

I a la XI bis...

**XI ter. Vigilará, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias**

XII a la XXXVII

## **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

Honorable Congreso del Estado  
Sexagésima Primera Legislatura  
Diputadas Secretarias  
**PRESENTES.**

**Diputada María Graciela Gaitán Díaz**, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, iniciativa que propone **adicionar la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.**

### **Exposición de Motivos**

El Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, en el Título Octavo (artículo 169) relacionado a la paternidad y filiación, señala dos hipótesis para presumir como hijos de cónyuges o concubinos a los nacidos dentro del matrimonio o concubinato, a saber:

1. Quienes hayan nacido **después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio o iniciado el concubinato**, y
2. La o el nacido **dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o concubinato.**

Ahora bien, dentro del mismo Código, hay un capítulo relativo específicamente al reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, en el que se enumeran una serie de supuestos en los que un niño puede ser reconocido como hijo; ello aduciendo de antemano que **éstos no recibirán calificativo alguno por ser iguales ante la ley, la familia, la sociedad y el Estado.**

En relación a lo anterior, esta propuesta estriba en contemplar en la ley, una hipótesis adicional consistente en el registro de hijo de mujer casada **PERO QUE NO VIVA CON SU MARIDO** por más de trescientos días (tomando en consideración el término establecido en el artículo 169), que es el término en el cual se reconocen como hijos a los niños nacidos dentro de dicho periodo, además previa notificación del marido. La propuesta se presenta tomando en cuenta el artículo 4º, el cual en el párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que **toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento**; estableciendo asimismo que el Estado es el principal garante de ese derecho.

Concatenado a lo anterior, en cuanto al derecho a la identidad, bajo la premisa del interés superior del niño, UNICEF México ha establecido lo siguiente:

*“El hecho de reconocerlos con un nombre, apellido y nacionalidad garantiza a todos los niños y niñas su derecho a la identidad, a ser visibles y con ello ejercer sus derechos para acceder a servicios de salud, educación, cuidado y de protección.*

*El acta de nacimiento se convierte en un documento muy poderoso que abre las puertas para que todos los niños y niñas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales. Cuando los niños y las niñas no cuentan con un registro desde el nacimiento se exponen con mayor facilidad a peligros como ser víctimas de trata de personas, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, el tráfico de personas, el reclutamiento forzado, etc. Por ello, es esencial que su registro se lleve a cabo inmediatamente después de haber nacido.”<sup>1</sup>*

Es claro que cada modificación legal a los ordenamientos estatales que se realice por el Poder Legislativo, debe sin duda atender al principio del **interés superior del niño**, entendiendo éste como el principio que “busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes, ...por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”<sup>2</sup>. He ahí el valor que reviste esta propuesta, ya que lejos de ir contra disposiciones del propio Código Familiar, de la Ley del Registro Civil o de otros ordenamientos legales, se pretende enteramente **respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos legalmente establecidos en nuestra Constitución.**

Se presenta en los términos siguientes:

Ley del Registro Civil Texto vigente	Ley del Registro Civil Propuesta
ARTÍCULO 73 Bis. No existe correlativo.	ARTÍCULO 73 Bis. Cuando el hijo nazca de una mujer casada que no viva con su marido por más de trescientos días ininterrumpidos y bajo protesta de decir verdad, el Oficial del Registro Civil podrá asentar como padre a otro distinto al marido, siempre y cuando haya la asistencia presencial de ambos a la declaración del nacimiento.  Así mismo, previo a dicho acto, se deberá

<sup>1</sup> Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, México. (2015). Informe Anual UNICEF México. febrero, 2018, de [www.unicef.org.mx](https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf) Sitio web: [https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX\\_15\\_low.pdf](https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf)

<sup>2</sup> Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 DE MAYO DE 2013, párrafo 39.

	notificar al cónyuge por los medios establecidos en la ley.
--	---

Por lo expuesto se propone

**Proyecto  
de  
Decreto**

**ÚNICO.** Se **ADICIONA** el artículo 73 Bis a la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, para quedar:

**ARTÍCULO 73 Bis.** Cuando el hijo nazca de una mujer casada que no viva con su marido por más de trescientos días ininterrumpidos y bajo protesta de decir verdad, el Oficial del Registro Civil podrá asentar como padre a otro distinto al marido, siempre y cuando haya la asistencia presencial de ambos a la declaración del nacimiento.

Así mismo, previo a dicho acto, se deberá notificar al cónyuge por los medios establecidos en la ley.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis” .

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

San Luis Potosí, S.L.P., 26 de febrero de 2018

**MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ  
DIPUTADA**

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

**GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI**, Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en virtud de lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como el de la educación, la salud, y la alimentación, están previstos en diversos Tratados Internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es a partir de la expedición de estas leyes que se da paso a la armonización de las normas estatales, mismas que se llevan a cabo en apego a lo que dispone la nueva Legislación.

En el caso de San Luis Potosí, me parece insoslayable un trabajo de armonización y actualización legislativa, para lograr alcanzar el espíritu de la norma, que es la garantía de privilegiar el interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de ciertos derechos.

En ese sentido, las autoridades debemos realizar nuestro máximo esfuerzo para construir condiciones favorables, en aras de que los menores puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Al menos en mi caso me parece es un principio fundamental.

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí contiene, de manera enunciativa, más no limitativa, un catálogo de derechos para los menores, a fin de garantizar su ejercicio. Por tanto, el objetivo de la reforma aquí planteada consiste en establecer la seguridad jurídica y debido proceso de las niñas, niños y adolescentes del estado, así como el reconocimiento al acceso a las nuevas tecnologías de la información, su derecho a la intimidad y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su condición de migrantes.

Estoy convencida que las niñas, niños y adolescentes deben gozar de los derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida, por tanto es nuestra obligación impulsar las reformas que permitan lograrlo.

<b>ARTÍCULO 13.</b> La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno con
--

<b>ARTÍCULO 13.</b> La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno con
--



<p>perspectiva de género, lo que implica que tengan la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Para ello, son aplicación de esta Ley, los siguientes:</p> <p>I. El interés superior de la niñez;</p> <p>II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en los tratados internacionales;</p> <p>III. La igualdad sustantiva;</p> <p>IV. La no discriminación;</p> <p>V. La inclusión;</p> <p>VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;</p> <p>VII. La participación;</p> <p>VIII. La interculturalidad;</p> <p>IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;</p> <p>X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;</p> <p>XI. La autonomía progresiva;</p> <p>XII. El principio pro persona;</p> <p>XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y</p> <p>XIV. La accesibilidad.</p>	<p>perspectiva de género, lo que implica que tengan la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Para ello, son aplicación de esta Ley, los siguientes:</p> <p>I. El interés superior de la niñez;</p> <p>II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en los tratados internacionales;</p> <p>III. La igualdad sustantiva;</p> <p>IV. La no discriminación;</p> <p>V. La inclusión;</p> <p>VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;</p> <p>VII. La participación;</p> <p>VIII. La interculturalidad;</p> <p>IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;</p> <p>X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;</p> <p>XI. La autonomía progresiva;</p> <p>XII. El principio pro persona;</p> <p>XIII. El acceso a una vida libre de violencia;</p> <p><b>XIV. La accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones;</b></p> <p><b>XV. El derecho a la intimidad;</b></p> <p><b>XVI. A la seguridad jurídica y al debido proceso; y,</b></p> <p><b>XVII. Al reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.</b></p>
--	--

## PROYECTO DE DECRETO

**UNICO.** Se reforman las fracciones XIII y XIV; y se agregan las fracciones XV; XVI; y, XVII al artículo 13 de y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 13....**

I a XII

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;

XIV. La accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones;

XV. El derecho a la intimidad;

XVI. A la seguridad jurídica y al debido proceso; y,

XVII. Al reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

En San Luis Potosí, S.L.P., a los 28 días del mes de febrero del año 2018.

**A T E N T A M E N T E**  
**DIP. GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI**



Cd. Valles, S. L. P., a 28 de febrero del 2018.

**Oficio: SGH-087/II/2018.**

**Asunto:** Se turna propuesta de adición a Ley de Ingresos 2018.

**CC. Diputados Secretarios de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, Presentes.**

El suscrito **Lic. y C.P. Luis Fernando González Castañeda**, en mi carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento** del municipio de Ciudad Valles, S.L.P., por acuerdo de Cabildo en la **75ª Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.**, realizada el 26 de febrero del año 2018, en el **Punto Seis de Asuntos Generales inciso a) se aprobó la condonación del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, aplicándose dicho incentivo única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles de persona física, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal, aplicándose el beneficio a los contribuyentes morosos del impuesto predial, mismo que deberá ser cubierto a más tardar el día 15 de septiembre de 2018**, adjuntándose como anexo copia certificada del Acta de Cabildo en comento; el cual se someter a consideración de ese H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, **Iniciativa con Proyecto de Decreto que ADICIONA al artículo TRANSITORIO CUARTO un segundo párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el ejercicio 2018**, misma que se fundamenta en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado; 61 y 62 del Reglamento del para el Gobierno Interior del H. Congreso en San Luis Potosí.

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Es un hecho innegable que uno de los principales problemas financieros que enfrentan los municipios en su hacienda pública es el rezago de que existe en el pago del impuesto predial, por lo cual consideramos que es de suma importancia atacar este problema.

Dado que la mayor entrada económica que tienen los municipios en sus ingresos propios es precisamente la que proviene del pago de estas contribuciones, es importante impulsar las medidas necesarias que ayuden e incentiven el cumplimiento de dicha obligación.

Experiencias pasadas, nos han demostrado que el otorgar dichas condonaciones han dado resultados positivos en la recaudación de los municipios, ya que permite atacar de manera frontal la cartera vencida, misma que representa un lastre económico difícil de solucionar, sin embargo con dicha medida se han visto socavados sus efectos negativos en las economías municipales, lo cual lejos de impulsar la cultura del “no pago”, trata de incentivar a los morosos para que se pongan al corriente, estableciendo con ello una herramienta que es sin duda eficiente en la recaudación de los municipios.

Con el ánimo de fortalecer a las haciendas públicas municipales, proponemos autorizar al Ayuntamiento de Ciudad Valles, la condonación del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018. Aplicándose dicho incentivo única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles de persona física, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal, a los contribuyentes morosos del impuesto predial, mismo que deberá ser cubierto a más tardar el día 15 de septiembre de 2018, con el objeto de no invadir la autonomía municipal a que se refiere el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

I.- Como representantes populares tenemos la obligación de velar por las necesidades de los ciudadanos que representamos, entre ellas se encuentra por supuesto el apoyo a su economía, por tal razón considero necesario que los integrantes del H. Ayuntamiento, autorice acogerse a los beneficios del mismo para poder aplicar de acuerdo a sus respectivas leyes de ingresos descuento a los ciudadanos morosos en el pago del impuesto predial, lo anterior con la intención de apoyar a la economía familiar e incentivar la recaudación municipal y que permita a los ciudadanos ponerse al corriente en sus contribuciones.

II.- Como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una crisis económica desde hace varios años la cual ha provocado el encarecimiento de los productos de la canasta básica, así como de los insumos necesarios para la vida diaria, esta situación no le es ajena al Municipio de Ciudad Valles, en donde hemos padecido además de los estragos de la inflación, el aumento de los precios en servicios y productos.”

Por lo anteriormente expuesto y en consideración a lo establecido en el artículo 3 del Código Fiscal del Estado, y 9 párrafo segundo de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí, se somete a la consideración de ese Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:

**PROYECTO  
DE  
DECRETO**

**UNICO.** Se **ADICIONA** al artículo **TRANSITORIO CUARTO** un segundo párrafo, a la **Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el ejercicio 2018, para quedar como sigue**

**CUARTO. ...**

**Se condona el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios 2017, y 2018, aplicándose dicho incentivo única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles de persona física, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal, aplicándose el beneficio a los contribuyentes morosos del impuesto predial, mismo que deberá ser cubierto a más tardar el día 15 de septiembre de 2018.**

**“A T E N T A M E N T E”**  
**Secretario del H. Ayuntamiento**  
**Cd. Valles, S.L.P. 2015-2018**

**Lic. Y C.P. Luis Fernando González Castañeda.**

**2018 “Año de Manuel José Othón”**

Ccp. C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ.- TESORERO MUNICIPAL.  
Archivo.  
L.LFGC/.



*2018 "Año de Manuel José Othón"*

**DIPUTADOS SECRETARIOS  
DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
P R E S E N T E S.**

**JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ**, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y conforme lo disponen los artículos 61, 62, 63, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, presento a esa H. Asamblea Legislativa, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, lo que hago con base en la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de noviembre de 2016, ordena en su artículo sexto transitorio lo siguiente:

*"TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.*

*"En el caso de la Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México, las autoridades del gobierno central y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes, deberán efectuar las adecuaciones legislativas y reglamentarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México una vez que entren en vigor."*

Es así que con el propósito de armonizar la legislación estatal con la Ley General antes referida y en cumplimiento de lo ordenado por la misma, esta Iniciativa tiene por objeto expedir una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo y Gestión Urbana del Estado, que abrogará la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de fortalecer la legislación urbana y los sistemas de gobernanza, con disposiciones que proporcionen seguridad y estabilidad, que promuevan la inclusión social y económica y den certeza jurídica y equidad en el proceso de urbanización, así como impulsar nuevas condiciones de gobernanza y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con especial énfasis en la participación social, particularmente en zonas metropolitanas; y formular y adecuar los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano. Asimismo, regula el control, vigilancia, autorización y regularización de las acciones urbanísticas, entendidas éstas como los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así

como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, en virtud de que son parte fundamental para el crecimiento organizado del territorio de nuestro Estado. En consecuencia de lo antes señalado, se deroga la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en virtud de que se modifica en más del cincuenta por ciento su contenido normativo.

Esta Iniciativa tiene como antecedentes, en el ámbito federal, la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos del 26 mayo de 1976; las modificaciones al artículo 115 Constitucional en materia municipal de 1982; la segunda Ley General de Asentamientos Humanos del 21 julio de 1993; la precitada Ley General del 28 de noviembre de 2016. y en el ámbito estatal, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de San Luis Potosí del 15 febrero de 1977; la Ley de Fraccionamientos y Subdivisión de Inmuebles del Estado de San Luis Potosí del 5 abril de 1983; el Código Ecológico y Urbano del Estado de San Luis Potosí del 3 julio de 1990; la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí de 17 octubre del año 2000 y la última reforma a la Ley de Desarrollo Urbano el del 3 noviembre de 2016.

En la presente Iniciativa, y de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se proponen como objetivos generales: consolidar la rectoría del Estado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano fortaleciendo el marco jurídico, bases, criterios, normas y lineamientos; crear las condiciones para que el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la gestión integral del riesgo y la gobernanza de las zonas metropolitanas y demás temas asociados al territorio, tengan una visión armónica en los tres órdenes de gobierno, para la ejecución de las políticas nacionales, y establecer nuevas bases institucionales para el uso y aprovechamiento del territorio, así como dotar de instrumentos y herramientas a los gobiernos para conducir los procesos urbanos.

Esta Iniciativa de Ley presenta un conjunto de principios que son los que rigen su contenido: el derecho a la ciudad, principio rector del Ordenamiento que se propone, que busca garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos; la accesibilidad y conectividad urbana, a través de una eficiente movilidad urbana; un patrón coherente de redes viales y la flexibilidad de usos del suelo; la competitividad y eficiencia de las ciudades; el posicionamiento de las ciudades en el entorno socioeconómico; la mejora en la competitividad local y regional y en los retos ambientales sostenibles; el derecho a la propiedad urbana; los derechos y obligaciones de los propietarios y el predominio del interés público en el aprovechamiento del territorio.

El Estado de San Luis Potosí ha recuperado su dinámica de desarrollo económico, acelerándose con ello, especialmente, el proceso de urbanización y de crecimiento demográfico de las Zonas Metropolitanas de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde-Ciudad Fernández, así como de las principales cabeceras municipales de la Entidad con mayor grado de urbanización.

El reto ahora, para que el Estado mantenga un liderazgo económico, que permita incrementar la captación de inversiones externas y locales generadoras de empleo, es propiciar condiciones e intensificar la aplicación de políticas públicas que permitan garantizar la calidad de vida de sus habitantes y de las migraciones venideras, en congruencia con un desarrollo regional, urbano, ambiental y social equitativo y equilibrado. El bienestar social y el progreso económico, requieren con prioridad y oportunidad, de la regulación eficiente y sostenible del desarrollo urbano de los centros de población del Estado, a fin de que con oportunidad y suficiencia se proyecte y construya la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano, así como que se presten adecuadamente los servicios públicos que demandan la población y las actividades productivas.

Esta Iniciativa propone en consecuencia normas que impulsarán el desarrollo local a la par del crecimiento económico y cambio estructural, la utilización de recursos endógenos y la mejora sociocultural, calidad y equilibrio espacial.

Con el mismo propósito, se sientan las bases que generen condiciones para una mejor habitabilidad urbana con vida digna y que propicie mayores oportunidades para el desarrollo de sus habitantes, así como una nueva visión sobre la movilidad urbana a través de un sistema de movilidad intermodal que propicie el efectivo desplazamiento de bienes y personas, considerando a las personas como el eje y el objeto de la misma.

La participación social, en la planeación de las ciudades y el territorio, y en derecho para la vinculación y apropiación de los habitantes, son un eje estratégico que garantiza la inclusión de las necesidades, la pluralidad de propuestas y visión social.

La resiliencia de las ciudades, entendida como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una acertada protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos, así como la detección, prevención y atención de dichos riesgos urbanos, la protección frente a riesgos naturales y antropogénicos, y la prohibición de la ocupación en zonas de riesgo; la sostenibilidad ambiental, la preservación del entorno natural y el uso racional de recursos renovables y no renovables, son sin duda materia fundamental que esta Iniciativa propone.

Los desastres naturales, como incendios, terremotos e inundaciones, y los problemas que pueden presentar ciertos sistemas, como el de agua potable y el movilidad urbana, son algunas de las crisis a las que se pueden enfrentar las ciudades, además de sequías y huracanes que obligan a las comunidades a desarrollar estrategias para recomponerse luego de las catástrofes y para revertir las pérdidas y deterioros.

De esta forma, las urbes resilientes cuentan con sistemas públicos, prácticas sostenibles y desarrollan procesos de gestión para la prevención de riesgos ante desastres y adaptación al cambio climático. Es así, que este concepto de resiliencia, adopta como uno de sus elementos fundamentales al de sustentabilidad o sostenibilidad urbana, y tiene como enfoque enfrentarse a los retos a nivel global, como urbanización, cambio climático y urbanización. El concepto integrado de resiliencia cuenta con importante componente de participación local, comunitaria y sociedad civil. Teniendo como pilares fundamentales el manejo de riesgo, la adaptación de largo plazo y mitigación para prevenir. También se propone un sistema de planeación integral basada en una metodología de diseño de proceso fundamentada en predicciones de escenarios futuros y conectada a la planificación urbana.

Por otra parte, esta Iniciativa de Ley establece políticas: en materia de ordenamiento territorial, de protección, restauración, preservación para el mejor aprovechamiento del territorio y sus recursos; En materia de desarrollo urbano, de control, impulso, consolidación y arraigo a los centros de población; y de crecimiento, conservación y mejoramiento a los sectores urbanos de dichos centros de población

El Sistema Estatal de Planeación de los Asentamientos Humanos requiere de nuevos instrumentos de gestión y participación social, que en su conjunto establezcan las bases de una nueva gobernanza metropolitana: criterios para la delimitación y caracterización de las zonas metropolitanas; en su contenido la forma y procedimientos para que, de acuerdo a sus atribuciones, la Federación, el Estado y los municipios se coordinen en la planeación y gestión metropolitana, de igual manera en la definición de las materias de interés metropolitano, y de los mecanismos para la participación social en la formulación, seguimiento y evaluación de programas.

Para fortalecer este Sistema Estatal de Planeación de los Asentamientos Humanos, se promueve un nuevo modelo de urbanización que tiene como propósito definir las prioridades de desarrollo del Estado que promuevan el desarrollo urbano y metropolitano; de igual manera los alcances, instrumentos y contenidos de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de zonas



metropolitanas. Se establece la jerarquía, articulación y coherencia obligatoria, entre los referidos programas, así como mediante la formulación de dictámenes de congruencia a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.

Derivado de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se incluyen como aportaciones dentro del proyecto de Ley: principios que orientarán el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; definición y alcances de los Programas de Conurbación y Zona Metropolitana, su administración, y la coordinación de las diversas autoridades para la elaboración y ejecución de las estrategias; medidas de seguridad necesarias para evitar y mitigar riesgos urbanos y naturales, así como las acciones para la resiliencia urbana, y políticas para la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; así como para asegurar la libre movilidad de las personas.

De igual manera se consideran aportaciones locales al proyecto de Ley: la formulación de esquemas de desarrollo urbano para los municipios con poca población y baja dinámica urbana; la definición de las diferentes tipologías de zonificaciones del territorio y su aplicación en los Programas de Desarrollo Urbano según su alcance; y el fomento a la participación social a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda y en su caso de los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada, como órganos auxiliares de los ayuntamientos.

La presente Iniciativa, respetuosa de la autonomía municipal, establece disposiciones de carácter general, y corresponderá a los ayuntamientos proponer y expedir con base en ella sus propios reglamentos; no obstante, establece bases generales en materia de características de los fraccionamientos, construcción, densidades, vialidades y demás normas que deberán aplicar los municipios que no cuenten con sus respectivos programas de desarrollo urbano, programas de centro de población o programas parciales, a fin de que puedan operar en estas materias.

Esta Iniciativa de Ley, establece las bases para el otorgamiento de licencias de uso del suelo y de construcción, determina la superficie de lotes para el desarrollo de viviendas, protege y preserva el medio ambiente, promueve la donación de manera proporcional al tamaño del fraccionamiento para destinarla para áreas verdes y al equipamiento necesario de la zona, protege a los ciudadanos estableciendo garantías por parte de los fraccionadores; al tiempo que otorga certidumbre a los fraccionadores y ciudadanos en general, al establecer requisitos y procedimientos claros y precisos.

La Iniciativa de ley se estructura bajo el siguiente esquema general: disposiciones generales, objeto y principios, causas de utilidad pública; concurrencia y coordinación de autoridades; órganos deliberativos y auxiliares; Sistema Estatal de Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y Metropolitano que incluye la gobernanza metropolitana; regulaciones de la propiedad; resiliencia urbana y prevención de riesgos; movilidad urbana; instrumentos normativos y de control; gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano; instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano; instrumentos de participación democrática y transparencia; financiamiento al desarrollo urbano; fomento al desarrollo urbano; denuncia ciudadana; sanciones y nulidades; notificaciones, inspecciones y verificaciones, y de los medios de impugnación. En la parte operativa se regulan los actos relacionados con el fraccionamiento de inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, e integra un glosario de términos, precisando su ámbito de aplicación; se determina la concurrencia y las autoridades competentes, establece sus atribuciones, especificando las funciones y obligaciones de los ayuntamientos; asimismo se destaca la coordinación, apoyo y asesoría que corresponde al Estado hacia los municipios que lo soliciten para la elaboración de sus reglamentos.

En términos de lo dispuesto por la Ley General, se establecen en esta Iniciativa los órganos auxiliares de coordinación, entre los que se encuentran el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda, las Comisiones de

Metropolitanas y de Conurbación, el Instituto de Planeación del Estado, los institutos municipales de planeación, el Instituto Catastral y Registral del Estado, los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil, la Comisión Estatal de Agua, y a los Organismos Operadores de Agua; todos ellos, dada la naturaleza de sus funciones realizarán sus dictámenes, resoluciones u opiniones conforme a su competencia, los que serán de gran importancia y trascendencia para otorgar o negar las licencias y autorizaciones que establece la Ley.

En este ordenamiento, se regula además la gestión urbanística de los actos o actividades tendentes al uso y aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables de un centro de población; La Licencia de Uso del Suelo es el documento que certifica que la acción, obra, inversión o servicio que se pretenda realizar es compatible con la legislación y los programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano, señalando las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y aprovechamientos de las áreas o predio materia de la misma.

Los estudios de impacto urbano, vial y ambiental, son aquellos que se requieren en los casos que prevé la presente Ley, la Ley Ambiental del Estado, y los demás ordenamientos aplicables. Se establecen las normas generales de construcción, diseño, infraestructura y sustentabilidad a las que deben ajustarse las obras por realizarse. Respecto a las vías públicas, se caracteriza cada una de ellas, y se establecen las normas básicas para su construcción.

En cuanto a la función pericial urbanística y de supervisión de las obras, de acuerdo a lo que señala la presente Ley, compete a los ayuntamientos organizar, llevar y actualizar el Registro Municipal de Directores Responsables de Obras, y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación; para dar cuenta de su idoneidad se crea una Comisión Estatal de Admisión, Evaluación y Certificación de Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables, integrada de manera plural por dependencias estatales, por los municipios representados a través de las cuatro regiones del Estado y por los Colegios de profesionistas relacionados con la materia, que tendrá por objeto la capacitación, evaluación y certificación de la experiencia y conocimiento de las personas físicas profesionales del ramo de la construcción, así como su acreditación ante los municipios como Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, será la encargada de integrar para efectos de publicidad la información de todos los municipios, en un Registro Estatal de Directores Responsables de Obras, y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, para que pueda ser consultado de manera pública.

Por lo que toca a los Fraccionamientos, se determinan las normas generales para su autorización, clasificación, tipo y características de cada uno de ellos, y se les clasifica. Los Fraccionamientos habitacionales son aquellos que de acuerdo a los programas de desarrollo urbano de los centros de población: Los Habitacional urbano los clasifica en Residencial, Medio, Popular y Económica; Los Habitacional suburbano o rural los clasifica en Residencial campestre y Restauración ecológica. Los Fraccionamientos Especiales en Comerciales y de Servicios, Industriales y Cementerios o parques funerarios. En este apartado se incluyen los cuadros con las especificaciones para cada una de las clases de fraccionamientos, que deberán aplicar los municipios que carezcan de programas de desarrollo urbano de centros de población.

Se regulan así mismo las autorizaciones de las subdivisiones, fusiones, relotificaciones y cambios de intensidad en el uso habitacional de los predios cualquiera que sea su extensión. Se suprime el doble requerimiento de donaciones en los desarrollos inmobiliarios que deriven de subdivisiones, fraccionamientos y/o condominios. Igualmente los desarrollos en condominio, los requisitos para su aprobación, así como su ubicación, instalaciones, servicios, áreas de donación, espacios libres, zonas comerciales y demás requerimientos propios de los mismos; los define como al conjunto de departamentos, viviendas, locales y naves de un inmueble, construido en forma vertical, horizontal o mixta susceptible de aprovecharse independientemente, por tener una salida propia de elementos

comunes a la vía pública, pertenecientes a distintos propietarios, los cuales tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su área privativa, y de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble necesario para un adecuado uso. Los clasifica en Habitacional, Comercial, Industrial y Mixto; y de acuerdo a su tipo de construcción en Condominio vertical, Condominio horizontal y Condominio mixto.

Se establecen las disposiciones comunes a fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, las normas técnicas del proyecto, áreas de donación; sistemas de agua potable alcantarillado y drenaje, e infraestructura.

En relación con la autorización de los fraccionamientos, se establecen los requisitos, y procedimiento para su autorización, sus modificaciones, garantías, su tramitación, y la cesión de derechos y obligaciones. Se dispone que la autorización municipal de los fraccionamientos y condominios debe otorgarse por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, contando con el apoyo de una mesa de dictaminación de proyectos, como órgano auxiliar del ayuntamiento de carácter técnico y colegiado, con objeto de dar transparencia y despolitizar las autorizaciones, evitando abusos de autoridad o corrupción. Igualmente se establecen las condiciones, para mejorar la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios con ingresos menores a uno y medio salarios mínimos, que no cuentan con INFONAVIT, FOVISSSTE o no son sujetos de crédito en la Banca o en organismos públicos de vivienda, y se determina que únicamente se podrá autorizar la urbanización progresiva en los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social, para impedir la defraudación de los adquirentes de lotes, pero aclarando que en este tipo de desarrollos inmobiliarios podrán participar los particulares o empresas sociales, en coordinación con una autoridad u organismo público de vivienda o de desarrollo urbano, previo estudio socioeconómico del caso, ajustándose a los lineamientos previstos en los programas de desarrollo urbano y garantizando fehacientemente la ejecución de las obras mínimas de urbanización que se requieran en la autorización respectiva.

Se consignan las bases normativas para promover por cuestiones de redensificación y sustentabilidad urbana, el aprovechamiento óptimo de infraestructura, equipamiento y servicios, seguridad y diseño, la edificación de vivienda multifamiliar o en edificios en los diversos tipos de fraccionamientos habitacionales en las zonas que se señalen en la autorización y en los porcentajes de superficie vendible que procedan, tomando en cuenta las densidades de población y construcción, así como la suficiente y adecuada prestación de servicios urbanos; al tiempo que de acuerdo a la política nacional en la materia se genera el enlace con la Ley Federal de Vivienda, a fin de buscar que las ciudades se redensifiquen y crezcan sin generar la expansión que tradicionalmente no ha permitido la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.

Se incluye también, la regulación relativa a la Urbanización, supervisión y prestación de servicios en los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales; sobre las Obras de Urbanización señala que los fraccionamientos deben contar con dichas obras, de conformidad con lo que a cada autoridad corresponda; igualmente se establece la supervisión de las obras de urbanización por parte de los ayuntamientos a fin de garantizar que se cumplan las especificaciones técnicas del proyecto, así como con la calidad de los materiales, obras y servicios y requisitos de seguridad que corresponde, y se disponen las reglas para su dictaminación y conclusión. Finalmente se señala lo relativo a los servicios mínimos con que deberán contar y se regula su prestación.

Se determinan los Derechos y Obligaciones del Fraccionador y de los Propietarios de lotes y al efecto señala que éstos, deberán sujetarse estrictamente a las normas aplicables en la materia, observándose, en todo caso, las limitaciones de dominio, servidumbres, uso de suelo y características especiales de arquitectura y ornato, así como las restricciones propias del fraccionamiento a que se refiere la presente Ley.

Igualmente se contemplan disposiciones sobre la venta, escrituración pública y registro de los fraccionamientos, condominios y demás desarrollos inmobiliarios, con el propósito de garantizar la certeza y seguridad jurídica de los adquirentes e impulsar la inversión y el desarrollo inmobiliario. La escrituración y registro, responsabiliza a los Notarios Públicos para autorizar o autenticar actos, convenios y contratos para que verifiquen que cuentan con las constancias, autorizaciones, permisos y licencias que las autoridades competentes expidan conforme a la Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Se regula la municipalización de los fraccionamientos, señalando que el fraccionador queda sujeto en todo momento a la obligación de municipalizar las obras de urbanización, según el proyecto definitivo autorizado, comprendiendo la entrega recepción final de un fraccionamiento al Municipio, de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización comprendidas en las áreas de dominio público del fraccionamiento, para que puedan operar los servicios públicos.

Se incorporan en este ordenamiento que se propone, las Medidas de Seguridad y las Sanciones y se establecen como medidas preventivas desde una visita de inspección a los fraccionamientos, sus subdivisiones, fusiones y relotificación de terrenos, así como en los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, con la finalidad de vigilar y constatar que se cumpla con las disposiciones previstas en la Ley, así como la suspensión de obras, servicios y actividades; la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones y obras; la desocupación o desalojo de inmuebles, hasta la demolición de construcciones, todas ellas dirigidas a evitar daños inminentes de difícil reposición, que puedan causar las instalaciones, las construcciones, las obras y acciones, tanto públicas como privadas, que originen perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público, respetando en todo momento los principios de legalidad.

Se determinan sanciones acordes a las infracciones cometidas a fin de que la autoridad pueda hacer valer sus determinaciones legales y resarcir el daño ocasionado por la conducta transgresora de la ley. Igualmente se establecen responsabilidades para los servidores públicos y los Notarios Públicos previendo la responsabilidad solidaria de los daños y perjuicios que se causen por la violación de las disposiciones de Ley.

Finalmente en relación con las notificaciones y recursos, se hace la remisión en ambos temas al Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí.

Por último, es importante mencionar la participación de los Colegios de Profesionistas del ramo, las Cámaras, las instituciones académicas y demás entes de la sociedad civil que conforman el FORO "PENSAR NUESTRA CIUDAD", quienes realizaron muy importantes y valiosas aportaciones para la elaboración de esta Iniciativa, enriqueciéndola con su visión social, técnica, y de derechos humanos y su experiencia.

Esta nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo y Gestión Urbana, que se propone, propiciará un crecimiento planeado, ordenado, sostenible, resiliente, equilibrado, con mayor participación social, movilidad adecuada y que atienda a las necesidades primordiales de la sociedad, y que coloque el bienestar de las personas y a los derechos humanos que rigen en esta materia como su objeto primordial.

Conforme a lo anterior elevo a la consideración de esa LXI Legislatura el siguiente

**PROYECTO  
DE  
DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se expide la Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo y Gestión Urbana del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA  
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ**

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Capítulo I  
Objeto de la Ley**

**ARTÍCULO 1º.** Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:

- I. Fijar las normas básicas e instrumentos para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sostenible en el Estado, a través de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;
- II. Establecer la concurrencia entre el Estado con la Federación y los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal, para la coordinación y gestión de las conurbaciones, así como las zonas metropolitanas, y el desarrollo urbano de los centros de población;
- III. Asignar las atribuciones y responsabilidades del Estado y de los municipios en la aplicación de esta Ley y fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre ambos ámbitos de gobierno;
- IV. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población;
- V. Propiciar mecanismos que permitan la participación social, en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio, con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia;
- VI. El control, vigilancia y autorización de los actos relacionados con el fraccionamiento, subdivisión, fusión, relotificación y modificaciones de los inmuebles, de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, así como las demás acciones urbanísticas en el Estado y los municipios de San Luis Potosí, y
- VII. Fijar las medidas de seguridad, infracciones, responsabilidades y sanciones que permitan la aplicación de esta Ley.

**ARTÍCULO 2º.** Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Las actividades que realicen el Estado y los municipios para ordenar el territorio y los asentamientos humanos, deberá realizarse observando las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Es obligación del Estado y de los municipios a través de sus dependencias y entidades promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social en las materias que regula la presente Ley.

**ARTÍCULO 3º.** El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tendrá como propósito la utilización racional del territorio, el desarrollo equilibrado del Estado y la promoción de la certidumbre jurídica en la tenencia, uso y aprovechamiento del suelo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población, mediante:

- I. La planeación urbana centrada en la persona, en el respeto a los derechos humanos fundamentales, en la movilidad activa y en la provisión de espacios públicos;
- II. La coordinación, gestión y coordinación de los agentes públicos, privados y sociales en la planeación del desarrollo urbano regional sostenible;
- III. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población, procurando mantener, proteger y mejorar los ecosistemas de cada zona;
- IV. El desarrollo de los asentamientos humanos que articule la interrelación entre ciudad y campo, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;
- V. La distribución equilibrada y sustentable de la población, las actividades económicas y los servicios en el territorio;
- VI. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;
- VII. La creación de condiciones favorables para una adecuada relación entre zonas industriales y de vivienda para trabajadores, la movilidad entre ambas y el justo equilibrio entre el trabajo, los servicios y el equipamiento;
- VIII. El fomento de centros de población de tamaño medio, a fin de evitar los que, por su desproporción, producen impactos económicos negativos y un grave deterioro social, humano y ecológico;
- IX. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos;
- X. La preservación y mejoramiento del medioambiente en los asentamientos humanos, previniendo y controlando la contaminación y el impacto urbano y ambiental;
- XI. El desarrollo equilibrado de las diversas regiones del Estado y micro-regiones de los municipios;
- XII. La utilización racional del agua y de los recursos renovables y no renovables en los centros de población;
- XIII. La protección del asentamiento rural y de las comunidades indígenas;
- XIV. La eficiente interacción entre los espacios públicos, la vivienda, circulación, trabajo, recreación y servicios en los centros de población;
- XV. El establecimiento de desarrollos urbanos integrales para controlar e intensificar los usos y destinos del suelo y optimizar la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos;
- XVI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
- XVII. La participación social en las propuestas de solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos;
- XVIII. La promoción de obras y servicios para que la sociedad tenga una vivienda digna y adecuada;
- XIX. La planeación del desarrollo urbano sostenible, con base en las leyes generales y locales en la materia, tomando en cuenta los instrumentos y directrices que emanen de acuerdos internacionales de los que México forme parte o haya participado;
- XX. La regulación de las provisiones y reservas territoriales de los centros de población;
- XXI. La zonificación y control de los usos y destinos del suelo;
- XXII. El destinar terrenos a la vivienda social, para asegurar su disponibilidad;
- XXIII. La protección del patrimonio natural y cultural, así como de la imagen urbana de los centros de población;
- XXIV. El control de la especulación inmobiliaria y de la expansión física de los centros de población en terrenos no aptos para el desarrollo urbano;

- XXV. La promoción de créditos y financiamientos para el desarrollo urbano y la vivienda;
- XXVI. La estricta aplicación de la legislación y programas de desarrollo y ordenamiento territorial urbano;
- XXVII. El fomento de obras y servicios por cooperación o plusvalía;
- XXVIII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población;
- XXIX. La prevención del establecimiento de asentamientos humanos irregulares y fraccionamientos o condominios al margen de la ley;
- XXX. El control de las obras de construcción, instalación, operación, ampliación, remodelación, reconstrucción y demolición;
- XXXI. La regulación de la infraestructura vial, el tránsito de vehículos y peatones, los espacios para estacionamiento y el sistema de transporte público y su vinculación con la traza urbana;
- XXXII. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad, y
- XXXIII. El fomento, coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano.

## **Capítulo II Definiciones**

**ARTÍCULO 4º.** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. **Acción urbanística:** actos o actividades tendentes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como subdivisiones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los programas de desarrollo urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos;
- II. **Adquirente de lote:** Persona física o moral que adquiera la propiedad de uno o más lotes, subdivisiones, fusiones, relotificaciones o áreas privativas en cualquier tipo de fraccionamiento o desarrollo en condominio señalados en la presente Ley;
- III. **Alcantarillado:** Red de dispositivos y tuberías a través de las cuales se deben evacuar las aguas residuales domésticas, y las sanitarias de abastecimientos comerciales y de servicio;
- IV. **Alineamiento del predio:** línea real o virtual definida sobre un lote o predio en el frente a la vía pública, que determina el límite a partir del cual se permite la traza o edificación de un inmueble, de acuerdo a los programas o proyectos de desarrollo urbano legalmente aprobados;
- V. **Alta densidad/muy alta densidad:** Aquella que rebase la densidad más alta permitida en los programas de centro de población;
- VI. **Alumbrado público:** Conjunto de luminarias que alumbran la vía pública;
- VII. **Análisis de riesgo:** integración, evaluación, registro y difusión de información para formular recomendaciones orientadas a la adopción de medidas para la atención de un

riesgo determinado;

- VIII. **Área:** espacio de cualquier superficie de suelo o tierra urbana o rural con o sin urbanización;
- IX. **Área común:** Es la propiedad común de los condóminos colindantes, como son los pasillos de las casas, las privadas y vialidades de circulación, así como las áreas verdes y recreativas y las demás que se establezcan en el régimen de propiedad en condominio;
- X. **Área de donación:** Es la superficie de terreno que los fraccionadores deberán donar a título gratuito al Ayuntamiento, en términos de lo previsto en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para destinarlas de manera permanente a áreas ecológicas y equipamiento, de conformidad con lo que se establezca en la presente Ley y en los programas de desarrollo urbano vigentes;
- XI. **Áreas de restricción:** las áreas que por razones de seguridad o requerimiento de infraestructura y servicios está condicionada a usos y giros diferentes a las áreas que la circundan;
- XII. **Áreas no urbanizables:** son aquellas que se excluyen del desarrollo urbano por contener elementos constitutivos del equilibrio ecológico o para la prevención de riesgos; tierras de alto o mediano rendimiento agrícola o pecuario, bosques y demás recursos naturales en explotación o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como, en general, las no aptas para su urbanización;
- XIII. **Áreas urbanas:** son aquellas que cuentan con los servicios de agua potable, drenaje, y alumbrado público, cuando menos;
- XIV. **Áreas urbanizables:** son aquellas que, por reunir condiciones para ser dotadas de servicios, se reservan para el futuro crecimiento de los centros de población o se prevén para la fundación de nuevos asentamientos humanos, según se establezca en programas de desarrollo urbano;
- XV. **Área verde:** superficie predominantemente ocupada con árboles, arbustos o plantas y otros elementos complementarios, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal;
- XVI. **Áreas y predios de conservación ecológica:** son aquellas tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, ambiental o paisajístico deben de ser conservadas;
- XVII. **Áreas y predios rústicos:** son aquellas tierras, aguas y bosques susceptibles de explotación racional y sustentable agropecuaria, piscícola, minera o forestal, así como las ubicadas en los asentamientos humanos rural;
- XVIII. **Asentamiento humano:** establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran;
- XIX. **Asentamiento humano irregular:** la ocupación de un conglomerado humano de una porción de suelo o tierra determinada, sin autorización y al margen de las leyes y de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;



- XX. Ayuntamiento:** El gobierno municipal, integrado por un cuerpo colegiado en términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado;
- XXI. Barrio:** zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y características propias;
- XXII. Centro de población:** es el conjunto de áreas urbanizadas ocupadas por las instalaciones necesarias para su vida normal; las que se reserven para su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y conservación de actividades productivas agropecuarias, forestales o mineras dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;
- XXIII. COS: Coeficiente de ocupación del suelo.** Relación aritmética existente entre la superficie construida en planta baja y la superficie total del terreno;
- XXIV. Compatibilidad Urbanística:** Evaluación donde se proponen las acciones para mitigar los impactos a la estructura urbana, únicamente en aquellos municipios donde se carezca de planes o programas de desarrollo urbano;
- XXV. Consejo Estatal:** es el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí;
- XXVI. Consejo Municipal:** el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda o su equivalente en cada Municipio de la Entidad;
- XXVII. Conservación:** política tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo su patrimonio cultural y natural;
- XXVIII. Conurbación:** dinámica mediante la cual dos o más centros de población, forman o tienden a formar una continuidad física y demográfica;
- XXIX. Conservación:** acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo su patrimonio natural y cultural;
- XXX. Consolidación:** política tendente al ordenamiento de la estructura básica de un centro de población sin afectar su dinámica actual, procurando evitar los efectos negativos de la concentración urbana;
- XXXI. Comisiones Metropolitanas:** Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación;
- XXXII. Crecimiento:** política tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población, evitando la ocupación con usos de suelo que alteren las áreas con valor ambiental o productivo, así como, que invadan zonas de riesgo, a fin de alojar el crecimiento poblacional o dar soporte a actividades industriales, comerciales y de servicios;
- XXXIII. CUS: Coeficiente de utilización del suelo.** La relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la construcción y la superficie total del terreno;

- XXXIV. Densificación:** acción urbanística cuya finalidad es incrementar el número de habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la capacidad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras;
- XXXV. Derecho de vía:** la franja de terreno de restricción federal, estatal o municipal que, en las dimensiones correspondientes, se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación terrestre;
- XXXVI. Desarrollo metropolitano:** proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones;
- XXXVII. Desarrollo regional sostenible:** el proceso de crecimiento económico en dos o más centros de población determinados, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;
- XXXVIII. Desarrollo urbano sostenible:** proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; que procura la mejora duradera y a largo plazo de las condiciones sociales, económicas y ambientales de un área urbana;
- XXXIX. Destinos:** fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;
- XL. Densidad de vivienda:** Número total de viviendas por hectáreas;
- XLI. Dirección Municipal:** la Dirección de Desarrollo Urbano o la que haga sus veces en las administración Pública Municipal;
- XLII. Director responsable de obra DRO:** Profesional debidamente acreditado, que se responsabiliza ante la autoridad correspondiente, de que en las obras públicas y privadas que se realicen se observen las normas técnicas y jurídicas aplicables;
- XLIII. Equipamiento urbano:** conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades institucionales educativas, culturales, de salud, asistencia social, deportivas, recreativas, de comunicaciones, transporte, abasto y comercio;
- XLIV. Espacio público:** áreas o predios destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito; Son esenciales para el acceso a la cultura, la convivencia urbana, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho a la ciudad;
- XLV. Espacio edificable:** suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o poseedores en los términos de la legislación correspondiente;
- XLVI. Estudio de impacto urbano:** documento mediante el cual se analizan las externalidades e impactos que genera una obra o proyecto que por su proceso constructivo, funcionamiento o magnitud, rebase la capacidad de la infraestructura, los servicios

públicos o los equipamientos urbanos existentes; así como las medidas de mitigación, restauración o compensación necesarias;

- XLVII. Fraccionador:** solicitante de una autorización de fraccionamiento o relotificación de un terreno;
- XLVIII. Fraccionamiento:** división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como de la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación adecuada de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, conforme a la clasificación y el tipo de fraccionamientos previstos en esta Ley;
- XLIX. Fundación:** acción de establecer un nuevo asentamiento humano en áreas o predios susceptibles de aprovechamiento urbano, previstos en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- L. Fusión:** unión de dos o más terrenos, lotes, áreas o predios colindantes para formar uno solo;
- LI. Gestión integral de riesgos:** el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;
- LII. Infraestructura urbana:** sistemas, redes de organización y distribución de bienes y servicios, flujos y elementos de organización funcional, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión, que permite la construcción de espacios adaptados y su articulación para el desarrollo de las actividades sociales, productivas y culturales que se realizan en y entre centros de población;
- LIII. Ley General:** La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- LIV. Licencia de construcción:** acto por el cual la autoridad municipal autoriza la ejecución, modificación, adaptación o demolición de una edificación, instalación u obra o alguno de los servicios específicos que señalan esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- LV. Lote:** parte de un terreno urbanizado, resultado de su fraccionamiento, deslindado dentro de una manzana;
- LVI. Lote mínimo:** Fracción de terreno con la superficie más pequeña permitida por las normas de la zonificación secundaria correspondiente según el programa de desarrollo urbano aplicable;
- LVII. Manzana:** La superficie de terreno delimitada por vías públicas;
- LVIII. Medidas de seguridad:** adopción y ejecución de las acciones preventivas que con apoyo en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, sean ordenadas por autoridades competentes, mismas que tendrán por objeto evitar daños, que pongan en riesgo la integridad o seguridad de las personas o bienes o contravengan la legislación y

programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

- LIX. Mejoramiento:** política o acción dirigida a reordenar, regularizar, restaurar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;
- LX. Mobiliario Urbano:** Conjunto de instalaciones en la vía pública que complementan al equipamiento de las ciudades, tales como basureros, casetas telefónicas, semáforos, bancas, juegos infantiles, fuentes y otros;
- LXI. Movilidad:** capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma;
- LXII. Municipalización:** acto mediante el cual se realiza la entrega recepción por parte del fraccionador al Ayuntamiento, de los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e instalaciones de un fraccionamiento destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización del mismo, habiendo cumplido con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables se encuentran en posibilidad de operar, permitiendo al Municipio, en la esfera de su competencia, prestar los servicios públicos necesarios;
- LXIII. Obras de edificación:** construcciones e instalaciones de adecuación espacial necesarias, para permitir su uso o destino;
- LXIV. Obras de urbanización:** construcciones para la instalación de los sistemas infraestructura urbana y pavimentos para desarrollo inmobiliario;
- LXV. Organismos regularizadores:** Las instituciones que cuentan con la facultad legal para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra en la Entidad;
- LXVI. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos:** proceso de distribución espacial de la población, en función del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de la infraestructura y el equipamiento existentes, con el fin de lograr la mayor rentabilidad social y económica de las inversiones públicas y privadas que favorezcan las actividades productivas, culturales, recreativas y funcionales;}
- LXVII. Patrimonio cultural y natural:** sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la legislación correspondiente;
- LXVIII. Predio:** terreno debidamente delimitado, con o sin urbanización;
- LXIX. Procuraduría:** la Procuraduría Urbana del Estado de San Luis Potosí;
- LXX. Promotor:** solicitante de una autorización de constitución, modificación o extinción de un régimen de propiedad en condominio o de un desarrollo inmobiliario;
- LXXI. Promotora del Estado:** la Promotora del Estado de San Luis Potosí;
- LXXII. Provisiones:** áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;
- LXXIII. Reducción de riesgos de desastres:** los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de

exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente;

**LXXIV. Régimen de Condominio:** Acto jurídico, por el cual los interesados manifiestan su voluntad de que en su propiedad, coexista un derecho singular y exclusivo sobre cada una de las unidades en que se divida un inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado uso y disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva;

**LXXV. Regularización de la tenencia de la tierra urbana:** legitimación de la posesión o propiedad del suelo urbano a las personas asentadas irregularmente; así como, la incorporación de tal asentamiento humano a los programas de desarrollo urbano, como una acción de mejoramiento de los centros de población;

**LXXVI. Reservas territoriales:** áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento o consolidación de acuerdo a los programas de desarrollo urbano;

**LXXVII. Resiliencia:** es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;

**LXXVIII. Restricciones de uso o destino del suelo:** las contempladas en las leyes y su reglamentación, así como en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables en la Entidad;

**LXXIX. Riesgo urbano:** vulnerabilidad a la que puede estar sujeta un centro de población o asentamiento humano, por fenómenos naturales o la actividad humana;

**LXXX. Secretaría:** Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado;

**LXXXI. SEDATU:** Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

**LXXXII. SEDESOL:** Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;

**LXXXIII. SEGAM:** Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;

**LXXXIV. SCT:** Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal;

**LXXXV. Servicios urbanos:** actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada, para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

**LXXXVI. Servidumbre:** El gravamen real, impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto dueño;

**LXXXVII. Sistema de agua potable:** El conjunto de bienes y obras dedicados a extraer, captar, tratar, conducir y distribuir agua, apta para el consumo humano, a los domicilios de los usuarios por medio de redes de tubos;

- LXXXVIII. Sistema de drenaje y alcantarillado:** Dispositivos y tuberías, por lo general subterráneas, que sirven para coleccionar y evacuar en forma higiénica y segura y por separado las aguas pluviales residuales de los centros de población;
- LXXXIX. Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales:** mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de concertación con los sectores social y privado, a fin de determinar, aportar y adquirir el suelo y las reservas territoriales que se requieran para planear y regular el actual desarrollo y futuro crecimiento de los centros de población y el ordenamiento territorial de la Entidad;
- XC. SITU:** Sistema de Información Territorial y Urbano;
- XCI. Subdivisión de áreas, lotes o predios rústicos:** partición de un predio en dos o más fracciones, ubicado fuera de los límites de un centro de población o de las zonas no urbanizables del mismo, conforme a los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables;
- XCII. Subdivisión de áreas, lotes o predios urbanos:** partición de un predio ubicado en las zonas urbanas o urbanizables de un centro de población, en dos o más fracciones, que no requieren de la apertura de una vía pública;
- XCIII. Supervisor municipal de obra:** servidor público de la Dirección Municipal que está facultado por la autoridad municipal para realizar la supervisión y vigilancia de la ejecución de obras de edificación, instalaciones o urbanización;
- XCIV. UMA:** Unidad de Medida y Actualización, entendida como el valor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la materia, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes;
- XCV. Usos de impacto significativo:** aquellos que generan las construcciones e instalaciones destinadas a usos industriales, comerciales, de servicio o habitacionales que por sus dimensiones, necesidades de infraestructura, transporte o riesgos de contaminación puedan afectar gravemente las condiciones de vida de los habitantes, el contexto urbano, ecológico y paisajístico, así como el normal funcionamiento de los servicios;
- XCVI. Usos del suelo:** fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población, determinados en el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente;
- XCVII. Vía pública:** todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles;
- XCVIII. Vivienda plurifamiliar:** es aquella que da alojamiento a dos o más familias y que se encuentra en un predio común a las viviendas que contiene. Se caracteriza por estar basada en un régimen de propiedad en condominio;
- XCIX. Vivienda unifamiliar:** es aquella que da alojamiento a una familia o persona en lo individual y que se encuentra en un predio;
- C. Vivienda:** es aquella que cumple con las funciones básicas de habitabilidad y salubridad, y

cuenta con los servicios básicos. Este concepto implica tanto la vivienda terminada como la vivienda progresiva, que es la que se realiza paulatinamente en función de las posibilidades económicas del usuario;

- CI. Zona conurbada:** la suma del territorio de los municipios involucrados y determinada por convenio de los órdenes de gobierno involucrados, con objeto de reconocer el fenómeno de conurbación, para los efectos de planear y regular de manera conjunta y coordinada el ordenamiento territorial comprendido en sus demarcaciones territoriales;
- CII. Zona metropolitana:** área que se determina por los ayuntamientos mediante convenio, para los centros de población conurbados de dos o más municipios, que conforman una unidad territorial. Comprenderá sus áreas urbanizadas y urbanizables para los efectos de planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo urbano de la misma;
- CIII. Zonificación:** la división del territorio en áreas para los efectos de aplicarles políticas, o en el caso de los centros de población, determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento del mismo;
- CIV. Zonificación General del Territorio:** es la división del territorio de estudio de un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la aplicación de las políticas de preservación, protección, restauración y aprovechamiento;
- CV. Zonificación primaria:** distingue las áreas urbanizadas, urbanizables y no urbanizables del territorio de aplicación de un programa de desarrollo urbano, y
- CVI. Zonificación secundaria:** determinación de las zonas para la asignación de usos y destinos del suelo, estableciendo sus normas técnicas relativas a la compatibilidad, densidad, intensidad y construcción.

### **Capítulo III Principios**

**ARTÍCULO 5º.** Son principios rectores de las políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, así como del desarrollo y planeación urbana y coordinación:

- I. Accesibilidad universal:** favorecer la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas de flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias y la distribución jerarquizada de los equipamientos;
- II. Coherencia y racionalidad:** adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los programas y políticas nacionales y estatales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;
- III. Competitividad y eficiencia de las ciudades:** alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico; así los retos sociales están en una mayor equidad, los retos económicos con una mejora en la competitividad de la ciudad y la región, y los retos ambientales con la sustentabilidad integral;
- IV. Derecho a la ciudad:** garantizar a los habitantes de los asentamientos humanos y centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;

- V. **Derecho a la propiedad urbana:** garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;
- VI. **Desarrollo local:** promover el proceso de crecimiento económico y cambio estructural, que mediante la utilización de los recursos endógenos, conduce a la mejora sociocultural, a la sostenibilidad ecológica, a la equidad de género, y a la calidad y el equilibrio espacial;
- VII. **Equidad e inclusión:** garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;
- VIII. **Habitabilidad urbana:** asegurar las condiciones de vida digna en los asentamientos humanos y en la vivienda para toda la población, y propiciar oportunidades para el desarrollo de sus habitantes;
- IX. **Movilidad:** promover el acceso mediante los diferentes modos de transporte a un sistema de movilidad, para satisfacer las necesidades de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona y privilegiará las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado;
- X. **Participación democrática y transparencia:** proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;
- XI. **Productividad y eficiencia:** fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;
- XII. **Protección y progresividad del espacio público:** crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;
- XIII. **Resiliencia, seguridad urbana y riesgos:** propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo, y
- XIV. **Sustentabilidad ambiental:** promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques.



Toda política pública estatal y municipal de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar estos principios.

#### **Capítulo IV Causas de Utilidad Pública**

**ARTÍCULO 6°.** Son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano, en consecuencia, se declaran causas de utilidad pública:

- I.** El ordenamiento territorial para la distribución equilibrada de la población, de las actividades económicas y los servicios;
- II.** La promoción del desarrollo urbano sostenible;
- III.** La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
- IV.** La planeación y ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la movilidad; con especial énfasis en las instalaciones estratégicas de seguridad pública estatal y municipal;
- V.** La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, las cuales podrán ser también constituidas en asociaciones público-privadas, conforme a la ley de la materia;
- VI.** La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población;
- VII.** La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento para la seguridad de las personas y de las instalaciones estratégicas de seguridad nacional;
- VIII.** La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad;
- IX.** La conservación, protección y mejoramiento del entorno natural y del patrimonio cultural de los centros de población;
- X.** La ejecución y cumplimiento de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a que se refiere esta Ley;
- XI.** La zonificación del territorio del Estado que se contemplará en los respectivos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como la determinación de las provisiones y reservas del suelo, la clasificación de los usos y destinos específicos de áreas y predios, de sus actividades y giros predominantes, y la aplicación de normas para la utilización del mismo;
- XII.** Las acciones que lleve a cabo el Gobierno, para mitigar y disminuir la vulnerabilidad a la que se encuentren sujetas las diferentes zonas de las localidades urbanas y rurales, que así lo requieran;
- XIII.** La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos naturales;
- XIV.** La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos, de vialidad y de movilidad;
- XV.** La protección del patrimonio natural y cultural en el territorio del Estado;
- XVI.** La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el territorio de Estado;
- XVII.** La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad, y
- XVIII.** El control y la observancia de las disposiciones de esta Ley, su reglamentación, y demás ordenamientos de la materia.

**ARTÍCULO 7º.** Serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno, los permisos, licencias, autorizaciones y resoluciones que contravengan lo señalado en esta Ley y las normas que del mismo deriven, así como en los Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Los servidores públicos que los expidan serán sujetos de las sanciones civiles, administrativas o penales que deriven de sus responsabilidades.

## **Capítulo V Sujetos de la Ley**

**ARTÍCULO 8º.** Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley, las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan:

- I. Realizar acciones, inversiones, obras o servicios en materia de desarrollo urbano y vivienda;
- II. Fraccionar, relotificar, modificar la intensidad de uso habitacional, fusionar o subdividir áreas y predios, así como realizar modificaciones, para los fines que señala este ordenamiento, independientemente del régimen de propiedad a que estén sujetos;
- III. Promover y operar desarrollos inmobiliarios especiales, y
- IV. Construir, reconstruir, ampliar, reparar, modificar o demoler inmuebles, así como instalar o retirar anuncios.

## **Capítulo VI Reglamentación, aplicabilidad y supletoriedad**

**ARTÍCULO 9º.** Los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán los reglamentos y las disposiciones administrativas que correspondan, con base en lo dispuesto en la presente Ley y demás aplicables, y deberán contener los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se debe prever por lo menos las formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendentes a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad en la materia.

Los ayuntamientos están obligados a dar a conocer por escrito o bien a través de medios electrónicos, los requisitos que los solicitantes deberán cumplir en cada caso para realizar los trámites que esta Ley establece y que sean de su competencia.

**ARTÍCULO 10.** Los actos jurídicos materia de esta Ley, sólo podrán realizarse mediante autorización municipal o de la autoridad que resulte competente de conformidad con los convenios celebrados.

**ARTÍCULO 11.** En todo lo no previsto en esta Ley, serán aplicables supletoriamente, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de Planeación, la Ley Ambiental, la Ley de Aguas, todas del Estado de San Luis Potosí, y los Códigos, Procesal Administrativo, y Civil para el Estado de San Luis Potosí.

## **TÍTULO SEGUNDO DE LA CONCURRENCIA ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO, COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN**

### **Capítulo I Concurrencia**

**ARTÍCULO 12.** La aplicación de esta Ley corresponde Ejecutivo del Estado, así como a los ayuntamientos, los que ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, para proveer al exacto cumplimiento de esta Ley, deberán expedir los reglamentos, bandos, ordenanzas o normatividad reglamentarias correspondientes.

El Congreso del Estado ejercerá la competencia que en esta materia le otorga la presente Ley y las demás que regulan sus atribuciones en este orden.

El Estado ejercerá sus atribuciones de manera concurrente y coordinada con las autoridades federales y con los ayuntamientos de la Entidad en los casos que establece la Ley General.

## **Capítulo II Autoridades Competentes**

**ARTÍCULO 13.** Son autoridades competentes, para la aplicación de la presente Ley:

- I. El Titular del Ejecutivo del Estado;
- II. La Secretaría, y
- III. Los ayuntamientos y autoridades en materia de desarrollo urbano y/o obras públicas o su equivalente, que de ellos dependan.

El Congreso del Estado tendrá las facultades que le otorga la presente Ley.

## **Capítulo III Atribuciones del Ejecutivo del Estado**

**ARTÍCULO 14.** Corresponde al Ejecutivo del Estado:

- I. Ordenar la elaboración o actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobarlo, controlar su ejecución, revisión, actualización, evaluación, y modificación con base en lo dispuesto en esta Ley;
- II. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los diversos programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que aprueben las autoridades competentes, cuando éstos tengan la congruencia con la planeación estatal y federal; así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado;
- III. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables;
- IV. Garantizar la participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley;
- V. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;
- VI. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación con la estrategia nacional de ordenamiento territorial;
- VII. Dictar las políticas en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, Conservación del Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad universal, incluyendo la Movilidad,
- VIII. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen impactos significativos en el territorio; las cuales deberán estar incluidas en los programas de Desarrollo Urbano;

- IX.** Participar, conforme a la legislación federal y estatal, en la constitución y administración de reservas territoriales, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la salvaguarda de la población que se ubique en los polígonos de protección y amortiguamiento determinados por los programas de desarrollo urbano; así como en la protección del patrimonio natural y cultural, y de las zonas de valor ambiental del equilibrio ecológico de los centros de población;
- X.** Intervenir en términos de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones y programas de desarrollo urbano y las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
- XI.** Establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana en los términos de esta Ley y las demás disposiciones que regulen la materia.
- XII.** Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos previstos en esta Ley;
- XIII.** Coordinar sus acciones con la Federación y celebrar convenios con otras entidades federativas, sus municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, incluyendo las relativas a la movilidad y a la accesibilidad universal;
- XIV.** Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, atendiendo a los principios de la legislación federal y estatal en la materia y a lo establecido en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- XV.** Proponer a los ayuntamientos las modificaciones de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas a fin de ejecutar acciones de fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento previstas en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- XVI.** Convenir con los municipios que lo soliciten, la administración de los servicios públicos, obras y acciones municipales, en los términos de las leyes aplicables;
- XVII.** Convenir con los respectivos municipios, cuando estos lo soliciten, la administración conjunta de acciones, obras y servicios públicos municipales, en los términos de la legislación aplicable;
- XVIII.** Celebrar convenios con los ayuntamientos del Estado, para que éste se haga cargo de todas o parte de las funciones relacionadas con las atribuciones que les competen en materia de fraccionamientos y desarrollos en régimen de propiedad en condominio, o para ejercerlas con su concurso; en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- XIX.** Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano, o convenir con ellas la transferencia de facultades estatales en materia urbana, en términos de los convenios que para ese efecto se celebren;
- XX.** Apoyar y asesorar a los municipios que lo soliciten, en la elaboración de los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas en la materia; para que éstos sean congruentes con la presente Ley y los programas de desarrollo urbano, así como los convenios de zonas conurbadas y metropolitanas que se suscriban;
- XXI.** Promover ante el Ejecutivo Federal la expropiación de terrenos ejidales o comunales o la desincorporación de bienes federales para desarrollo urbano, vivienda, regularización de la tenencia de la tierra urbana y ordenamiento territorial, de conformidad con las estrategias de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes en el Estado;

- XXII.** Establecer las políticas para la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, así como para prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad con los programas de desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas y los atlas de riesgo, incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos, en los términos de la legislación aplicable;
- XXIII.** Promover el análisis y delimitación de las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover estudios de vulnerabilidad en el Estado, a través de las instituciones competentes;
- XXIV.** Llevar a cabo, a través de las autoridades y organismos competentes, acciones de reubicación de asentamientos humanos que ocupan zonas de alto riesgo, derechos de vía y zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad;
- XXV.** Emitir en su caso, con aprobación de la Comisión Metropolitana y de Conurbación respectiva, los decretos de Conurbación y de Zona Metropolitana;
- XXVI.** Establecer, una política integral de suelo urbano, protección ambiental, reservas territoriales, y prevención y mitigación de desastres que entre otros aspectos comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos indicados en los programas de desarrollo urbano, en coordinación con las instancias competentes de los órdenes de gobierno federal y municipal;
- XXVII.** Proponer al Congreso del Estado cuando así proceda, la fundación de centros de población conforme al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- XXVIII.** Establecer las políticas conforme a los criterios técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y metropolitano en condiciones de equidad, así como la recuperación del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano;
- XXIX.** Formular y aplicar las políticas, así como realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, conservación del patrimonio natural y cultural y accesibilidad universal, incluyendo la movilidad;
- XXX.** Registrar a los profesionales en la materia como Directores Responsables y Corresponsables de Obra, en aquellos municipios con los que celebre convenios de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los reglamentos municipales correspondientes;
- XXXI.** Administrar el Registro Estatal de Directores Responsables y Corresponsables de Obra, con base en los registros que deberán proporcionar los municipios, e informar a los interesados que así lo soliciten sobre los profesionales autorizados, de conformidad con lo señalado en este Ordenamiento y en los reglamentos respectivos;
- XXXII.** Expedir cuando sea procedente, la constancia de compatibilidad urbanística;
- XXXIII.** Expedir a través de las dependencias competentes los estudios de impacto ambiental, impacto urbano y demás estudios que se requieran para la expedición de las licencias y demás autorizaciones que establece la presente Ley;
- XXXIV.** Capacitar a los municipios con los que así se convenga, en todo lo relativo a la aplicación de la presente Ley;
- XXXV.** Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes;
- XXXVI.** Vigilar que las licencias que expidan los municipios en materia de uso de suelo, se apeguen al Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado y demás programas que se éste deriven, y solicitar en su caso a los ayuntamientos o a las instancias competentes, la nulidad de las licencias que se expidan en contravención a los mismos;

- XXXVII.** Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia le sean planteados y que deriven de la aplicación de esta Ley y de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y
- XXXVIII.** Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 15.** Las atribuciones que otorga esta Ley al Titular del Ejecutivo del Estado, serán ejercidas, a través de la Secretaría, salvo las que deba ejercer directamente por disposición expresa de éste u otros ordenamientos jurídicos.

Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y otras disposiciones jurídicas, deban intervenir otras dependencias o entidades estatales o municipales, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas.

El Titular del Ejecutivo del Estado podrá ejercer las atribuciones antes señaladas, a través de la Secretaría y de las demás autoridades y organismos estatales competentes.

#### **Capítulo IV Atribuciones del Congreso del Estado**

**ARTÍCULO 16.** Corresponde al Congreso del Estado:

- I. Promover y decretar la fundación de nuevos centros de población, a partir de las propuestas que hagan el Ejecutivo del Estado o los municipios, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y considerando el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, consultado cuando lo considere necesario al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de Desarrollo Urbano que permita contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano;
- III. Establecer en las leyes los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se debe prever por lo menos las formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad en la materia;
- IV. Autorizar al Ejecutivo de Estado para que celebre convenios sobre los límites del Estado;
- V. Fijar los límites municipales o su modificación, conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal y de la presente Ley;
- VI. Resolver las controversias por límites territoriales, que se susciten entre municipios del Estado, de conformidad con lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la presente Ley, y
- VII. Las demás que le otorgan esta Ley y demás disposiciones jurídicas.

#### **Capítulo V Atribuciones de la Secretaría**

**ARTÍCULO 17.** Son atribuciones de la Secretaría:

- I. Aplicar y ajustar los procesos de la planeación estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a la estrategia nacional de ordenamiento territorial, en su caso a través del Instituto de Planeación del Estado, cuando el mismo esté constituido;

- II. Promover, el efectivo cumplimiento de los derechos de los habitantes de las ciudades bajo los principios a que alude el artículo 5° de esta Ley;
- III. Formular, aprobar, administrar, actualizar y evaluar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los programas que de él se deriven, con base en el respectivo Plan Estatal de Desarrollo y en lo dispuesto en esta Ley, con la participación que corresponda a los municipios y a los sectores social y privado, y vigilar su correcta aplicación, por sí o en su caso a través del Instituto de Planeación del Estado cuando dicho órgano esté constituido, o bien por sí misma;
- IV. Poner en marcha los mecanismos para dar participación a la ciudadanía y a los municipios en los procesos de formulación planeación, operación, seguimiento, cumplimiento y evaluación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de los programas que de él se deriven, en su caso con el apoyo del Instituto de Planeación del Estado;
- V. Proveer, conservar y mantener para su consulta pública, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los programas que de éste se deriven, los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de todos los municipios, y los programas de conurbación y desarrollo metropolitano, en su caso con el auxilio del Instituto de Planeación del Estado;
- VI. Difundir los programas estatales, regionales y municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como los de conurbación y desarrollo metropolitano, y facilitar su consulta pública;
- VII. Gestionar la inscripción del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y de los demás programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano; y de las declaratorias que reconozcan la existencia de una zona conurbada; una vez publicadas por el Gobernador del Estado, y ordenado su registro, en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado;
- VIII. Coordinar con los ayuntamientos involucrados, la elaboración, ejecución, control y evaluación de los Programas de Conurbación y Desarrollo Metropolitano dentro del Estado, en concordancia con la legislación aplicable;
- IX. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de los de conurbación y desarrollo metropolitano, y previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dictaminar sobre la congruencia de los mismos en relación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y demás programas, incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas y su apego a la metodología, normas y procedimientos establecidos en esta Ley para regular su elaboración y consulta, y proponer en su caso a los ayuntamientos las modificaciones que se requieran para su legalidad y uniformidad metodológica, a través de dictámenes de congruencia estatal;
- X. Participar, a solicitud de los municipios, en la elaboración, ejecución, control, evaluación y revisión de los programas parciales de desarrollo urbano que se expidan para la utilización parcial o total de la reserva territorial;
- XI. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano, o convenir con ellas la transferencia de facultades estatales en materia urbana, en términos de los convenios que para ese efecto se celebren;
- XII. Colaborar en coordinación con los ayuntamientos, cuando así lo soliciten, en la formulación de las normas técnicas, manuales, instructivos y formatos para la mejor aplicación de las disposiciones de esta Ley y su reglamentación;
- XIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado, a petición de parte, los programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios, cuando éstos tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y federal;

- XIV.** Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano sustentables, atendiendo a los principios de esta Ley y a lo establecido en las leyes en la materia;
- XV.** Evaluar y dar seguimiento conforme a la normatividad respectiva, el impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos significativos en el territorio; las cuales deberán estar incluidas en los programas de Desarrollo Urbano;
- XVI.** Establecer en el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales, la programación de acciones, obras e inversiones para la dotación de infraestructura y equipamiento urbano, así como para la protección del patrimonio cultural y natural en la Entidad en coordinación con los ayuntamientos;
- XVII.** Elaborar, apoyar y ejecutar programas que satisfagan las necesidades de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado que correspondan y los ayuntamientos, con la participación de los sectores social y privado;
- XVIII.** Gestionar o pronunciarse sobre el ejercicio del derecho de preferencia que corresponde al Gobierno del Estado, para la adquisición de predios ejidales, comunales o privados comprendidos en las zonas de reserva señaladas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- XIX.** Verificar que las acciones e inversiones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se ajusten, en su caso, a esta Ley y a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano;
- XX.** Coordinar las acciones que en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, implemente el Gobierno Federal en apoyo al Estado y los municipios;
- XXI.** Vigilar el cumplimiento de las políticas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la Entidad y de los convenios y acuerdos que suscriba el Ejecutivo del Estado con los sectores público, social y privado, en materia de desarrollo urbano, así como determinar, en su caso, las medidas correctivas y de fomento procedentes;
- XXII.** Recomendar al Ejecutivo del Estado la propuesta para la fundación de centros de población en congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- XXIII.** Promover acciones de información y capacitación, dirigidas al personal de la administración pública estatal y de los gobiernos municipales, relacionados con la ejecución y supervisión de acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;
- XXIV.** Prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo y en los términos de la legislación aplicable;
- XXV.** Llevar a cabo las acciones necesarias para la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, de conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos, y participar con las instancias competentes en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, coordinándose con los municipios involucrados en los casos en que así proceda, en términos de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones, programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, y participar en la elaboración y ejecución de los programas parciales que en su caso se implementen, con el propósito de regularizar la tenencia del suelo para su incorporación al desarrollo urbano;
- XXVI.** Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones fiscales, que determine el Ejecutivo, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano, Desarrollo Regional y Desarrollo Metropolitano;
- XXVII.** Formular y proponer al Titular del Ejecutivo, y una vez emitidas, aplicar las políticas, así como realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo,



- Conservación del Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad universal, incluyendo la Movilidad;
- XXVIII.** Conocer y dar trámite a las denuncias ciudadanas que se le presenten con base en lo dispuesto en esta Ley;
  - XXIX.** Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia le sean planteados y que deriven de la aplicación de esta Ley y de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Administrativo para el Estado;
  - XXX.** Implementar, revisar y actualizar el Registro Estatal de Directores Responsables de Obras y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, de conformidad con lo previsto en este Ordenamiento;
  - XXXI.** Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas estatales de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme a lo que prevea la presente Ley y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones a tales disposiciones, y
  - XXXII.** Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias.

## **Capítulo VI**

### **Atribuciones de los Municipios**

**ARTÍCULO 18.** Corresponde a los municipios:

- I.** Formular, aprobar, administrar, evaluar, actualizar, modificar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, y los demás que de estos se deriven; con base en lo dispuesto en esta Ley, los cuales deberán tener congruencia y vinculación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y con otros niveles superiores de planeación, y deberán contar para su validez con el dictamen de congruencia expedido por la Secretaría;
- II.** Aplicar los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de los programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
- III.** Validar ante la Secretaría la congruencia, coordinación y ajuste de sus programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- IV.** Solicitar oportunamente al Instituto Registral y Catastral del Estado la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado, del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los demás programas que del mismo deriven y se aprueben por el Ayuntamiento, y ante el Ejecutivo del Estado, su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis";
- V.** Evaluar anualmente los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes en el Municipio;
- VI.** Informar a la ciudadanía sobre el contenido, la aplicación y ejecución de los programas de ordenamiento territorial Desarrollo Urbano, y difundirlos anualmente;
- VII.** Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;
- VIII.** Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;
- IX.** Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos,

- X.** Gestionar o resolver sobre el derecho de preferencia que corresponda al Municipio, para la adquisición de predios ejidales, comunales o privados comprendidos en las zonas de reserva, señaladas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- XI.** Aplicar las medidas necesarias para desalentar la especulación, respecto de predios y fincas, contraria al interés social;
- XII.** Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los programas municipales y en los demás que de éstos deriven;
- XIII.** Autorizar, por causa de utilidad pública la apertura, prolongación, ampliación o cualquier modificación de vías públicas, en concordancia con las disposiciones legales y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- XIV.** Autorizar el aprovechamiento, subdivisión o parcelamiento de suelo de propiedad privada o proveniente del régimen agrario, incluyendo la ampliación de las zonas de urbanización ejidal, para su incorporación al desarrollo urbano en sus jurisdicciones territoriales de conformidad con los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y de conurbaciones y desarrollo metropolitano vigentes;
- XV.** Verificar que las acciones, inversiones obras y servicios de desarrollo urbano que se ejecuten en el territorio municipal, se ajusten, en su caso, a esta Ley, a las demás disposiciones jurídicas aplicables y a los diversos programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano;
- XVI.** Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;
- XVII.** Proponer al Congreso del Estado la Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población, en congruencia con lo dispuesto en esta Ley y sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- XVIII.** Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;
- XIX.** Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes;
- XX.** Celebrar con la federación, con el Estado, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven;
- XXI.** Participar en los convenios de coordinación metropolitana propuestos por las instancias de coordinación correspondientes;
- XXII.** Participar en la constitución de las instancias de participación y estructuras institucionales que les correspondan de acuerdo con esta Ley, y participar con voz y voto en las instancias de coordinación relativas a las conurbaciones y las zonas metropolitanas;
- XXIII.** Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación del Estado;
- XXIV.** Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con el Estado y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en las leyes estatales;
- XXV.** Solicitar la incorporación de los programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Urbano;
- XXVI.** Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos;
- XXVII.** Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal;

- XXVIII.** Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en congruencia con los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en su circunscripción territorial;
- XXIX.** Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;
- XXX.** Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, así como en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y desarrollo metropolitano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en el marco de los derechos humanos;
- XXXI.** Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;
- XXXII.** Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos;
- XXXIII.** Conocer y dar trámite a las denuncias ciudadanas que se le presenten con base en lo dispuesto en esta Ley;
- XXXIV.** Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia le sean planteados y que deriven de la aplicación de esta Ley y de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí;
- XXXV.** Regular el control y vigilancia, así como otorgar las autorizaciones correspondientes a los actos relacionados con el fraccionamiento, subdivisión, fusión, relotificación y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio; en sus respectivas jurisdicciones;
  
- XXXVI.** Verificar que los fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad en condominio, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de terrenos, cumplan con lo dispuesto en esta Ley y demás leyes, programas, reglamentos, normas de desarrollo urbano, protección civil y ambientales aplicables;
  
- XXXVII.** Controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, y expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las disposiciones de la presente Ley y demás aplicables, así como a los programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;
- XXXVIII.** Expedir las licencias de uso de suelo en apego a lo establecido en esta Ley y de conformidad con los Programas, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, el del municipio correspondiente y los demás programas que de los mismos deriven, y revocarlas en los casos que establece la presente Ley;
- XXXIX.** Otorgar las licencias de construcción de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en sus respectivos reglamentos de construcción, y suspenderlas o revocarlas en los casos que dichos ordenamientos determinen;
- XL.** Expedir la constancia de terminación de obra, en términos de la presente Ley;
- XLI.** Recibir, analizar y dictaminar a través de la Dirección municipal, los expedientes relativos a la autorización de fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad en condominio, subdivisión, fusión, relotificación y modificación de terrenos, previo los dictámenes que al efecto emitan las autoridades y órganos competentes, verificando que se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables;

- XLII.** Autorizar por conducto de la Dirección municipal, dentro del término que señala la presente Ley, los fraccionamientos y demás desarrollos inmobiliarios que cumplan los requisitos previstos en la misma, y los reglamentos municipales correspondientes;
- XLIII.** Determinar el trazo de las vías primarias en los fraccionamientos y demás desarrollos inmobiliarios que autoricen, de conformidad con los programas de centros de población y en su caso programas metropolitanos vigentes, garantizando la inclusión de ciclovías, andadores, e infraestructura básica para el transporte público, especies vegetales y rampas de acceso a personas con discapacidad;
- XLIV.** Supervisar y verificar el avance, terminación, correcto funcionamiento y entrega de las obras de urbanización de los fraccionamientos y desarrollos en régimen de propiedad en condominio;
- XLV.** Aprobar y dictaminar de conformidad con el programa de desarrollo urbano, la ubicación de las áreas de donación en los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y desarrollos en régimen de propiedad en condominio;
- XLVI.** Constatar que se realicen a favor del Municipio las donaciones respectivas en los casos y en los porcentajes que así lo exige este ordenamiento;
- XLVII.** Destinar hasta el cincuenta por ciento de la superficie de terreno que reciba en donación gratuita para equipamiento urbano, recreación y/o deporte y el resto para área verde, de conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano vigente;
- XLVIII.** Permutar, desde la autorización de los fraccionamientos, y desarrollos inmobiliarios especiales, cuando así proceda y se justifique mediante previo dictamen de la Dirección, las áreas de donación menores a 500 metros cuadrados, ubicadas en zonas que cuenten con suficiente equipamiento y áreas verdes, por obras de urbanización, equipamiento o infraestructura, necesarias dentro de la misma zona;
- XLIX.** Intervenir en la entrega-recepción de los fraccionamientos cuando éstos cumplan con las condiciones previstas en esta Ley, levantando el acta respectiva;
- L.** Expedir a los fraccionamientos la constancia de municipalización correspondiente, una vez que se hayan cumplido los requisitos que establece la presente Ley;
- LI.** Llevar el registro de los fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad en condominio, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de inmuebles sujetos a la presente Ley, así como de las asociaciones que sus habitantes integren;
- LII.** Promover la construcción de fraccionamientos para vivienda de interés social y popular;
- LIII.** Favorecer el desarrollo de fraccionamientos y demás desarrollos inmobiliarios sustentables, que utilicen ecotecnologías y que sean de bajo impacto ambiental;
- LIV.** Evitar que se otorguen autorizaciones de fraccionamientos de vivienda económica, popular o de urbanización progresiva, en zonas de difícil acceso, sin servicios de transporte, en zonas de riesgo, y/o que carezcan de equipamiento urbano básico;
- LV.** Promover, evaluar y aprobar los proyectos para la construcción de fraccionamientos de urbanización progresiva;

- LVI.** Autorizar la nomenclatura para la denominación de las vías públicas, vialidades interiores, parques, jardines, plazas, fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y de todo espacio público susceptible de asignarle una denominación; así como, los números oficiales que le corresponden a los inmuebles ubicados en su territorio;
- LVII.** Cuidar el buen aspecto y resguardo de los predios que pertenezcan al Municipio, cumpliendo lo relativo a la normatividad de ecología y medio ambiente, en tanto no se realice la construcción de las obras de equipamiento urbano;
- LVIII.** Verificar que los servicios públicos de agua potable, drenaje, saneamiento, pavimento, alumbrado público, y recolección y disposición de residuos sólidos, en los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y desarrollos en régimen de propiedad en condominio, sean prestados a los habitantes de manera eficiente;
- LIX.** Celebrar en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones jurídicas aplicables, convenios de colaboración con otros ayuntamientos, para que de manera coordinada se desempeñen las funciones relacionadas con las atribuciones que les competen en la materia de esta Ley;
- LX.** Realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que procedan para constatar el cumplimiento de los requisitos que establecen las autorizaciones y licencias que les competen, previo a su expedición y durante su vigencia de conformidad con la presente Ley y reglamentos que de la misma deriven;
- LXI.** Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de movilidad urbana, a fin de permitir el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, y de personas que se transportan en medios no motorizados, y que favorezcan la seguridad pública y los principios de inclusión y no discriminación;
- LXII.** Vigilar que se cumplan las medidas necesarias para evitar riesgos y procurar la resiliencia de las zonas urbanas;
- LXIII.** Imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; esta facultad podrá ser delegada en los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado;
- LXIV.** Notificar y ejecutar las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de esta Ley;
- LXV.** Resolver los recursos que sean interpuestos contra sus resoluciones de conformidad con la ley;
- LXVI.** Expedir los Reglamentos municipales y demás disposiciones técnicas y administrativas para la aplicación de la presente Ley; y

**LXVII.** Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y estatales.

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de planeación y administración del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a través del Instituto de Planeación Municipal, en su caso, y de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, respectivamente, con la vigilancia y

evaluación de los Cabildos, de conformidad con las lo disposiciones de la presente Ley.

## **Capítulo VII Coordinación y Concertación**

**ARTÍCULO 19.** La coordinación y concertación de acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano, así como de reservas territoriales y regularización de la tenencia de la tierra urbana, que lleven a cabo el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, con el Gobierno Federal, se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley General, a la presente Ley, a las demás disposiciones jurídicas aplicables y a los convenios y acuerdos que en su caso se celebren.

**ARTÍCULO 20.** Son órganos auxiliares en la aplicación de la presente Ley:

- I. El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda;
- III. Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación;
- IV. La Procuraduría;
- V. El Instituto de Planeación del Estado;
- VI. El Instituto Registral y Catastral del Estado;
- VII. Los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil;
- VIII. La Comisión Estatal de Agua;
- IX. Los Organismos Operadores de Agua. y
- X. Los demás que por sus objetivos y funciones se relacionen con la materia de esta Ley.

Estos organismos normarán su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones jurídicas que les dieron origen.

## **TÍTULO TERCERO ORGANOS DELIBERATIVOS Y AUXILIARES**

### **Capítulo I Generalidades**

**ARTÍCULO 21.** Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural:

Corresponde al Poder Ejecutivo y a los municipios la creación y apoyo en la operación de tales consejos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**ARTÍCULO 22.** Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, son órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural de las autoridades encargadas de aplicar esta Ley en

materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas públicas en la materia:

- I. El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II. Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones;
- III. Los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada, y
- IV. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Los miembros de los Consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función, y contarán con el apoyo técnico necesario para realizar su labor.

Para el cumplimiento de las atribuciones que conforme a esta Ley competen al municipio, los ayuntamientos podrán crear institutos municipales de planeación urbana, como órganos técnicos auxiliares en materia de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano, en los términos que disponen los artículos 38, 39, 40 y demás relativos de esta Ley. Mediante convenio que celebren los municipios que presenten fenómenos de conurbación, dichos institutos podrán ser de carácter metropolitano.

Será responsabilidad de la Secretaría proveer de información oportuna y veraz a los consejos para el ejercicio de sus funciones. Todas las opiniones y recomendaciones de los consejos estatales serán públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación electrónica.

## **Capítulo II**

### **Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 23.** El Consejo Estatal, es el órgano de participación social de conformación plural, para la asesoría y consulta del Ejecutivo Estatal, para coordinar y concertar acciones, en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano; así como para fomentar la aplicación de la legislación, los programas en la materia. Todas sus decisiones serán públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación electrónica.

**ARTÍCULO 24.** El Consejo Estatal, se integrará por:

- I. Un Presidente que será el Gobernador del Estado, quien podrá delegar dicha representación en alguno de los integrantes del Consejo;
- II. Un Secretario Técnico, que será el Secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas;
- III. Por los titulares de las siguientes dependencias y entidades:
  - a. Secretaría General de Gobierno.
  - b. Secretaría de Finanzas.
  - c. Secretaría de Desarrollo Económico.
  - d. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
  - e. Secretaría de Desarrollo Social y Regional.
  - f. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  - g. Secretaría de Cultura.
  - h. Instituto de Vivienda del Estado.
  - i. Instituto Registral y Catastral del Estado.
  - j. Promotora del Estado.
  - k. Comisión Estatal del Agua, y
  - l. Unidad de Protección Civil del Estado;
- IV. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado;

- V. El Delegado o representante de la SEDATU del Gobierno Federal;
- VI. El Delegado del INFONAVIT en el Estado;
- VII. El representante de la SEMARNAT del Gobierno Federal;
- VIII. Un Presidente Municipal representante de cada una de las cuatro Regiones del Estado:
  - a. Región Altiplano;
  - b. Región Centro;
  - c. Región Media, y
  - d. Región Huasteca.

Cuando se traten programas, proyectos o acciones que afecten una región, o un grupo de municipios, o un municipio en particular, se convocará para que participen en el Consejo Estatal a un representante por cada ayuntamiento, quienes con voz y voto intervendrán en todas las decisiones que afecten a sus respectivas jurisdicciones, y a un representante por cada uno de los consejos municipales que correspondan o sus equivalentes, o de las comisiones metropolitanas y de conurbación, que contarán con voz y voto en todas las decisiones que afecten a sus municipios;

- VIII. Por dos expertos en materia de planeación del desarrollo urbano, a propuesta de los miembros del sector social del propio Consejo, y
- IX. Por los Sectores Social y Privado, que serán representados por:
  - a. Un representante de cada uno de los colegios y asociaciones de profesionistas legalmente constituidos y registrados ante las autoridades competentes, con mayor representación en la Entidad, que tengan relación directa con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda.
  - b. Un representante de las cámaras de la construcción y dos representantes de las cámaras de vivienda con representación en el Estado.
  - c. Dos representantes de otros organismos o cámaras que estén relacionadas con la materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
  - d. Dos representantes de organismos no gubernamentales, asociaciones y organizaciones populares que tengan presencia en todo el Estado y sus actividades se relacionen con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda, y
  - e. Un representante de cada una de las Instituciones de Educación Superior e instituciones de investigación con mayor presencia en el Estado, relacionadas con la materia.

Este sector deberá constituir la mayoría de los miembros del Consejo.

Cada uno de los miembros del Consejo Estatal contará con un suplente que será designado por la dependencia, entidad o agrupación respectiva. Las ausencias del Presidente del Consejo Estatal serán suplidas por el Secretario Técnico del mismo.

Para la conformación del Consejo se implementarán mecanismos tendentes a alcanzar la igualdad de género entre sus integrantes.

**ARTÍCULO 25.** El Consejo Estatal sesionará válidamente con la mayoría de sus miembros, y por lo menos una vez cada tres meses de manera ordinaria, de acuerdo al calendario que para tal efecto se determine, y de forma extraordinaria tantas veces como sea necesario, a propuesta de su Presidente.

Las convocatorias se llevarán a cabo por conducto del Secretario Técnico del Consejo Estatal con al menos, tres días hábiles de anticipación, y deberán acompañarse del orden del día.

**ARTÍCULO 26.** El Consejo Estatal, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Conocer, analizar y formular propuestas sobre el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que someta a su consideración el Instituto Estatal de



- Planeación, así como sus modificaciones y adiciones, y opinar sobre sus informes anuales de ejecución;
- II.** Conocer, opinar y proponer cambios en las políticas públicas, programas y acciones que la Secretaría formule en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;
  - III.** Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior;
  - IV.** Conocer y opinar sobre las políticas o acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal que ejecuten directamente o en coordinación con otras dependencias o entidades de los demás órdenes de gobierno, relacionadas con el desarrollo regional y urbano;
  - V.** Emitir opiniones y formular propuestas consensuadas sobre la conducción, orientación y evaluación de las políticas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano;
  - VI.** Promover la celebración de convenios de colaboración y coordinación con los Ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de San Luis Potosí, y en su caso con otras entidades federativas o con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;
  - VII.** Proponer la actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano;
  - VIII.** Opinar en aquellos asuntos que se presenten a su consideración; cuando exista diferencia de criterio entre el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en cuanto al tratamiento de un asunto en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano;
  - IX.** Impulsar la participación social en la elaboración, seguimiento y operación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los demás programas que de éste deriven;
  - X.** Proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;
  - XI.** Conocer y opinar los convenios de zonas metropolitanas;
  - XII.** Conocer y opinar de la creación de nuevos Centros de Población;
  - XIII.** Promover la creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas;
  - XIV.** Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los organismos estatales y, en su caso, municipales, destinados a programas y acciones urbanísticas;
  - XV.** Proponer los cambios estructurales necesarios en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio estatal;
  - XVI.** Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de Desarrollo Urbano;
  - XVII.** Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los programas de la materia;
  - XVIII.** Llevar a cabo campañas de concientización con la población asentada en zonas de salvaguarda, en zonas de alto riesgo y en zonas de derecho de vía para que accedan a desocuparlas;
  - XIX.** Proponer la integración de grupos técnicos de trabajo y las comisiones que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;
  - XX.** Colaborar en la búsqueda de la permanencia de los usos de suelo en los asentamientos humanos, y en la prevención de la reocupación en zonas de derecho de vía;
  - XXI.** Coordinarse con las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones, los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda; así como con los Institutos Metropolitanos de Planeación y los Institutos Municipales de Planeación, para el cumplimiento de sus funciones;

- XXII.** Coordinarse con las diversas instancias de gobierno y del sector social para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los compromisos y acciones establecidas en los convenios de coordinación de acciones e inversiones en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano que suscriban el Gobierno del Estado;
- XXIII.** Apoyar a los ayuntamientos a fin de promover la constitución de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda y las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación, así como sus Institutos Municipales y Metropolitanos de Planeación;
- XXIV.** Convocar a las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación, y a los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que por medio de los representantes, participen en el Consejo Estatal cuando en él se planteen programas, proyectos, acciones, obras e inversiones que afecten un grupo de municipios;
- XXV.** Expedir su Reglamento Interno;
- XXVI.** Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación;
- XXVII.** Evaluar a través de indicadores periódicos de gestión, que deberán hacerse públicos, el trabajo, desempeño y los resultados del Instituto de Planeación Estatal.
- XXVIII.** Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

**ARTÍCULO 27.** Los acuerdos del Consejo Estatal se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y se ejecutarán de conformidad con las atribuciones que la ley establece a las distintas instancias que lo integran.

### **Capítulo III**

#### **Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones y Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada**

**ARTÍCULO 28.** Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación, serán la instancia de interés público y beneficio social y de constitución obligatoria, que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación social, y tienen como finalidad definir los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana así como coordinar la formulación y aprobación de los programas de conurbación y desarrollo metropolitano, así como su gestión, evaluación y cumplimiento.

Las Comisiones serán órganos colegiados y su funcionamiento estará de acuerdo a las reglas de operación correspondientes y que se encuentren vigentes.

La Comisión Metropolitana y de Conurbación se integrará por:

- I.** Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II.** Un Secretario Técnico, que será el titular de la Secretaría;
- III.** Un representante del Consejo Estatal, nombrado por su presidente;
- IV.** Los presidentes de los municipios que integran la zona metropolitana y de conurbación respectiva;

La comisión metropolitana y de conurbación sesionará con la asistencia con la mitad más uno de sus integrantes. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes; el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. Por cada representante propietario se designará un suplente. El desempeño de los cargos a que se refiere este artículo será honorífico.

**ARTÍCULO 29.** La Comisión Metropolitana y de Conurbación tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Coordinar la formulación, actualización o modificación del programa metropolitano y de zona conurbada, y una vez concluido aprobar, implementar y evaluar el mismo;
- II.** Solicitar al Titular del Ejecutivo del Estado la emisión del Decreto de conurbación y zona

metropolitana, en el que se incluya la descripción de sus límites territoriales y los municipios que la integran, así como los compromisos de los participantes en su planeación y regulación, y la determinación de acciones e inversiones para la atención de requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, infraestructura, equipamiento, servicios urbanos y ecología, así como los demás elementos técnicos que se considere necesario.

- III. Gestionar ante los tres órdenes de gobierno, el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, de las decisiones que se hayan tomado en la Comisión Metropolitana y de Conurbación;
- IV. Proponer el criterio o resolución, cuando entre los tres órdenes de gobierno, exista diferencia de opinión en cuanto al tratamiento de un asunto en materia metropolitana y de conurbación;
- V. Analizar las observaciones o propuestas que le formule la comunidad respecto al ordenamiento metropolitano y de conurbación, y
- VI. Las demás que les señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 30.** Los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada se integrarán por:

- I. Un representante del Consejo Estatal;
- II. El titular de la Secretaría;
- III. Los representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal involucradas en el ordenamiento de la zona metropolitana y de conurbación respectiva, y
- IV. Los representantes de las organizaciones legalmente constituidas de los sectores social y privado involucradas en el ordenamiento de la zona metropolitana y de conurbación respectiva; como son agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas registrados ante la instancia competente, cámaras, instituciones académicas y expertos en la materia. Dicha representación deberá ser con perspectiva de género. Este sector deberá constituir la mayoría de los miembros del Consejo.

Sus integrantes elegirán a quien los presida.

**ARTÍCULO 31.** Los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Conocer, analizar y formular propuestas sobre el programa metropolitano y de zona conurbada correspondiente, que someta a su consideración la Comisión, así como sus modificaciones y adiciones;
- II. Proponer la actualización del programa metropolitano y de zona conurbada;
- III. Opinar en aquellos asuntos que se presenten a su consideración; cuando exista diferencia de criterio entre los ayuntamientos respectivos, en cuanto al tratamiento de un asunto en materia de metropolitana y de zona conurbada;
- IV. Impulsar la participación social en la elaboración, seguimiento y operación del programa metropolitano y de zona conurbada correspondiente;
- V. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento del programa metropolitano y de zona conurbada;
- VI. Llevar a cabo campañas de concientización con la población asentada en zonas de salvaguarda, en zonas de alto riesgo y en zonas de derecho de vía para que accedan a desocuparlas;
- VII. Coordinarse con el Consejo Estatal, los consejos municipales de desarrollo urbano y vivienda; así como con los institutos metropolitanos de planeación y los institutos municipales de planeación, para el cumplimiento de sus funciones;
- VIII. Expedir su Reglamento Interno;

- IX. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación, y
- X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

#### **Capítulo IV**

### **Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda**

**ARTÍCULO 32.** Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda serán instancias permanentes de participación social para la asesoría y consulta de los ayuntamientos, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, de desarrollo urbano de los centros de población y vivienda en su jurisdicción territorial, y se regirán en cuanto a su organización y funcionamiento por lo que determinen sus respectivos Reglamentos Internos.

Los consejos municipales de desarrollo urbano y vivienda o sus equivalentes, se integrarán en cada municipio, por:

- I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal respectivo;
- II. Un Coordinador General, que será nombrado por el Consejo;
- III. Un representante de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, cuya competencia u objeto se relacione con el desarrollo urbano. Se invitará a representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y Federal involucradas, cuando así se requiera, y
- IV. Por representantes de:
  - a. Los colegios y asociaciones de profesionistas legalmente constituidos y registrados ante las autoridades competentes, con representación en el municipio, que tengan relación directa con el desarrollo urbano.
  - b. Las cámaras de la construcción, vivienda y servicios con representación en el municipio, y
  - c. Los organismos no gubernamentales, asociaciones y organizaciones populares que tengan presencia en el municipio y sus actividades se relacionen con el desarrollo urbano y la vivienda.

Cada uno de los miembros del Consejo contará con un suplente que será designado por la dependencia, entidad o agrupación respectiva. Las ausencias del Presidente del Consejo serán suplidas por el Secretario Técnico del mismo.

Para la conformación del Consejo se implementarán mecanismos tendentes a alcanzar la igualdad de género entre sus integrantes.

El desempeño de los cargos a que se refiere este artículo será honorífico.

**ARTÍCULO 33.** Los Consejos Municipales tendrán, en la esfera de sus ámbitos territoriales, las funciones siguientes:

- I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano que respecto al municipio elabore el Estado, así como la planeación regional que elabore la autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se afecte al territorio de sus municipios;
- II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior;
- III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los programas de la materia;
- IV. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

- V. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;
- VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia;
- VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano;
- VIII. Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la materia;
- IX. Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;
- X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Estado y de otras entidades federativas y de municipios, así como con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;
- XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano;
- XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
- XIII. Evaluar a través de indicadores periódicos de gestión, que deberán hacerse públicos, el trabajo, desempeño y los resultados del Instituto Municipal de Planeación cuando éste se encuentre constituido;
- XIV. Expedir su Reglamento Interno, y
- XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

## **Capítulo V**

### **Institutos Estatal y Municipales, e Institutos Metropolitanos de Planeación Urbana**

#### **Sección Primera**

#### **Instituto Estatal de Planeación Urbana**

**ARTÍCULO 34.** El Instituto Estatal de Planeación Urbana, podrá constituirse como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, con autonomía técnica y de gestión en la materia, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas encausadas a atender los desafíos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Estado.-

El Instituto Estatal tendrá la organización y las atribuciones que establecen esta Ley y las que señale su Reglamento Interior. Coadyuvará con los ayuntamientos y los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda en la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, así como en la elaboración de programas y proyectos derivados de sus programas.

**ARTÍCULO 35.** El Instituto Estatal de Planeación Urbana, contará como mínimo con la siguiente estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones:

- I. Un Consejo Consultivo, que será el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II. Un Director General designado por el Gobernador del Estado de entre una terna propuesta por el Consejo Consultivo, de conformidad a lo señalado en su Acuerdo de creación y su Reglamento Interior;

El Director General del Instituto Estatal, durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelegido por un periodo igual, y deberá acreditar tener experiencia y conocimientos en materia de ordenamiento territorial, y planeación del desarrollo urbano de acuerdo a lo señalado en su Reglamento Interior, y

- III. El personal necesario para el desempeño de las funciones encomendadas, con la formación profesional y experiencia requerida, conforme a su Reglamento Interior y al presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras para este propósito;

**ARTÍCULO 36.** El Instituto Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

- I. En materia de planeación:
  - a. Elaborar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Entidad, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
  - b. Participar con los ayuntamientos en la elaboración de los Programas Metropolitanos y de Conurbación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
  - c. Proponer y asesorar a solicitud de los ayuntamientos en la realización, actualización, modificación de sus Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y
  - d. Auxiliar a la autoridad estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- II. En materia de seguimiento, control y evaluación:
  - a. Dar seguimiento a los procesos de planeación del desarrollo urbano de la Entidad.
  - b. Evaluar el cumplimiento del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y, en su caso, hacer las recomendaciones necesarias;
- III. En materia de estudios y proyectos:
  - a. Realizar estudios y proyectos urbanos derivados del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
  - b. Apoyar a los municipios, cuando así lo soliciten, en la elaboración de los proyectos de los programas municipales.
  - c. Generar un Banco Estatal de Proyectos;
- IV. En materia de normatividad:
  - a. Actualizar y en su caso elaborar las iniciativas de Ley Estatal y sus Reglamentos, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y proponerlos a la consideración del Titular del Ejecutivo del estado para su presentación al Congreso del Estado.
  - b. Proponer a los ayuntamientos las reformas a la reglamentación en materia ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- V. En materia de información:
  - a. Crear, actualizar y administrar una Plataforma Estatal de información de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
  - b. Crear un archivo, resguardar y poner a disposición de la ciudadanía los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Estado para su consulta;
  - c. Emitir y publicar en su página web, de forma periódica los resultados de sus indicadores de gestión y desempeño que permitan al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, evaluar su actuación.
- VI. En materia de investigación: Desarrollar los proyectos y programas de investigación y planeación que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines;
- VII. En materia de asesorías: Desarrollar mecanismos que permitan al Instituto Estatal realizar la prestación de asesorías y el desarrollo de proyectos que fortalezcan la obtención de recursos propios, y
- VIII. Las demás que establezca el Reglamento de conformidad con las atribuciones anteriores, su objeto y fines.

**ARTÍCULO 37.** El Reglamento Interior del Instituto Estatal de Planeación Urbana, determinará con base en lo señalado en el artículo inmediato anterior, la integración del Consejo Consultivo y el Cuerpo Técnico, así como sus atribuciones, organización y funcionamiento, pudiendo ampliar su estructura orgánica, conforme a sus necesidades y presupuesto asignado.

## **Sección Segunda Institutos Municipales de Planeación Urbana**

**ARTÍCULO 38.** Los institutos municipales, y los metropolitanos de planeación urbana, podrán constituirse como organismos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, o bien como órganos desconcentrados de la administración pública municipal; tendrán la organización y las atribuciones que les señalen las disposiciones jurídicas que los establezcan, con base en lo previsto en esta Ley, y coadyuvarán con los ayuntamientos y los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda en la planeación del desarrollo urbano así como en la elaboración de programas y proyectos.

**ARTÍCULO 39.** Los Institutos Municipales de Planeación Urbana cuando se constituyan como organismos públicos descentralizados, contarán como mínimo con la siguiente estructura orgánica:

- I. Una Junta de Gobierno presidida por el Presidente Municipal integrada por el Director General del Instituto, funcionarios municipales, regidores y representantes de la comunidad. Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán voz y voto, con excepción del Director General que solo tendrá voz y actuará como Secretario Técnico de la misma; el Presidente de la Junta tendrá voto de calidad en caso de empate;
- II. Un Consejo Consultivo, que será el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda;
- III. Un Director General designado por el Presidente Municipal de entre una terna propuesta por el Consejo Consultivo, y
- IV. El personal necesario para el desempeño de las funciones encomendadas, con la formación profesional y experiencia requerida, conforme al presupuesto asignado.

Los Directores de los Institutos, durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelegidos, y deberán acreditar tener experiencia y conocimientos en materia de planeación de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 40.** Las atribuciones de los institutos serán señaladas en el Decreto que los establezca, así como en su respectivo reglamento, incluyendo al menos las siguientes:

- I. En materia de planeación: Proponer al ayuntamiento realización, actualización, modificación de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; proponer los criterios de planeación y programación de las acciones municipales, y auxiliar a la autoridad municipal en la conducción del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial;
- II. En materia de seguimiento, control y evaluación: Dar continuidad a los procesos de planeación; evaluar el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal y, en su caso, hacer las recomendaciones necesarias; proponer al ayuntamiento los criterios técnicos para el control urbano; dictaminar sobre la autorización de desarrollos urbanos habitacionales o mixtos, privados o públicos, en materia de alineamiento, congruencia con los programas establecidos y modalidades de diseño que contribuyan al ordenamiento territorial y al sistema vial municipal;
- III. En materia de estudios y proyectos: Realizar estudios y proyectos urbanos de apoyo a los programas municipales, y generar un banco municipal de proyectos;

- IV. En materia de normatividad: Proponer al ayuntamiento las reformas a la reglamentación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como los proyectos de iniciativa de reglamentos en materia municipal, y
- V. En materia de información: Crear, actualizar y administrar el sistema municipal de información estadística, geográfica y cartográfica; y poner a disposición del ayuntamiento y de la ciudadanía la información que al respecto se solicite.
- VI. En materia de investigación: Desarrollar los proyectos y programas de investigación y planeación que le sean solicitados por el ayuntamiento, así como los que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines y que sean autorizados por la Junta de Gobierno;
- VII. Emitir y publicar en su página web, de forma periódica los resultados de sus indicadores de gestión y desempeño que permitan al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, evaluar su actuación, y
- IV. Desarrollar mecanismos que permitan al Instituto realizar la prestación de asesorías y el desarrollo de proyectos que fortalezcan la obtención de ingresos propios.

Cuando dichos organismos se constituyan como desconcentrados, tendrán la estructura y organización que determine su decreto de creación.

**ARTÍCULO 41.** El Reglamento del Instituto Municipal de Planeación Urbana, determinará con base en lo señalado en el artículo inmediato anterior, la integración de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y el Cuerpo Técnico, así como sus atribuciones, organización y funcionamiento, pudiendo ampliar su estructura orgánica, conforme a sus necesidades y presupuesto asignado.

### **Sección Tercera** **Institutos Metropolitanos de Planeación Urbana**

**ARTÍCULO 42.** Los institutos metropolitanos de planeación urbana, serán organismos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrán la organización y las atribuciones que les señalen las disposiciones jurídicas que los establezcan, con base en lo previsto en esta Ley, y coadyuvarán con los ayuntamientos y las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación en la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como en la elaboración de programas y proyectos.

Dichos Institutos se instituirán por acuerdo o convenio de los municipios correspondientes.

El Director del mismo será elegido por concurso de oposición, mediante convocatoria pública que emitirá el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada. Su designación deberá ser ratificada por los presidentes municipales correspondientes.

Los presidentes municipales formarán parte de la Junta de Gobierno, debiendo presidir la misma durante dieciocho meses, el presidente municipal que los mismos elijan. La Presidencia será rotativa en el orden que los ediles acuerden.

### **Capítulo VI** **Procuraduría**

**ARTÍCULO 43.** El titular del Ejecutivo del Estado podrá constituir la Procuraduría, como organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría. y tendrá la organización y las atribuciones que le señalen las disposiciones jurídicas que la establezcan, con base en lo previsto en esta Ley.



La Procuraduría tendrá por objeto orientar, asesorar y defender a los ciudadanos en los asuntos relacionados con el proceso de urbanización, conforme a las disposiciones de la presente Ley y el reglamento de dicho organismo.

**ARTÍCULO 44.** La Procuraduría estará a cargo de un Procurador Urbano, designado por el Órgano de Gobierno de dicha entidad, a propuesta del Gobernador del Estado, quien para ocupar dicho cargo deberá contar con título de licenciado en derecho y tener experiencia probada en materia de derecho urbano.

Para el ejercicio de sus atribuciones la Procuraduría contará con el personal que se requiera y se autorice en su presupuesto asignado. Su estructura orgánica y las atribuciones de sus áreas se establecerán en su Reglamento Interior.

**ARTÍCULO 45.** El órgano de gobierno de la Procuraduría será una Junta Directiva, integrada de la siguiente forma:

- I. Por las o los Titulares de las siguientes Secretarías, entidades e instituciones,
  - a. SEDUVOP, quien la presidirá;
  - b. Secretaría General de Gobierno;
  - c. Instituto Estatal de Planeación;
  - d. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
  - e. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;
  - f. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;
  - g. Comisión Estatal del Agua;
  - h. Instituto de Vivienda del Estado
  - i. Instituto Registral y Catastral del Estado, y
  - j. Promotora del Estado;

- II. Por un Secretario Técnico que será el Titular de la Procuraduría;

Los cargos de integrantes de la Junta Directiva serán de carácter honorífico por lo que no se percibirá emolumento alguno por su desempeño.

La Junta Directiva sesionará de forma ordinaria cada tres meses y de forma extraordinaria cuando convoque su Presidente por conducto de la Secretaría Técnica.

**ARTÍCULO 46.** La Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones.

- I. Realizar acciones de información, orientación, difusión, e investigación relacionadas con la planeación para el desarrollo urbano, en atención de particulares, organizaciones civiles y servidores públicos, para lograr la correcta aplicación de las normas urbanas vigentes en las acciones urbanísticas, de edificación, así como en la protección y conservación del patrimonio cultural edificado, en representación de los ciudadanos y en beneficio del interés público;
- II. Orientar y asesorar a los ciudadanos a fin de que las acciones urbanas se realicen con apego a las normas jurídicas aplicables y a los instrumentos de planeación urbana, eficiencia, oportunidad y sentido humano;
- III. Representar a los ciudadanos cuando considere que se han incumplido por parte de las autoridades las disposiciones que ordenan y regulan el ordenamiento territorial y el

desarrollo urbano en la entidad, cuando con ellos se cause afectación a éstos o al medio urbano;

- IV. Participar en los procesos de consulta que convoquen las autoridades para elaborar, evaluar y revisar los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano;
- V. Solicitar a las autoridades competentes, de oficio o a petición de parte, que se determinen y apliquen las sanciones administrativas en que incurran los servidores públicos, previstas en la ley de desarrollo urbano y las demás que se señalen en otras normas jurídicas, cuando considere que éstos han incurrido en responsabilidades en dicha materia;
- VI. Recomendar a las autoridades municipales se apliquen de manera inmediata las medidas de seguridad determinadas en la ley de desarrollo urbano, en los casos en que se presuman violaciones a la normatividad urbana vigente;
- VII. Solicitar la intervención de la autoridad municipal o estatal que corresponda a efecto de que inicie procedimiento administrativo de aplicación y ejecución de sanciones, y
- VIII. Las demás que establezca su Reglamento Interior, y demás ordenamientos de la materia.

**ARTÍCULO 47.** El Reglamento Interior la Procuraduría, determinará con base en lo dispuesto en esta Ley, sus atribuciones, organización y funcionamiento, conforme a sus necesidades y presupuesto asignado.

**TÍTULO CUARTO**  
**INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA**  
**Capítulo I**  
**Participación Ciudadana y Social**

**ARTÍCULO 48.** El Estado y los municipios, promoverán la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

**ARTÍCULO 49.** Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán emitir disposiciones reglamentarias que hagan efectiva la participación ciudadana y social y validen su colaboración en los procesos de ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, en al menos las materias siguientes:

- I. La formulación, seguimiento, modificaciones y evaluación del cumplimiento de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en los términos de esta Ley;
- II. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos;
- III. La supervisión y vigilancia en la ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas;
- IV. La promoción de cambios en áreas educativas y demás que por su naturaleza puedan transitar hacia un uso sostenible;
- V. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;
- VI. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas;
- VII. La protección del patrimonio natural y cultural en el Estado;
- VIII. La preservación del ambiente en los centros de población y demás zonas del Estado;

- IX. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los asentamiento humanos, y
- X. La participación en los procesos de los observatorios ciudadanos.

## **Capítulo II**

### **Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas**

**ARTÍCULO 50.** Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de ordenamiento territorial, planeación urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias.

Las autoridades estatales y municipales, tienen la obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de organización social, de conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por su parte, es obligación de las autoridades estatales y municipales difundir y poner a disposición para su consulta pública en medios digitales, remotos y físicos la documentación completa e íntegra relativa a los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano aprobados, validados y registrados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, resguardando en su caso los datos personales protegidos por las leyes correspondientes, así como en aquellos casos en los que se haya pactado cláusula de confidencialidad entre la instancia gubernamental y la empresa respectiva. Igual obligación corresponde cuando dichos programas se encuentren en su fase de consulta.

**ARTÍCULO 51.** Las autoridades de planeación, en colaboración con los organismos de transparencia y acceso a la información, generarán políticas o programas para brindar información en medios físicos y remotos en aquellos polígonos en los que se otorguen autorizaciones, permisos y licencias urbanísticas. Deberán privilegiar la oportunidad de la información y el impacto esperado de dichas autorizaciones, permisos y licencias. La publicación en medios físicos deberá realizarse en ámbitos de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas, mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento.

## **Capítulo III**

### **Desarrollo institucional**

**ARTÍCULO 52.** El Estado y los municipios promoverán programas de capacitación para los servidores públicos en la materia de esta Ley.

Se promoverá: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, como principios del servicio público.

Se promoverá programas permanentes de capacitación en las materias de esta Ley.

Se impulsarán programas y apoyos para la mejora regulatoria en la administración y gestión del desarrollo urbano que propicien la uniformidad en trámites, permisos y autorizaciones en la materia, para disminuir sus costos, tiempos e incrementar la transparencia. Igualmente fomentará la adopción de tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial y los servicios urbanos.

## **Capítulo IV**

### **Observatorios Ciudadanos**

**ARTÍCULO 53.** El sector social y privado podrá crear observatorios urbanos, con la participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socioeconómicos y espaciales, y los nuevos modelos de políticas urbanas, regionales y de gestión pública.

Los observatorios tendrán a su cargo las tareas de analizar y difundir la evolución de los fenómenos socioeconómicos y espaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de información geográfica de sus resultados e impactos.

El Estado y los municipios promoverán y apoyarán la creación y funcionamiento de dichos observatorios.

**ARTÍCULO 54.** Para apoyar el funcionamiento de los observatorios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, deberán:

- I. Proporcionarles la información asequible sobre el proceso de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como de los actos administrativos y autorizaciones que afecten al mismo;
- II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios, diagnósticos y propuestas en la materia, con participación interdisciplinaria, que apoye el desarrollo urbano sostenible;
- III. Mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de políticas urbanas;
- IV. Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar las necesidades de información;
- V. Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas;
- VI. Proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una participación más efectiva en la toma de decisiones sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial;
- VII. Compartir información y conocimientos con todos los interesados en el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, y
- VIII. Garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de los sistemas de información.

El Estado establecerá las regulaciones específicas a que se sujetará la creación y operación de observatorios urbanos y para el ordenamiento territorial con base en esta Ley.

Los observatorios urbanos proporcionarán al Estado y a los municipios la información generada a través de sus estudios y análisis con el objetivo de retroalimentar los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

## **TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS DE FOMENTO**

### **Capítulo Único Fomento al Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 55.** El Estado y los municipios sujetos a su disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para:

- I. La aplicación de los programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana, procurando la participación multidisciplinaria dirigida a lograr la sostenibilidad y resiliencia de los mismos;
- II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para el Desarrollo Urbano sostenible y ordenamiento territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana;
- III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de Centros de Población;
- IV. La canalización de inversiones para constituir Reservas territoriales, así como para la introducción o mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios públicos y Servicios Urbanos;
- V. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, espacios públicos, equipamiento y Servicios Urbanos, generadas por las inversiones y obras;
- VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;
- VII. La simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de acciones e inversiones de Desarrollo Urbano;
- VIII. El fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y municipales para el Desarrollo Urbano;
- IX. La modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria en los Centros de Población;
- X. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia de Desarrollo Urbano;
- XI. El impulso a las tecnologías de información y comunicación, educación, investigación y capacitación en materia de Desarrollo Urbano;
- XII. La aplicación de tecnologías que preserven y restauren el equilibrio ecológico, protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización;
- XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los Servicios Urbanos que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad, así como de los sistemas de Movilidad, que promuevan la inclusión, y
- XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

**ARTÍCULO 56.** Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones en materia financiera, el Estado y los municipios, para estar en posibilidad de ser sujetos de financiamiento para el desarrollo de los proyectos que incidan en el ámbito de competencia de la presente Ley, deberán cumplir con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública del Estado, así como presentar a las instituciones de crédito el instrumento expedido por la autoridad competente, a través del cual se determine que el proyecto cumple con la legislación y los programas en materia de Desarrollo Urbano.

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan, en su caso, con lo dispuesto en esta Ley y en las demás aplicables en la materia. Para el despliegue, instalación, construcción, mantenimiento y modificación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, se coordinarán con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**ARTÍCULO 57.** La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente ordenamiento, así como a los programas de ordenamiento territorial, de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

**ARTÍCULO 58.** Para la realización de acciones, obras e inversiones destinadas al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial con recursos federales o estatales, se dará prioridad a aquellos municipios que hayan cumplido con las recomendaciones y lineamientos en materia de fomento del desarrollo urbano, con las disposiciones de esta Ley y con los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

## **TÍTULO SEXTO INSTRUMENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

### **Capítulo I Generalidades**

**ARTÍCULO 59.** El Gobierno del Estado en los términos de las leyes locales y federales aplicables y sin perjuicio a lo previsto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá hacer uso de los instrumentos de financiamiento que le permitan acceder a recursos financieros y fiscales, provenientes éstos de:

- I. Las contribuciones y aprovechamientos como impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad, contribuciones especiales por mejoras o incremento de plusvalías derivadas de las acciones, obras y servicios públicos, asimismo se desincentiven a predios vacantes y subutilizados que tengan cobertura de infraestructura y servicios. El destino específico de esta fuente de financiamiento, deberá observar las siguientes recomendaciones:
  - a. Utilizarlas para el financiamiento de obras y proyectos pequeños de tipo local.
  - b. Aumentar la construcción de obras dirigidas a la sostenibilidad urbana;
  - c. Realizar las obras en un lapso de tiempo no mayor a un año.
  - d. Recuperar los costos en un plazo no mayor a tres años, y
  - e. Aplicar los principios de equidad y proporcionalidad en la determinación de las obligaciones de pago de los contribuyentes;
- II. La emisión de certificados bursátiles emitidos por el Estado o por los municipios;
- III. Recursos propios;
- IV. Instituciones de financiamiento público y fondos especiales como Fondo Nacional de Infraestructura y el Fondo Metropolitano;
- V. El financiamiento privado, y
- VI. Fideicomisos.

**ARTÍCULO 60.** El Estado en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, podrán aplicar instrumentos de financiamiento que permitan que los costos de la ejecución o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras y acciones de interés público urbano se carguen de manera preferente a los que se benefician directamente de los mismos.

**ARTÍCULO 61.** Los instrumentos de financiamiento a que alude el artículo anterior atenderán a las prioridades que establece la Estrategia Nacional y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables, y podrán dirigirse a:

- I. Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos intermunicipales y de movilidad urbana sustentable;
- II. Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones intermunicipales, el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos o proyectos en las materias de interés para el desarrollo de las zonas metropolitanas o conurbaciones, así como de los proyectos, información, investigación, consultoría, capacitación, divulgación y asistencia técnica necesarios, y

- III. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para lograr zonas metropolitanas o conurbaciones más organizadas y compactas, y para atender las distintas necesidades del desarrollo urbano, y
- IV. Elaborar, actualizar o modificar los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

## **Capítulo II Programas Territoriales Operativos**

**ARTÍCULO 62.** Los Programas Territoriales Operativos serán la guía para la concentración de acciones e inversiones intersectoriales de los tres órdenes de gobierno.

Los Programas serán formulados de acuerdo al procedimiento de elaboración, alcances, instituciones participantes y mecanismos de seguimiento y evaluación; de acuerdo a los criterios que para tal propósito señale la Secretaría;

**ARTÍCULO 63.** Los Programas Territoriales Operativos tienen los siguientes propósitos:

- I. Impulsar en un territorio común determinado, estrategias intersectoriales integradas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano, en situaciones que requieren de acciones prioritarias y/o urgentes;
- II. Plantear secuencias eficaces de acción en el tiempo y de ubicación en el territorio, que incluyan programas y proyectos estratégicos, y un esquema efectivo de financiamiento, y
- III. Dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a estos programas y proyectos.

**ARTÍCULO 64.** Los Programas Territoriales Operativos podrán comprender como ámbito espacial las siguientes posibilidades:

- I. Un municipio,
- II. Varios municipios interrelacionados,
- III. Un sistema urbano rural funcional, o
- IV. La agrupación de varios sistemas urbano rurales.

## **TÍTULO SÉPTIMO PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO**

### **Capítulo I Sistema Estatal de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano**

**ARTÍCULO 65.** La planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial, así como de la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento y desarrollo de los centros de población, constituyen las acciones fundamentales previstas en esta Ley, a fin de lograr un desarrollo urbano integral, sostenible, resiliente y equilibrado en el territorio estatal.

Estas acciones estarán a cargo, en forma concurrente, del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos, conforme a su competencia y jurisdicción, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano sostenibles, en los

órdenes estatal y municipal, forma parte de la planeación del desarrollo integral, como una política prioritaria que coadyuva al logro de los objetivos de los Programas Estatal y Municipales de Desarrollo, con base en lo previsto en la Ley de Planeación del Estado y Municipios.

**ARTÍCULO 66.** La planeación y regulación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano y metropolitano sostenible en la Entidad, se llevará a cabo a través de un Sistema Estatal de Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y Metropolitano, integrado por los siguientes programas:

- I. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II. Los Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas;
- III. Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- IV. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población;
- V. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;
- VI. Las Estrategias de Componentes Urbanos, y
- VII. Los Esquemas de Desarrollo Urbano.

Los instrumentos de planeación a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de la Ley General, esta Ley y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán incorporarse al Sistema de Información Territorial y Urbano.

Los diversos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano establecidos en esta Ley, deberán ajustarse y ser congruentes con las disposiciones que se establezcan dentro de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan Estatal y los Planes municipales de Desarrollo, según corresponda en cada caso. Así como con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.

Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar congruencia entre sí, sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito territorial, y contando con los dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y emitidos por la Secretaría, para su aplicación y cumplimiento.

Los instrumentos de planeación que establece este artículo serán el sustento territorial para definir y orientar la inversión pública e inducir las obras, acciones e inversiones de los sectores privado y social.

La Federación y el Estado podrán convenir mecanismos de planeación de las zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el desarrollo y regulación de los asentamientos humanos, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con esta Ley.

**ARTÍCULO 67.** Los Programas que integran el Sistema Estatal de Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y Metropolitano, serán congruentes en lo conducente, con los programas que expida el gobierno federal, con base en las leyes de Planeación y General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los programas referidos en el artículo 66 de este Ordenamiento, tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas



y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

**ARTÍCULO 68.** Los programas a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, contendrán los elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa; dichos elementos deberán comprender:

- I. **Introducción:** la denominación, antecedentes y ámbito espacial de aplicación, así como los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial;
- II. **Normatividad:** el análisis y congruencia con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con otros programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en el ámbito de aplicación del programa que se elabora;
- III. **Bases jurídicas:** el enunciado del marco general de leyes, reglamentos, normas, programas territoriales de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el programa en formulación, que fundamentan la elaboración del mismo;
- IV. **Diagnóstico-Pronóstico:** en el que se analizarán la situación actual y las tendencias del ordenamiento territorial y desarrollo urbano que comprenda el programa, en sus aspectos territoriales, socioeconómicos, físicos, poblacionales, suelo, infraestructura, equipamiento, servicios, vivienda, ecológicos, riesgos y demás componentes urbanos, así como la enunciación de objetivos y resultados deseados, que deben abordarse simultáneamente; así como la forma en la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos, que resumen la confrontación entre la realidad y lo deseado;
- V. **Estrategia:** en la que se establecerán objetivos, hipótesis de crecimiento poblacional y urbano, lineamientos, políticas, estructura para la ordenación y zonificación del suelo y el planteamiento para la realización de la misma, así como las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario deseado;
- VI. **Líneas de acción y corresponsabilidad sectorial:** determinará las acciones, obras, servicios e inversiones que deban realizarse para la implementación de la estrategia en el corto, mediano y largo plazo, estableciendo los responsables de su ejecución;
- VII. **Instrumentación:** contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas, así como la determinación de metas, que permitan la institucionalización, ejecución, control, y periodos para evaluación de resultados del programa;
- VIII. **Proyectos estratégicos:** contendrán los proyectos que deberán ejecutarse de manera prioritaria;
- IX. **Bases Financiero Programáticas:** en las que se preverán los recursos financieros y presupuestales disponibles o proyectados para alcanzar las metas;
- X. **Acciones de inversión:** en las que se contendrán las prioridades del gasto público y la inversión privada;
- XI. **Anexo cartográfico actualizado:** que expresará en una forma descriptiva y clara el contenido básico del programa y la ubicación espacial de las acciones y obras a ejecutar, así como los términos de georreferenciación que faciliten la integración de información para otras instancias con las que se tenga que complementar la misma y su aplicación en diversas temáticas de planeación y de ordenamiento territorial;
- XII. La **congruencia** con el Atlas Nacional de Riesgos, avalada ésta, cuando el presupuesto asignado así lo permita, por expertos, profesionales e investigadores en materia de planeación, ordenamiento territorial y análisis de riesgos sobre el territorio.

**ARTÍCULO 69.** Para la formulación, actualización y modificación, de los programas a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

- I. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría y los ayuntamientos ordenarán la elaboración, modificación o actualización del Programa respectivo, así como la determinación de los recursos y la forma de llevarlo a cabo; tratándose de los programas municipales la decisión deberá tomarse por el voto de la mayoría de los miembros del Cabildo;
- II. Una vez que se cuente con el proyecto, la autoridad respectiva dará aviso del inicio del proceso de consulta pública de elaboración, modificación o actualización del Programa correspondiente a través de una convocatoria pública, que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en alguno de los de mayor circulación de la entidad o del municipio de que se trate, así como en los estrados del mismo, agregando una versión abreviada del proyecto; igualmente deberá publicar la convocatoria y la versión completa del proyecto en su página oficial en internet;
- III. El proyecto a que se refiere la fracción anterior deberá difundirse ampliamente entre los organismos, instituciones, asociaciones, colegios y cámaras relacionados con la materia, así como entre la ciudadanía en general, apoyándose para tal efecto en los Consejos Estatal o municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, según corresponda; los interesados podrán obtener una copia magnética o impresa, a su costa;
- IV. Se establecerá un plazo de treinta días hábiles y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto al proyecto sometido a consulta; en el caso del Programa Estatal, se solicitará por escrito la opinión del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; asimismo tratándose de programas municipales se solicitará la opinión respectiva a los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que la emitan dentro del mismo término; en caso de que dichos Consejos, no emitan la opinión dentro de plazo referido, se considerará que no tienen inconveniente en que el programa o las modificaciones o actualización sean aprobadas por la autoridad correspondiente;
- V. Concluido el término a que se refiere la fracción anterior, la autoridad estatal o municipal contará con un plazo de veinte días hábiles para emitir las respuestas a los planteamientos improcedentes y las adecuaciones del proyecto, las que deberán fundamentarse debidamente, hecho lo cual se procederá a la aprobación del programa de que se trate; en el caso de los ayuntamientos la aprobación deberá ser por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Cabildo;
- VI. Cumplidas las formalidades antes señaladas, el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento o ayuntamientos correspondientes, procederán a la aprobación del programa respectivo o las modificaciones o actualización del mismo de la siguiente forma:
  - a. En los Programas que corresponda emitir al Estado, será el Gobernador del Estado quien resuelva en definitiva sobre la aprobación de los mismos.
  - b. Tratándose de programas municipales será el Ayuntamiento en sesión de Cabildo quien resuelva en definitiva, previo dictamen de congruencia de la Secretaría. La Secretaría contará con un término máximo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción del expediente respectivo para emitir dicho dictamen.

El dictamen de congruencia que emita la Secretaría contendrá cuando menos:

    1. La denominación del programa;
    2. El listado de los documentos que acompañan la solicitud y que hacen constar la realización del procedimiento descrito en este artículo;
    3. Las referencias de programa en donde se atiende a la congruencia con los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que inciden y condicionan su estrategia;

4. La revisión del contenido de programa, confirmado su congruencia con lo mínimo requerido por esta Ley; y
  5. Expresará claramente si el programa cumple con la congruencia, contenido y procedimiento que establece esta Ley para su formulación; en caso contrario señalará los procedimientos que requieran subsanarse o las modificaciones que se precisen para su legalidad y uniformidad metodológica.
  - c. Tratándose de programas metropolitanos, será la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada, quien resuelva en definitiva, previo dictamen de congruencia de la Secretaría y aprobación de los Cabildos correspondientes.
  - d. Las resoluciones serán definitivas y con carácter de irrevocables;
- VII.** Una vez aprobado el programa de que se trate, deberá publicarse en forma completa en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis" y en forma abreviada en un diario de circulación en el Estado o del municipio correspondiente y, en su caso, en las gacetas municipales, y
- VIII.** Los diversos programas una vez aprobados, así como sus modificaciones o actualización, se inscribirán en la sección correspondiente del Registro Público de la Propiedad del Estado, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado.

**ARTÍCULO 70.** Una vez formulados y después de haber sido sometidos a consulta pública, los proyectos de programas, sus modificaciones o actualización, deberán contener los elementos y características que se prevén en esta Ley, y serán de cumplimiento obligatorio.

Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones, modificaciones o actualización de programas que se realicen sin atender al procedimiento que se dispone en este artículo.

## **Capítulo II**

### **Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 71.** El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el documento rector de esta materia en el Estado, donde se integran el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, disposiciones e instrumentos tendentes a promover el desarrollo integral de los asentamientos humanos de la Entidad.

El Programa Estatal será aprobado cada seis años por el titular del Ejecutivo del Estado dentro de los nueve meses siguientes al inicio de su administración, con la opinión del Consejo Estatal y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación.

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, será ejecutado, controlado, evaluado y modificados por la Secretaría, con las formalidades previstas en esta Ley, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia. En los casos en que se encuentre operando el Instituto Estatal de Planeación, la Secretaría se auxiliará de dicho órgano para tales efectos.

**ARTÍCULO 72.** Los objetivos del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estarán dirigidos a:

- I. Configurar la dimensión geo-espacial del desarrollo del Estado en el largo plazo y, en consecuencia, establecer el marco básico de referencia y congruencia territorial del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y demás programas de la Entidad;
- II. Aplicar un enfoque territorial que sustente la acción articulada, sinérgica y eficaz de los diferentes sectores de la Administración Pública Estatal;

- III. Estructurar la relación entre los centros de población con base en las regiones y de los servicios que se requieran, estableciendo la función de los centros de población y la política aplicable para obtener el grado óptimo de autosuficiencia regional;
- IV. Lograr el equilibrio poblacional de la Entidad, conforme a la capacidad de cada una de las regiones que la integran, considerando su extensión territorial, recursos naturales, industria y servicios, a fin de lograr su desarrollo sustentable;
- V. Consolidar los enlaces y corredores principales que se requiere para articular las regiones del estado entre sí y con otros estados;
- VI. Mejorar la infraestructura y definir los requerimientos de equipamiento de nivel regional, estatal e intermedio;
- VII. Promover la sustentabilidad a través de un desarrollo ordenado, compacto y que reduzca la presión de la ocupación de tierras agrícolas, de áreas con valor ambiental y de reservas naturales, propiciando un uso racional del agua y de la energía, y contribuyendo a respetar la capacidad de los ecosistemas locales y globales de auto regenerarse, en concordancia con la legislación ambiental aplicable, considerando los planes o programas de ordenamiento ecológico expedidos por el Estado;
- VIII. Alentar la permanencia de la población en los centros de población de dimensiones medias y en el medio rural a fin de consolidar su desarrollo sustentable;
- IX. Mejorar las condiciones ambientales de los centros de población; y
- X. Distribuir equitativamente en la Entidad los beneficios y cargas que genera el proceso de urbanización, a fin de promover un desarrollo integral.

**ARTÍCULO 73.** El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se sujetará a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y a las previsiones del Plan Estatal de Desarrollo, y contendrá además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. El diagnóstico de la situación del Ordenamiento Territorial y los Asentamientos Humanos en el Estado, que incluya, entre otros elementos:
  - a. La vinculación económica, social y urbana del Estado con las Entidades vecinas y su participación en el contexto nacional y su sistema urbano.
  - b. El medio físico natural y sus recursos, la clasificación del suelo según sus usos, e identificación de la unidades territoriales estratégicas.
  - c. La identificación de los principales problemas de contaminación ambiental, y de riesgos naturales y antropogénicos, sus causas, perspectivas y posibles soluciones.
  - d. La localización y características, así como el estado de conservación y deterioro y el equipamiento de las áreas naturales en general, de conformidad a lo establecido en los programas de ordenamiento ecológico.
  - e. La clasificación de la aptitud del suelo en el territorio del estado.
  - f. Las características de la población y su distribución territorial, así como su dinámica de crecimiento.
  - g. Las características de las actividades económicas y su distribución en el territorio, y su participación en la economía nacional.
  - h. La ubicación de los centros de población urbanos y rurales, su relación con las actividades productivas y económicas, su nivel de servicios y su relación con otros centros de población.
  - i. La infraestructura, equipamiento y servicios públicos estatales y regionales, así como el balance de sus características y capacidades globales en relación a la población y las necesidades por atender, y
  - j. La administración estatal del desarrollo urbano, sus procedimientos y normatividad, recursos, instrumentos de gestión y de participación social;
- II. La regionalización del Estado, mediante la suma y articulación de sistemas urbano rurales;
- III. La caracterización de las principales ciudades y zonas metropolitanas, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y culturales, su localización en el entorno regional y estatal,

- sus capacidades de absorción de población y actividades, y su crecimiento con relación a las condiciones ambientales, en particular de acceso al agua y aptitud del suelo;
- IV.** La evaluación del Programa Estatal de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano vigente, identificando los logros alcanzados;
  - V.** Los lineamientos, políticas y acciones que incidan en el estado y que establezcan la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas relacionados con la materia que derivan de él, así como con el Programa Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico;
  - VI.** La prospectiva de crecimiento poblacional y la identificación de requerimientos de suelo, vivienda, equipamiento e infraestructura en el escenario de planeación;
  - VII.** Las definiciones territoriales para la dotación de la infraestructura, equipamientos e instalaciones fundamentales para el desarrollo de las regiones y el estado, y las prioridades de localización y ejecución en el tiempo;
  - VIII.** La estrategia general del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio a nivel estatal, que deberá incluir, cuando menos:
    - a.** Objetivos.
    - b.** Directrices y políticas.
    - c.** El ordenamiento de los asentamientos humanos, que comprende el patrón de distribución general de la población, de las actividades económicas y de los servicios en el territorio estatal; las áreas geográficas y sectores prioritarios; y el Sistema Estatal de Centros de Población, en donde se establezca la función y nivel de servicio de cada componente, la identificación de los centros de población estratégicos y de las zonas conurbadas y metropolitanas, así como, en su caso, la necesidad de fundación de un nuevo centro de población.
    - d.** La zonificación general del territorio estatal para efectos de la aplicación de políticas y programas urbanos.
    - e.** Modelo de ocupación territorial.
    - f.** La infraestructura necesaria para el logro de la estrategia.
    - g.** La orientación general para la definición y constitución de reservas territoriales y de áreas de preservación ecológica.
    - h.** La estrategia en materia de riesgos que conduzca hacia un desarrollo urbano sostenible y resiliente, en congruencia con el Atlas Nacional y el Estatal de Riesgos, y
    - i.** Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y para fomentar la gestión integral del riesgo y la resiliencia urbana en el marco de derechos humanos;
  - IX.** Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del Estado, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, indicando la preservación, protección, restauración y aprovechamiento de áreas de valor ambiental o para el desarrollo de actividades no urbanas, como agropecuarias, forestales y mineras, entre otras, en concordancia con la legislación ambiental;
  - X.** La definición de las zonas metropolitanas para el desarrollo territorial estatal, con base en los cuales, el Estado y los municipios respectivos, procederán a su delimitación, gestión y administración de manera conjunta y coordinada;
  - XI.** Las líneas de acción y corresponsabilidad sectorial, describiendo las acciones, obras y servicios que derivan de la estrategia, el plazo, cantidad, responsable, y la concertación entre los sectores público, privado y social para su ejecución. Además se distinguirán aquellas acciones y proyectos que por su importancia se consideren estratégicos;
  - XII.** La instrumentación jurídica, administrativa, de participación social, y financiera del programa que se elabora, así como el procedimiento de evaluación del programa que incluya la definición de indicadores y metas en el corto, mediano y largo plazo; así

como las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales del estado, así como en las comunidades indígenas;

- XIII.** Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
- XIV.** La indicación de los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano para la ejecución y cumplimiento del programa;
- XV.** Los criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en materia de resiliencia que deberán observar los tres órdenes de gobierno en la elaboración de sus programas en las materias de esta Ley, y
- XVI.** Esquemas y mecanismos que fomenten la equidad, inclusión y accesibilidad universal en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos.

**ARTÍCULO 74.** La Secretaría promoverá la participación social en la elaboración, actualización y ejecución del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación y con la intervención de los órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural previstos en esta Ley.

La Secretaría, anualmente, presentará al Consejo Estatal un informe de ejecución y seguimiento del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

**ARTÍCULO 75.** Los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica, así como los planes o programas de ordenamiento ecológico expedidos por el Estado.

**ARTÍCULO 76.** Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en el ámbito de su competencia y en su caso los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los programas en materia de Desarrollo Urbano.

**ARTÍCULO 77.** Los Programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las Normas Oficiales Mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los atlas de riesgos para la definición de los Usos del Suelo, Destinos y Reservas.

**ARTÍCULO 78.** Las autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría y los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Protección Civil del Estado, especialmente en aquellas que impliquen impacto ambiental o impacto urbano significativo en términos de esta Ley, y demás legislación aplicable.

### **Capítulo III**

#### **Gobernanza Metropolitana, Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas**

**ARTÍCULO 79.** Para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional con los demás órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones se efectuará a través de las instancias siguientes:

- I. Una Comisión Metropolitana y de Conurbación, según se trate, que se integrará por el Estado y los municipios de la zona de que se trate, quienes participarán en el ámbito de su competencia para cumplir con los objetivos y principios a que se refiere esta Ley. Tendrán como atribuciones coordinar la formulación y aprobación de los programas metropolitanos, así como su gestión, evaluación y cumplimiento. A la denominación de las comisiones metropolitanas y de conurbación se agregará el nombre particular de la zona metropolitana correspondiente;
- II. Un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y Zona Conurbada, que promoverá los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas y que se integrará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de esta Ley.
- III. Los mecanismos de carácter técnico a cargo del Estado y municipios, bajo la figura de institutos metropolitanos de planeación, que sesionarán permanentemente. Los instrumentos jurídicos, para su integración y funcionamiento, y su reglamento interior, estarán sujetos a lo señalado por la Ley General y por esta Ley;
- IV. Las instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes;
- V. Los mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas contemplando, entre otros, el fondo metropolitano, y
- VI. Los mecanismos para aumentar la participación social.

**ARTÍCULO 80.** La Comisión Metropolitana y de Conurbación, y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, funcionarán como mecanismos de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado. Se constituirán mediante convenio celebrado entre los municipios respectivos en términos de este ordenamiento. Los instrumentos jurídicos, para su integración y funcionamiento, y su reglamento interior, estarán sujetos a lo señalado por esta Ley y demás normatividad aplicable.

La Comisión Metropolitana y de Conurbación podrá convenir la creación de subcomisiones de trabajo integrados por igual número de representantes de los tres órdenes de gobierno, a efecto de coordinar las acciones, obras e inversiones que se requieran para los efectos del programa de metropolitano y de zona conurbada.

**ARTÍCULO 81.** Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación, y los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano, se integrarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de esta Ley, y tendrán las atribuciones que se señalan en los artículos 29 y 31, respectivamente.

Las Comisiones y los Consejos sesionarán válidamente con la mayoría de sus miembros, y por lo menos una vez cada tres meses de manera ordinaria, de acuerdo al calendario que para tal efecto se determine, y de forma extraordinaria tantas veces como sea necesario, a propuesta de su Presidente.

Las convocatorias se llevarán a cabo por conducto del Presidente del órgano respectivo con al menos, tres días hábiles de anticipación, y deberán acompañarse del orden del día. Todas sus decisiones serán públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación electrónica.

**ARTÍCULO 82.** Las zonas metropolitanas con relaciones funcionales económicas y sociales, y con problemas territoriales y ambientales comunes, se coordinarán en las materias de interés metropolitano con la Secretaría, y con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública estatal.

**ARTÍCULO 83.** Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios formen una continuidad física y demográfica, el Estado y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos

centros urbanos con apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituirán una zona metropolitana y conurbada, para lo cual deberán considerar los siguientes elementos:

- I. Que exista continuidad física de un centro de población de cuando menos cincuenta mil habitantes con base en el último censo o conteo oficial de población, que por crecimiento urbano comprenda total o parcialmente el territorio de los municipios solicitantes, sobre el cual se hará la declaración de área metropolitana;
- II. Que existan relaciones socioeconómicas entre los municipios que constituirán un área metropolitana;
- III. Que cuando menos el diez por ciento de la población total de los municipios participantes del área metropolitana, habiten en dicha área, y
- IV. Que exista disposición de prestar manera coordinada los servicios y demás materias de interés que refiere el artículo 55 de esta Ley.

El Estado y los municipios deberán convenir la delimitación y constitución de una zona metropolitana y conurbada cuando sea procedente el estudio y planeación conjunta de dos o más centros de población, situados en el territorio de municipios vecinos; para tal efecto, podrán considerar la evaluación de expertos, investigadores y académicos, sobre la problemática y áreas de oportunidad presentadas en el tema.

**ARTÍCULO 84.** Para las zonas metropolitanas y conurbaciones se constituirá una Comisión Metropolitana y de Conurbación, que tendrá carácter permanente y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

Dicha comisión formulará y aprobará el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada intermunicipal, y gestionará y evaluará su cumplimiento.

**ARTÍCULO 85.** Son de interés metropolitano:

- I. La planeación del ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos de la zona conurbada;
- II. La planeación del desarrollo metropolitano de la zona metropolitana;
- III. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la movilidad;
- IV. El suelo y las reservas territoriales;
- V. La densificación, consolidación urbana y uso eficiente del territorio, con espacios públicos seguros y de calidad, como eje articulador;
- VI. Las políticas habitacionales y las relativas al equipamiento regional y metropolitano;
- VII. La localización de espacios para desarrollo industrial de carácter metropolitano;
- VIII. La localización de espacios para generar infraestructura social que contribuya a la disminución de la pobreza urbana;
- IX. La localización de espacios para el desarrollo ambiental, tales como áreas naturales protegidas o áreas de protección para la recarga del agua;
- X. La regularización de la tenencia de la tierra urbana;
- XI. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, incluyendo el agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de aguas pluviales;



- XII.** La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protección de la atmósfera;
- XIII.** La gestión integral de residuos sólidos municipales, especialmente los industriales y peligrosos;
- XIV.** La prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático;
- XV.** La infraestructura y equipamientos de carácter estratégico y de seguridad;
- XVI.** La accesibilidad universal y la movilidad, incluyendo mecanismos de progresividad en estas materias;
- XVII.** La planeación urbana sostenible y la implementación de mecanismos de recuperación y remediación de espacios públicos, encaminados a prevenir, disminuir y combatir los problemas de seguridad pública, y
- XVIII.** Otras acciones que, a propuesta de la Comisión Metropolitana y de Conurbación, se establezcan o declaren por las autoridades competentes.

**ARTÍCULO 86.** Para efectos del artículo anterior, la Secretaría emitirá los lineamientos a través de los cuales se establecerán los métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con políticas, directrices y acciones de interés metropolitano, cumplan con su objetivo de cobertura y guarden congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación.

**ARTÍCULO 87.** Los Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas además del contenido básico señalado en el artículo 68, deberán tener:

- I.** Congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial y con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
- II.** La descripción geográfica de los límites de la zona metropolitana que comprenderá el conjunto del área urbanizada y urbanizable de los centros de población que han formado una continuidad física, y la delimitación de la zona conurbada que comprenderá el territorio completo de los municipios que la formen;
- III.** Un diagnóstico integral actualizado que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo;
- IV.** La identificación de estrategias y proyectos para el desarrollo integral metropolitano y de la zona conurbada, que articulen los distintos ordenamientos, programas de desarrollo social, económico, urbano, turístico, ambiental y de cambio climático que impactan en su territorio;
- V.** Señalamiento de objetivos, directrices, políticas y estrategias que comprendan los siguientes aspectos:
  - a.** La conformación del sistema de centros de población de la zona conurbada, estableciendo la delimitación de los centros de población estratégicos y su zonificación primaria, en congruencia con la estrategia del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
  - b.** El impulso, consolidación o control del crecimiento de los centros de población.
  - c.** La definición de la zonificación general del territorio de la zona conurbada y el establecimiento de las respectivas normas de uso de suelo y aprovechamiento de los recursos.
  - d.** La ampliación y mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de cobertura metropolitana y de zona conurbada, así como las vías de comunicación y de transporte de enlace interurbano y rural.
  - e.** Las previsiones de movilidad, incluyendo los medios de transporte público masivo, los sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental.
  - f.** La determinación de los centros de población en los que proceda la formulación de esquemas de desarrollo urbano.
  - g.** Las previsiones para mejorar las condiciones ambientales y el manejo integral de agua.

- h. La conservación, protección, mejoramiento y acrecentamiento del espacio público y del medio ambiente.
  - i. La cohesión social y el fomento a la participación comunitaria mediante la creación de infraestructura social;
  - j. La conservación y mejoramiento de la imagen urbana y del patrimonio natural y cultural, y
  - k. La seguridad, prevención del riesgo y resiliencia;
- VI.** La determinación de las líneas de acción y la corresponsabilidad sectorial, que se enuncien las acciones, obras y servicios que derivan de la estrategia, el plazo, cantidad, los responsables, y la concertación entre los sectores público, privado y social para su ejecución. Además se distinguirán aquellas acciones y proyectos que por su importancia se consideren estratégicos;
- VII.** La instrumentación jurídica, administrativa, de participación social, y financiera del programa que se elabora, así como el procedimiento de evaluación del programa que incluya la definición de indicadores y metas en el corto, mediano y largo plazo; así como las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales de la zona conurbada; se incluirá los procedimientos de coordinación entre los municipios y el Estado para la ejecución de las estrategias.

Adicionalmente, los municipios, podrán formular y aprobar programas parciales de las áreas urbanas y urbanizables, previamente señalados en la estrategia del correspondiente programa metropolitano y de zona conurbada, acorde al contenido señalado en los artículos 68, 69 y 70 de esta Ley, cuando el tema y territorio de aplicación sean prioritarios para el interés metropolitano.

**ARTÍCULO 88.** Una vez aprobados los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, los municipios tendrán el plazo de un año para expedir o adecuar sus programas de desarrollo urbano y los correspondientes a los Centros de Población involucrados, los cuales deberán tener la debida congruencia, coordinación y ajuste con el programa de la zona metropolitana y conurbación correspondiente.

#### **Capítulo IV**

### **Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 89.** Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades municipales, con las formalidades previstas en esta Ley, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los programas referidos en este artículo tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

**ARTÍCULO 90.** Los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas necesarias para el impulso, control, consolidación y arraigo de los Centros de Población, asimismo establecerán la zonificación correspondiente.

Igualmente deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus principales proyectos, tales como constitución de reservas territoriales, creación de infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, entre otros.

En caso de que el ayuntamiento expida el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.

**ARTÍCULO 91.** Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contendrán los elementos básicos a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, y además, lo siguiente:

- I. Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia nacional y estatal de ordenamiento territorial, y con el programa nacional, estatal y municipal de desarrollo;
- II. El análisis y congruencia territorial con los programas nacional y estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial estatal;
- III. El marco general de leyes, reglamentos y normas y los programas territoriales de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el programa en formulación;
- IV. La descripción y análisis actualizado del estado y tendencias de:
  - a. La vinculación económica, social ecológica y urbana del municipio con el resto de los municipios de la micro región a la que pertenece, y su participación en el contexto Estatal y el sistema urbano;
  - b. El medio físico, recursos naturales, las áreas naturales de valor ambiental y usos de suelo del territorio municipal;
  - c. La definición de la aptitud del suelo;
  - d. La identificación de asentamientos humanos irregulares, determinando su ubicación, límites, y número de personas asentadas en los mismos, especificando si se trata de zonas de riesgo;
  - e. Las características de la población y las actividades económicas, y su distribución en el territorio;
  - f. La ubicación de los centros de población, la relación entre ellos, su función y nivel de servicio; y
  - g. La infraestructura, vialidad, equipamiento, servicios y vivienda existente y sus necesidades.
  - h. La administración municipal del desarrollo urbano, sus procedimientos y normatividad, instrumentos de gestión y de participación social.
- V. Señalamiento de objetivos, políticas y estrategias para su implementación, su evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario deseado, que comprendan:
  - a. Conformación del Sistema Municipal de Centros de Población, según el crecimiento demográfico esperado, asignando los niveles de servicio correspondientes.
  - b. Ampliar y mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de cobertura municipal, y vías de comunicación de enlace interurbano y rural, y
  - c. Impulsar, consolidar o controlar el crecimiento de los centros de población;
- VI. La zonificación general del territorio municipal para la aplicación de políticas urbanas y ecológicas, así como el establecimiento de las respectivas normas de uso de suelo y aprovechamiento de los recursos;
- VII. Establecer los centros de población en los que proceda la formulación de esquemas de desarrollo urbano que por sus características propias no requieran de la formulación de un programa;
- VIII. La programación de acciones, obras, servicios y proyectos estratégicos;
- IX. Las bases técnicas necesarias para la elaboración y ejecución de los programas operativos, que se vayan a realizar en el territorio del municipio;
- X. Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y la determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados, y
- XI. La congruencia con el atlas nacional y estatal de riesgos.

**ARTÍCULO 92.** El ayuntamiento, una vez que apruebe el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado, deberá consultar a la Secretaría sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal.

La Secretaría tendrá un plazo de treinta días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud y señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta operará la negativa ficta.

**ARTÍCULO 93.** En caso de que el dictamen a que se refiere el artículo anterior no sea favorable, el mismo deberá justificar de manera clara y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento efectúe las modificaciones correspondientes, debiendo presentarlo nuevamente a la Secretaría, en los mismos términos del numeral anterior.

El Instituto Registral y Catastral se abstendrá de registrar cualquier programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano o de centro de población que no cuente con el referido dictamen favorable de congruencia expedido por la Secretaría.

## **Capítulo V**

### **Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población**

**ARTÍCULO 94.** Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones y normas para ordenar, planear y regular la zonificación, las reservas, usos y destinos del territorio de los centros de población y, regular el funcionamiento y organización de sus áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento, así como establecer las bases para la ejecución de acciones, obras y servicios.

**ARTÍCULO 95.** Los programas de desarrollo urbano de centros de población contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. El análisis de los problemas urbanos actuales y previstos, así como de las condiciones para su atención, sobre la base de:
  - a. El medio físico y los recursos naturales del territorio;
  - b. Los usos de suelo y la tenencia de la tierra, considerando el valor ambiental;
  - c. La infraestructura, vivienda, vialidad, transporte, equipamiento y servicios urbanos;
  - d. La vulnerabilidad y riesgo a la que estén sujetas las diferentes zonas y sectores del centro de población;
- e. La identificación de asentamientos humanos irregulares, determinando su ubicación, límites, y número de personas asentadas en los mismos, especificando si se trata de zonas de riesgo;
- f. Características formales y de construcción de los elementos que conforman la imagen urbana, así como su valor histórico, artístico, cultural y ambiental;
- g. La composición y distribución de la población, dinámica de crecimiento y relación con las actividades económicas;
- h. Las tendencias y patrones de crecimiento de las áreas urbanas;
- i. La localización, características y estado de conservación de las áreas naturales en general, así como la identificación de los principales problemas ambientales; y
- j. La organización y procedimientos municipales para la administración del desarrollo urbano.
- II. Lineamientos y políticas que el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, establezcan para el centro de población;
- III. La construcción de escenarios de crecimiento poblacional que fundamenten el cálculo de los requerimientos urbanos de suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento urbano;
- IV. Señalamiento de los objetivos, estrategias y políticas para:
  - a. La creación de las reservas de suelo para la expansión del centro de población y la vivienda;
  - b. La zonificación primaria, identificando el área urbana actual y estableciendo la distribución de las áreas urbanizables y no urbanizables del centro de población, y fijando el límite del crecimiento urbano;

- c. La zonificación secundaria; estableciendo las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se clasificará en áreas y zonas, de acuerdo con sus características naturales, potencialidades y condiciones generales. Se describirán las zonas señalando su aprovechamiento, limitaciones, distribución y características generales;
  - d. El ordenamiento de la estructura urbana;
  - e. La determinación de las áreas sujetas a políticas de conservación, mejoramiento y crecimiento, y en su caso el requerimiento de la formulación de programas parciales;
  - f. La estrategia para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra en conjunto con los organismos regularizadores;
  - g. El mejoramiento y ampliación de la vialidad, el sistema de transporte, la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos;
  - h. La conservación y mejoramiento de la imagen urbana y sus rasgos típicos;
  - i. El fomento a la economía urbana;
  - j. La prevención y mitigación de riesgos, y
  - k. La protección y conservación del patrimonio natural e histórico.
- V.** Las normas para el control y regulación de:
- a. Las densidades de población y vivienda, de construcción y de ocupación del suelo, considerando la necesidad de espacios para la infiltración del agua.
  - b. La compatibilidad de los usos de suelo en las zonas que conforman la zonificación secundaria, indicando los usos permitidos, prohibidos y condicionados.
  - c. La dotación de equipamiento urbano e infraestructura.
  - d. Los derechos de los sistemas de infraestructura y de vialidad.
  - e. Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a su diseño, operación y modificación, en congruencia con la traza urbana.
  - f. La dotación de cajones de estacionamiento por usos de suelo.
  - g. La imagen urbana.
  - h. La protección y conservación del medio natural, así como para la reducción de la contaminación del agua, del suelo, del aire y del ruido, y
  - i. La ocupación de zonas de riesgo;
- VI.** Las líneas de acción, obras y servicios, estableciendo su cuantificación, ubicación, etapa y responsable de su ejecución, se distinguirán las acciones que por su importancia para la estrategia general, se consideren como prioritarias. Las líneas de acción serán cuando menos las siguientes:
- a. Planeación urbana.
  - b. Suelo y reservas territoriales.
  - c. Infraestructura.
  - d. Vivienda.
  - e. Vialidad y transporte.
  - f. Equipamiento urbano.
  - g. Medio ambiente, y
  - h. Riesgos y vulnerabilidad, y
- VII.** La instrumentación, que establezca entre otros:
- a. La estrategia para mejorar la organización y procedimientos municipales de administración urbana.
  - b. Los procedimientos de participación ciudadana para el seguimiento del Programa de Desarrollo Urbano.
  - c. Las bases para los acuerdos de coordinación entre las autoridades, y con los sectores social y privado, para realizar las acciones emanadas del programa.
  - d. El sistema de evaluación del mismo programa de desarrollo urbano, señalando indicadores urbanos, sociales y ambientales, sus metas y plazos, y
  - e. Fuentes de financiamiento para la ejecución de acciones, obras y servicios emanados del Programa de Desarrollo Urbano.

## **Capítulo VI**

### **Programas Parciales de Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 96.** Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano se elaborarán para los siguientes objetivos:

- I. La conservación de zonas históricas;
- II. El mejoramiento y/o conservación de zonas urbanas existentes, y
- III. El crecimiento de zonas urbanizables de un centro de población.

**ARTÍCULO 97.** Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano aplicables en centros históricos y zonas de patrimonio histórico, tienen como objetivo la restauración, conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio histórico, contendrán además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. La normatividad aplicable en materia de patrimonio histórico para el sitio o zona;
- II. La referencia al carácter histórico y artístico que se otorga a la zona de su aplicación;
- III. La identificación de los sitios, fincas, monumentos y en general, los elementos que se declaren afectos al patrimonio cultural del Estado, precisando el régimen jurídico de propiedad que les corresponda;
- IV. Las normas y criterios técnicos aplicables a la acción de conservación y/o mejoramiento, conforme la legislación federal y estatal aplicable;
- V. Las bases de los acuerdos que se propongan para garantizar la acción coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a garantizar su conservación y mejoramiento, y
- VI. Las bases de los acuerdos de concertación con los propietarios de predios y fincas, para realizar las acciones de conservación y mejoramiento de las edificaciones.

**ARTÍCULO 98.** Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano aplicables al mejoramiento y/o conservación de zonas urbanas existentes establecerán la estrategia para mejorar las condiciones de vida de las áreas urbanas de un centro de población, así como de su integración física y funcional con el resto de los sectores; contendrán además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. Identificación de las necesidades de la comunidad y de sus carencias de infraestructura, servicios y equipamiento urbano;
- II. La descripción de los espacios públicos de convivencia comunitaria, e infraestructura social;
- III. La estructura urbana, señalando los huecos urbanos y espacios baldíos;
- IV. La descripción de la organización social identificada en la zona de estudio;
- V. La propuesta de zonas que puedan dedicarse al espacio verde;
- VI. Las políticas, objetivos y estrategias para mejorar las condiciones de vida y articular la zona con el resto del centro de población, y
- VII. El esquema de solución de acciones prioritarias.

**ARTÍCULO 99.** Los Programas Parciales aplicables a zonas urbanizables de un centro de población, contendrán además de lo señalado en el artículo 68 de este Ordenamiento, lo siguiente:

- I. El análisis detallado de la aptitud del suelo para asentamientos humanos e infraestructura, identificando las zonas que no son aptas por su alto valor ambiental, o por estar afectadas por riesgos de origen natural y urbano;
- II. Estudio de mecánica de suelo;
- III. Estudio para identificar los requerimientos de vialidad generados por el desarrollo de la zona, así como las acciones necesarias para su integración con el resto del área urbana;
- IV. Estudio hidrológico de la zona;

- V. La definición de acciones para la mitigación de riesgos;
- VI. Las políticas, objetivos y estrategias para la integración con el área urbana actual y para la protección del entorno natural;
- VII. La definición de las normas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para la ordenación de los asentamientos humanos;
- VIII. Identificar el equipamiento urbano requerido y su distribución en la zona, y
- IX. La identificación de proyectos detonadores del desarrollo de acuerdo al potencial de la zona.

## **Capítulo VII**

### **Estrategias de Componentes Urbanos**

**ARTÍCULO 100.** Las estrategias de componentes urbanos, son el conjunto de acciones dirigidas a regular de forma específica los elementos, constitutivos de la estructura urbana, éstos podrán comprender la totalidad del territorio o una parte de éste de acuerdo al Programa de Ordenamiento territorial y desarrollo urbano del cual deriva.

Su objetivo es precisar la estrategia de un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en cualquiera de las materias que lo integran, enfocándose en la instrumentación y gestión de sus proyectos y acciones, y en ningún caso los modificará.

Su formulación atenderá el procedimiento señalado en el artículo 69 de esta Ley, y deberá estar indicado en las líneas de acción del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del cual deriva. Una vez concluido el proceso, se considerará como integrante de su estrategia.

**ARTÍCULO 101.** Las estrategias de componentes urbanos podrán versar sobre las siguientes materias:

- I. Reservas territoriales;
- II. Regularización de la tenencia de la tierra;
- III. Patrimonio histórico y cultural;
- IV. Turismo;
- V. Vialidad y estacionamientos;
- VI. Movilidad y Transporte;
- VII. Equipamiento;
- VIII. Infraestructura;
- IX. Servicios;
- X. Medio ambiente;
- XI. Recolección y tratamiento de la basura doméstica e industrial;
- XII. La captación y utilización sustentable del agua;
- XIII. El drenaje y tratamiento de aguas residuales;
- XIV. La prevención de riesgos por diversos agentes como inundaciones, vientos, cruces de líneas de alta tensión, ductos de hidrocarburos, derechos federales de carreteras, vías férreas, fallas geológicas y otras análogas, y
- XV. Los que fueren necesarios.

**ARTÍCULO 102.** Las estrategias de componentes urbanos contendrán, además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. La mención del programa de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio del cual deriven;
- II. La determinación de la materia de que tratará y la identificación de la congruencia con la estrategia del programa del cual deriva;
- III. El área o sector en que tendrá aplicación la estrategia del componente urbano;
- IV. La precisión de las acciones, obras y proyectos que integran la estrategia del componente urbano, expresada en documento, planos, matrices y gráficas;

- V. La indicación de las autoridades responsables de la elaboración, ejecución, control y evaluación de la estrategia del componente urbano;
- VI. Las etapas de realización y la estimación de los recursos necesarios;
- VII. La participación que corresponda a la comunidad en su ejecución;
- VIII. Las bases para los acuerdos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para la realización de las acciones y obras, y
- IX. Los demás requisitos que establezca esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las estrategias de componentes urbanos en materia de servicios, equipamiento e infraestructura en centros de población, en ningún caso podrán plantear objetivos o establecer acciones e inversiones fuera de las áreas urbanas o urbanizables de dichos centros, señalados en la zonificación primaria y secundaria que de los centros de población establezcan los programas correspondientes.

Las estrategias de componentes urbanos serán elaboradas, aprobadas, ejecutadas, controladas y evaluadas por el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento respectivo, dependiendo del programa del cual deriven, en coordinación con los correspondientes consejos consultivos estatal o municipal.

## **Capítulo VIII**

### **Esquemas de Desarrollo Urbano**

**ARTICULO 103.** Los Esquemas de Desarrollo Urbano para centros de población tienen como finalidad ordenar y orientar el crecimiento urbano de los asentamientos humanos con una población menor a diez mil habitantes y que este señalado en el correspondiente Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

**ARTICULO 104.** Los Esquemas de Desarrollo Urbano darán continuidad a las políticas y lineamientos establecidos para el centro de población en el respectivo programa municipal de desarrollo urbano. Así mismo alentarán la permanencia de la población en su medio mejorando las condiciones de su hábitat, y relacionarán armónicamente el campo y la ciudad, previendo las necesidades del crecimiento urbano y protegiendo los recursos naturales.

**ARTICULO 105.** Los esquemas de desarrollo urbano contendrán, además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, lo siguiente:

- I. La ubicación en el contexto municipal, y la definición del área de aplicación del esquema;
- II. El diagnóstico de la situación actual y tendencias de los aspectos naturales, socioeconómicos y urbanos, respecto de:
  - a. La identificación de los elementos de valor ambiental.
  - b. La aptitud del suelo.
  - c. Los asentamientos humanos irregulares.
  - d. La problemática ambiental.
  - e. Los riesgos y la vulnerabilidad.
  - f. La dinámica de crecimiento poblacional.
  - g. La caracterización de las principales actividades económicas.
  - h. Los patrones de lotificación y ocupación del suelo.
  - i. La estructura urbana.
  - j. El déficit de equipamiento y vivienda.
  - k. La tenencia de la tierra, y
  - l. En su caso la identificación de elementos relevantes del patrimonio histórico, natural y cultural.
- III. La identificación de la problemática y potencialidades;
- IV. La congruencia con los programas de desarrollo urbano que inciden en el centro de población;



- V. La hipótesis de crecimiento poblacional y los requerimientos urbanos en el escenario de planeación;
- VI. Los objetivos y estrategia para:
  - a. La zonificación primaria.
  - b. La zonificación secundaria.
  - c. La estructura urbana.
  - d. Llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, en forma conjunta con los organismos regularizadores;
  - e. La ampliación y mejoramiento en la dotación de equipamiento urbano, infraestructura, vialidad y servicios urbanos, y
  - f. Las previsiones necesarias para mitigar y evitar riesgos;
- VII. Las normas para el control y regulación de las densidades de población y vivienda, de construcción, de ocupación del suelo, y de compatibilidad de usos de suelo;
- VIII. La programación de acciones, obras y servicios estratégicas, indicando la ubicación, cuantificación, etapa de ejecución, y responsable. Se señalarán las acciones que se consideren prioritarias, y
- IX. La indicación de los instrumentos básicos para la ejecución de las acciones, obras y servicio emanados del esquema, entre ellos los jurídicos, administrativos y de evaluación del esquema.

## **TÍTULO OCTAVO REGULACIONES DE LA PROPIEDAD**

### **Capítulo I Generalidades**

**ARTÍCULO 106.** Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a la zonificación general, primaria y secundaria según el nivel de planeación que corresponda, donde se establecerán las provisiones, reservas, modalidades, usos y destinos de áreas y predios que determinen, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, las autoridades competentes, en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 107.** Las áreas y predios de los centros de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 108.** Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, las que se encuentren en explotación minera o que sean aptas para estos tipos de explotación, así como las destinadas a la preservación ecológica o con valor para las funciones ambientales, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines.

**ARTÍCULO 109.** Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de desarrollo urbano de centros de población y los demás que de éstos deriven, señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población situados en sus respectivas jurisdicciones territoriales y establecerán la zonificación correspondiente, en congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los programas de zonas conurbadas en su caso.

**ARTÍCULO 110.** Los propietarios y poseedores de inmuebles incluidos en los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y en los Programas Parciales que de ellos deriven,

deberán cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para este efecto, podrán celebrar convenios entre sí, con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, con dependencias y entidades de la administración pública federal o con terceros.

**ARTÍCULO 111.** El Gobierno del Estado por sí o a solicitud de los ayuntamientos, podrá proceder a la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, en los términos de la legislación aplicable, cuando resulte necesario para efectos del ordenamiento de centros de población, en virtud de que los propietarios o poseedores no lleguen a una concertación con las autoridades o no cumplan con las obligaciones que adquieren en los convenios a que se refiere el artículo anterior.

Cuando por la magnitud del importe total de las indemnizaciones procedentes de las expropiaciones no puedan ser inmediatas, serán cubiertas por el Gobierno del Estado o los ayuntamientos, en la medida y plazos en que se capten los recursos provenientes del proceso de fundación, conservación, mejoramiento o crecimiento de los centros de población.

## **Capítulo II Fundación**

**ARTÍCULO 112.** La fundación de un centro de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas y el patrón de asentamiento humano y las comunidades indígenas; asimismo, se debe planear su desarrollo urbano, determinando sus características, previendo los elementos necesarios de equipamiento, infraestructura y de servicios; para ello es necesaria la formulación del correspondiente Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población correspondiente en términos de las disposiciones de esta Ley.

**ARTÍCULO 113.** La fundación de centros de población, que se realice conforme a esta Ley, requerirá decreto expedido por la Legislatura del Estado y derivar del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior, contendrá la declaratoria procedente sobre provisión de tierras y ordenará la formulación del Programa de Desarrollo Urbano del nuevo centro de población.

**ARTÍCULO 114.** El Congreso del Estado podrá decretar la fundación de un centro de población, a iniciativa del Gobierno federal, el Gobernador del Estado o los ayuntamientos.

La Legislatura del Estado solicitará en todos los casos, la opinión del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría y del Consejo Estatal, así como del ayuntamiento y del Consejo Municipal respectivo y en su caso, del Instituto Municipal o Metropolitano de Planeación correspondiente, respecto de las iniciativas de fundación de centros de población.

**ARTÍCULO 115.** El Congreso del Estado otorgará la categoría político administrativa que le corresponda al nuevo centro de población, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 116.** La fundación de nuevos centros de población ejidal o la constitución de zonas de urbanización en ejidos y comunidades, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Agraria, en la Ley General y a lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

**ARTÍCULO 117.** El Instituto Registral y Catastral del Estado no podrán inscribir título alguno de dominio pleno, de cesión de derechos parcelarios o cualquier otro acto tendiente al fraccionamiento, subdivisión, parcelamiento o pulverización de la propiedad sujeta al régimen agrario, que se ubique en un centro de población, si no cumple con los principios, definiciones y estipulaciones de esta Ley y de las establecidas en la Ley Agraria, así como no contar con las autorizaciones expresas a que alude el párrafo anterior.

Los notarios públicos no podrán dar fe ni intervenir en ese tipo de operaciones, a menos de que ante ellos se demuestre que se han otorgado las autorizaciones previstas en este artículo.

**ARTÍCULO 118.** Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento, así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

**ARTÍCULO 119.** Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población, que no cuente con un programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigente, o de aquellos proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la aprobación de la creación de un nuevo centro de población en congruencia con la estrategia del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la modificación previa del programa municipal que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

### **Capítulo III Zonificación**

**ARTÍCULO 120.** La zonificación general del territorio se determinará en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y en los Programas Metropolitanos y de Zona Conurbada.

Las políticas territoriales se distribuirán en la zonificación general del territorio en atención al ordenamiento ecológico, el valor ambiental, las condiciones físicas del medio natural, y la capacidad productiva del territorio.

Las políticas territoriales son:

- I. Preservación: el conjunto de medidas para conservar las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
- II. Protección: el conjunto de medidas para mejorar el ambiente, y prevenir y controlar su deterioro;
- III. Restauración: el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que hacen posible la evolución y continuidad de los procesos naturales;  
y
- IV. Aprovechamiento: el conjunto de actividades para la utilización racional y sustentable del suelo y de los recursos naturales, en forma que resulte socialmente útil y se procure su preservación y la del ambiente.

Los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deberán ajustarse al ordenamiento ecológico correspondiente para la determinación de los límites de aplicación de las políticas antes descritas.

**ARTÍCULO 121.** Con base en los estudios de ordenamiento ecológico, de hidrología subterránea y superficial, y en el propio diagnóstico del medio natural; en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio se establecerán las zonas de territorio sujetas a la política de preservación.

**ARTÍCULO 122.** Se consideran zonas susceptibles a la preservación:

- I. Las que por sus características naturales, cuenten con bosques, especies bajo protección, selvas praderas, mantos acuíferos, zonas de recargas de aguas pluviales y otros elementos que condicionen el equilibrio ecológico y propicien el desarrollo sustentable;
- II. Las zonas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones orográficas que constituyen elementos naturales para la preservación ecológica de los centros de población;
- III. Las zonas y monumentos del patrimonio natural;
- IV. Las zonas que contiene bellezas naturales y elementos constitutivos del paisaje y la imagen típica, y
- V. Aquellas cuyo subsuelo esté afectado por explotaciones de cualquier género y por fallas geológicas o fracturas verticales, que puedan causar daños en construcciones de todo tipo, en calles, avenidas y en las redes de drenaje y conducción de agua que constituyan peligros permanentes o eventuales para los asentamientos humanos.

Se establecerán programas integrales de manejo de áreas naturales protegidas y de áreas con presencia de fallas geológicas, mediante los cuales se definirán las acciones para la preservación y óptimo aprovechamiento de dichas zonas.

**ARTICULO 123.** Se aplicará la política de aprovechamiento a aquellas zonas dedicadas habitualmente a las actividades agropecuarias, forestales o mineras; o que sean aptas para ellas.

**ARTÍCULO 124.** La zonificación primaria se determinará en los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, y en los Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas.

Las áreas que integrarán las zonificación primaria son:

- I. Áreas urbanas: son las urbanizadas o edificadas total o parcialmente y que cuentan con los servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público cuando menos;
- II. Áreas urbanizables: son las que por reunir las condiciones para ser dotadas de servicios, se reservan para el futuro crecimiento de los centros de población o se prevén para la fundación de nuevos asentamiento humanos, y
- III. Áreas no urbanizables: son las que se excluyen del desarrollo urbano por contener elementos constitutivos del equilibrio ecológico o para la prevención de riesgos; tierras de alto o mediano rendimiento agrícola o pecuario, bosques y demás recursos naturales en explotación o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como en general las no aptas para su urbanización.

**ARTICULO 125.** Los usos y destinos de las áreas urbanas y urbanizables serán determinados en la zonificación secundaria del respectivo programa de desarrollo urbano de centro de población.

**ARTICULO 126.** Las áreas no urbanizables quedan sujetas a las normas siguientes:

- I. Se prohíbe dotar de obras y servicios urbanos de infraestructura y equipamiento a las áreas no urbanizables de un centro de población; fraccionar, subdividir, relotificar y fusionar con

finde de desarrollo urbano los predios comprendidos en dichas áreas y ejecutar cualquier clase de construcciones en los mismos;

- II. No quedan comprendidas en las prohibiciones de la fracción anterior; la construcción de:
  - a. Los caminos de acceso y comunicación y el suministro de energía eléctrica y recursos hidráulicos para las explotaciones agrícolas, forestales, industriales, pecuarias y mineras, así como la construcción de sistemas para el abastecimiento de agua potable, y
  - b. Los edificios e instalaciones definitivas o provisionales, necesarios para los usos a que se refiere el inciso anterior, así como las indispensables para el mantenimiento y vigilancia de parques, zonas ecológicas o de valor histórico, artístico y cultural o recreativas, e igualmente para alojamientos turísticos, centros de recreo, restaurantes y comercios anexos;
- III. Se podrá permitir la instalación de depósitos de combustibles y las industrias de alto riesgo, siempre y cuando se ubiquen a una distancia no menor de dos kilómetros del límite de crecimiento urbano del correspondiente centro de población, y se cumplan los requisitos que las autoridades correspondientes fijen por alguno o algunos de los mismos conceptos señalados en ésta Ley, para el caso de los usos que producen impacto significativo en su área de influencia;
- IV. En los casos de excepción a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, los titulares de las respectivas autorizaciones deberán inscribirlas en el Registro de Construcciones en áreas no urbanizables a que se refiere el párrafo final del presente artículo, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la expedición de la respectiva autorización, y
- V. Sólo las edificaciones e instalaciones no habitacionales existentes en las áreas no urbanizables de un centro de población, así como las señaladas en las fracciones II, inciso b) y III de este artículo que en el futuro se autoricen, deberán transformarse, ampliarse o reconstruirse las edificaciones habitacionales existentes así como la vivienda a que se refiere el inciso c) de la fracción II de este artículo, únicamente podrán ser objeto de alguna o algunas de las obras menores para las cuales, de acuerdo a ésta Ley y su reglamento, no se precisa licencia de construcción.

**ARTÍCULO 127.** La zonificación secundaria se determinará en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población y en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y comprenderá la totalidad del territorio de aplicación del programa de desarrollo urbano al que corresponda.

**ARTICULO 128.** La zonificación secundaria se determinara en los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, en los Programas Metropolitanos y Zonas Conurbadas y en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y comprenderá la totalidad del territorio de aplicación del programa al que corresponda, atendiendo a lo siguiente:

- I. Los usos y destinos que se asignarán en la zonificación secundaria de los programas de desarrollo urbano para las áreas urbanas y urbanizables son:
  - a. Habitacionales.
  - b. Comerciales y de servicios.
  - c. Industriales.
  - d. Espacios abiertos.
  - e. Infraestructura.
  - f. Equipamiento.
  - g. Turísticos.
  - h. Patrimonio cultural, y
  - i. Los demás que se establezcan en los programas de desarrollo urbano, que sean compatibles con los anteriores y que se justifiquen en el diagnóstico del mismo;
- II. Los usos y destinos que se asignarán en la zonificación secundaria de los programas de desarrollo urbano para las áreas no urbanizables, serán acordes al correspondiente ordenamiento ecológico, y son:
  - a. Agrícolas.

- b. Pecuarios.
  - c. Forestal.
  - d. Acuíferos.
  - e. Patrimonio natural.
  - f. Protegido para funciones ambientales o de recarga de agua;
  - g. Protección, restauración o preservación de la vida silvestre, y
  - h. Los demás que se establezcan en los programas de desarrollo urbano, que sean compatibles con los anteriores y que se justifiquen en el diagnóstico del mismo;
- III. Los aspectos normativos y condiciones que se establezcan para las zonas y usos del suelo, señalando:
- a. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados.
  - b. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados.
  - c. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos.
  - d. Las densidades de población, construcción y ocupación del suelo.
  - e. La ordenación y planeación de la traza urbana.
  - f. Las medidas para la protección de los derechos de vía, zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública y zonas afectadas por fallas geológicas. En donde estén detectadas fallas geológicas al expedir los usos o destinos del suelo se deben determinar las áreas de restricción para las construcciones atendiendo a su grado de peligrosidad y riesgo, con base en lo determinado en los Altas de Riesgos respectivos.
  - g. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda o amortiguamiento, especialmente en áreas e instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas o se manejen materiales y residuos peligrosos.
  - h. Las zonas y usos de suelo establecidos como reservas para la expansión de los centros de población, y
  - i. Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación y demás disposiciones jurídicas aplicables sean procedentes;
- IV. En las zonas en que se aplicará la política de conservación se regulará la mezcla de usos del suelo y sus actividades, y
- V. En las zonas que no se determinen con política de conservación:
- a. Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad.
  - b. Se deberá permitir la densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad, y se cuente con el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento.  
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de usos del suelo, y
  - c. Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.

A los ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población en sus jurisdicciones territoriales.

## **Capítulo IV Políticas**

**ARTÍCULO 129.** Las políticas de ordenamiento territorial para los centros de población son:

- I. Impulso: la que se aplica a un número de centros de población y sistemas urbanos y rurales, seleccionados por presentar condiciones altamente favorables, para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido crecimiento demográfico y que presupone una importante concentración de recursos;
- II. Consolidación: la aplicable a los centros de población que sólo requieren de un ordenamiento de su estructura básica y que sin afectar su dinámica actual, procuran evitar los efectos negativos de la concentración urbana;
- III. Control: la que persigue disminuir o desalentar el actual ritmo de crecimiento de determinados centros de población, en los cuales la concentración provoca problemas crecientemente agudos de congestión e insuficiencia económica y social, rescatando a la vez recursos que permitan promover el desarrollo en otras regiones de la Entidad que cuentan con mejores condiciones relativas;
- IV. Arraigo: la aplicable a los centros de población que enfrentan condiciones económicas y sociales críticas, a fin de superar el nivel y eficiencia de las actividades económicas, mejorar el bienestar de la población y frenar la emigración; y

**ARTICULO 130.** Las políticas para el desarrollo urbano de los centros de población son:

- I. Conservación: la que tienen por objeto mantener en buen estado de preservación y funcionamiento los edificios, vialidad pública, infraestructura, equipamiento y servicios que conforman las zonas urbanizadas de los centros de población, sus espacios libres e instalaciones; los elementos de diverso orden que integran su imagen así como en su caso, proteger debidamente los vestigios arqueológicos y bienes inmuebles del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación y del Estado que exista en el territorio;
- II. Mejoramiento: la que tiende a reordenar las áreas incipientemente desarrolladas de un centro de población y de igual manera renovar, rehabilitar o regenerar las que estuvieren deterioradas física o funcionalmente; y
- III. Crecimiento: la que se aplica a las áreas urbanizables de un centro de población, que generan la transformación del suelo para la ocupación y urbanización considerando la dotación de la infraestructura, vialidad, equipamiento y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento e integración con el área urbana actual, así como la preservación y restauración de los elementos del medio natural necesarios para la continuidad de sus procesos;

**ARTÍCULO 131.** Se elaborarán Programas Parciales de Desarrollo Urbano para normar regular las áreas que los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población establezcan como sujetas a las políticas de mejoramiento, conservación o crecimiento, conforme a lo señalado en los artículos 67, 68, 69 y 70 de la presente Ley

**ARTÍCULO 132.** Las zonas, predios o áreas deterioradas física o funcionalmente, en forma total o parcial, o de incipiente desarrollo de un centro de población, podrán ser incluidas en los Programas de Desarrollo Urbano respectivo como sujetas a la política de mejoramiento, con el fin de reordenarlos, renovarlos, regenerarlos, regularizarlos, restaurarlos o protegerlos y lograr el mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, equipamiento, suelo y elementos de acondicionamiento del espacio, integrándolas al desarrollo urbano, particularmente en beneficio de los habitantes de dichas zonas, debiendo considerar:

- I. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad universal requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos;
- II. La previsión que debe existir de áreas verdes, espacios públicos seguros y de calidad, y espacio edificable;

- III. La promoción y aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para la mayor autosuficiencia, sustentabilidad y protección ambiental, incluyendo la aplicación de azoteas o techos verdes y jardines verticales, y
- IV. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de mejoramiento.

**ARTÍCULO 133.** Los usos y destinos del suelo que generan un impacto urbano significativo, así como los corredores urbanos, fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, y el equipamiento urbano básico de los centros de población, deberán incluirse en los aprovechamientos que se especifiquen en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables, señalando sus características, restricciones, lineamientos de operación y sus condicionamientos de edificación, urbanización, ubicación, aprovechamiento y funcionamiento.

**ARTÍCULO 134.** Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles, cualquiera que sea su uso y destino, solo se autorizarán en las zonas en que así se encuentren permitidos conforme a los programas de desarrollo urbano de centros de población y los que deriven de los mismos. En los casos en que dicha previsión no se incluya en los programas antes señalados, o no se cuente con los mismos, previo a su autorización se deberá presentar un estudio de imagen e impacto urbano emitido por un especialista en la materia; dicho estudio deberá ser validado de manera fundada por la Dirección Municipal.

**ARTÍCULO 135.** Para modificar el uso o destino del suelo establecido en la zonificación secundaria, deberán modificarse o actualizarse los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, o programa de desarrollo urbano de centro de población según sea el caso, de acuerdo al procedimiento dispuesto, en el artículo 69 de esta Ley.

La modificación deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal e insertarse en la licencia de uso de suelo que expida la Dirección Municipal. Todo cambio de uso o destino del suelo de la zonificación secundaria que se otorgue sin estos requisitos será nulo de pleno derecho y la autoridad que lo permita será responsable en los términos previstos en esta Ley y las demás leyes aplicables.

**ARTÍCULO 136.** Las licencias de uso de suelo y las licencias de construcción y funcionamiento de establecimientos, de conformidad con lo previsto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables, para la ubicación y operación de las estaciones de servicios denominadas gasolineras y de establecimientos dedicados al almacenamiento, manejo, expendio o distribución de gas y/o gasolina, sólo podrán otorgarse en predios localizados sobre autopistas, carreteras o libramientos, así como, sobre las vialidades regionales, primarias o secundarias de los centros de población de acuerdo con la zonificación derivada de dichos programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, quedando estrictamente prohibido ubicarlas en vialidades o calles locales cerradas.

Las licencias municipales a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrán ser concedidas cuando concurren los requisitos que consigna la Norma Técnica Estatal NTE.SLP.ES.003/2008, que establece las especificaciones de protección ambiental para el diseño, construcción, operación, seguridad y mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios y estaciones de autoconsumo.

**ARTÍCULO 137.** La determinación de los destinos en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contendrá la delimitación precisa de las zonas, áreas o predios de que se trate, así como la descripción del fin o aprovechamiento público a que éstos prevean dedicarse.



**ARTÍCULO 138.** Una vez que conforme a un programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial se hayan determinado los destinos y éste se encuentre publicado e inscrito en los registros correspondientes, los propietarios de inmuebles que queden comprendidos en la zona, sólo utilizarán los predios o inmuebles en forma que no presente obstáculo al futuro aprovechamiento previsto.

En el caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino previsto y en el plazo que el propio programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial respectivo determine según sea el caso, dicho destino quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos compatibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su caso, se haga al programa.

## **Capítulo V**

### **Normas Generales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano**

**ARTÍCULO 139.** Se establecen para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sostenible de la Entidad, las normas generales siguientes:

- I. Áreas susceptibles de desarrollo:
  - a. Se evitará el crecimiento de los centros de población hacia las áreas que deban ser preservadas y protegidas, por ser de alto o mediano aprovechamiento de sus recursos agrícolas, forestales, pecuarios u otros, así como por contener bellezas naturales o elementos que conforman el equilibrio ecológico del ambiente;
  - b. Se orientará la expansión de los centros de población hacia los terrenos que comparativamente requerirán una menor inversión por concepto de apertura de vías públicas de acceso y dotación de obras de la infraestructura hidráulica, drenaje sanitario y pluvial y demás correspondientes siempre que no se afecten ecosistemas altamente productivos o frágiles, y
  - c. Se dejará al margen del desarrollo urbano los terrenos inundables, los expuestos a desmoronamientos u otros desastres previsibles, los que acusen fallas o fracturas en su estratificación geológica, los que contengan galerías y túneles provenientes de laboreos mineros agotados o abandonados y los que tengan topografía inadecuada;
- II. Usos combinados del suelo; se orientará hacia el aprovechamiento combinado o mixto en las colonias y predios, para facilitar a la población el acceso a los servicios, obtener un mayor aprovechamiento del suelo, mantener en forma constante la actividad urbana y lograr una mayor seguridad para los habitantes;
- III. Ubicación del equipamiento y servicios básicos:
  - a. Las plazas cívicas, jardines y espacios semejantes se ubicarán de preferencia en sitios centrales de cada uno de los distintos barrios, colonias o fraccionamientos del centro de población, y a su alrededor se situarán edificios destinados a fines que, guardando concordancia con el carácter de tales espacios contribuyan a elevar la imagen del entorno;
  - b. Los edificios de establecimientos dedicados a la educación, se ubicarán de preferencia en las inmediaciones de las áreas verdes y no deberán tener acceso directo a carreteras o vialidades urbanas principales;
  - c. Los hospitales y demás edificios para la atención de salud, se localizarán en las proximidades de las áreas verdes, alejados del ruido y demás elementos contaminantes, y
  - d. Para las colonias o barrios y los nuevos fraccionamientos de los centros de población, se deberán contemplar los servicios de comercio, educación, salud y otros que fueren necesarios para la atención de las necesidades básicas de sus habitantes;
- IV. Localización de industrias:
  - a. Los parques o zonas industriales deberán ubicarse separadamente de las áreas de vivienda; sus terrenos deberán tener fácil acceso por carreteras regionales o vías férreas, posibilidad de dotación de energía eléctrica y carecerán de pendientes que excedan del ocho por ciento, las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas de su emplazamiento, deberán asegurar la dispersión de contaminantes;

- b. Las industrias de alto riesgo o peligro de contaminación, se deberán situar fuera de los límites del centro de población a una distancia no menor de dos kilómetros, sin perjuicio de adaptarse las precauciones y demás medidas que fueren necesarias de acuerdo a las normas que emitan las autoridades competentes, y
  - c. Las industrias que se permitan establecerse dentro o próximas a zonas habitacionales, serán señaladas en las Normas de Zonificación Secundaria del programa de centro de población aplicable;
- V. Protección e integración al entorno ambiental:
- a. Se protegerán y en su caso aprovecharán los recursos con que cuenten los cerros, bosques, cuerpos de agua superficiales, mantos de agua subterránea y zonas de carga acuífera, que sirvan para mantener o mejorar la calidad del ambiente;
  - b. En el aprovechamiento de los predios se respetarán, la naturaleza del terreno, y los cauces de escurrimientos superficiales, a fin de conservar su entorno natural y mejorarlo;
  - c. La forestación de los espacios abiertos, públicos o privados, se llevarán a cabo o complementará con especies propias de la región natural, para así mejorar el medio ambiente y el aspecto de calles, plazas y zonas de edificios;
  - d. Se contemplarán en los programas de centro de población las áreas aptas para el funcionamiento de los sistemas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Igualmente las que fueren necesarias para los materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de la autorización que para la instalación y operación del respectivo sistema corresponda otorgar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de las normas técnicas que al efecto la misma establezca. Conforme lo dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
  - e. En general, la planeación del territorio perseguirá establecer un adecuado equilibrio e interrelación entre ambos aspectos del desarrollo, en términos de que por una parte, el crecimiento de la ciudad no se extienda a las tierras necesarias para la actividad económica y el mantenimiento del ambiente y que, por la otra, se satisfagan sus necesidades del suelo urbanizado, servicios y vivienda en proporción al incremento demográfico;
  - f. Se promoverá y procurará la movilidad sustentable, mediante la construcción, remodelación y rehabilitación de vialidades en áreas urbanas, adecuándolas para tal fin; contemplando zonas y áreas de circulación peatonal, así como establecer estrategias y medidas que favorezcan la accesibilidad de desplazamiento en las ciudades, distintas al uso del vehículo automotor, instalando la señalética en los lugares correspondientes; según lo dispuesto en esta Ley, y
  - g. Se procurará la recuperación de las áreas no urbanizables de los centros de población ocupadas por asentamientos espontáneos o no autorizados, mediante programas de traslados o reubicación de sus habitantes a suelos aptos, así como la regeneración de las áreas naturales recuperadas.

## **Capítulo VI**

### **Estudios de impacto urbano, vial y ambiental**

**ARTÍCULO 140.** Los estudios de impacto urbano, así como los de impacto vial que se presenten para los usos de impacto significativo, en los casos en que así lo determina esta Ley o los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables, se regirán por las disposiciones de este Capítulo.

**ARTÍCULO 141.** Los estudios de impacto ambiental que se soliciten en los casos que prevé la presente Ley, y la Ley Ambiental del Estado, deberán contener los requisitos que establecen esta última, el reglamento correspondiente y los demás ordenamientos aplicables.

**ARTÍCULO 142.** Los estudios de impacto urbano que se presenten en los casos en que así lo determina esta Ley deberán contener como mínimo:

- I. Datos del propietario, promotor y responsable del estudio:
  - a. Datos generales del propietario o promovente, y
  - b. Datos generales del responsable técnico de la elaboración del estudio, quien deberá contar con la formación académica y experiencia que le permita emitir un estudio debidamente sustentado;
- II. Datos generales del proyecto:
  - a. Nombre y ubicación del proyecto
  - b. Dimensiones del proyecto
  - c. Situación legal del predio y/o del sitio del proyecto y tipo de propiedad, y
  - d. Descripción general de la obra o actividad proyectada;
- III. Diagnóstico urbano que abarque el área de impacto del predio, dependiendo del tamaño del proyecto y área de influencia:
  - a. Contexto urbano de lo general a lo particular
  - b. Ubicación y papel de la zona respecto al entorno y contexto general
  - c. Disponibilidad de servicios e infraestructura
  - d. Levantamiento de uso de suelo existente del área de estudio, y
  - e. Problemática de la zona;
  - f. Diagnóstico socioeconómico:
  - g. Población de la zona e incremento en los últimos diez años
  - h. Estructura de la población
  - i. Número, incremento, tipología, condiciones y características de la vivienda
  - j. Descripción, ubicación, características y cobertura del equipamiento
  - k. Actividades productivas, y
  - l. Nivel de ingreso;
- IV. Análisis vial, de transporte y estacionamientos:
  - a. Análisis vial
  - b. Análisis de transporte, y
  - c. Análisis del estacionamiento;
- V. Pronóstico urbano, identificando los impactos y su forma de mitigación;
  - a. Condicionantes de desarrollo urbano
  - b. Vialidad propuesta en el Programa de Centro de Población y demás instrumentos relacionados vigentes
  - c. Pronóstico urbano al incorporar el proyecto propuesto, y
  - d. Identificación de impactos;
- VI. Conclusiones y recomendaciones;
- VII. Anexo cartográfico;
- VIII. Anexo documental, y
- IX. Bibliografía.

**ARTÍCULO 143.** Los estudios de impacto vial que se presenten en los casos en que así lo determina el presente ordenamiento deberán contener como mínimo:

- I. Introducción;

- II. Datos de propiedad, generales y descripción del proyecto:
  - a. Datos del propietario, promotor y responsable del estudio, y
  - b. Datos generales del proyecto;
- III. Inventario y operación del sistema vial y de transporte en el área de influencia del proyecto:
  - a. Inventario y operación del sistema vial, y
  - b. Inventario y operación del sistema de transporte;
- IV. Análisis de ingeniería de tránsito:
  - a. Análisis de las vialidades que inciden en el área de proyecto
  - b. Relación de vías inmediatas con el resto del sistema vial
  - c. Disponibilidad de infraestructura y servicios, y
  - d. Capacidad y niveles de servicio;
- V. Diagnóstico–pronóstico de la vialidad con el incremento derivado del proyecto, respecto:
  - a. Al uso del suelo,
  - b. La infraestructura
  - c. La vialidad y al transporte, incremento en el número de viajes;
  - d. La plusvalía, y
  - e. Los aspectos socioeconómicos;
- VI. Descripción de medidas de eliminación y/o mitigación de impactos negativos;
- VII. Conclusiones y recomendaciones;
- VIII. Anexo cartográfico;
- IX. Anexo documental, y
- X. Bibliografía.

**ARTÍCULO 144.** En los casos en que así se requiera y justifique, la autoridad en materia de movilidad urbana, tránsito y vialidad municipal podrá en su momento solicitar a título gratuito u oneroso según corresponda, estudios y análisis adicionales a los antes señalados, a instituciones, profesionales u organizaciones acreditadas en dicha materia.

## **TÍTULO NOVENO RESILIENCIA URBANA**

### **Capítulo Único Resiliencia Urbana, Prevención y Reducción de Riesgos en los Asentamientos Humanos**

**ARTÍCULO 145.** El Estado y los municipios de conformidad con lo establecido en la presente Ley, establecerán estrategias de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de Asentamientos Humanos, así como acciones reactivas tales como provisiones financieras y operativas para la recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades incrementar su Resiliencia.

La Secretaria establecerá mecanismos de coordinación con la Dirección General de Protección Civil y demás dependencias relacionadas en materia de prevención de riesgos y mitigación de impactos a causa de fenómenos de origen natural o antropogénico, para trabajar en la elaboración de estrategias, instrumentos y programas para la gestión integral de riesgos.

Las autoridades estatales y municipales que autoricen licencias o permisos a personas físicas y morales para la construcción, reconstrucción, o remodelación de edificaciones y demás obras, incluirán en los casos en que así se justifique, además de los requisitos que en cada caso procedan, el de contratación de seguros contra riesgos antropogénicos y daños causados por fenómenos naturales; promoviendo en su caso el otorgamiento de subsidios u otros apoyos para que las personas de bajos recursos económicos puedan contratar dichos seguros.

**ARTÍCULO 146.** Las normas del presente capítulo son obligatorias para todas las personas, físicas y morales, públicas o privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos de acuerdo a los Atlas de Riesgo Estatal y Municipales emitido por las autoridades en materia de Protección Civil o su equivalente, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los Centros de Población.

**ARTÍCULO 147.** Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los Atlas de Riesgo estatal y municipales y los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar el análisis de riesgo que refiere la Ley de Protección Civil del Estado, así como un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

**ARTÍCULO 148.** Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto:

- I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;
- II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria;
- III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;
- IV. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, educación, seguridad, transporte y abasto;
- V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles;
- VI. Casinos, centros nocturnos, discotecas, salones de baile, bares discotecas, bares y establecimientos con permiso para venta y consumo de bebidas alcohólicas;
- VII. Industrias de todo tipo, y
- VIII. Áreas o inmuebles en los que se lleven a cabo actos públicos de manera extraordinaria, en los que deberá además contarse con un programa especial, a fin de establecer medidas de prevención y reacción.

**ARTÍCULO 149.** Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publiquen las autoridades competentes.

Las autorizaciones para el desarrollo urbano deberán ajustarse a dichos estudios, y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo que no hubieran tomado medidas de mitigación previas. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

**ARTÍCULO 150.** Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

**ARTÍCULO 151.** Es obligación de las autoridades estatales y municipales asegurarse, del cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales

Las autoridades estatales o municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes cuando se trate de acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio de usos del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental,

**ARTÍCULO 152.** Es obligación de las autoridades estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley de Protección Civil establecen.

La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los procesos de Resiliencia urbana para las zonas metropolitanas, considerando el Programa Integral de Gestión de Riesgos emitido por la autoridad federal competente y asimismo, promoverá la elaboración de guías de Resiliencia urbana y metropolitana que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas.

**ARTÍCULO 153.** La Secretaría, los ayuntamientos y demás autoridades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo; para tal efecto, podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, que correspondan.

**ARTÍCULO 154.** Se consideran medidas de seguridad las acciones encaminadas a evitar los daños inminentes de difícil reposición, que puedan causar las instalaciones, las construcciones, las obras y acciones, tanto públicas como privadas, que originen perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público. Son de inmediata ejecución, tendrán carácter temporal y preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.

**ARTÍCULO 155.** Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal y preventivo mientras persistan las causas que las motivaron y se aplicarán sin perjuicio de las acciones o sanciones administrativas, civiles o penales que en su caso correspondan, por las infracciones cometidas.

**ARTÍCULO 156.** Para los efectos de prevención de los riesgos a que se refiere el presente Capítulo, se consideran como medidas de seguridad las siguientes:

- I. La suspensión total o parcial de las construcciones, instalaciones, explotaciones, obras, trabajos, servicios o actividades, cuando no se sujeten a las normas técnicas o legales establecidas;
- II. La suspensión de obras que puedan poner en peligro la seguridad, salubridad o tranquilidad públicas o el equilibrio ecológico;
- III. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, las construcciones, los servicios y las obras realizadas en contravención de las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y lo señalado en la correspondiente licencia de uso de suelo y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- IV. El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo;
- V. La prohibición de actos de utilización de inmuebles, maquinaria o equipo;
- VI. La desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles;
- VII. La demolición total o parcial de obras o construcciones;
- VIII. La evacuación de zonas, áreas o instalaciones;
- IX. La advertencia pública, mediante la cual se empleen los medios publicitarios, para prevenir sobre cualquier irregularidad en las actividades realizadas o por realizar por una persona física o moral, pública o privada, que contravenga la legislación y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;
- X. El aseguramiento de los materiales, herramientas y demás objetos con los que se ejecuten las construcciones u obras, y
- XI. Cualquier otra prevención tendente a lograr los fines expresados en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
- XII. En los casos de las fracciones III y VII se ejecutará la medida, previo dictamen técnico de la autoridad competente y audiencia de los afectados, de conformidad con el procedimiento que establezca el Reglamento municipal correspondiente, exceptuando los casos de riesgo inminente avalado por Protección Civil.

El Reglamento municipal determinará los demás casos, requisitos y procedimientos para aplicar las medidas de seguridad, por las autoridades competentes.

**ARTÍCULO 157.** El Ayuntamiento, verificará el cumplimiento de las medidas ordenadas en términos del requerimiento o resolución respectiva y en caso de subsistir las infracciones podrá imponer las sanciones que procedan conforme la ley, independientemente de denunciar la desobediencia de un mandato legítimo de autoridad ante las instancias competentes.

**ARTÍCULO 158.** Son causas para adoptar cualquiera de las medidas de seguridad a que se refiere el artículo inmediato anterior, las siguientes:

- I. La inestabilidad del suelo o inseguridad de la construcción existente o en ejecución;
- II. La prevención de riesgos en los centros de población;
- III. La carencia o estado deficiente de instalaciones y dispositivos de seguridad, contra los riesgos de incendio, contaminación, sismos u otros;
- IV. Las deficiencias peligrosas en el mantenimiento de las estructuras de los edificios y construcciones en general;
- V. La peligrosa localización, instalación o funcionamiento de los almacenes de explosivos, depósitos de combustibles, productos inflamables, bancos de materiales y otros de naturaleza semejante, y
- VI. Cualquier otra que contravenga lo dispuesto en esta Ley, en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y demás normatividad aplicable, que pudiere afectar la integridad o seguridad física de personas o bienes.

**ARTÍCULO 159.** Las autoridades competentes harán uso de los medios legales necesarios, incluyendo el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por treinta y seis horas, para lograr la

ejecución de las medidas de seguridad o aplicación de las sanciones que procedan, previos los trámites que establece el Código Procesal Administrativo para Estado de San Luis Potosí.

## **TÍTULO DÉCIMO MOVILIDAD**

### **Capítulo I Movilidad**

**ARTÍCULO 160.** Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos, las políticas de movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus Centros de Población.

Las políticas y programas para la movilidad será parte del proceso de planeación de los Asentamientos Humanos.

**ARTÍCULO 161.** Las políticas y programas de movilidad deberán:

- I.** Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada;
- II.** Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;
- III.** Promover los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento;
- IV.** Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia;
- V.** Efectuar de forma sistemática diagnósticos de las redes de distribución vial, con el objeto de recuperar, dar mantenimiento y habilitar las opciones de movilidad que puedan ejercer funciones estratégicas de desahogo vial y desfogue de zonas saturadas, y destinar de forma óptima los recursos destinados a aprovechar todas las capacidades de la red de distribución vial existente;
- VI.** Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público;
- VII.** Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, tendentes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;
- VIII.** Establecer políticas, programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad;
- IX.** Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;
- X.** Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos para el financiamiento de la operación del transporte público;



- XI. Establecer políticas y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente;
- XII. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional, entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, aumento de ciclistas, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines;
- XIII. Potenciar de manera estratégica la flexibilidad de modos de movilidad no motorizada y de transporte colectivo, a fin de que puedan competir con las ventajas individuales del automóvil privado, mediante la promoción de la intermodalidad, la construcción y mejora de estacionamientos de automóviles motorizados, bicicletas y motocicletas en estaciones de transporte público, en especial en los Centros de Transferencia Modal, así como ampliar el acceso de las bicicletas a los sistemas de transporte público;
- XIV. Promover que en los edificios, públicos y privados, con una carga de uso de cincuenta o más personas cuenten con estacionamiento para bicicletas. Esto incluye edificios de oficinas, de departamentos, servicios públicos, universidades, colegios, centros comerciales y recreativos de todo el Estado. Los estacionamientos de bicicletas han de ser visibles, accesibles, fáciles de utilizar, cómodos y espaciosos, y
- XV. En el caso de dos o más centros población que integren una sola área urbana o formen parte de una conurbación, el servicio de transporte público colectivo entre ellas se considerará urbano, debiendo establecer previamente corredores de movilidad que incluyan carril exclusivo, paradas para el ascenso y descenso de pasajeros, y ciclovía.

**ARTÍCULO 162.** El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la movilidad, mediante:

- I. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de movilidad, incorporando entre otras, la perspectiva de género;
- II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos motorizados, entre otros;
- III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad;
- IV. La implementación de espacios seguros para los transeúntes; mismas que estarán delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la legislación aplicable;
- V. El diseño e instrumentación de programas de recuperación y rehabilitación progresiva de espacios urbanos para el desplazamiento peatonal y la construcción y mantenimiento de infraestructura ciclista; en materia de movilidad urbana no motorizada en los municipios;
- VI. El fomento de la descentralización equilibrada de las actividades económicas, políticas y educativas de las ciudades para disminuir de forma radical la movilidad urbana;
- VII. El fomento y apoyo con créditos y estímulos fiscales a quien utiliza modos de movilidad de bajo impacto como caminar y usar la bicicleta;
- VIII. La formulación de las respectivas estrategias de componentes urbanos de movilidad sustentable para las Zonas Metropolitanas del Estado y Centros de Población con más de cincuenta mil habitantes, en los términos de los artículos 100, 101 y 102 de esta Ley, que establezca los lineamientos, estrategias y acciones para promover la movilidad y

- accesibilidad de la población bajo criterios de sustentabilidad ambiental y urbana, tanto de obra nueva como de modificación de infraestructura existente;
- IX. La promoción del uso de la bicicleta en los centro de población mediante actividades creativas e incluyentes a los sectores social, privado y público;
  - X. El mejoramiento y mantenimiento de las banquetas, cruces y rampas para garantizar movilidad y acceso universal, iluminación y liberación de obstáculos como lo es el mobiliario urbano o el comercio informal; adecuando estos los espacios a los estándares existentes respecto a anchos mínimos y pendientes máximas de rampas;
  - XI. El incremento de áreas peatonales mediante la recuperación de espacios públicos y la conversión peatonal de centros históricos, y
  - XII. La adecuación áreas verdes y camellones para incluir andadores y ciclo vías, mediante diseños que otorguen seguridad y calidad con el uso de reductores de velocidad y cualquier otra clase de infraestructura que dé continuidad a la trayectoria, priorizando el paso peatonal y ciclista.

**ARTÍCULO 163.** El Estado y los municipios deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía:

- I. Personas con movilidad limitada y peatones;
- II. Usuarios de transporte no motorizado;
- III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
- IV. Prestadores del servicio de transporte público colectivo de pasajeros,
- V. Prestadores del servicio de transporte de carga, y
- VI. Usuarios de transporte particular.

## **Capítulo II** **Vialidades**

**ARTÍCULO 164.** Para efectos de la presente Sección se entiende por:

- I. **Andadores:** Son los espacios de circulación exclusivamente peatonal dentro de los fraccionamientos, condominios o desarrollos inmobiliarios especiales;
- II. **Autopista:** Carretera que está específicamente proyectada, construida y señalizada como tal para la circulación exclusiva de vehículos automotores, en las que no cuentan con acceso a las mismas las propiedades colindantes, no cruzan a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna y constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares, o con carácter temporal por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios;
- III. **Calles cerradas:** son las vías públicas municipales que no tienen una continuidad o liga con otras calles, por encontrarse cerradas o delimitadas en uno de sus extremos. Sin embargo las mismas se consideran como un bien del dominio público de los municipios, por reunir las características y condiciones a que hace referencia esta Ley;
- IV. **Calles locales:** son aquellas que dan servicio internamente a los fraccionamientos, condominios, colonias y desarrollos habitacionales y sirven para dar acceso a sus lotes o predios, por lo que son las de menor sección;
- V. **Carretera:** son aquellas vialidades que unen ciudades o poblados, entroncan con algún camino de país extranjero, las que comunican a dos o más Estados de la Federación, y las

- que en su totalidad o su mayor parte sean construidas por la federación, con participación estatal, municipal o por particulares mediante concesión;
- VI. **Ciclovías:** son las vías destinadas en forma exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas, o una vía independiente donde se permite el tránsito de bicicletas, señalizadas apropiadamente para ese propósito;
  - VII. **Camino rural:** son vialidades de bajas especificaciones que comunican a los poblados y dan acceso a las áreas productivas no urbanizadas, su carpeta puede ser pavimentada, revestida o de terracería;
  - VIII. **Par Vial:** Es una solución para la circulación vehicular consistente en dos vías paralelas con sentido inverso; podrán ser primarias o secundarias.
  - IX. **Vialidad de acceso controlado:** Vialidad primaria que satisface la demanda de movilidad continúa de grandes volúmenes de tránsito vehicular. Todas las intersecciones o pasos con otras vías son a desnivel. Cuenta con accesos y salidas proyectadas para el cambio de velocidad en aceleración o desaceleración; así como con un separador central;
  - X. **Vialidades primarias:** son las que estructuran el sistema vial de los centros de población, enlazan las vialidades regionales con las secundarias y colectoras, y unen los distintos sectores de la ciudad, las de mayor longitud, sección y volumen vehicular;
  - XI. **Vialidades regionales:** es el conjunto de vialidades interurbanas que vinculan los centros de población, y
  - XII. **Vialidades secundarias o colectoras:** son las que vinculan el sistema vial primario con vialidades locales, tienen un menor recorrido y volumen vehicular que las primarias y pueden servir para dar acceso a los lotes.

**ARTÍCULO 165.** La estructura vial primaria, deberá ser contemplada en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial correspondientes, debiendo determinar cuando menos:

- I. El trazo de las vialidades que integran la estructura primaria, distinguiendo las existentes de las propuestas, así como la etapa de desarrollo de los tramos;
- II. Los derechos de vía y secciones con la descripción de número y ancho de carriles, banquetas y camellones;
- III. La integración de los espacios para peatones, bicicletas y transporte público, y
- IV. Los pasos a desnivel, puentes o afectaciones en su caso.

**ARTÍCULO 166.** La creación, apertura, modificación, prolongación y ampliación de vías públicas, que no esté contemplada en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como para los centros de población que carezcan de éstos, serán aprobadas por los ayuntamientos correspondientes, a propuesta y con la opinión de la dirección municipal y con el apoyo de la o las áreas técnicas competentes. Los municipios que así lo consideren, podrán solicitar el apoyo del Estado a través de la Secretaría.

El ayuntamiento una vez que se apruebe la apertura, prolongación, modificación o ampliación de vías públicas, deberá notificar a las autoridades catastrales para su inscripción respectiva.

Tratándose de vialidades resultantes de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, las mismas solo estarán sujetas a la factibilidad técnica que permita el entorno en donde se desarrollen, procurando cumplir en la medida de lo posible con las especificaciones y requisitos que establezcan esta Ley, los reglamentos municipales y demás normatividad aplicable, sin que la imposibilidad de cumplimiento por causas técnicas de las mismas, conlleve a la improcedencia de los programas de regularización respectivos.

**ARTÍCULO 167.** Se presume vía pública, salvo prueba en contrario, todo inmueble que en calidad de tal, conste oficialmente, en cualquier archivo de dependencias federales, estatales o municipales, así

como en museos, bibliotecas o que por el transcurso del tiempo sea reconocida como tal por la autoridad competente.

**ARTÍCULO 168.** Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica y alumbrado, telecomunicaciones y gas que se integren a la infraestructura de la vialidad pública, deberán reunir los requisitos y características que establezcan las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables.

En las vías públicas lo relativo a las aguas pluviales, corresponde a los municipios a través de los organismos operadores de agua en donde los hubiere, o directamente a los ayuntamientos en los municipios que no cuenten con los mismos, conforme lo determine la ley de la materia. El Estado a través de los organismos estatales competentes, podrá asumir transitoriamente, de manera directa o concurrente dicha responsabilidad en los casos en que así lo soliciten los ayuntamientos, previo convenio que se celebre al efecto en términos de la ley de la materia.

**ARTÍCULO 169.** Las normas para la construcción de las vías públicas, que se deriven de esta Ley, deberán comprender cuando menos:

- I. El funcionamiento de la red vial y la interacción de las tipologías;
- II. Las secciones y anchos de las vías primarias, secundarias, colectoras, de acceso local, ciclovías y de los andadores;
- III. Su liga y congruencia con la traza urbana;
- IV. Los anchos mínimos de las banquetas para las vialidades primarias o secundarias, colectoras, debiendo permitir la circulación segura de al menos dos personas en forma paralela, así como para las vías locales y de acceso local. Podrán construirse vialidades sin banquetas en los proyectos que contemplen accesos peatonales independientes y/o el diseño contemple equipamiento sustentable u otro tipo de elementos urbanos y texturas que delimiten dichas vías;
- V. Rampas en los pasos peatonales y semáforos accesibles para personas con discapacidad; las vías primarias contemplarán además la inclusión de mobiliario urbano: bancas, cestos para basura urbana y paraderos, e hidrantes contra incendios, cuando la red hidráulica lo permita;
- VI. Podrán autorizarse vías públicas con formas de transporte específicas tales como exclusivos para flujo vehicular de carga o servicios, bicicletas, transporte público de pasajeros o peatonales, entre otros, siempre que el diseño procure la seguridad y adecuada movilidad de personas y vehículos;
- VII. La distancia máxima de las vialidades colectoras;
- VIII. La separación máxima entre calles locales;
- IX. La distancia máxima entre un andador y la vialidad más cercana y el lote al que se accede;
- X. La distancia máxima entre un estacionamiento colectivo y el lote al que se accede;
- XI. Los retornos con que deberán contar las vías y su diámetro;
- XII. Las pendientes máximas para las vías primarias, secundarias, colectoras, de acceso local y ciclovías;
- XIII. Los radios de giro para vías primarias, secundarias, colectoras, de acceso local y ciclo vías;
- XIV. Los cruces peatonales y los elementos de control de velocidad, las intersecciones a nivel y a desnivel;
- XV. La determinación de los accesos de carga y descarga de las zonas comerciales y de servicios;
- XVI. Los anchos de las vías proyectadas como prolongaciones de una existente;
- XVII. Los espesores mínimos del recubrimiento de la vialidad, según las normas técnicas aplicables;

- XVIII.** Las normas para la instalación de las señales de tránsito, lámparas, casetas y demás elementos integrantes del mobiliario urbano;
- XIX.** La inclusión de ciclovías cuando el ancho de calle lo permita;
- XX.** La inclusión de carriles exclusivos para transporte público en las vías primarias, en desarrollos de cinco mil o más habitantes, y en desarrollos no habitacionales de más de 25 ha. Asimismo se preverá el recorrido del transporte público dentro del desarrollo habitacional y la ubicación de los paraderos, considerando que el sesenta y cinco por ciento de la población no recorra más de quinientos metros para llegar a ellos.
- XXI.** Las previsiones para que el diseño de las vialidades, cuente con lo necesario para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad;
- XXII.** Los sitios para la instalación de las redes de instalaciones subterráneas de los servicios públicos de teléfonos, energía eléctrica, alumbrado, semáforos, gas natural y cualesquiera otros servicios, y
- XXIII.** La utilización de materiales y ejecución de procesos constructivos sustentables preferentemente.

**ARTÍCULO 170.** Para orientar los aspectos a que se refiere el artículo inmediato anterior, los Reglamentos municipales correspondientes considerarán:

- I. Compatibilidad de la jerarquía vial con los usos de suelo: habitacional, servicios que presta la administración pública y privada, de comercio, de salud, de educación y cultura, para la recreación, alojamiento, seguridad, mortuorios, comunicaciones y transportes, industria, espacios abiertos, infraestructura, agropecuarios, forestales y acuíferos, y
- II. Características por tipo de vialidad: primaria, secundaria, colectora, local, cerrada o privada, ciclovía, peatonal y de acceso controlado con lateral y sin lateral.

**ARTÍCULO 171.** Las vías primarias en las zonas urbanas, deberán contar con un carril exclusivo para el transporte público y con las bahías de ascenso y descenso de pasajeros, ubicadas en la forma y distancia que determine la ley de la materia, así como con ciclovías, en todas las nuevas que se construyan y cuando el ancho de calle lo permita, en las ya existentes.

**ARTÍCULO 172.** Asimismo las vías públicas deberán contar con las características que se señalan a continuación según su clasificación:

	PENDIENTE máxima	VELOCIDAD	SENTIDOS	CARRILES X SENTIDO	TRANSPORTE	ESTACIONAMIENTO	ANCHO DE BANQUETA O ACOTAMIENTO
	%	km/h					m
AUTOPISTA	6	>80	2	2 a 4	si	no	2
CARRETERA	8	60-80	2	1 a 2	si	no	2
CAMINO RURAL	12	30-60	2	1	si	no	-
ACCESO CONTROLADO C/LATERAL	6	60-80	2	4 a 6	si	no	3
ACCESO CONTROLADO S/LATERAL	6	60-80	2	2 a 4	no	no	3
PRIMARIA	8	30-60	2	2 a 3	si	cond	3
SECUNDARIA	10	30-60	1 o 2	2	si	cond	2 a 3
LOCAL	12	15-30	1 o 2	1	no	si	1.5
CERRADA	12	15	1 o 2	1	no	cond	1.2
CICLOVÍA	10	15-30	1 o 2	1	no	no	-
ANDADOR	>12	-	-	-	no	no	-

**ARTÍCULO 173.** Todas las vías públicas o privadas que se construyan deberán contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad.

Las nuevas vialidades deberán considerar la continuidad, seguridad, coherencia, comodidad y atractivo de los trayectos peatonales y ciclistas; eliminación de barreras y discontinuidades; inclusión de espacios de movilidad no motorizada.

En las banquetas de las calles y vialidades primarias, secundarias o subcolectores, deberán contemplarse cajetes o arriates para la plantación de árboles, preferentemente nativos de la región natural y de raíz vertical, los cuales se ubicarán en una franja de servicios que no interfiera con el libre paso de peatones.

**ARTÍCULO 174.** Las vialidades o calles colectoras de los fraccionamientos y condominios habitacionales urbanos, deberán estar de acuerdo con la estrategia de vialidad prevista en los programas de desarrollo urbano, de centro de población, de ordenación de zonas conurbadas, en los programas parciales de desarrollo urbano, programas de movilidad y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 175.** Cuando las autoridades competentes proyecten una arteria de alta velocidad o ésta ya exista, dentro de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, los lotes o predios de éste no podrán tener acceso directo a ella; en este caso, se tendrá que proyectar carriles laterales de baja velocidad y de estacionamiento.

**ARTÍCULO 176.** Ninguna de las vialidades o calles de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial en proyecto, que sea prolongación de otra contigua o de cualquier vialidad o calle del centro de población, podrá tener una anchura menor que aquélla, y si la vialidad o calle que se continúa fuera menor de los mínimos señalados por esta Ley, la prolongación que constituya la nueva obra deberá tener siempre la anchura señalada por el mismo y continuidad sin cambios de dirección mayores o significativos, de acuerdo con la traza urbana.

**ARTÍCULO 177.** Cuando cualquiera de los tipos de vialidades y calles a que se refiere esta Ley tenga cruzamiento o entronque con una arteria de alta velocidad, autopista, carretera, libramiento, o con una vía de ferrocarril, requerirán un proyecto especial que deberá contemplarse como parte del proyecto de urbanización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial; debiéndose en su caso, observar las disposiciones, características o restricciones que establezca la autoridad federal o estatal correspondiente.

Los ayuntamientos establecerán en sus reglamentos respectivos, en función de la traza urbana existente y de conformidad con lo que se establezca en las Normas de la SEDESOL-SEDATU, la SCT, la presente Ley, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el programa de desarrollo urbano de Centro de Población y en su caso Programas Parciales, y los reglamentos correspondientes, las características y dimensiones que les correspondan a las obras viales.

**ARTÍCULO 178.** Para orientar los aspectos a que se refiere el artículo inmediato anterior, se tomarán como base las siguientes tablas:

I. Compatibilidad de la jerarquía vial con los usos de suelo

HABITACIONAL

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
MUY BAJA DENSIDAD (lotes de más de 1000m <sup>2</sup> )			O	O			O	O	O	O	O
BAJA DENSIDAD (lotes de 300 a 1000m <sup>2</sup> )			X	O			O	O	O	O	O
DENSIDAD MEDIA (lotes de 121 a 299 m <sup>2</sup> )				O			O	O	O	O	O
ALTA DENSIDAD (lotes hasta 120m <sup>2</sup> )				O			O	O	O	O	
MIXTO C/COMERCIO Y SERVICIOS		O	O	O		O	O	O		O	O

O adecuada X tolerable

SERVICIOS/ ADMINISTRACIÓN

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				X		O	O				
ADMINISTRACIÓN PRIVADA				O		O	O				

O adecuada X tolerable

SERVICIOS/COMERCIO

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
ALMACENAMIENTO Y ABASTO		O	O	O		X	X				
TIENDAS DE PRODUCTOS BÁSICOS		O	O	X		O	O	X			O
TIENDAS DE ESPECIALIDADES						O	O				O
TIENDAS DE AUTOSERVICIO		O	O	O		O	O				O
TIENDAS DEPARTAMENTALES				O		O	X				O
CENTROS COMERCIALES		O		O		O	X				O
VENTA DE MATERIALES						O	O				
TIENDAS DE SERVICIOS		O	O	O		O	O				O

O adecuada X tolerable

SERVICIOS DE SALUD

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
HOSPITALES		O	O	X		X	O				
CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD				X		O	O				
ASISTENCIA SOCIAL			O			X	O				O
ASISTENCIA ANIMAL		O	O	O		O	O				O

O adecuada X tolerable



### SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
EDUCACIÓN ELEMENTAL						X	O	O	X		O
EDUCACIÓN MEDIA				X		X	O				
EDUCACIÓN SUPERIOR		X	X	O	O	X	X	X			
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS		O	O	O		O	O	X			
INSALACIONES PARA EXHIBICIONES				O		O	O				
INSTALACIONES PARA LA INFORMACIÓN			O	O		O	O	X			
INSALACIONES RELIGIOSAS				X		O	O				X

O adecuada X tolerable

### SERVICIOS PARA LA RECREACIÓN

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
ALIMENTOS Y BEBIDAS				O		O	O			O	O
ENTRETENIMIENTO				O		O	O				O
RECREACIÓN SOCIAL				O		O	O			O	
DEPORTES AL AIRE LIBRE Y ACUÁTICOS			O	O	O	X	X			O	
DEPORTES AL CUBIERTO				O		O	O				

O adecuada X tolerable

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>HOTELES</b>		X		O		O	O				O
<b>MOTELES</b>		O		O							
<b>CASAS DE HUÉSPEDES Y ALBERGUES</b>				X		O	O	O	O		O

O adecuada X tolerable

SERVICIOS DE SEGURIDAD

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>DEFENSA</b>	O	O	O	O	O	X					
<b>POLICÍA</b>	O	O		O		O	O				
<b>BOMBEROS</b>		O		O	O	O	O				
<b>CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL</b>		O	O								
<b>EMERGENCIAS</b>	O	O	O	O	O	O	O				

O adecuada X tolerable

SERVICIOS MORTUORIOS

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>CEMENTERIO</b>		O	O	X							
<b>MAUSOLEOS</b>		O	O	X							
<b>AGENCIAS DE INHUMACIONES Y FUNERARIAS</b>				O		O	O				

O adecuada X tolerable

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>	O	O	O	O		O	O				
<b>TRANSPORTES AÉREOS</b>	O	O		O	O						
<b>COMUNICACIONES</b>	O	O		O		O	O				

O adecuada X tolerable

#### INDUSTRIA

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>INDUSTRIA PESADA</b>	O	O	O	X	X						
<b>INDUSTRIA LIGERA</b>	O	O	O	O	O	O	O				
<b>AGROINDUSTRIA</b>	O	O	O								

O adecuada X tolerable

#### ESPACIOS ABIERTOS

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>PLAZAS Y EXPLANADAS</b>				X	O	O	O			O	O
<b>JARDINES Y PARQUES</b>	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O

O adecuada X tolerable

**INFRAESTRUCTURA**

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES</b>		O	O	O	O	O	O				
<b>TORRES Y ANTENAS</b>	O	O	O	O	O	O	O				
<b>DEPÓSITOS Y ALMACENES</b>		O	O	O		X					
<b>CÁRCAMOS Y BOMBAS</b>		O	O	O		X	O				
<b>TALUDES, BORDOS Y RETENES</b>	O	O	O	O	O	O	O			O	O
<b>BASUREROS</b>		O	O	O	O						

O adecuada X tolerable

**EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y PISCICULTURA**

	INTERURBANA			URBANA							
	autopista	carretera	camino rural	acceso controlado c/lateral	acceso controlado s/lateral	primaria	secundaria o colectora	local	cerrada	ciclovia	andador
<b>AGRÍCOLA INTENSIVO</b>	O	O	O	X	X						
<b>AGRÍCOLA EXTENSIVO</b>	O	O	O	X	X						
<b>PECUARIO</b>	O	O	O	X	X						
<b>FORESTAL</b>	O	O	O	X	X						
<b>PISCICULTURA</b>	O	O	O	X	X						

O adecuada X tolerable

**ARTÍCULO 179.** El tipo y características técnicas del pavimento a emplearse en vías públicas se determinarán con base en su función dentro de la estructura e imagen urbana y a la intensidad del tránsito y pesos vehiculares considerando:

- I. Las especificaciones técnicas necesarias en sus pavimentos bases y sub-bases, que cumplan con la vida útil establecida en el diseño del pavimento;
- II. Los estudios geotécnico y de mecánica de suelos de las terracerías de sub-rasante y sub-yacente, que servirán de apoyo de cimentación de la estructura de pavimento flexible o rígido, y
- III. Que se permita el desalojo rápido de las aguas superficiales, sin que afecten a guarniciones, redes de instalaciones, banquetas y construcciones colindantes.

Se privilegiará el uso de pavimentos ecológicos en calles primarias, secundarias, cerradas y en áreas para estacionamiento de todo tipo de fraccionamiento.

**ARTÍCULO 180.** Los espesores y resistencias mínimas del pavimento, estarán dados, en áreas urbanas, por las normas técnicas de la autoridad municipal; y en áreas no urbanas por las normas técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

Las terracerías se formarán con material adecuado, preferentemente de la localidad, siguiendo los procedimientos constructivos, la calidad y normas que exija la autoridad competente.

Previo a los trabajos de pavimentación se deberán instalar las redes de agua potable y alcantarillado con las tomas y descargas correspondientes, como mínimo.

## **TÍTULO DÉCIMO PRIMERO INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL**

### **Capítulo Único Regulación del Espacio Público**

**ARTÍCULO 181.** La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los órdenes de gobierno estatal y municipal, por lo que en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los Centros de Población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

**ARTÍCULO 182.** Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas, definirán la dotación de espacio público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Privilejarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas.

**ARTÍCULO 183.** Los programas municipales incluirán los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio público y para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los programas y la operación y funcionamiento de dichos espacios y entre otras acciones, las siguientes:

- I. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, atendiendo las normas nacionales y estatales en la materia;
- II. Crear y defender el Espacio Público, la calidad de su entorno y las alternativas para su expansión;
- III. Definir las características del Espacio Público y el trazo de la red vial de manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la movilidad y su adaptación a diferentes densidades en el tiempo;
- IV. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos de interés público o social en cada barrio con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de salud, espacios públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes, y

- V. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación del espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso definido.

Los municipios serán los encargados de velar, vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público.

**ARTÍCULO 184.** El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a lo siguiente:

- I. Prevalecerá el interés general sobre el particular;
- II. Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute;
- III. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todas las personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y conexión entre barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social;
- IV. En el caso de los bienes de dominio público, éstos son inalienables;
- V. Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas nacionales y estatales en la materia;
- VI. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no podrán ser destinados a otro uso;
- VII. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del Espacio Público solo confiere a sus titulares el derecho sobre la ocupación temporal y para el uso definido;
- VIII. Se promoverá la adecuación de los reglamentos municipales que garanticen comodidad y seguridad en el espacio público, sobre todo para los peatones, con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables;
- IX. Se deberán definir los instrumentos, públicos o privados, que promuevan la creación de espacios públicos de dimensiones adecuadas para integrar barrios, de tal manera que su ubicación y beneficios sean accesibles a distancias peatonales para sus habitantes;
- X. Se establecerán los lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los Centros de Población asegure su continuidad, procurando una cantidad mínima de intersecciones, que fomente la Movilidad, de acuerdo a las características topográficas y culturales de cada región;
- XI. Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen urbana, la Conservación de los monumentos y el paisaje y mobiliario urbano, y
- XII. En caso de tener que utilizar suelo destinado a espacio público para otros fines, la autoridad tendrá que justificar sus acciones para dicho cambio en el uso de suelo, además de sustituirlo por otro de características, ubicación y dimensiones similares.

Los municipios vigilarán y protegerán la seguridad, integridad, calidad, mantenimiento y promoverán la gestión del Espacio Público con cobertura suficiente.

**ARTÍCULO 185.** Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del Espacio Público.

**ARTÍCULO 186.** Los programas que implementen acciones de densificación, establecerán una dotación suficiente de espacios públicos por habitante y conectividad con base en las normas aplicables, por medio de la adquisición y habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del polígono sujeto a densificación.

**ARTÍCULO 187.** Los predios que con base en la normatividad aplicable, los fraccionadores y desarrolladores estén obligados a ceder al municipio para ser destinados a áreas verdes y

equipamientos, no puedan ser residuales, estar ubicados en zonas inundables o de riesgos, o presentar condiciones topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto urbano.

**ARTÍCULO 188.** Las autoridades estatales y municipales otorgarán en las acciones derivadas de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, las facilidades urbanísticas y arquitectónicas en la infraestructura, equipamiento y servicio, acordes a las necesidades de las personas con discapacidad, aplicando las disposiciones normativas generales de diseño e imagen urbana, emitidas a favor de dichas personas.

**ARTÍCULO 189.** En cualquier recinto en que se presenten espectáculos públicos, los administradores y organizadores deberán establecer espacios reservados para personas con discapacidad, que no puedan ocupar las butacas o asientos ordinarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

## **TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO**

### **Capítulo I Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano y la Vivienda**

**ARTÍCULO 190.** Se declaran de utilidad pública e interés social, las acciones, obras e inversiones, que ejecuten los gobiernos estatal y municipales, a efecto de adquirir reservas territoriales que satisfagan las necesidades de suelo urbano para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, seguridad jurídica en la tenencia y protección del patrimonio familiar.

**ARTÍCULO 191.** La ejecución de acciones para la obtención de reservas de suelo para desarrollo urbano y la vivienda y para la regularización de la tenencia de la tierra, deberá atender problemas conexos, como la falta o insuficiencia de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y establecer un mayor control catastral y registral de las propiedades.

Los particulares y desarrolladores que obtengan contratos o concesiones para construir vivienda en dichas zonas, deberán integrar a sus proyectos de desarrollo la cobertura de equipamiento urbano del entorno.

**ARTÍCULO 192.** El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, administrarán sus respectivas reservas territoriales, previendo los instrumentos y acciones de planeación urbana y protección ecológica, a fin de destinar dichas reservas a los programas que consideren pertinentes, como son los de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, regularización de la tenencia de la tierra y vivienda.

Las acciones, obras e inversiones que realicen el gobierno estatal y municipales en materia de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, se sujetarán a lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como de vivienda.

**ARTÍCULO 193.** Se establece el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, como el mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de concertación con los sectores social y privado, a fin de determinar, aportar y adquirir el suelo y las reservas territoriales que se requieran para ordenar y regular el actual desarrollo y futuro crecimiento de los centros de población de la Entidad.

Las reservas territoriales que se requieran para ordenar y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la Entidad, se determinarán con base en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como de vivienda.

**ARTÍCULO 194.** El Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, tendrá por objeto:

- I. Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de suelo para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda;
- II. Evitar la especulación en el mercado inmobiliario y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano, para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población;
- III. Prevenir, evitar y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas, mediante la oferta de la tierra urbana que atienda, preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;
- IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los distintos usos y destinos que señalen los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de manera sostenible
- V. Asegurar la conservación de suelo para la infiltración del agua y la protección de reservas acuíferas;
- VI. Integrar la información sobre los inventarios, requerimientos y disponibilidad de inmuebles para el desarrollo urbano e industrial, el ordenamiento territorial y la vivienda;
- VII. Articular los estudios y la programación de acciones que en materia de suelo urbano y reservas territoriales se deriven de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;
- VIII. Establecer normas para la adquisición, aprovechamiento, aportación y transmisión de suelo urbano y de reservas territoriales, y
- IX. Planear e integrar las acciones, obras e inversiones de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que requieran el desarrollo del suelo urbano y las reservas territoriales.

**ARTÍCULO 195.** Los gobiernos estatal y municipales, deberán clasificar e inventariar las reservas territoriales que administren, a fin de orientar el crecimiento urbano hacia las áreas más adecuadas, de acuerdo con la potencialidad y capacidad de aprovechamiento sustentable del suelo y tomando en cuenta la disponibilidad de agua y energía, dentro del marco de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 196.** A efecto de racionalizar las obras e inversiones destinadas a la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en las reservas territoriales, se deberán realizar los programas parciales conducentes para programar su ocupación y aprovechamiento por etapas.

**ARTÍCULO 197.** La determinación de reservas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contendrá la delimitación de las áreas de expansión futura del centro de población y sus etapas de incorporación al área urbana y deberán considerar la participación de las autoridades estatales y municipales en la incorporación de áreas o predios de la reserva de suelo y los mecanismos para la adquisición o aportación por parte de los sectores público, social y privado de predios destinados a dicho fin, a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades de tierra para el Crecimiento de los Centros de Población.

**ARTÍCULO 198.** Una vez que los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sean publicados e inscritos en los registros correspondientes, los predios ubicados en las zonas de reserva, se utilizarán por sus propietarios en forma que no presente obstáculo al futuro aprovechamiento determinado por el programa correspondiente.



En igualdad de circunstancias, se comprenderán preferentemente terrenos que no sean de propiedad ejidal o comunal. Cuando se haga necesaria la utilización parcial o total de la reserva, se expedirá un programa parcial de desarrollo urbano que regule las acciones y utilización del área de que se trate. En el caso de áreas ejidales y comunales, se promoverán las expropiaciones o aportaciones correspondientes, en los términos de las leyes Agraria y General de Asentamientos Humanos.

**ARTÍCULO 199.** Las zonas de reserva deberán mantenerse inalterables, en tanto no se expidan las normas de planificación urbana correspondientes, que determinen el aprovechamiento que podrá otorgarse al suelo.

Igualmente, deberán mantenerse inalterables las áreas no urbanizables de los centros de población, durante el término que fije el programa de desarrollo urbano respectivo, que en ningún caso será menor de cinco años.

**ARTÍCULO 200.** Corresponde al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, en coordinación con la Federación y con los sectores social y privado, realizar las acciones que agilicen la adquisición o manejo de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social, popular y económica y para la ejecución de obras públicas.

**ARTÍCULO 201.** La Secretaría en coordinación con las entidades estatales competentes en materia de vivienda y regularización de la tenencia de la tierra urbana, así como los ayuntamientos o sus Institutos Municipales o Metropolitanos de Planeación Urbana, efectuará a través del Instituto Estatal de Planeación cuando éste se encuentre constituido o por sí, los estudios necesarios, a fin de determinar las necesidades que existen en el Estado de suelo urbano y reservas territoriales para ser canalizadas al desarrollo urbano y a la construcción de vivienda, tomando en cuenta los requerimientos presentes y los del futuro inmediato, los que servirán de base para su adquisición y urbanización. Asimismo, formulará un inventario de terrenos que puedan ser aprovechados en programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de vivienda, con base en las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento urbano y la posibilidad de introducción de servicios públicos, con el menor costo y tiempo posible.

**ARTÍCULO 202.** Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, podrán adquirir y enajenar terrenos destinados a la realización de las estrategias y acciones derivadas de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para la industria y la vivienda, previa autorización de la Secretaría, cumpliendo con los requisitos siguientes:

- I. Que en el programa operativo anual autorizado se prevea la enajenación, aportación o adquisición;
- II. Que existan los medios de financiamiento necesarios;
- III. Que haya la disponibilidad de servicios públicos, infraestructura y equipamiento, y
- IV. Que las acciones sean compatibles con lo establecido en los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda y las disposiciones que regulan el aprovechamiento sustentable del suelo.

La enajenación de terrenos con los fines descritos, requerirá además de la autorización del Congreso del Estado, de conformidad con los artículos 57 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

Los ayuntamientos vigilarán la adquisición de suelo urbano y reservas territoriales, por parte de dependencias y entidades municipales, a fin de programar y financiar su manejo.

**ARTÍCULO 203.** Los apoyos e instrumentos que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos establezcan en materia de suelo y reservas territoriales para la vivienda, se orientarán preferentemente:

- I. A la promoción de obras para que los habitantes del Estado tengan una vivienda digna y adecuada;
- II. A la regulación del mercado de los terrenos y de los inmuebles dedicados a la vivienda de interés social y popular, a fin de evitar su especulación;
- III. A asegurar la disponibilidad del suelo y reservas territoriales para la ejecución de acciones habitacionales, cuidando que dichas reservas no sean de alto valor ambiental o importantes para la captación y descarga de agua pluvial, y
- IV. A facilitar los trámites expropiatorios de terrenos destinados a satisfacer necesidades de tierra para vivienda de interés social y popular.

**ARTÍCULO 204.** El Ejecutivo Estatal, previa autorización de la Legislatura del Estado, podrá transferir áreas o predios propiedad del Estado a los municipios, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a la Federación y a las organizaciones sociales y privadas, que tengan como objetivo la realización de acciones de desarrollo urbano, industrial y de vivienda de interés social y popular, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

- I. Que el aprovechamiento de los inmuebles sea compatible con los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda y con las disposiciones que regulan el uso o destino del suelo;
- II. Que las áreas o predios sean aptos para la ejecución de las acciones de vivienda o de desarrollo urbano e industrial;
- III. Contar con un proyecto financiero en el que se establezcan los recursos económicos disponibles y su vinculación con las acciones de desarrollo urbano e industrial y de vivienda, y
- IV. Cumplir con los requisitos señalados en esta Ley, en la normatividad para fraccionamientos o condominios y demás disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 205.** La transferencia o enajenación de inmuebles propiedad del Estado o de los municipios, para la ejecución de programas de desarrollo urbano e industrial y de vivienda, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, y requerirán de autorización previa de la Legislatura del Estado.

**ARTÍCULO 206.** La asignación o enajenación de suelo para vivienda de interés social y popular, de propiedad estatal o municipal, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Dirigirse a la población con ingresos máximos de hasta cinco veces el salario mínimo general del Estado, dando preferencia a las personas con más bajos ingresos;
- II. El tamaño de los lotes o predios para la vivienda de interés social y popular, deberá cumplir con las normas mínimas de habitabilidad y seguridad, y
- III. El precio máximo de enajenación deberá corresponder al ingreso de los beneficiarios.

**ARTÍCULO 207.** El Gobierno del Estado y los ayuntamientos otorgarán facilidades administrativas y fiscales, a efecto de agilizar y reducir el costo y los trámites de titulación de inmuebles para vivienda de interés social y popular.

Las autoridades a que se refiere el párrafo anterior, podrán celebrar para los fines antes señalados, convenios de coordinación y concertación con la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, notarios públicos, instituciones de crédito, organismos públicos de vivienda, valuadores, promotores y agentes inmobiliarios.

## **Capítulo II**

### **Regulaciones para el Suelo Proveniente del Régimen Agrario**

**ARTÍCULO 208.** El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General, en la Ley Agraria, en esta Ley, en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de áreas y predios.

Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones de esta Ley y a la zonificación contenida en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables. En estos casos, se requiere la autorización del ayuntamiento en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

**ARTÍCULO 209.** La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser necesaria para la ejecución de un programa de Desarrollo Urbano;
- II. Las áreas o predios que se incorporen deberán cumplir lo establecido en la definición de área urbanizable contenida en la fracción II del artículo 3º de esta Ley;
- III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, así como para la construcción de vivienda, y
- IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos correspondientes.

**ARTÍCULO 210.** En los casos de suelo y Reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, provenientes del dominio federal, la enajenación de predios que realicen la Federación, las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y de las Demarcaciones Territoriales, o sus entidades paraestatales, estará sujeta a la legislación aplicable en materia de vivienda.

**ARTÍCULO 211.** La constitución de reservas territoriales en centros de población, que cuenten con áreas ejidales o comunales aptas para el desarrollo urbano, se establecerá mediante la determinación de reservas, de conformidad a lo dispuesto en esta Ley, en la legislación agraria aplicable y en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 212.** Se coordinarán las acciones del Estado con los demás órdenes de gobierno, para establecer la congruencia de las políticas agrarias con los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, relativas a la expropiación o aportación de terrenos ejidales y comunales, así como para el establecimiento de las zonas de urbanización ejidal y de reserva.

### **Capítulo III** **Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica**

**ARTÍCULO 213.** Se considera de interés público y prioritario, el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, tendentes a la regularización de los asentamientos humanos en la Entidad, como acciones de mejoramiento de los centros de población.

**ARTÍCULO 214.** Cualquier enajenación de predios que realicen las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatales o municipales a los particulares, para efectos de regularización de predios, de acuerdo con esta Ley, estará sujeta a las siguientes normas:

- I. Que el solicitante o su cónyuge, no sea propietario de casa habitación o de terreno en la localidad;
- II. Las condiciones de pago se determinarán en atención al ingreso de los solicitantes, previo estudio socioeconómico;
- III. El solicitante deberá cubrir ante los organismos regularizadores el costo inherente a la escrituración y demás gastos que genere el proceso de regularización, el cual será fijado por dichos organismos atendiendo a las características específicas del proceso de regularización correspondiente;
- IV. La superficie deberá corresponder al lote o predio tipo o de tamaño promedio del centro de población, según la legislación y programas de desarrollo urbano aplicables;
- V. Cuando el solicitante contrate a plazos, el crédito se otorgará a la tasa de interés que para vivienda de interés social, económica y popular fijen las autoridades competentes, y
- VI. Cumplir con las normas de planeación urbana y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 215.** El precio de los lotes y predios, se determinará de manera independiente de los costos y precios de las urbanizaciones, de los servicios específicos y de la edificación.

**ARTÍCULO 216.** La regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a las siguientes normas:

- I. Se deberá proceder conforme al programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicable, en la ejecución de acciones de mejoramiento;
- II. Sólo podrán ser beneficiarios de la regularización, quienes siendo mayores de edad, ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe, de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y
- III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio, cuya superficie no podrá ser mayor de la extensión determinada por la legislación y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 217.** La Secretaría y los ayuntamientos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, debiendo adoptar para tal efecto, las medidas de seguridad, así como imponer las sanciones administrativas que establece el mismo, independientemente de los ilícitos en que se hubiere incurrido.

La existencia de asentamientos humanos irregulares, o la gestación de éstos, podrán ser denunciados ante la Promotora del Estado o a los ayuntamientos por cualquier persona, a efecto de que dichas autoridades procedan a coordinar las acciones administrativas correspondientes y promover las denuncias penales ante las autoridades competentes, en contra de los vendedores de áreas, lotes o predios al margen de la ley o de quienes resulten responsables.

**ARTÍCULO 218.** Tratándose de asentamientos humanos irregulares, ubicados en predios ejidales o comunales, se procederá conforme a lo previsto en esta Ley y en la Ley Agraria.

**ARTÍCULO 219.** El ayuntamiento respectivo, en coordinación con la Secretaría y la Promotora del Estado, al tener conocimiento de un asentamiento humano irregular o la formación de éste, procederá a la suspensión de cualquier obra y/o venta de predios que se realicen ilícitamente, fijando en lugares públicos y visibles, copias del ordenamiento que disponga tal situación, el cual deberá estar fundamentado en las disposiciones de esta Ley, así como publicado como advertencia pública en un diario de mayor circulación de la localidad y notificarse al Instituto Registral y Catastral del Estado, así como a la Dirección del Notariado y al Colegio de Notarios a fin de que no inscriban ni lleven a cabo ningún acto, contrato o convenio derivado de la propiedad o posesión de inmuebles ubicados en ese asentamiento humano.

El incumplimiento de lo señalado en el párrafo inmediato anterior será causa de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que procedan.

**ARTÍCULO 220.** En el caso de que el asentamiento humano irregular se encuentre en terrenos ejidales o comunales, y que estos terrenos o áreas estén contempladas como aptas para el uso habitacional, así como el que su regularización e incorporación al desarrollo urbano represente un beneficio social y público, el ayuntamiento respectivo, en coordinación con la Secretaría, analizará tal situación, y promoverá en su caso, la solicitud de expropiación o aportación de dicho predio, para su regularización ante las autoridades competentes.

**ARTÍCULO 221.** El organismo estatal regularizador o el ayuntamiento respectivo expedirán un dictamen de la posibilidad de regularización de un asentamiento humano, previo a la expropiación o aportación en su caso, el cual deberá contener:

- I. La factibilidad jurídica;
- II. La factibilidad técnica urbanística, evitando el asentamiento en zonas no urbanizables o de riesgo;
- III. La viabilidad de introducción de infraestructura, equipamiento y servicios a costos razonables;
- IV. Su liga con la traza urbana;
- V. La representación de un beneficio social y público, y
- VI. La congruencia con esta Ley y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables.

**ARTÍCULO 222.** En caso de ser negativo el dictamen de regularización a que se refiere el artículo anterior, por encontrarse el asentamiento de que se trate en zonas de alto riesgo, zonas de reserva ecológica, de recarga del acuífero, dentro de derechos de vía, de propiedad pública de uso común y demás zonas no aptas para vivienda, se procederá al inmediato desalojo del asentamiento humano, independientemente de las sanciones civiles, administrativas o penales a que se hagan acreedores los asentados y/o promotores de dicho asentamiento, o en los casos en que proceda, a su reubicación.

**ARTÍCULO 223.** Una vez que las autoridades competentes hayan ejecutado el decreto expropiatorio del predio a regularizar, o en su caso obtenido la aportación del mismo por parte del dueño a favor del Estado, se solicitará ante el ayuntamiento respectivo, la autorización de fraccionamiento por regularización.

**ARTÍCULO 224.** Los ayuntamientos en coordinación con la Secretaría, solicitarán a las dependencias o entidades competentes del Gobierno Federal, la constitución de las zonas de urbanización ejidal en todos y cada uno de los ejidos del Estado que lo requieran, así como la regularización de la tenencia de la tierra ejidal, de conformidad con los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

**ARTÍCULO 225.** La regularización de la tenencia de la tierra como una acción de mejoramiento urbano, deberá considerar la ejecución por cooperación de las obras de infraestructura, equipamiento o servicios urbanos que requiera el asentamiento humano correspondiente.

#### **Capítulo IV Derecho de Preferencia**

**ARTÍCULO 226.** El Estado y los municipios tendrán en los términos de las leyes federales y estatales correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva territorial, para destinarlos preferentemente a la constitución

de Espacio Público, incluyendo el suelo urbano vacante dentro de dicha reserva, señaladas en los programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso.

Para tal efecto, los propietarios de los predios, los notarios públicos, los jueces y las autoridades administrativas respectivas, deberán notificarlo a la Secretaría y al municipio correspondiente, dando a conocer el monto de la operación, a fin de que en un plazo de treinta días naturales, ejerzan o no el derecho de preferencia, garantizando en su caso el pago respectivo.

**ARTÍCULO 227.** Los gobiernos de los municipios y del Estado, cuando se justifique a través de un proyecto de interés público o de beneficio social, tendrán derecho de preferencia para adquirir predios comprendidos como reserva en los programas de desarrollo urbano, cuando dichos predios sean puestos a la venta o, a través de cualquier acto jurídico, vayan a ser objeto de una transmisión de propiedad; igual derecho de preferencia tendrán, en caso de remate judicial o administrativo, al precio en que se finque el remate al mejor postor. Para tal efecto, los propietarios de los mismos que deseen enajenarlos, los notarios públicos, los jueces y las autoridades administrativas deberán notificar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento correspondiente, dando a conocer el monto de la operación a fin de que aquellos, en un plazo no mayor de treinta días naturales, ejerzan o no el derecho de preferencia, garantizando en su caso el pago respectivo.

En caso de que las autoridades no ejerzan o resuelvan sobre el ejercicio de su derecho de preferencia a que se refiere este artículo dentro del plazo señalado, se entenderá que no tienen inconveniente de que se realice la enajenación por parte de terceros.

**ARTÍCULO 228.** Cuando para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sea necesaria o de mayor beneficio social la ocupación de la propiedad, la autoridad competente por causa de utilidad pública, proveerá la expropiación de la misma, de conformidad con las leyes de la materia que fueren aplicables.

## **Capítulo V Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios**

**ARTÍCULO 229.** El gobierno del Estado y los municipios podrán mediante Declaratoria, establecer polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones de los programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.

El Estado y los municipios determinarán en la propia declaratoria los mecanismos de adquisición directa por vías de derecho público o privado o mediante enajenación en subasta pública del suelo comprendido en la declaratoria, para los casos en que los propietarios no tengan capacidad o se nieguen a ejecutar las acciones urbanísticas señaladas en los plazos establecidos, asegurando el desarrollo de los proyectos.

## **Capítulo VI Reagrupamiento Parcelario**

**ARTÍCULO 230.** Para la ejecución de los programas de Desarrollo Urbano, el Estado y los municipios, podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios. Los predios reagrupados podrán conformar polígonos de actuación a fin de lograr un Desarrollo Urbano integrado y podrán aprovechar los

incentivos y facilidades contempladas en esta Ley para la ocupación y aprovechamiento de áreas, polígonos y predios baldíos, subutilizados y mostrencos.

Una vez ejecutada la Acción Urbanística, los propietarios e inversionistas procederán a recuperar la parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser en tierra, edificaciones o en numerario, de acuerdo a los convenios que al efecto se celebren.

**ARTÍCULO 231.** El reagrupamiento de predios a que alude el artículo inmediato anterior, se sujetará a las siguientes normas:

- I. Cumplir con las determinaciones del Programa de Desarrollo Urbano y contar con un dictamen de impacto urbano;
- II. La administración y desarrollo de los predios reagrupados se realizará mediante fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o instrumento legal que garantice la distribución equitativa de beneficios y cargas que se generen, la factibilidad financiera de los proyectos y la transparencia en su administración;
- III. La habilitación con infraestructura primaria y, en su caso, la urbanización y la edificación se llevará a cabo bajo la responsabilidad del titular de la gestión común;
- IV. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que hayan sido construidas las obras de habilitación con infraestructura primaria, salvo en los casos en que se trate de proyectos progresivos autorizados con base en la legislación vigente, y
- V. La distribución de cargas y beneficios económicos entre los participantes se realizará con base en un estudio de factibilidad financiera, que formulará el promovente del reagrupamiento de predios.

## **Capítulo VII** **Sistema de Información Territorial y Urbano**

**ARTÍCULO 232.** Se crea el Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU), el cual tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores, seguimiento, monitoreo y evaluación sobre el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en el Estado, estará disponible para su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros registros e inventarios sobre el territorio.

El SITU deberá permitir el intercambio e interoperabilidad de la información e indicadores que produzcan las autoridades estatales y municipales, e instancias de gobernanza metropolitana, relacionada con los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como lo relativo a las zonas metropolitanas, incluyendo las acciones, obras e inversiones en el territorio.

**ARTÍCULO 233.** El SITU estará a cargo de una Comisión formada por:

- I. El Instituto Registral y Catastral del Estado que lo presidirá;
- II. La Secretaría;
- III. La SEGAM;
- IV. La Comisión Estatal del Agua;
- V. Los organismos operadores de agua metropolitanos y municipales;
- VI. El Sistema de Información Geográfica Estatal a cargo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), El Sistema de Información Territorial y Urbano tendrá la función de ofrecer la información oficial al nivel de desagregación y escala que se requiera;
- VII. Los municipios del Estado, a través de sus autoridades catastrales, de desarrollo urbano y de protección civil;
- VIII. Los institutos estatal, metropolitanos y municipales de planeación que establece esta Ley;
- IX. Las delegaciones de las Secretarías e Instituciones Federales relacionadas con la materia;

- X. Las representaciones de los colegios registrados de arquitectos e ingenieros en sus diversas ramas; de topógrafos; hidrólogos, ambientalistas, especialistas en Geomática y Geoinformática entre otros, asociaciones, cámaras e instituciones y organizaciones de los sectores social y privado que existan en el Estado relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, a fin de que aporten la información que generan;
- XI. Los observatorios urbanos que existan y operen de conformidad con lo previsto en esta Ley;
- XII. Las instituciones académicas públicas y privadas relacionadas con la materia, a fin de que aporten la información que generan, y
- XIII. Las demás autoridades e instituciones que generen información en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

**ARTÍCULO 234.** Será obligatorio para todas las autoridades estatales y municipales, proporcionar la información que generen en esta materia en el SITU, a través de la plataforma electrónica del mismo. Dicha información deberá ser verificada y aprobada por la instancia que corresponda, en los casos que determine el Reglamento.

El acceso a la plataforma electrónica a través de la cual se alimente el SITU deberá ser proporcionada a los entes obligados, por el Instituto Registral y Catastral del Estado. La falta de cumplimiento de los servidores públicos, de integrar la información de conformidad con los tiempos que determine el reglamento, serán sujetos de las responsabilidades administrativas que establece la ley.

**ARTÍCULO 235.** La Plataforma de información del SITU deberá contener cuando menos:

- I. El Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado y los programas que deriven de éste;
- II. Los planes o programas de ordenamiento ecológico del Estado;
- III. Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
- IV. Planos cartográficos autorizados estatal y municipales, relacionados con el ordenamiento territorial;
- V. Los Atlas de riesgos estatales y municipales;
- VI. Los asentamientos humanos irregulares;
- VII. Las declaratorias de áreas naturales protegidas;
- VIII. La densificación actual del uso de suelo de los centros de población;
- IX. Las coberturas de amortiguamiento ambiental en los centros de población;
- X. El grado de afectación multi-temporal de la contaminación atmosférica de los centros de población, y
- XI. Los informes y documentos relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier índole en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano derivados de trabajos de personas morales o físicas, nacionales o extranjeras.

**ARTÍCULO 236.** Las autoridades de los estatales y municipales de gobierno deberán incorporar en sus informes de gobierno anuales, un rubro específico relacionado con el avance en el cumplimiento de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, así como en la ejecución de los proyectos, obras, inversiones y servicios planteados en los mismos.

### **Capítulo VIII**

#### **Registro Estatal y Registros Municipales de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, para la Función Pericial Urbanística y la Supervisión de Obras.**

**ARTÍCULO 237.** Los ayuntamientos serán responsables, del registro y organización de los Directores Responsables de Obra, Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación y



demás peritos requeridos según la obra de que se trate, así como de vigilar su correcto desempeño y dar fe de su idoneidad profesional y pericial mientras esté vigente su inscripción registral.

Los Directores Responsables de Obra, Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación y demás peritos requeridos según la obra de que se trate, serán responsables solidarios de la ejecución de los proyectos, memorias de cálculo y edificación de las obras en las que hayan otorgado responsiva.

**ARTÍCULO 238.** Cada Municipio establecerá un Registro de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, tanto públicos como privados, que tendrá por objeto inscribir clasificadamente los nombres de las personas físicas habilitadas para el desempeño en el Municipio de las funciones que establecen esta Ley y los reglamentos correspondientes.

**ARTÍCULO 239.** Para inscribirse en los registros municipales como Directores Responsables de Obra, o Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, los profesionistas deberán estar avalados por la Comisión Estatal de Admisión, Evaluación y Certificación de Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables.

La referida Comisión se integrará de la siguiente manera:

- I. Un representante del Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
- II. Cuatro representantes de cada una de las regiones del Estado, que serán designados respectivamente por los Cabildos de los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, y
- III. Un representante de cada uno de los colegios de arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos electricistas, geomáticos y geoinformáticos, edificadores, topógrafos, y demás relacionados con la materia, que se encuentren registrados legalmente en el Estado ante la autoridad educativa competente.

**ARTÍCULO 240.** La Comisión tendrá por objeto la capacitación, evaluación y certificación de la experiencia y conocimiento de las personas físicas profesionales del ramo de la construcción, así como su acreditación ante los municipios como Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables.

La Comisión para otorgar la certificación a los profesionistas que soliciten su Registro o su Refrendo como Directores Responsables de Obra o Especialistas Corresponsables, promoverá y verificará el cumplimiento del requisito de experiencia, conocimiento, capacitación y actualización profesional permanente.

Los Colegios de Profesionistas que integran la Comisión, serán los encargados de capacitar, evaluar y certificar a sus agremiados y en general a los profesionistas en el ramo, sobre los alcances y contenidos de los Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, las características geológicas, de riesgos urbanos y las características territoriales del Estado y sus municipios y demás temas relacionados con la gestión urbana y el ordenamiento territorial y la construcción sostenible de obras; así como sobre las Leyes, reglamentos y normas técnicas aplicables y relacionadas con su actividad profesional.

Para llevar a cabo la capacitación, actualización profesional y certificación de los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables, los Colegios de Profesionistas podrán firmar convenios de colaboración, vinculación y coordinación entre los mismos, para establecer mecanismos

financieros que les permitan la obtención de recursos económicos adicionales para destinarlos a los fines del Consejo.

**ARTÍCULO 241.** La Comisión celebrará una sesión ordinaria cuando menos una vez cada mes y las extraordinarias que sean necesarias a juicio de su presidente o de cuando menos cuatro de sus miembros. Las sesiones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad.

**ARTÍCULO 242.** La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Verificar que las personas aspirantes a obtener el Registro cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y el Reglamento de la Comisión.
- II. Otorgar el Visto Bueno para el Registro en los municipios de los profesionales que hayan cumplido con lo establecido en los preceptos señalados en la ley y el Reglamento.
- III. Emitir opinión y Recomendaciones sobre las actuaciones de los D.R.O. a las autoridades de la Dirección municipal;
- IV. Vigilar cuando lo considere conveniente, la actuación de los D.R.O. durante el proceso de ejecución de las obras para las cuales hayan sido extendido su responsiva;
- V. Solicitar la cancelación del Registro de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, por la comisión de violaciones graves e irreparables de las licencias o autorizaciones que les fueron otorgadas o violaciones graves a la presente Ley, o cuando concurren las causas que establece el artículo 253 de este Ordenamiento;
- VI. Proponer a través de los Colegios de Profesionistas los aranceles profesionales de los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables para la prestación de sus servicios profesionales. Dichos aranceles deberán de ser actualizados y publicados una vez que fueron aprobados por la Comisión en el Periódico Oficial del Estado.
- VII. Proponer y autorizar la Plataforma Digital, los instrumentos tecnológicos de control y aplicaciones necesarias para llevar a cabo el registro de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsable y las obras que cada profesionista tenga bajo su responsabilidad; dicha plataforma e instrumentos tecnológicos deberán tener acceso libre mediante claves o contraseña para cada Colegio de Profesionistas que integran la Comisión;
- VIII. Proponer y promover el desarrollo institucional, sistemas de información e instrumentos de fomento, mediante la operación y seguimiento de una plataforma digital, software o sistema electrónico, así como los instrumentos tecnológicos de control como la bitácora electrónica y otras aplicaciones digitales necesarias para llevar a cabo el registro y seguimiento de permisos de construcción, de uso de suelo y de alineamiento y número oficial por vía electrónica de las obras, edificaciones y construcciones tanto públicas como privadas que se lleven a cabo en los municipios del Estado, integrando a esta Plataforma el Registro Estatal y Padrón Municipal de los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsable en el Estado de San Luis Potosí.
- IX. Levantar acta de cada sesión que celebre;

- X. Convocar a los miembros de la Comisión a las reuniones que celebre, procurando acompañarles el orden del día, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
- XI. Desahogar cuantas diligencias se consideren necesarias para el desempeño de sus atribuciones.
- XII. Designar a quienes conformarán los Subcomités Técnicos, de entre sus propios miembros, y
- XIII. Las demás que determine su Reglamento, acordes a su naturaleza y objeto.

**ARTÍCULO 243.** Para inscribir en sus respectivos registros municipales a los Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables, la Dirección Municipal respectiva, deberá verificar que éstos cuenten con el aval de la Comisión Estatal de Admisión, Evaluación y Certificación de Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables.

**ARTÍCULO 244.** La Comisión otorgará el aval para fungir como Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

- I. Acreditar el cumplimiento de los requisitos que establece para cada caso la Ley Estatal de Peritos;
- II. Acreditar la pertenencia a un colegio de profesionista del rubro correspondiente, que se encuentre debidamente registrado ante la autoridad competente, u otorgar una fianza que cubra el porcentaje señalado por la comisión y a fin de proteger al receptor del servicio;
- III. Contar con la certificación expedida por la Subcomisión de Certificación, que podrá obtenerse por examen o por acreditación de tiempo de capacitación, de conformidad con las disposiciones del Reglamento respectivo, y
- IV. Cumplir los demás requisitos y presentar la documentación que en cada caso determine el Reglamento de la Comisión.

**ARTÍCULO 245.** Todos los aspirantes a Especialistas Corresponsables que sean Directores Responsables de obra y/o Especialistas Corresponsables deberán ser avalados por los Colegios que correspondan a su profesión y por la Comisión.

Los aspirantes a Especialistas Corresponsables que no pertenezcan a algún Colegio, deberán presentar su solicitud ante la Comisión, para ser evaluada. en este caso SI la Comisión así lo considera necesario, podrá solicitar al profesionista entregar un Seguro Anual de Responsabilidad Civil o una fianza de Responsabilidad Profesional por el ejercicio de sus actividades correspondientes a la responsiva que otorga como Director Responsable de Obra y/o Especialista Corresponsable.

Para el caso de los Especialistas Corresponsables, la Comisión otorgará su aval de manera automática a aquellos profesionistas que cuenten con Registro de Perito Dictaminador expedido por el Registro Estatal de Peritos en la materia para la cual soliciten registro como Especialista Corresponsable

**ARTÍCULO 246.** En caso de que algún Municipio no cuente con un Registro de Directores Responsables de Obra y de Especialistas Corresponsables, se auxiliará de los servicios de profesionales acreditados en el Registro Estatal, quedando a cargo de cada Municipio la supervisión y vigilancia de las obras respectivas.

**ARTÍCULO 247.** Se entiende por Director Responsable de Obra y en su caso Especialista Corresponsable, la persona física privada o pública, que, inscrita en el respectivo Registro Municipal, como representante de los particulares se encuentra habilitada para asumir la dirección y vigilancia de la elaboración de proyectos y/o de la ejecución de obras de edificación, instalaciones o urbanización, así como la que sólo desarrolle una actividad parcialmente vinculada con determinado proyecto, obra o servicio, responsabilizándose de que se realicen de acuerdo a los proyectos aprobados.

**ARTÍCULO 248.** La calidad de Director Responsable de Obra y en su caso de Especialista Corresponsable se adquiere por la correspondiente inscripción en el Registro de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, a través del procedimiento y cumplimiento de los requisitos que establece esta Ley, y deberá refrendarse cada dos años, siempre que cumpla con los requisitos señalados así como con su certificación vigente.

**ARTÍCULO 249.** El Registro Municipal de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación se organizará cumpliendo cuando menos con las siguientes normas:

I. Se dividirá en las secciones que se indican:

a. Sección Primera: Registro de Directores Responsables de Obra, tanto de de Construcción como de Urbanización, y

b. Sección Segunda: Registro de Especialistas.

II. En las secciones a que se refiere la fracción anterior, se inscribirán los Directores Responsables de Obra, titulados en las profesiones que se indican:

a. En la Sección Primera: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Militar y Licenciado en Edificación y Administración de Obras y demás carreras análogas que ampare el Sistema Educativo Nacional, y

b. En la Sección Segunda: Especialistas en seguridad estructural, urbanismo, diseño arquitectónico y urbano, impacto urbano, así como en instalaciones en edificios y obras de urbanización u otras análogas, y

III. La inscripción en el Registro tendrá vigencia de un año contado desde la fecha en que se practique y se renovará por plazos sucesivos iguales, siempre y cuando el director responsable de proyecto de obra o especialista acredite la actualización y adiestramiento en sus conocimientos profesionales. La inscripción podrá suspenderse o cancelarse cuando los directores incumplan algunas de las obligaciones establecidas en esta Ley, previa garantía de audiencia.

**ARTÍCULO 250.** Respecto de un proyecto, obra o peritaje determinado, el Director Responsable de Obra o Especialistas Corresponsable en Materia de Urbanización y Edificación, asumirá conforme a su especialidad, las funciones, obligaciones y responsabilidades conducentes, mediante alguno de los actos que a continuación se indican y en los cuales sea competente:

I. Contratos de prestación de servicios profesionales o cualquier otro acto, convenio, declaración, certificación o constancia que así lo acredite, otorgado por la persona física o moral que haya encargado la elaboración del proyecto y/o la ejecución de la obra y el director responsable de obra;

- II. La firma de los planos arquitectónicos, de diseño urbano, de instalaciones y estructurales de un proyecto u obra;
- III. La firma del proyecto de fraccionamiento, desarrollo en condominio o desarrollo inmobiliario especial y de sus obras de urbanización y edificación;
- IV. La suscripción de las solicitudes de licencias municipales de construcción;
- V. La suscripción de los dictámenes de estabilidad o seguridad de un inmueble, así como los manuales de operación y mantenimiento de edificios;
- VI. La firma de la solicitud de permiso para la habilitación y funcionamiento de las instalaciones y aparatos mecánicos de ferias, juegos, circos y demás establecimientos o instalaciones semejantes;
- VII. La suscripción del respectivo estudio de impacto urbano significativo o cualquier otro relativo a las materias de que trata esta Ley, y
- VIII. Cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 251.** Los directores responsables de obra o especialistas corresponsables en materia de urbanización y edificación deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- I. Dirigir y vigilar la elaboración del proyecto y/o de la ejecución de la obra, con la colaboración y corresponsabilidad de especialistas, si fuere el caso;
- II. Responder de la buena calidad de los materiales empleados en la obra e igualmente de la correcta ejecución de ésta, sin defectos ni vicios ocultos;
- III. Usar materiales y estrategias para aumentar la sostenibilidad y la resiliencia de la obra y optimizar el uso de recursos de energía y agua;
- IV. Adoptar las precauciones y medidas que fueren necesarias para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y terceros en general, y del mismo modo la seguridad y estabilidad de la vía pública y propiedades vecinas;
- V. Cumplir en las obras a su cargo todas las exigencias, observar las prohibiciones y respetar las limitaciones contempladas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- VI. Obtener de la Dirección Municipal correspondiente el acta de terminación de obra o proyecto respectivo, y
- VII. Actualizar anualmente sus conocimientos periciales, acreditando la certificación y participación en cursos o seminarios de capacitación y adiestramiento en las especialidades correspondientes, pudiendo ser a través de los respectivos Colegios de Profesionistas a que pertenezcan; el incumplimiento de esta obligación impedirá la revalidación de inscripción en el Registro Municipal de Directores de Obra.

**ARTÍCULO 252.** Los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación mientras no presenten a la Dirección Municipal por escrito el Aviso de Terminación de Obra, responderán por las adiciones o modificaciones a las obras ejecutadas al amparo de su Registro. Si la ejecución de la obra no corresponde al proyecto autorizado, se ordenará de inmediato su suspensión y se sancionará, sin perjuicio de que éste presente nuevos planos que

contemplan los cambios, solicitando su regularización ante la Dirección, salvo cuando las variaciones entre el proyecto y la obra, no comprometan las condiciones de estabilidad, destino e higiene.

**ARTÍCULO 253.** No se concederán Licencias o autorizaciones para nuevas obras a los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, mientras no subsanen las omisiones de que se trata en los siguientes casos:

- I. No refrendar su Registro en los términos establecidos en esta Ley;
- II. No cumplir con las disposiciones de la Dirección Municipal.
- III. No cumplir con el pago de las sanciones económicas impuestas por la violación del Reglamento de Construcción Municipal respectivo.
- IV. Cuando por causa fundada o reincidencia lo solicite el Colegio al que pertenezca, previo dictamen de la Comisión

**ARTÍCULO 254.** Los ayuntamientos a través de Dirección Municipal, una vez registrados en sus respectivos Registros, podrán negar el refrendo de dichos registros a los Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación, cuando se actualice cualquiera de las siguientes causas:

- I. Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos ó cuando dolosamente presente información equivocada ó falsa en la solicitud de Licencia o dictamen oficial;
- II. Cuando por inexperiencia, negligencia, dolo o falta de previsión o cuidado, se comprometa la seguridad, estabilidad o higiene de las obras;
- III. Cuando la Dirección compruebe que ha tramitado la obtención de Licencias o Permisos de obras, en las que no hubiera cumplido sus obligaciones o no esté participando como tal;
- IV. Cuando se compruebe la violación reincidente de las disposiciones de esta Ley y el Reglamento de Construcción Municipal respectivo;
- V. Cuando en la ejecución de una obra no se observe el cumplimiento de los Proyectos Ejecutivos autorizados en la Licencia o autorización;
- VI. La negativa reincidente a prestar facilidades para la práctica de visitas de inspección.
- VII. Cuando por sentencia ejecutoria se condene a un Director Responsable de Obra a cumplir una pena privativa de la libertad;
- VIII. Cuando por la violación de esta Ley y el Reglamento de Construcción municipal y demás disposiciones aplicables, se comprometa el equilibrio ecológico, la ejecución de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal o municipal y los programas que de éstos deriven o las Obras Públicas existentes, y
- IX. Las demás que se consideren graves.

**ARTÍCULO 255.** Las direcciones municipales, deberán remitir a la Secretaría la información sobre sus respectivos Registros de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación así como sobre el número y tipo de proyectos u obras que los

mismos tienen autorizados y vigentes, y sobre los que se les haya extendido la constancia de terminación de obra; información que deberán actualizar ante dicha dependencia durante los primeros cinco días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, para efectos de su integración al Registro Estatal de Directores Responsables de Obra y Especialistas Corresponsables en Materia de Urbanización y Edificación.

El referido Registro Estatal tendrá por objeto integrar la información cuantitativa y cualitativa de todos los municipios del Estado, sobre los registros otorgados a los Directores Responsables de Proyecto u Obras, para efectos de dar a conocer dicha información en el orden estatal, para su consulta pública a través del sitio web de la Secretaría.

**ARTÍCULO 256.** Los peritos en supervisión municipal de obras de urbanización y peritos en supervisión municipal de obras de edificación, deberán ser servidores públicos del Municipio respectivo en virtud de que realizan actos de autoridad, y no podrán fungir como Directores de Obra o Proyecto. Tales peritos deberán contar con la formación académica que les permita realizar sus funciones profesionalmente en la rama de supervisión que les corresponda y deberán contar con los mismos requisitos que establece la Ley de Peritos del Estado a los peritos registrados.

**ARTÍCULO 257.** Queda prohibido habilitar a los Directores de Obra o Especialistas como supervisores municipales de obras de urbanización y peritos en supervisión municipal de obras de edificación.

**ARTÍCULO 258.** Toda obra pública o privada que autorice la dirección municipal, deberá contar con un Director Responsable de Obra, y en los casos en que sea necesario de los especialistas o corresponsables de forma que se garantice la calidad, seguridad y cumplimiento de los estándares de calidad de las mismas.

## **TITULO DÉCIMO TERCERO CONTROL Y REGULACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN**

### **Capítulo I Licencia de Uso de Suelo**

**ARTÍCULO 259.** La licencia de uso de suelo es el documento expedido por la Dirección Municipal correspondiente, con base en lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a solicitud de una persona física o moral, pública o privada, en el cual se certifica que la acción, obra, inversión o servicio que se pretenda realizar es compatible con la legislación y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, señalando las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y aprovechamientos de las áreas o predio materia de la misma, las que deberán acatarse por el solicitante.

**ARTÍCULO 260.** Los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano procurarán en materia de uso de suelo:

- I. La asignación de usos del suelo y destinos compatibles, promoviendo la mezcla de usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial;
- II. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radiodifusión, en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables;

- III. El reordenamiento, renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;
- IV. La dotación de espacios públicos primarios, servicios, equipamiento o infraestructura, en áreas carentes de ellas, para garantizar en éstos acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en especial para mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad;
- V. Incluir la estructura vial primaria y la movilidad;
- VI. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los Centros de Población, y
- VII. La acción integrada del sector público que articule la regularización de la tenencia de tierra urbana con la dotación de servicios y satisfactores básicos dirigidos a integrar a la comunidad.

**ARTÍCULO 261.** Las licencias de uso de suelo certifica que la acción, obra, inversión o servicio que se pretenda realizar es compatible con la legislación y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, señalando las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y aprovechamientos de las áreas o predio materia de la misma, las que deberán acatarse por el solicitante.

**ARTÍCULO 262.** Las licencias de usos de suelo, bajo ninguna circunstancia podrán expedirse en contravención a lo dispuesto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que determinan las áreas de desarrollo urbano y de preservación ecológica; los usos, reservas o destinos asignados a las zonas en que se clasifique el territorio de los municipios; los límites de los centros de población; la delimitación de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables, y las normas de planificación urbana que regulan los predios y construcciones, así como las vialidades primarias y movilidad, las cuales sólo podrán ser modificadas de acuerdo con los cambios que se incorporen a dichos programas, con base en esta Ley.

Serán nulas de pleno derecho las licencias de uso de suelo que expidan los ayuntamientos en contravención a lo establecido por esta Ley y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables.

**ARTÍCULO 263.** Para modificar el uso o destino autorizado en una licencia de uso de suelo vigente, los propietarios o poseedores del inmueble deberán obtener la licencia de uso de suelo correspondiente, la cual podrá otorgarse únicamente si el nuevo uso o destino solicitado es compatible con lo previsto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Las licencias de uso de suelo una vez expedidas estarán vigentes hasta en tanto no se modifiquen los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos de ordenamiento territorial, pero deberán refrendarse en los términos que dispone esta Ley, para verificar que sigan siendo acordes con la actualización o modificación de la legislación y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables.

**ARTÍCULO 264.** Para efecto de la expedición de las licencias de uso de suelo, se considera que los usos que generan impacto urbano significativo son los que a continuación se indican para toda la Entidad, y deberán incluirse en la clasificación de usos del suelo que al efecto determinen los programas de desarrollo urbano de centros de población:

- I. Habitación plurifamiliar de más de cincuenta viviendas;
- II. Instalaciones para la recreación de más de cinco mil metros cuadrados de terreno;
- III. Oficinas de más de mil metros cuadrados construidos;



- IV.** Comercio para venta, renta, depósito, reparación y servicio de vehículos y maquinaria en general, así como establecimientos con servicios de alimentos con o sin venta de bebidas alcohólicas de más de mil metros cuadrados construidos;
- V.** Terminales e instalaciones para el transporte de más de mil metros cuadrados de terreno;
- VI.** Comercio de productos y servicios básicos o especializados;
- VII.** Talleres de servicio de más de quinientos metros cuadrados construidos;
- VIII.** Centros de consultorios sin camas y educación física y artística de más de quinientos metros cuadrados construidos;
- IX.** Hospitales y sanatorios de más de diez camas;
- X.** Estacionamientos de más de cien cajones;
- XI.** Centros comerciales, mercados, centros de abasto, rastros y depósitos de combustibles;
- XII.** Gasolineras;
- XIII.** Venta y distribución de gas de uso doméstico, gases industriales y de uso médico y combustibles;
- XIV.** Bodegas de mil metros cuadrados o más construidos;
- XV.** Planteles de educación media superior, e instituciones de investigación;
- XVI.** Centros de espectáculos culturales y recreativos,
- XVII.** Instalaciones: religiosas, para deportes de exhibición al aire libre, campestre y para seguridad pública y procuración de justicia;
- XVIII.** Hoteles, moteles y albergues;
- XIX.** Cementerios;
- XX.** Centrales telefónicas y torres de transmisión;
- XXI.** Industrias de cualquier tipo;
- XXII.** Depósitos y plantas de tratamiento de basura;
- XXIII.** Las construcciones que excedan de cinco niveles sobre la banqueta, y
- XXIV.** Las demás que establezcan la Ley Ambiental del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

En el caso de los cementerios, además de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias, cuando se trate de particulares, este servicio deberá contar con la concesión otorgada en los términos de la legislación correspondiente y deberá donarse al

Ayuntamiento respectivo el quince por ciento del área vendible del mismo. El Ayuntamiento deberá utilizar las donaciones para el servicio de personas de escasos recursos económicos.

Asimismo, son usos que generan impacto significativo únicamente en centros de población los siguientes: bancos, baños públicos, comercio de materiales para construcción, establecimientos para el servicio de lavado y engrasado de vehículos e instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de cualquier superficie construida o volumen almacenado y los que sean señalados como tales en los respectivos Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

**ARTÍCULO 265.** El objeto de las licencias de uso de suelo es:

- I. Dar seguridad jurídica y autorizar el uso y destino de la propiedad con base en los programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano, en lo que se refiere al aprovechamiento del suelo dentro de su contexto urbano; otorgando la consiguiente protección a sus titulares o poseedores, respecto de la legalidad del asentamiento humano o desarrollo inmobiliario;
- II. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural de los centros de población, conservando la función esencial del ambiente, protegiendo las áreas verdes y de recarga de mantos acuíferos;
- III. Inducir la planeación e introducción de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
- IV. Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de ordenamiento del territorial, desarrollo urbano y vivienda, sea compatible con la legislación y programas aplicables, regulando y previendo su impacto urbano;
- V. Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la legislación y programas aplicables;
- VI. Regular la traza urbana y el impacto urbano;
- VII. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y fraccionamientos o desarrollos habitacionales al margen de esta Ley;
- VIII. Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que a cada área o predio le disponen la legislación o programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano aplicables, y
- IX. La prevención y control de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población.

**ARTÍCULO 266.** La licencia de uso de suelo, condiciona la expedición de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que se deriven de la legislación urbana aplicable; tales como, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, cambio de intensidad en el uso habitacional y de servicios, construcciones, adaptaciones de obras, funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y urbanizaciones.

La presentación de dicha licencia será necesaria para iniciar el trámite de las licencias de construcción y de las licencias para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como para la autorización de los fraccionamientos.

**ARTÍCULO 267.** Las viviendas contempladas en un fraccionamiento habitacional autorizado por la Dirección Municipal correspondiente, no requerirán una licencia de uso de suelo particular para cada

vivienda para obtener la licencia de construcción respectiva, sino que bastará con la presentación de la licencia de uso del suelo originalmente otorgada al fraccionamiento.

Solo se requerirá gestionar una licencia particular cuando se pretenda dar a la construcción de que se trate un uso o destino diferente al autorizado al fraccionamiento del cual forme parte.

**ARTÍCULO 268.** Para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento en el que se pretendan realizar actividades comerciales, industriales y/o de servicios, deberán contar con el equipamiento, la infraestructura, las áreas de estacionamiento y los servicios necesarios para el giro industrial, comercial o de servicios que permitan su adecuada operación y contar con la superficie, ubicación y medidas de protección y amortiguamiento de riesgos, que se requieran conforme a esta Ley, la reglamentación municipal correspondiente, así como en la normatividad ambiental y demás ordenamientos aplicables, según la actividad de que se trate.

En caso de que no se cuente con el referido equipamiento, infraestructura y demás elementos a que se refiere el párrafo anterior, el promotor podrá gestionarlo o implementarlo a su costa, conforme a lo que disponga la autoridad competente y considerando los estudios técnicos de impacto que arrojen la necesidad de medidas de remediación, mitigación y-o compensación.

**ARTÍCULO 269.** La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda en el Estado, deberá obtener, previo a la ejecución de dichas acciones u obras, la licencia de uso de suelo que le expida el Ayuntamiento por conducto de la Dirección Municipal correspondiente.

**ARTÍCULO 270.** Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, que se realicen en territorio del Estado, sean públicas o privadas, para su desarrollo deberán contar con la correspondiente licencia de uso de suelo que deberá gestionarse acorde a lo dispuesto en los programas de desarrollo territorial y desarrollo urbano, esta Ley, su reglamentación y demás normatividad aplicable. Sin este requisito, no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión para efectuarlas, prestarlas o realizarlas.

**ARTÍCULO 271.** Las licencias de usos de suelo, bajo ninguna circunstancia podrán expedirse en contravención a lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, que determinan las áreas de desarrollo urbano y de preservación ecológica; los usos, reservas o destinos asignados a las zonas en que se clasifique el territorio de los municipios; los límites de los centros de población; la delimitación de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables, y las normas de planificación urbana que regulan los predios y construcciones, las cuales sólo podrán ser modificadas de acuerdo con los cambios que se incorporen a dichos programas, con base en esta Ley.

Serán nulas de pleno derecho las licencias de uso de suelo que expidan los ayuntamientos en contravención a lo establecido por esta Ley y en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio aplicables.

**ARTÍCULO 272.** Para modificar el uso o destino autorizado a un área, lote, predio o construcción en una licencia de uso de suelo vigente, los propietarios o poseedores del inmueble deberán obtener la licencia de uso de suelo correspondiente, la cual podrá otorgarse únicamente si el nuevo uso o destino solicitado es compatible con lo previsto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

**ARTÍCULO 273.** La licencia de uso de suelo, con base en la zonificación prevista en los programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano, señalará los usos o destinos de áreas, lotes y predios permitidos, condicionados o prohibidos.

En el caso de usos de impacto significativo, para su expedición se requerirán los estudios que disponen los artículos 141,142 y 143 de esta Ley, de acuerdo a la determinación de usos que generan dicho impacto, que señala la misma.

**ARTÍCULO 274.** Las licencias de uso de suelo, contendrán y proporcionarán:

- I. La ubicación, medidas y colindancias del área, lote o predio, y los datos que emanen del documento que lo acredite;
- II. La identificación catastral;
- III. El número oficial;
- IV. El uso y destino autorizado del área, lote o predio de que se trate;
- V. El alineamiento respecto a las vías o espacios públicos de propiedad federal, estatal o municipal, de conformidad con la traza urbana;
- VI. La referencia, liga y congruencia de las áreas y vialidades del lote o predio respecto de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables;
- VII. Banco de niveles de referencia establecidos por la Dirección municipal correspondiente;
- VIII. La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles, prohibidos o condicionados, de acuerdo con lo previsto en los programas de ordenamiento del territorial y desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- IX. Las densidades de población, construcción, ocupación del suelo y en su caso la densidad de vivienda;
- X. Las medidas y acciones para ordenar y regular el impacto urbano de las acciones, obras y servicios;
- XI. Las previsiones de protección civil, basadas en el reglamento municipal de la materia;
- XII. Las restricciones de urbanización y construcción que correspondan de conformidad con el tipo de fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial, barrio, colonia o zona;
- XIII. La valoración de inmuebles del patrimonio natural y cultural, en su caso;
- XIV. Las afectaciones o restricciones por proyectos de obras en materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, y
- XV. Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que se deriven de la legislación, programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 275.** El interesado en obtener una licencia de uso de suelo deberá presentar a la Dirección Municipal correspondiente, los siguientes documentos:

- I. Solicitud en la que se especifique el uso y destino que se pretende dar al inmueble objeto de la misma;

- II. Superficie construida en caso de edificaciones ya existentes; o superficie estimada en caso de proyectos por desarrollarse;
- III. El uso del suelo que se propone;
- IV. Plano con medidas y colindancias del predio;
- V. Croquis de localización del predio;
- VI. Copia certificada por fedatario público de la escritura pública que acredite la propiedad del inmueble o en su caso constancia expedida por notario público de que se encuentra en trámite su inscripción, y en caso de no ser propietario, además el documento que acredite la legal posesión del predio;
- VII. Comprobante de domicilio;
- VIII. Identificación oficial;
- IX. Anteproyecto arquitectónico, o de diseño urbano de ser el caso, y memoria descriptiva del mismo, cuando se trate de un uso que pueda generar impacto ambiental significativo en su área de influencia, y
- X. Comprobar estar al corriente en el pago del impuesto predial del inmueble respectivo.

La Dirección municipal correspondiente, deberá proporcionar a los interesados previo a la tramitación de la licencia de uso de suelo, la información que se requiera para contar con los elementos que les permitan reunir adecuadamente los requisitos antes señalados.

**ARTÍCULO 276.** La licencia de uso del suelo no faculta a su titular para iniciar la ejecución de construcción u obra alguna; dicha licencia será inalienable, inembargables los derechos derivados de la misma; y no será objeto de fusión o escisión.

**ARTÍCULO 277.** En los municipios en que no exista un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que establezca una zonificación de uso de suelo, previo al otorgamiento de la licencia que al efecto se expida, deberá recabarse la opinión técnica de la SEDUVOP, de la Dirección General de Protección Civil del Estado, y según el caso particular de que se trate, de la SEGAM conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, y en esta Ley.

**ARTÍCULO 278.** Los ayuntamientos por conducto de la Dirección Municipal correspondiente, propiciarán mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales y municipales a efecto de que las licencias de uso de suelo proporcionen la información oportuna y adecuada, que les permita a los fraccionadores, promotores y solicitantes contar con mayores elementos, criterios o lineamientos urbanos para el diseño, contenido y alcance de sus proyectos.

**ARTÍCULO 279.** Las licencias de uso de suelo una vez expedidas estarán vigentes hasta en tanto no se modifiquen los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos de ordenamiento del territorio, pero deberán refrendarse cada tres años para verificar que sigan siendo acordes con la actualización o modificación de la legislación y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables. Se exceptúa de esta obligación de refrendo, a los inmuebles destinados a casa habitación.

**ARTÍCULO 280.** En caso de que la acción, obra, servicio o inversión, no se hubiese realizado durante los tres primeros años de la vigencia de una licencia de uso de suelo, se requerirá la tramitación de una nueva ante la autoridad municipal competente, en virtud de las posibles modificaciones a los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano aplicables o a las características y situación de las zonas, áreas, lotes o predios objeto de dicha licencia.

Iniciado el aprovechamiento de uso del suelo que establece la licencia respectiva, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la misma será indefinida y únicamente quedará sujeta al mantenimiento de las características y cumplimiento de las condiciones de su otorgamiento y a la renovación en su caso, de la licencia municipal de funcionamiento, debiendo refrendarse según corresponda en términos de lo dispuesto en este artículo.

**ARTÍCULO 281.** Las licencias de uso de suelo, no constituyen apeo y deslinde respecto del inmueble, ni acreditan la propiedad o posesión del mismo.

**ARTÍCULO 282.** Los notarios y demás fedatarios públicos, no podrán autorizar escrituras de los actos, contratos o convenios relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas o predios que contravengan lo dispuesto en esta Ley, su reglamentación y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

No se podrá inscribir ningún acto, contrato, convenio o afectación en el Registro Público de la Propiedad, ni en el Catastro, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, o que contravenga una licencia de uso de suelo.

**ARTÍCULO 283.** Los ayuntamientos expedirán informes sobre el uso de suelo a la persona física o moral, pública o privada, que lo solicite, previo a la presentación de la solicitud de la misma, respecto al inmueble o inmuebles que serán objeto de ésta, a fin de dar a conocer las restricciones, características o afectaciones, las vialidades primarias con que debe contar un área, lote o predio, conforme a la legislación y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Los informes que señala el párrafo anterior, tendrán una vigencia de un año contado a partir de la fecha de su expedición, a efecto de que en su caso, sea expedida la licencia de uso de suelo, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los informes darán pauta para realizar trámites de factibilidad de servicios, fraccionamiento, condominio, desarrollos inmobiliarios especiales, relotificación, cambio de intensidad en el uso habitacional, fusión o subdivisión de áreas y predios; así como, de licencias de construcción, funcionamiento u otras análogas.

En los ayuntamientos que cuenten con el SITU y firma electrónica, los informes podrán solicitarse y expedirse vía electrónica.

**ARTÍCULO 284.** Cuando la solicitud de licencia de uso de suelo, verse sobre las obras y actividades que conforme a la Ley Ambiental del Estado requieran autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, la Dirección Municipal correspondiente requerirá al solicitante, dentro de los tres días siguientes a la recepción de ésta, el acreditar que la misma se encuentra en trámite. No se requerirá la autorización de impacto ambiental en los casos de exención previstos en el referido ordenamiento.

**ARTÍCULO 285.** En los casos en que el uso o destino del suelo pueda generar impacto ambiental significativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264 de esta Ley; o en los casos de actividades riesgosas que determina la clasificación a que se refiere el artículo 98 de la Ley Ambiental del Estado, la Dirección Municipal correspondiente, una vez recibida la solicitud para la expedición de la licencia de uso de suelo, remitirá sin demora en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de

la recepción del documento, la solicitud con sus anexos a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuando así proceda, para recabar su dictamen técnico sobre el uso o destino solicitado, debiendo dicha autoridad emitirlo en un término improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud correspondiente. Dicha Secretaría podrá pedir la opinión de otras dependencias y organismos respecto de los eventuales efectos del uso o destino solicitado en la prestación de los servicios públicos, aplicándose en tal caso los plazos establecidos en el párrafo anterior.

Así mismo, cuando por la ubicación del inmueble se advierta conforme a los planes y programas de desarrollo urbano que se encuentra en terrenos forestales, en los términos de las leyes aplicables se requerirá al solicitante que compruebe que cuenta con la autorización de cambio de uso de terrenos forestal o de aptitud preferentemente forestal, o aprovechamientos forestales, expedida por la autoridad competente, o bien que éstas se encuentren en trámite ante ella. Igualmente requerirá los estudios técnicos y manifestaciones de impacto ambiental que pudieran causar modificaciones a la calidad de vida y al ambiente, que servirán de base para la expedición, en su caso, de la licencia de uso de suelo.

**ARTÍCULO 286.** Cuando se trate de obras o actividades previstas en el artículo 28 de la LGEEPA o en el reglamento de la misma, en materia de impacto ambiental además de los requisitos señalados en el artículo anterior, cuando así se justifique, se requerirá el estudio técnico justificativo para cambio de uso de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal; y la manifestación de impacto ambiental presentada previamente por el promovente ante la SEMARNAT para su evaluación, así como las autorizaciones emitidas por la misma.

**ARTÍCULO 287.** Una vez que se encuentren satisfechos los requisitos que se establecen en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la Dirección Municipal correspondiente expedirá la licencia de uso del suelo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del último documento que ésta haya requerido al solicitante.

**ARTÍCULO 288.** Una vez otorgada la licencia de uso de suelo, si se detectara a través del procedimiento de inspección previsto en esta Ley, que el titular de ésta no ha dado cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones establecidas en la misma, o no hubiere dado cumplimiento con las restricciones o condicionantes previstas en las licencias respectivas, el Ayuntamiento por conducto de la Dirección Municipal correspondiente, dará un término prudente máximo de treinta días naturales, para que él mismo corrija las irregularidades detectadas y si no lo hiciere, podrá dejar sin efectos la licencia otorgada, previa aplicación del procedimiento administrativo en que se otorgue al interesado el derecho de audiencia para que alegue lo conducente, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones establecidas en el presente Ordenamiento.

**ARTÍCULO 289.** El Ayuntamiento respectivo, procederá a la revocación de la licencia de uso de suelo, en los siguientes casos:

- I. Cuando el titular de una licencia vigente no hubiese dado aviso al Ayuntamiento de un uso o destino del suelo diferente al autorizado para el respectivo predio;
- II. Cuando se hayan modificado las intensidades máximas de población, de ocupación y de utilización del predio o las restricciones o limitaciones que consten en la misma o no se hubieren observado éstas últimas por el titular de la constancia;
- III. En aquellos casos en que el Ayuntamiento o la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuando así proceda, detecten mediante los procedimientos previstos en esta Ley o en el ordenamiento que resulte aplicable, que no se dio cumplimiento a cualesquiera de las condicionantes establecidas en la constancia original y dentro de los plazos previstos en la

misma, y

**IV.** Cuando se advierta falsedad de datos en la información presentada ante la autoridad.

En el caso de la fracción IV, la revocación se llevará a cabo sin perjuicio del ejercicio de la acción penal que pudiera derivarse de la actividad emprendida. Para los efectos de este artículo se requerirá la denuncia del Ayuntamiento respectivo.

**ARTÍCULO 290.** Quienes realicen obras, construcciones, ampliaciones o modificaciones que se hagan sin autorización, permiso o licencia, o en contravención a lo dispuesto en la legislación y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en las licencias de uso de suelo, se harán acreedores a las medidas de seguridad y sanciones que establece esta Ley; la autoridad municipal concederá un término máximo de treinta días naturales para su regularización en caso de ser procedente. Si el interesado no lo hiciere dentro del término concedido, podrán ser demolidas total o parcialmente por las autoridades competentes; quienes no tendrán obligación de pagar indemnización alguna, requiriendo a los responsables a cubrir el costo de los trabajos efectuados.

**ARTÍCULO 291.** Los ayuntamientos supervisarán e inspeccionarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades estén de acuerdo con los respectivos lineamientos señalados en la legislación correspondiente, en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y en las licencias de uso de suelo.

## **Capítulo II Licencia de Construcción**

**ARTÍCULO 292.** Los ayuntamientos no emitirán licencias municipales de construcción o de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, con infracción a lo contemplado en la respectiva licencia de uso de suelo. Serán nulas de pleno derecho y no surtirán ningún efecto jurídico las licencias que se expidan en contravención a las licencias de uso de suelo, programas de desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 293.** La licencia municipal de construcción se requerirá para la ejecución de construcción nueva, ampliación, modificación o reparación de la existente, excavación y demolición, así como para modificaciones estructurales a la misma o el cambio de la construcción al régimen de propiedad en condominio.

La licencia municipal de construcción en los casos de obra nueva, podrá también comprender el permiso de ocupación de la vía pública, demolición y conexiones de agua potable y drenaje, de conformidad con la licencia de uso de suelo respectiva.

**ARTÍCULO 294.** A la solicitud de la licencia municipal de construcción, se deberán acompañar como mínimo los documentos que a continuación se indican, según el tipo de obra por ejecutar:

**I.** Para obra nueva:

- a.** Licencia de uso de suelo vigente, tratándose de vivienda en fraccionamientos, podrá presentarse la licencia que ampare la totalidad del polígono del fraccionamiento autorizado;
- b.** Autorización de impacto ambiental, de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental o en su caso del Ayuntamiento respectivo, en los casos de obras y actividades señaladas en el artículo 118 de la Ley Ambiental del Estado;



- c. En su caso, autorización de la autoridad competente de cambios de uso de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, aprovechamientos forestales o cambios de uso del suelo y aprovechamiento del mismo, de acuerdo a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
- d. Constancia de no adeudo del impuesto predial del inmueble o inmuebles; Tratándose de fraccionamientos, podrá presentarse el pago del impuesto predial que ampare la totalidad del polígono del fraccionamiento autorizado, si el mismo se encuentra lotificado y el lote o lotes sobre los que se solicita la licencia, aún no se transmiten o individualizan a favor de terceros distintos al promotor del mismo.
- e. Proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones, con las memorias de cálculo correspondientes, y
- f. Los demás que establezcan esta Ley, su reglamentación y otras disposiciones jurídicas aplicables, según sea el caso.

**II.** Para ampliación y/o modificación, o reparación de obras, instalaciones o estructuras:

- a. Licencia de uso de suelo vigente;
- b. Proyecto estructural;
- c. Memoria de cálculo;
- d. Constancia de no adeudo del impuesto predial del inmueble o inmuebles;
- e. Los planos autorizados y los planos de la ampliación o modificación de que se trate, y
- f. Los demás que establezcan esta Ley, su reglamentación y otras disposiciones jurídicas aplicables, según sea el caso.

**III.** Para excavación y/o demolición:

- a. Licencia de uso de suelo vigente;
- b. Programa de excavación o demolición;
- c. Memoria descriptiva del procedimiento con las medidas de protección y seguridad que se adoptarán;
- d. Croquis y alineamiento oficial en el caso de excavación;
- e. Constancia de no adeudo del impuesto predial del inmueble o inmuebles, y
- f. Los demás que establezcan esta Ley, su reglamentación y otras disposiciones jurídicas aplicables, según sea el caso.

**IV.** Para cambios estructurales:

- a. Licencia de uso de suelo vigente;

- b. En los casos de obras y actividades señaladas en el artículo 118 de la Ley Ambiental del Estado, autorización de impacto ambiental, de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental o en su caso del Ayuntamiento respectivo;
  - c. Constancia de no adeudo del impuesto predial del inmueble o inmuebles;
  - d. Licencia y planos autorizados de la construcción existente, y
  - e. Los demás que establezcan esta Ley su reglamentación y otras disposiciones jurídicas aplicables, según sea el caso;
- V. Para cambio a régimen de propiedad en condominio:
- a. Planos de áreas privativas y comunes e indivisos de la construcción en que se señalen, los pisos si se trata de condominio vertical; así como departamentos, viviendas, locales, predios o áreas que serán de dominio exclusivo de los condóminos,
  - b. Los elementos comunes de la misma y las áreas de uso común del predio, y
  - c. La autorización municipal de constitución o modificación del régimen de propiedad en condominio expedida conforme a lo dispuesto en esta Ley, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y
- VI. Para urbanización de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales:
- a. La autorización del fraccionamiento;
  - b. Las escrituras de donación a favor del Municipio de las áreas correspondientes a áreas verdes y equipamiento;
  - c. Los documentos que comprueben la entrega de garantías a que se encuentre obligado de conformidad con la autorización del fraccionamiento respectivo, y
  - d. La manifestación bajo protesta de decir verdad, de haber dado cumplimiento a las limitaciones o restricciones que en su caso se hayan determinado en la autorización del fraccionamiento; esta manifestación estará sujeta a la verificación por parte de las autoridades municipales y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la presente Ley.

En este caso la licencia se otorgará de conformidad con lo señalado en el artículo 267 de esta Ley;

**ARTÍCULO 295.** Para las construcciones y obras localizadas en zonas y monumentos del patrimonio histórico, artístico y cultural e igualmente en sus predios colindantes, se deberá además agregar la autorización, licencia o permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y las demás derivadas de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado.

**ARTÍCULO 296.** En su carácter de auxiliar de la dirección municipal, la solicitud de licencia municipal de construcción y la documentación que debe acompañarla, llevará la correspondiente responsiva del Director Responsable de Obra responsable del proyecto y/o de la obra; así como los especialistas

corresponsables, en su caso, salvo las excepciones que establecen esta Ley y el Reglamento municipal correspondiente tratándose de obras menores.

Esta responsiva será la base para la autorización de la licencia de construcción, debiendo la autoridad municipal únicamente verificar que se cumpla con la entrega de los requisitos que establece la presente Ley y el Reglamento municipal respectivo.

**ARTÍCULO 297.** Cuando se trate de la construcción de vivienda de interés social o vivienda económica, no efectuada por fraccionadores o promotores, que no exceda de cuarenta y dos metros cuadrados edificados en su primera etapa, ni de dos pisos de altura, y los claros de las habitaciones tengan como máximo de tres metros de ancho, la licencia municipal de construcción se otorgará con el sólo cumplimiento de los requisitos siguientes:

- I. Título de propiedad del inmueble a nombre del peticionario, que incluya constancia de no adeudo del impuesto predial o la constancia de la autoridad correspondiente de hallarse su tenencia en proceso de regularización;
- II. Proyecto ejecutivo debidamente acotado, o del prototipo aprobado por la correspondiente autoridad u organismo estatal o municipal y validado por el Director Responsable de Obra, y
- III. Licencia de uso de suelo vigente.

**ARTÍCULO 298.** Previo a que sea recibida una solicitud de licencia de construcción de obra nueva, ampliación y/o modificación; para reparación o modificación de obras, instalaciones o estructuras; para excavación y/o demolición; para cambios estructurales en la construcción existente o para cambio a régimen de propiedad en condominio, la Dirección Municipal correspondiente, revisará que el solicitante cuente con toda la documentación relativa; la cual no será ingresada hasta que se encuentren presentados todos los documentos que se requieren.

**ARTÍCULO 299.** El Ayuntamiento a través de la Dirección Municipal cuando así se justifique podrá solicitar y recabar las opiniones técnicas y/o jurídicas necesarias de las dependencias y entidades públicas, antes de expedir cualquier licencia de construcción, con objeto de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la seguridad de la edificación y urbanización, la calidad en los servicios e instalaciones e impedir riesgos o impactos urbanos negativos en la ejecución, aprovechamiento y ocupación de las obras que el solicitante pretende realizar, adaptar, modificar, utilizar o demoler.

Las dependencias y entidades tendrán un plazo máximo de siete días hábiles para dar su opinión u observaciones a la Dirección Municipal correspondiente, contados a partir de la fecha en que les haya sido solicitada; en caso de no hacerlo en ese plazo, se entenderá que está de acuerdo con el otorgamiento de la licencia de construcción respectiva.

**ARTÍCULO 300.** Una vez que se encuentren satisfechos los requisitos que se establecen en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, el Ayuntamiento otorgará o negará la licencia de construcción, por conducto de la Dirección Municipal correspondiente, dentro de los siete días hábiles siguientes a la recepción del expediente completo y cuando haya recibido, en su caso, las opiniones oficiales a que se refiere el artículo anterior.

**ARTÍCULO 301.** La solicitud para autorizar la instalación, construcción o modificación, en todo o en parte, de la infraestructura de los sistemas de alumbrado público, drenajes, agua, gas natural, telefonía y demás servicios, y en general al equipamiento urbano, en cualquier espacio público de fraccionamientos ya municipalizados, deberá presentarse por escrito ante la Dirección Municipal correspondiente.

**ARTÍCULO 302.** La solicitud a que se refiere el artículo inmediato anterior, deberá ser acompañada de los siguientes documentos:

- I. Plano de conjunto de la zona de influencia, señalándose la extensión y ubicación de la obra de infraestructura o equipamiento urbano;
- II. Descripción clara y concisa del proyecto a ejecutar, acompañada de croquis o plano, en su caso, de localización, señalándose la extensión de la obra de infraestructura o equipamiento urbano;
- III. El estudio de impacto urbano significativo, realizado por perito debidamente registrado;
- IV. El régimen financiero para la ejecución de la obra;
- V. Las obligaciones a cargo del solicitante;
- VI. Las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento respectivo y de los usuarios;
- VII. Los plazos de iniciación, revisión y terminación de las obras;
- VIII. Las autorizaciones de impacto ambiental que se requieran conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
- IX. Los demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 303.** Para el análisis y resolución de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Dirección Municipal correspondiente tomará en consideración los siguientes aspectos:

- I. Distribución y densidad de población, construcción y utilización del suelo en la zona;
- II. Vinculación a la traza urbana;
- III. Distribución de la demanda de bienes y servicios, especificando la zona que no esté cubierta;
- IV. Distribución equitativa de los bienes y servicios en relación con los habitantes del centro de población;
- V. Determinación de corredores urbanos;
- VI. Procedimiento para su realización;
- VII. Medios para la satisfacción de la demanda;
- VIII. Régimen financiero para la ejecución de la obra;
- IX. El impacto ambiental y urbano, y
- X. La estructura vial, el sistema de transporte y estacionamientos; así como las otras redes tales como las de electricidad, telefonía, gas, agua potable y drenaje sanitario y pluvial.

### **Capítulo III**

## **Normas Generales de Construcción, Diseño, Infraestructura y Sustentabilidad**

**ARTÍCULO 304.** Las construcciones deberán ajustarse a las normas generales siguientes:

**I.** De construcción:

- a. Toda edificación requerirá de la licencia municipal de construcción, salvo los casos de excepción que señale esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- b. Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer los usos o destinos para los cuales fueron proyectados;
- c. La vivienda unifamiliar tendrán la superficie que determinen los programas sociales respectivos, y los espacios con las dimensiones que fueren necesarias para el cumplimiento de las funciones previstas para cada tipo de vivienda;
- d. Se procurará que se construyan con materiales, instalaciones y equipos que permitan prevenir y combatir los riesgos de incendio;
- e. Se procurará que se construyan con materiales, instalaciones y equipos que permitan la sostenibilidad de la obra;
- f. Toda construcción que se concluya requerirá de constancia o aviso de terminación de obra;
- g. Los locales comerciales y de servicios tendrán las dimensiones mínimas que fueren necesarias para el cumplimiento de las funciones previstas para cada tipo de local, según las disposiciones jurídicas aplicables;

**II.** De diseño:

- a. Se sujetarán a las superficies edificables, áreas libres y número de pisos permitidos en la zona, de conformidad con las densidades de población y construcción previstas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables;
- b. Se ajustarán a las restricciones correspondientes, debiendo el titular de la licencia de construcción respetar el alineamiento, la traza urbana y demás características o limitaciones previstas en la licencia de uso de suelo, la cual deberá acompañarse a toda solicitud de licencia de construcción;
- c. Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos preferentemente dentro del propio predio, en la cantidad que señalen tanto los programas de desarrollo urbano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- d. Las edificaciones deberán tener iluminación y ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, patios interiores o espacios abiertos; en los no habitables permanentemente, podrán utilizarse en su caso, ductos con elementos electromecánicos completos;
- e. Las que concentren alto número de usuarios, así como de igual manera las que se dediquen a actividades riesgosas, tendrán circulaciones y salidas de emergencia de fácil evacuación, previa opinión en su caso, de la dependencia municipal de protección civil;

- f. Las que se ubiquen en zonas del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural, cumplirán las normas de altura, materiales, acabados, colores, aberturas y todas las demás que señale el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes, o se deriven del programa parcial de conservación y mejoramiento del centro histórico respectivo y de los demás programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables; así como, las que se establecen en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado y demás normatividad aplicable;
- g. Los edificios de uso público deberán contar con accesos para personas con discapacidad;
- h. Las construcciones de equipamiento turístico, gasolineras, industriales, comerciales y de servicios que se permitan aledañas al derecho de vía de carreteras federales o estatales, requerirán de un acceso adecuado, con base en las especificaciones técnicas que determine la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

### III. De infraestructura:

- a. Estarán provistas del servicio de agua potable y de drenaje sanitario y pluvial capaz de cubrir las demandas mínimas de las actividades que se vayan a desempeñar en ellas;
- b. Dispondrán de los espacios y muebles sanitarios en número suficiente para su utilización por los usuarios;
- c. Contarán con sistema de transporte y almacenamiento de basura, en los casos que señalen las normas técnicas que expida la autoridad correspondiente, y
- d. Estarán dotadas de los dispositivos y mecanismos que sean indispensables para tratar sus desechos contaminantes y proteger de sus ruidos y olores, y

### IV. De sustentabilidad, en las que preferentemente:

- a. Se diseñarán y orientarán de manera que se optimice la temperatura interior para evitar el uso excesivo de ventilación o calefacción eléctrica;
- b. Se utilizarán energías renovables o alternas en el sistema de infraestructura;
- c. Se implementarán sistemas de reutilización del agua y aprovechamiento del agua pluvial;
- d. Cuando el tipo de suelo lo permita, se procurará la utilización pavimentos que favorezcan la permeabilidad del agua a fin de optimizar la captación de la misma por los mantos freáticos y acuíferos, y
- e. Se utilizarán sistemas constructivos con materiales de la región que consideren el clima de la zona en la que se ubiquen para favorecer el confort interior.
- f. Siempre que sea posible, se construirán con los requerimientos necesarios para que los techos puedan implementarse como azoteas verdes

Los ayuntamientos darán prioridad a la autorización de edificaciones que voluntariamente incorporen los elementos que establece la presente fracción.

**ARTÍCULO 305.** Queda prohibida la realización de cualquier obra destinada a la actividad industrial, comercial, de servicios o vivienda, mientras el Ayuntamiento no expida la licencia de construcción correspondiente.

Los ayuntamientos al expedir y aplicar sus reglamentos de construcción o sus equivalentes, considerarán las condiciones propias de sus municipios, así como las características y tendencias de su desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio.

Las normas de diseño contenidas en esos reglamentos, deberán incluir especificaciones que faciliten el desplazamiento y el acceso a las personas con discapacidad y en particular, en edificios y espacios abiertos para actividades públicas, generales o restringidas.

## **TÍTULO DÉCIMO CUARTO FRACCIONAMIENTOS**

### **Capítulo I Bases Generales**

**ARTÍCULO 306.** Los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, modificaciones y desarrollos en régimen de propiedad en condominio, a que se refiere esta Ley deberán sujetarse, a:

- I. Las disposiciones de la presente Ley y demás leyes, programas, reglamentos y normas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y ambiental vigentes, en los ámbitos nacional, estatal y municipal, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
- II. La licencia de uso de suelo;
- III. Los dictámenes de factibilidad de servicios públicos;
- IV. El dictamen de factibilidad y compatibilidad emitido por la autoridad de protección civil municipal con base en el análisis de riesgo, en circunstancias específicas de vulnerabilidad determinadas en los Atlas de Riesgos respectivos, y
- V. La estructura y planeación vial del sistema de movilidad urbana de que se trate.

**ARTÍCULO 307.** La autorización de fraccionamientos, relotificaciones, cambios de intensidad en el uso habitacional, fusiones y subdivisiones de terrenos urbanos o rústicos en el Estado, así como de desarrollos inmobiliarios especiales, se otorgará siempre y cuando no se afecten o se instalen en:

- I. Las áreas naturales protegidas, declaradas en los decretos respectivos, así como las definidas por la ley;
- II. Zonas de riesgo;
- III. Zonas de alto potencial agrícola o forestal;
- IV. Zonas arboladas que constituyan un pulmón para la zona y áreas de valores naturales, y
- V. Zonas y monumentos del patrimonio cultural.

Para la autorización de fraccionamientos se deberán atender las superficies del lote o predio tipo autorizado y las características del fraccionamiento o desarrollo inmobiliario; la densidad de población y de los coeficientes de construcción y ocupación de los predios, así como la imagen y la traza

urbanas autorizadas para cada zona en los programas de desarrollo urbano y las normas aplicables en cada caso.

**ARTÍCULO 308.** Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los correspondientes fraccionamientos, cambios de intensidad en el uso habitacional, relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas y predios, así como los desarrollos inmobiliarios especiales, deberán ser compatibles con lo dispuesto en los diversos programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables.

**ARTÍCULO 309.** El establecimiento de zonas de urbanización ejidal, la determinación de su zona de reserva y la regularización de la tenencia de la tierra de bienes ejidales o comunales deberán adecuarse en lo conducente a la Ley Agraria, a la Ley General de Asentamientos Humanos, a esta Ley y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Cuando el fraccionamiento o subdivisión de terrenos ejidales tengan por objeto incorporarse al desarrollo urbano de algún centro de población o se ubiquen dichos terrenos en las áreas de reserva del mismo, se aplicarán las disposiciones de esta Ley.

## **Capítulo II Clasificación y Tipos**

**ARTÍCULO 310.** Los fraccionamientos en los centros de población de los municipios del Estado, se sujetarán a la clasificación, las normas, densidades, nomenclaturas y demás previsiones que establece su respectivo Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigente.

Los municipios que no cuenten con sus respectivos programas de desarrollo urbano de centro de población elaborados con base en las disposiciones de esta Ley o en su caso armonizados con la misma, acatarán lo dispuesto en este ordenamiento tratándose de la clasificación y densidades de los mismos.

**ARTÍCULO 311.** Los fraccionamientos se clasifican en los siguientes tipos:

### **I. Habitacional:**

- a. Habitacional urbano :
  - 1. Residencial.
  - 2. Tipo medio.
  - 3. Interés popular, y
  - 4. Vivienda Económica
  
- b. Habitacional suburbano o rural:
  - 1. Residencial Campestre, y
  - 2. Restauración ecológica.

### **II. Especiales**

- a. Comerciales y de servicios:
  - 1. Comerciales de venta al detalle;
  - 2. Comerciales de venta al mayoreo y /o bodegas;
  - 3. De servicios; y
  - 4. Mixtos.
  
- b. Industriales; y
  
- c. De Cementerios o Parques Funerarios.



III. Mixtos: En los que pueden combinarse los anteriores de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

**ARTÍCULO 312.** De acuerdo a lo señalado en el artículo 310 de esta Ley, los fraccionamientos deberán desarrollarse considerando las densidades de vivienda por hectárea que se establecen en este Ordenamiento y, según los siguientes rangos demográficos:

- I. Asentamientos humanos de más de 500 000 habitantes un máximo de 200 viviendas por hectárea;
- II. Asentamientos humanos de entre 50 000 a 499 999 habitantes un máximo de 100 viviendas por hectárea;
- III. Asentamientos humanos de entre 15 000 a 49 999 habitantes un máximo de 80 viviendas por hectárea;
- IV. Asentamientos humanos de entre 2500 a 14 999 habitantes un máximo de 60 viviendas por hectárea, y
- V. Asentamientos humanos de menos de 2500 habitantes un máximo de 40 viviendas por hectárea.

Atenderán igualmente a las condiciones geográficas y climatológicas de la región, así como a las características sociales y culturales de la localidad específica en que éstos vayan a desarrollarse, procurando la sustentabilidad y aprovechamiento de infraestructura y servicios.

Las densidades que establece este artículo, podrán disminuirse o aumentarse en casos específicos, con base en los programas de desarrollo urbano y el uso de suelo autorizado, cuando las condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento urbano así lo permitan, y siempre y cuando no se pongan en riesgo la seguridad, la movilidad, la imagen urbana y los espacios públicos, previo dictamen técnico que deberá atender los criterios que establece el artículo 284 de esta Ley.

Los interesados en densificar deberán asumir el costo que el incremento represente. La autoridad competente establecerá los mecanismos necesarios para aplicar dicho costo, el cual será utilizado en mejorar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita una adecuada densificación y mezcla de usos.

En todos los casos se garantizará que se consolide una red de vialidades operativa y funcional y una dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.

**ARTÍCULO 313.** Los municipios del Estado que no cuenten con los programas desarrollo urbano de centros de población, atenderán a la clasificación de fraccionamientos que se establecen en las siguientes tablas y deberán respetar los lineamientos de densidad máxima, coeficiente de ocupación de suelo y superficie mínima por lote, que se detallan en la misma. Los municipios que cuenten con los referidos programas podrán tomarlas como base para desarrollar dichas clasificaciones.

## ZONA CENTRO

TIPO DE FRACCIONAMIENTO	DENSIDAD				SUPERFICIE DE LOTE		COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) %	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO		ALTURA MÁXIMA PÉRMITIDA		CANTONAMIENTO POR ESTACIONAMIENTO POR VIVIENDA unidad	ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS unidad
	HORIZONTAL		VERTICAL O MIXTO		HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO		HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO	HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO		
	hab/ha	viv/ha	hab/ha	viv/ha	metros cuadrados	metros cuadrados		veces el lote		niveles			
DENSIDAD MÍNIMA	16	4	-	-	2000	-	20	0.4	-	2	-	-	-
DENSIDAD BAJA O CAMPESTRE	40	10	-	-	600	-	60	1.8	-	2	-	3	-
DENSIDAD MEDIA BAJA O RESIDENCIA	64	16	128	32	350	400	60	1.8	3	3	5	2	1*
DENSIDAD MEDIA	184	46	220	55	120	150	70	2.1	3.5	3	5	2	1*
DENSIDAD MEDIA ALTA O POPULAR	240	60	360	90	90	100	70	2.1	3.5	3	5	1	1*
DENSIDAD ALTA O ECONÓMICO	-	-	800	200	-	90	75	-	4.5	3	6	1	1

VERTICAL O MIXTO: incluye la distribución de la vivienda en condominio vertical, así como su mezcla con la vivienda horizontal (fraccionamiento o condominio)

1\* obligatorio únicamente para vivienda en condominio.

## ZONAS ALTIPLANO, HUASTECA Y MEDIA

TIPO DE FRACCIONAMIENTO	DENSIDAD				SUPERFICIE DE LOTE		COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) %	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO		ALTURA MÁXIMA PÉRMITIDA		CANTONAMIENTO POR ESTACIONAMIENTO POR VIVIENDA unidad	ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS unidad
	HORIZONTAL		VERTICAL O MIXTO		HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO		HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO	HORIZONTAL	VERTICAL O MIXTO		
	hab/ha	viv/ha	hab/ha	viv/ha	metros cuadrados	metros cuadrados		veces el lote		niveles			
DENSIDAD BAJA O CAMPESTRE	16	4	-	-	2000	-	20	0.4	-	2	-	3	-
DENSIDAD MEDIA BAJA O RESIDENCIA	60	15	72	18	400	500	60	1.2	2.4	3	4	2	1*
DENSIDAD MEDIA	140	35	168	42	180	200	65	1.95	2.6	3	4	2	1*
DENSIDAD MEDIA ALTA O POPULAR	200	50	240	60	120	150	70	2.1	2.8	3	4	1	1*
DENSIDAD ALTA O ECONÓMICO	240	60	400	100	90	120	75	3	3.75	4	5	1	1

Se promoverá las mezclas de usos de suelo en los fraccionamientos de acuerdo a las normas de compatibilidad de la zonificación secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población aplicable, para lo cual se preverán los lotes de dimensiones adecuadas en la lotificación del mismo.

**ARTÍCULO 314.** Los desarrollos habitacionales correspondientes a la clasificación de densidad muy alta, tienen como objetivo:

- I. Optimizar el aprovechamiento de las áreas urbanizables de los centros de población clasificadas con usos habitacionales, así como la disponibilidad del suelo urbano, infraestructura, vialidad y equipamiento urbano;
- II. Contribuir a reducir la tendencia expansiva de las ciudades;
- III. Disminuir la cantidad y distancia de los viajes intraurbanos;
- IV. Promover las condiciones de vida digna en la vivienda mediante los espacios y dimensiones físicas adecuadas que responda a los requerimientos de sus habitantes en beneficio de su desarrollo personal y familiar;
- V. Promover el uso mixto en las zonas habitacionales a través de usos complementarios y compatibles, y
- VI. Traducir el ahorro de suelo en la creación de espacios recreativos, de esparcimiento y de integración de elementos de vegetación.

Estos desarrollos incluirán la mezcla de tipologías de vivienda, variedad en volúmenes y la posibilidad de edificar el modo plurifamiliar en vertical, a fin de promover condiciones sociales de igualdad y cohesión, y dando pauta al derecho de elegir entre ofertas diversas de suelo y vivienda de acuerdo con las preferencias, necesidades y posibilidades de las personas.

El ahorro de suelo generado por la construcción de vivienda plurifamiliar en vertical permitirá la disponibilidad del mismo para creación de espacios públicos que contribuyan al fortalecimiento social de la comunidad, así como a la integración sustentable con el medio natural.

**ARTÍCULO 315.** Los desarrollos habitacionales de muy alta densidad para lograr su objetivo deberán considerar lo siguiente:

- I. Se promoverán en los centros de población del Estado que cuenten con programa de desarrollo urbano de centro de población;
- II. El flujo vehicular y de transporte generado por el desarrollo habitacional deberá ser estimado, y con ello establecer la capacidad de sus vías internas, así como prever las acciones necesarias para evitar o mitigar los impactos en la red vial y en el sistema de transporte del centro de población, considerando siempre que sea posible la inclusión de ciclovías y vías peatonales;
- III. Contribuir a la permeabilidad urbana y a la comunicación peatonal y vehicular mediante una traza pública que cumpla con el espaciamiento establecido en las disposiciones reglamentarias aplicables;
- IV. El diseño urbano y de edificaciones deberá considerar los elementos que contribuyen a la seguridad de las personas, en especial de grupos vulnerables, como pueden ser la incentivación del uso del espacio público y la vialidad de forma que los mismos habitantes al transitar puedan vigilar; el uso de medios de registro visual; evitar la generación de espacios sin uso y de muros ciegos hacia la vía pública, y alumbrado suficiente;
- V. Se promoverá el espacio digno de banquetas y andadores que propicien los traslados peatonales;
- VI. Se preverá la disponibilidad de suelo necesario para satisfacer la demanda de equipamiento urbano que genere el desarrollo habitacional de muy alta densidad, evitando en todo caso afectar el nivel de atención del equipamiento existente en su entorno, para ello se verificará el incremento requerido según el número de habitantes estimados y la dotación prevista en las normas federales aplicables;
- VII. Los usos de suelo complementarios que se propongan dentro del desarrollo serán compatibles con el uso habitacional de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población aplicable y con los establecido en esta Ley;
- VIII. No afectarán el adecuado funcionamiento de los sistemas de infraestructura de su entorno, para ello se preverá la construcción de las redes e instalaciones necesarias para satisfacer su propia demanda y para su adecuada integración a las redes de la ciudad;
- IX. Se preverá que las viviendas terminadas o de construcción progresiva estén constituidas físicamente con los espacios individualizados para cocinar, aseo, dormir y convivencia;

- X. Al exterior de las viviendas y dentro del mismo desarrollo se preverán además los espacios necesarios para las actividades complementarias de recreación, descanso y esparcimiento de sus habitantes;
- XI. La construcción de las viviendas considerará el uso de iluminación y ventilación natural, y de forma preferente en los usos de suelo complementarios;
- XII. La distribución y orientación de las edificaciones contribuirá al uso eficiente de los recursos energéticos;
- XIII. Se considerarán acciones que faciliten la movilidad y los mecanismos que propicien el uso del transporte público.
- XIV. Se integrará el uso de tecnologías de bajo consumo de energéticos y de agua, a fin de reducir el impacto del desarrollo habitacional en los sistemas de infraestructura del centro de población;
- XV. Integrarán elementos de vegetación en su diseño, además de adecuarse al entorno ambiental del territorio del cual forma parte como escurrimientos pluviales, pendientes topográficas y vegetación preexistente entre otras, y
- XVI. Se construirán únicamente en terrenos con pendientes de quince por ciento o menos;
- XVII. En lo relativo a infraestructura:
  - a. El sistema de alcantarillado deberá separar totalmente las aguas pluviales de las jabonosas y negras.
  - b. Se deberá contar con la factibilidad de capacidad de carga de agua potable al que se conectará el desarrollo habitacional, expedida por las autoridades correspondientes;
  - c. Se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para mitigar el impacto del desarrollo habitacional y densidad demográfica sobre los sistemas de infraestructura y equipamiento urbano, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento, y
  - d. En los casos en que sea posible se construirá con los requerimientos necesarios para que los techos puedan utilizarse como azoteas verdes;
- XVIII. En casos clasificados de impacto significativo, se deberá de elaborar un Estudio de Riesgos de la zona que incluya riesgos de origen hidrometeorológico, geológico y antropogénico, y en su caso se deberán instrumentar las acciones para hacer frente a los riesgos mitigables identificados en dicho estudio, y
- XIX. Las acciones de vialidad e infraestructura necesarias para la integración del desarrollo habitacional al área urbanizada, serán a cuenta del fraccionador o promotor

**ARTÍCULO 316.** Los ayuntamientos autorizarán en primer término aquellos fraccionamientos que en su diseño cumplan con los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno que derivan del artículo 73 de la Ley de Vivienda Federal; así mismo darán prioridad y estímulos legales a la aprobación de fraccionamientos que propongan el uso de nuevas tecnologías ecológicas y sustentables, que favorezcan el aprovechamiento de las aguas pluviales, el ahorro de energía y la forestación de las áreas verdes.

## **Capítulo III De Fraccionamientos Habitacionales**

### **Sección Primera Habitacional Urbano**

**ARTÍCULO 317.** Los fraccionamientos habitacionales urbanos, deberán realizarse en terrenos que se encuentren dentro de las áreas urbanizables o de crecimiento del centro de población de que se trate; se destinarán de manera predominante a la construcción de viviendas y sus servicios complementarios, pueden ser unifamiliares, multifamiliares o de uso mixto de conformidad con las densidades, alturas o características dispuestas en los programas de desarrollo urbano de los centros de población.

**ARTÍCULO 318.** Además de lo señalado en la tabla que establece el artículo 312 de este Ordenamiento, los fraccionamientos habitacionales deberán contar con las características de infraestructura, y obras de urbanización siguientes:

- I. Sistema de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias;
- II. Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal o con las especificaciones que determine la normatividad aplicable;
- III. Sistema pluvial en los municipios en que el Ayuntamiento así lo determine, conforme a la normatividad aplicable;
- IV. Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, conforme a las especificaciones técnicas que determine la Comisión Federal de Electricidad, debiendo privilegiarse el uso de cableado subterráneo;
- V. Alumbrado público con las especificaciones técnicas que determine el proyecto ejecutivo conforme a la norma de Comisión Federal de Electricidad, revisado por la Dirección de Alumbrado público municipal o su equivalente;
- VI. Cuando en el proyecto así se determine, redes telefónicas con ductos subterráneos así como para otros medios de comunicación o de transmisión electrónica de datos;
- VII. Guarniciones y banquetas con accesos para personas con discapacidad, con los materiales autorizados conforme al Reglamento de Construcción Municipal;
- VIII. Pavimento de calles con los materiales autorizados conforme al Reglamento de Construcción Municipal;
- IX. Arbolado y jardinería en las áreas destinadas a ese fin. El tipo de árboles y las características de la jardinería atenderán al tipo de vegetación de la región, evitando la siembra de árboles que dañen la infraestructura, o en su caso a las disposiciones de la Dirección o área de Ecología del Municipio;
- X. Placas de nomenclatura y señalamientos viales en los cruces de las calles, conforme lo determine la normatividad aplicable, y
- XI. Hidrantes contra incendios, cuando la red hidráulica así lo permita.

Para la autorización de calles, banquetas y equipamientos se estará a lo dispuesto en los Reglamentos de Construcción Municipal.

**ARTÍCULO 319.** Los fraccionamientos destinados a personas con un ingreso económico máximo de hasta dos y medio salarios mínimos diarios con urgencia inmediata de resolver problemas de vivienda, por las condiciones especiales de la zona en que se ubicarán, pueden ser autorizados por el Ayuntamiento por conducto de la Dirección Municipal para su urbanización en forma progresiva, con los requisitos mínimos de urbanización, que se establezcan en el proyecto de dictamen que elabore la mesa colegiada, ajustándose a los lineamientos determinados en los programas de desarrollo urbano aplicables.

En la autorización del fraccionamiento respectivo, deberá especificarse que se trata de urbanización progresiva.

Sólo tendrán la facultad de promover éste tipo de fraccionamientos las dependencias de los tres órdenes de gobierno dotadas de facultades suficientes, en coordinación con organismos públicos de vivienda o con organizaciones sociales legamente constituidas, o en acciones concertadas entre éstos.

Cuando confluyan recursos de programas tales como los de reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, o para otorgar facilidades a quienes resulten damnificados por una catástrofe natural y no cuenten con asiento propio para su familia, entre otros, podrán participar las organizaciones o empresas de los sectores social y privado.

**ARTÍCULO 320.** Los fraccionamientos de tipo popular podrán ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, como obras por cooperación y de urbanización progresiva, en los casos que determine la Dirección Municipal.

I. Los requisitos mínimos de urbanización para la ocupación física de este tipo de fraccionamientos son:

- a. Trazo de calles y lotes,
- b. Vías públicas de acceso que garanticen el tránsito de vehículos,
- c. Evacuación local de aguas pluviales,
- d. Tomas de agua potable dentro de los predios o lotes, y
- e. Líneas de energía eléctrica.

II. El Ayuntamiento solicitará que se acompañe la solicitud de un estudio económico que contemple las inversiones previstas para las obras de urbanización y equipamiento faltantes, la forma en que aquellas se financiarán y los desembolsos que tendrían que efectuar los futuros adquirientes de los lotes.

III. A las dependencias gubernamentales competentes corresponderá:

- a. Dar asesoramiento para la elaboración del proyecto del fraccionamiento, obtención de la autorización, ejecución por etapas de la urbanización y del equipamiento, así como el otorgamiento en su momento del título de propiedad.
- b. Dar apoyo, orientación e incluso asumir la representación de la organización social, si fuere necesario, en todas las gestiones directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del fraccionamiento de urbanización progresiva, con la obtención de créditos institucionales para la edificación de viviendas; y

- c. En su caso, suministrar planos de prototipos para la construcción de viviendas y proporcionar asistencia técnica relativa a la obtención de licencias de construcción, la capacitación de los integrantes de la organización social para la autoconstrucción de habitaciones y la adquisición de materiales.

**IV.** La organización social deberá asumir el cumplimiento de las obligaciones de urbanización y equipamiento en la forma que corresponda a las peculiaridades del fraccionamiento de urbanización progresiva, así como las contempladas en esta Ley y en el acuerdo o contrato que al respecto se elabore entre la dependencia gubernamental y la organización social.

**ARTÍCULO 321.** Los fraccionamientos de tipo mixto son aquellos en los que el fraccionador dedicará el proyecto preferentemente a vivienda, combinando algunas zonas del terreno o áreas a diferentes aprovechamientos especiales de tipo comercial, de servicios y/o industriales micro productivos, que no realicen actividades productivas pecuarias, porcinas o avícolas u otras similares, en un máximo del cincuenta por ciento de la superficie vendible, conforme a la tabla que señala el artículo 312 de esta Ley.

**ARTÍCULO 322.** Los proyectos de fraccionamientos especiales se orientarán conforme a la siguiente tabla:

ESPECIALES	DENSIDAD Máxima de lotes por hectárea	SUPERFICIE MINIMA POR LOTE Metros cuadrados	USO Y DESTINO	Área de donación para equipamiento y áreas verdes	Coefficiente de ocupación de suelo (COS)
COMERCIALES	50	120	Comercial y de servicios	5% del área total del predio con el 80% para áreas verdes y 20% para equipamiento.	60% como máximo de la superficie total del mismo
INDUSTRIALES	8	600	Exclusivamente Industrial	10% del área total del predio para áreas verdes	70% como máximo de la superficie total del mismo
MICRO PRODUCTIVOS	30	200	Microproductivo y hasta un 20% para comercio y servicios.	10% del área total del predio para áreas verdes	70% como máximo de la superficie total del mismo
ESPECIALES MIXTOS	50	120	Mixto	10% del área total del predio con el 50% para áreas verdes y el 50% para equipamiento.	como máximo de la superficie total del mismo
GRANJAS DE EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA	3	3000	Explotación agropecuaria y hasta un 30% habitacional	10% del área total del predio con el 50% para áreas verdes y el 50 % para equipamiento.	15% como máximo de la superficie total del mismo

## **Sección Segunda Habitacional Suburbano o Rural**

**ARTÍCULO 323.** Los fraccionamientos habitacionales suburbanos o rurales se ubicarán en o fuera de los límites urbanos de los centros de población, según lo determinen los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano y atenderán para su autorización a las especificaciones que se señalan en el artículo 312 de esta Ley según se trate de Residencial Campestre cuyo aprovechamiento predominante será el de vivienda rústica y locales para la experimentación de servicios recreativos, producción ecológica y comerciales, o bien de densidad mínima, destinados predominantemente para la construcción de vivienda unifamiliar, en régimen de propiedad en condominio.

### **Capítulo IV Fraccionamientos Especiales**

#### **Sección Primera Generalidades**

**ARTÍCULO 324.** Los fraccionamientos especiales son aquellos de un uso predominante diferente al habitacional, cuyos lotes se aprovecharán para recreación, industria, granjas campestres o beneficio de pequeños cultivos vegetales, plantas avícolas, porcinas o de ganadería. Estos fraccionamientos atenderán a lo establecido en la siguiente tabla:

**ARTÍCULO 325.** Los fraccionamientos especiales cuyos lotes se aprovecharán para fomentar actividades comerciales o industriales solo podrán ubicarse dentro de los límites de los centros de población establecidos en la zonificación secundaria derivada de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

**ARTÍCULO 326.** Los fraccionamientos especiales de granjas de explotación agropecuaria podrán ubicarse en las zonas no urbanizables de un centro de población cuando su zonificación secundaria así lo establece, o en las zonas de aprovechamiento agrícola o pecuario de la cuando la zonificación general del territorio lo indique.

En poblaciones mayores a cien mil habitantes, incluyendo sus zonas conurbadas, sólo se podrán autorizar fraccionamientos especiales de granjas de explotación agropecuaria, en los términos del dictamen que emita la autoridad competente, dentro del límite del centro de población, o se ubiquen en zonas de desarrollo controlado o especiales.

**ARTÍCULO 327.** Los fraccionamientos especiales deberán ajustar su ubicación y diseño, a lo dispuesto en las normas sanitarias, de control de la contaminación y de desarrollo urbano, así como a las demás disposiciones que regulen la concesión y operación de actividades agropecuarias, comerciales, industriales o el establecimiento de cementerios.

**ARTÍCULO 328.** Los fraccionamientos especiales deberán contar, como mínimo, con las siguientes obras de urbanización:

- I. Sistema de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias;
- II. Red de distribución de energía eléctrica para uso comercial o industrial, según sea el caso;



- III. Alumbrado público con las especificaciones técnicas que determine el proyecto ejecutivo conforme a la norma de Comisión Federal de Electricidad, revisado por la Dirección de Alumbrado público municipal o su equivalente;
- IV. Guarniciones y banquetas con accesos para personas con discapacidad, con los materiales autorizados conforme al Reglamento de Construcción Municipal;
- V. Pavimento de calles con los materiales autorizados conforme al Reglamento de Construcción Municipal;
- VI. Arbolado y jardinería en las áreas destinadas a ese fin. El tipo de árboles y las características de la jardinería atenderán al tipo de vegetación de la región, evitando la siembra de árboles que dañen la infraestructura, o en su caso a lo señalado en las disposiciones de la Dirección o área de Ecología del Municipio;
- VII. Hidrantes contra incendios;
- VIII. Sistema de alcantarillado separado, pluvial y de aguas residuales, con salidas domiciliarias de albañal y dispositivo de protección ecológica en las descargas;
- IX. Espacios libres y su aprovechamiento;
- X. Ductos para redes telefónicas;
- XI. Áreas para estacionamiento de vehículos, correspondientes a conjuntos, lotes o locales;
- XII. Equipamiento de seguridad pública, conforme a las normas jurídicas aplicables;
- XIII. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles, y
- XIV. Equipamiento de limpia en caso de que se requiera, previo dictamen de la dirección de Ecología o su equivalente y con las especificaciones que ésta determine.

**ARTÍCULO 329.** Se podrán autorizar fraccionamientos especiales de tipo mixto siempre y cuando se cumpla con las disposiciones contenidas en esta Ley, los usos y destinos permitidos en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables y en su caso la normatividad ambiental y sanitaria.

### **Sección Segunda Comerciales y de Servicios**

**ARTÍCULO 330.** Los fraccionamientos comerciales y de servicios, se destinarán exclusivamente a la construcción de inmuebles en los que se efectúen operaciones mercantiles de compraventa y almacenamiento de productos, así como para la prestación de servicios públicos o privados permitidos por la ley.

Para la determinación de su ubicación y características, se estará a lo dispuesto en el programa de desarrollo urbano respectivo; en su caso se atenderá a lo dispuesto en el artículo 312 de esta Ley.

### **Sección Tercera Industriales**

**ARTÍCULO 331.** Los fraccionamientos industriales se destinarán exclusivamente a la construcción de inmuebles en los que se efectúen actividades de manufactura y transformación, se ubicarán preferentemente fuera de los límites de los centros de población, de conformidad con lo que establezcan los programas de desarrollo urbano, según corresponda, y en su caso atenderán a las disposiciones del artículo 312 de esta Ley.

#### **Sección Cuarta Cementerios o Parques Funerarios**

**ARTÍCULO 332.** Los fraccionamientos de cementerios o parques funerarios se destinarán exclusivamente al depósito de cadáveres y osarios; la autorización de la Dirección municipal deberá ajustarse a las normas y dictámenes de las autoridades en materia de salud, y en su caso atenderá a las disposiciones del artículo 312 de esta Ley.

### **TÍTULO DÉCIMO QUINTO SUBDIVISIONES, FUSIONES, RELOTIFICACIONES Y CAMBIOS DE INTENSIDAD EN EL USO HABITACIONAL DE ÁREAS Y PREDIOS**

#### **Capítulo Único**

**ARTÍCULO 333.** Para autorizar subdivisiones, fusiones, relotificaciones cualquiera que sea su extensión, la autoridad competente deberá considerar las disposiciones de la presente Ley, y el uso de suelo permitido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de que se trate, para establecer los lineamientos a que deberán sujetarse, estimando la dimensión resultante del predio, el uso al que se destinará y los servicios, equipamiento e infraestructura urbana existentes.

En los casos de centros de población que no cuenten con un Programa de Desarrollo Urbano, se deberán considerar además de las disposiciones de la presente Ley, las de la Ley Ambiental del Estado o de Protección al Ambiente según se trate, en los casos en que sea necesario.

**ARTÍCULO 334.** Las relotificaciones serán autorizadas por la Dirección municipal, únicamente en los casos en que se respeten las densidades que establecen los Programas de Desarrollo Urbano Municipales, o a falta de éstos los que esta Ley determina para cada tipo de fraccionamiento, así como los usos del suelo y que se demuestre la suficiente cobertura de los servicios, debidamente avalados por los dictámenes de factibilidad correspondientes, expedidos por las autoridades y organismos operadores respectivos.

Cualquier solicitud de relotificación que implique la modificación, creación o cancelación de vialidades o el cambio del tipo de fraccionamiento autorizado, tendrá que promoverse ante la Dirección Municipal para que ésta la analice, la dictamine y la autorice en su caso.

**ARTÍCULO 335.** Para los efectos de la aplicación de éste Capítulo será:

- I. **Relotificación:** procedimiento mediante el cual en los fraccionamientos habitacionales autorizados, se incrementa o disminuye el número de viviendas respecto al número de lotes originales, o se modifica su diseño o su traza, pudiendo llevarse a cabo siempre y cuando no sobrepase la densidad de vivienda establecida para la zona de su ubicación en el Programa de Desarrollo Urbano aplicable, o en su caso las que establece esta Ley.

Cuando resulte necesario deberá contemplarse el trazo de nuevas vías públicas o su modificación, así como obras de urbanización complementarias que se requieran;

- II. **Fusión.** La unión en un solo predio, de dos o más predios colindantes, para constituir una unidad de mayor extensión;
- III. **Subdivisión.** La partición de un predio hasta en diez fracciones, que no requiera del trazo de vías públicas ni de obras de urbanización. Si de la subdivisión de un solo predio que realice el propietario de éste o su representante legal resulten más de diez lotes o edificaciones, se considerará entonces como fraccionamiento, quedando sujeto a las disposiciones de la presente Ley, excepto cuando las subdivisiones deriven de sentencia judicial en caso de partición de herencia;

**ARTÍCULO 336.** La autoridad competente, otorgará la autorización a que se refiere el presente Capítulo siempre y cuando:

- I. No se afecte la capacidad de las redes de infraestructura instaladas en el propio fraccionamiento y en la zona de su ubicación, o en caso de afectarse el solicitante se comprometa a instalar las que se requiera a su costa;
- II. No se rebase la densidad de población señalada en los programas de desarrollo urbano, o en su caso las que dispone esta Ley, y
- III. No se afecten:
  - a. Zonas de valores naturales, contenidas en los programas de ordenamiento ecológico;
  - b. Monumentos y zonas arqueológicas e históricas, en los términos de la legislación aplicable, según corresponda, y
  - c. No se deteriore la imagen urbana, de conformidad con los Reglamentos aplicables.

**ARTÍCULO 337.** Las relotificaciones, quedan sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- I. Que los lotes, áreas o predios, en su totalidad, sean propiedad del solicitante;
- II. Tratándose de fraccionamientos, que se soliciten hasta antes de la municipalización de los mismos ;
- III. Que se cuente con la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado público, sin rebasar o afectar su capacidad, o en caso de afectarse el solicitante se comprometa a instalar a su costa las que se requieran;
- IV. Que se esté al corriente con las obligaciones fiscales municipales por parte del solicitante;
- V. Que no disminuya el área de donación para equipamiento, servicios y áreas verdes determinada por el Ayuntamiento en la autorización del fraccionamiento, y
- VI. Que no rebase la intensidad en el uso habitacional permitido en la zona.

**ARTÍCULO 338.** El fraccionador deberá presentar por escrito ante la Dirección Municipal, la solicitud de relotificación del fraccionamiento, acompañada de los documentos, planos y estudios correspondientes, conforme a lo establecido en esta Ley; además, se anexará a la solicitud, la propuesta del plano general de lotificación y memorias descriptivas de los lotes del fraccionamiento, que contenga las modificaciones derivadas de la relotificación.

En caso de autorización de la solicitud, el promovente deberá protocolizar ante notario público el acta y plano general de la relotificación y memorias descriptivas de los lotes del fraccionamiento autorizadas, y presentarlos a la autoridad catastral competente para que determine o modifique los registros catastrales individuales, así como al Registro Público de la Propiedad para su inscripción.

**ARTÍCULO 339.** El cambio de intensidad en el uso habitacional, a fin de incrementar el número de viviendas, procederá en los fraccionamientos habitacionales autorizados, en los que no se hubieren entregado al Ayuntamiento las obras de urbanización, y no sobrepase la densidad de vivienda establecida para la zona de su ubicación por el Programa de Desarrollo Urbano aplicable, o en su caso la determinada en la presente Ley.

**ARTÍCULO 340.** Las fusiones y subdivisiones de áreas y predios deberán ser previamente autorizadas por la Dirección Municipal respectiva, comprendiendo:

- I. Las que se ubiquen en cualquier fraccionamiento, colonia, barrio, manzana, área, sector o zona ubicada dentro de los centros de población, independientemente de que dichas áreas se encuentren o no municipalizadas;
- II. Las que se ubiquen dentro de las zonas que hayan sido objeto de regularización por las autoridades correspondientes o que estén previstas en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y que se encuentren ubicadas dentro de los centros de población;
- III. Las que se ubiquen en terrenos rurales que no sean de origen comunal o ejidal y que no contravengan lo dispuesto en la Ley Agraria y demás disposiciones jurídicas aplicables, con excepción de las subdivisiones y fusiones que se ubiquen en la zona de urbanización ejidal y en la zona de reserva para el crecimiento urbano del ejido o comunidad, y
- IV. Las que estén relacionadas con un presente o futuro asentamiento humano, de conformidad con el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

**ARTÍCULO 341.** Las subdivisiones de terrenos rústicos se regirán por la presente Ley, la Ley Agraria y la Ley General, así como por la legislación ambiental y forestal aplicable.

**ARTÍCULO 342.** La autorización de subdivisiones deberá apegarse a los siguientes criterios:

- I. Solicitudes de subdivisión de predios urbanos:
  - a. Las que se refieran a predios urbanos que requieran la apertura de una o más vías públicas o introducción de servicios urbanos básicos, se les dará el tratamiento y el trámite correspondiente al de los fraccionamientos, excepto cuando éstas se deriven de afectaciones para la realización de obras públicas o las fracciones no se aprovechen para usos habitacionales y no requieran de la introducción de servicios urbanos;
  - b. No se autorizará la subdivisión cuando ésta no respete las densidades, así como los usos de suelo de la zona, barrio, colonia o área que establezcan los Programas de Centro de Población respectivos, o a falta de éstos los que esta Ley determina para cada tipo de fraccionamiento.
  - c. En todos los casos, para uso habitacional unifamiliar popular o de interés social, los frentes y superficies resultantes deberán respetar las densidades que establezcan los programas sociales respectivos, en su caso los programas de Centro de

Población, o el caso de municipios que no cuenten con ellos, las que establece esta Ley para el tipo de fraccionamiento de que se trate.

- d.** En el centro de las ciudades o localidades del Estado, el Ayuntamiento respectivo establecerá los requisitos mínimos para mantener la armonía y la imagen urbana de los centros de población;
- e.** Cuando alguno de los lotes, predios o fracciones de terreno resultado de la subdivisión que se pretende, no tenga acceso directo a una vía pública autorizada, se aplicarán las normas relativas a fraccionamientos, y
- f.** Sólo se autorizarán subdivisiones de predios a los propietarios de los mismos, en los fraccionamientos, colonias o barrios habitacionales urbanos, siempre y cuando no se rebase la densidad de la zona señalado en los programas de Centro de Población municipales o a falta de éstos las que señala esta Ley, ni la capacidad instalada en cuanto al equipamiento e infraestructura existentes de las redes de agua potable, alcantarillado y electricidad, a menos que el solicitante realice a su costa el equipamiento e infraestructura que se requiera para tal efecto, cuestión que en su caso tendrá que fundar y motivar la autoridad municipal.

## **II.** Solicitudes de subdivisión de predios rústicos:

- a.** Las fracciones resultantes en zonas no urbanizables, serán como mínimo de 10,000 metros cuadrados de superficie siempre y cuando exista una servidumbre o camino parcelario que de acceso a ambos predios registrado ante la autoridad competente, debiendo incluir un levantamiento topográfico que indique las características del camino y su ubicación. Las fracciones podrán ser menores siempre y cuando las mismas sean resultado de partición de herencia o copropiedad.
- b.** En predios rústicos ubicados en zonas urbanizables, se autorizarán siempre y cuando exista una servidumbre o camino parcelario que de acceso a todos los predios producto de la subdivisión, registrado ante la autoridad competente, debiendo incluir un levantamiento topográfico que indique las características del camino y su ubicación y el porcentaje de construcción máxima para fines habitacionales no deberá ser mayor del quince por ciento, con base en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables.
- c.** Sólo se permitirá la construcción relacionada con el uso de suelo autorizado, con los coeficientes de ocupación y de utilización y de población, aprobados en los programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial correspondientes, y
- d.** El porcentaje de construcción máxima para fines habitacionales no deberá ser mayor del ocho por ciento de la superficie de cada fracción, con una densidad máxima de una vivienda por hectárea. Los frentes mínimos o accesos tendrán una dimensión no menor de treinta metros hacia una vía pública o camino legalmente constituido, que en ningún caso se aceptará en una sección o anchura menor a doce metros;

**III.** Tratándose de subdivisiones de predios para uso comercial, cualquiera de las fracciones resultantes no deberá ser menor a las medidas que disponga el programa de desarrollo urbano de centro de población respectivo, o en su defecto de los ochenta metros cuadrados. En cualquier caso, deberá contar con el espacio suficiente para las instalaciones sanitarias, de ventilación o

iluminación natural y la disposición de cajones de estacionamiento dentro del predio conforme a la normatividad urbana municipal correspondiente;

**IV.** En predios dentro de áreas de preservación ecológica determinadas por las autoridades urbanas y ambientales estatal o municipales, que no han sido declaradas como áreas naturales protegidas, que son valiosas por su riqueza natural y fundamentales para la conservación y mejoramiento de los ecosistemas y la biodiversidad, las fracciones resultantes serán como mínimo de 25,000 metros cuadrados y deberán respetar la zonificación prevista en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables;

**V.** En predios dentro de la áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipales, la subdivisión de terrenos y la construcción estará regida por lo que determine la declaratoria de su creación y el plan de manejo correspondiente, de conformidad con la Ley Ambiental del Estado, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

**VI.** En los desarrollos inmobiliarios que deriven de subdivisiones, fraccionamientos y/o condominios existentes, en las que previamente se haya concretado la donación correspondiente, no se requerirá al propietario la donación para equipamiento y áreas verdes.

Las reglas que dispone el presente artículo, no serán aplicables cuando se trate de partición de herencia.

**ARTÍCULO 343.** En las rancherías o poblaciones rurales podrán autorizarse subdivisiones de predios rústicos con menos de diez mil metros cuadrados de superficie, con el objeto de obtener solares para casa habitación, cuyas fracciones no podrán ser inferiores a quinientos metros cuadrados, de acuerdo a lo siguiente:

**I.** Se deberán realizar estudios técnicos que para tal efecto solicite el Ayuntamiento o bien realice con cargo al particular; mismos que deberán incluir las factibilidades de energía eléctrica, alumbrado público, agua y drenaje y el dictamen del equipamiento existente, con la finalidad de detectar si se requiere área de donación. La introducción de servicios será por cuenta del solicitante, dentro del plazo que le determine el ayuntamiento correspondiente;

**II.** No podrá autorizarse la subdivisión en caso que el predio que se pretende subdividir afecte el trazo de vialidades proyectadas, a menos que el área afectada sea donada al Municipio;

**III.** En caso que la subdivisión implique más de diez fracciones, el solicitante deberá presentar una exposición en la que manifieste los motivos por los que se pretende subdividir el predio; el Ayuntamiento verificará los antecedentes históricos de la subdivisión del predio, así mismo, para el caso de que se detecte que los predios a subdividir se pretendan comercializar públicamente se le dará el tratamiento de fraccionamiento;

**IV.** Cumplir el solicitante en lo conducente con las obligaciones previstas en el artículo anterior, y

**V.** El Ayuntamiento remitirá una copia de la autorización de subdivisión a la autoridad catastral y en su caso, agraria correspondiente.

**ARTÍCULO 344.** Podrán solicitar fusiones o subdivisiones de áreas o predios, las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean las legítimas propietarias de los inmuebles objeto de la solicitud, para tal efecto deberá presentar la solicitud por escrito ante la dirección municipal correspondiente, anexando los siguientes datos y documentos:

- I. Datos personales del solicitante;
- II. Datos de las áreas o predios;
- III. Copia certificada de la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad;
- IV. Constancia de no adeudo del impuesto a la propiedad raíz y clave catastral de los predios;
- V. Plano del terreno o de los terrenos con acotaciones en metros y señalando la orientación de los mismos y sus colindancias, georeferenciado con coordenadas UTM. El Ayuntamiento podrá aceptar dicho plano sin coordenadas UTM, cuando las colindancias estén definidas;
- VI. Plano de la fusión o subdivisión que se pretenda realizar georeferenciado con coordenadas UTM. El Ayuntamiento podrá aceptar dicho plano sin coordenadas UTM, cuando las colindancias estén claramente definidas;
- VII. Características de la urbanización del terreno o terrenos, y
- VIII. En el caso de un predio rústico con una superficie mayor de 10,000 metros cuadrados, también deberá ir acompañada de un levantamiento topográfico catastral.

**ARTÍCULO 345.** Tratándose de la solicitud de subdivisión de terrenos, deberá presentarse certificado de gravamen de los mismos, con una antigüedad no mayor a treinta días anteriores a la fecha de la solicitud; en caso de que el inmueble tenga algún gravamen, deberá acompañarse la autorización de la persona que lo haya constituido.

**ARTÍCULO 346.** En los casos de solicitudes para la fusión de dos o más predios, procederán cuando sean propiedad de una sola persona, o si son distintos dueños, derivado de la fusión, se constituyan como copropietarios, y que el uso de suelo sea compatible para todos los predios que se pretendan fusionar, de conformidad con el programa de desarrollo urbano correspondiente.

**ARTÍCULO 347.** En los condominios no se permitirá subdividir los predios, salvo que sean predios compatibles para uso habitacional multifamiliar, comercial o de servicios, siempre y cuando se respete la zonificación respectiva derivada del proyecto autorizado y de los programas de desarrollo urbano aplicables, la capacidad de dotación suficiente de servicios y los cajones de estacionamiento requeridos.

**ARTÍCULO 348.** En caso de traslape o sobreposición de medidas y colindancias de los predios a relotificar, fusionar o subdividir, conforme a la base catastral o en las escrituras públicas respectivas, se requerirá del interesado que acompañe a la solicitud las correspondientes diligencias judiciales o administrativas de apeo y deslinde del predio correspondiente, a menos que los propietarios de los predios afectados estén de acuerdo en realizar la operación correspondiente y no se afecten derechos de terceros; dicho acuerdo deberá constar ante Notario Público.

**ARTÍCULO 349.** La Dirección podrá negar la autorización de relotificación, fusión y subdivisión de áreas y predios, cuando en el fraccionamiento, condominio o zonas en que se pretendan realizar, no se cuente con los dictámenes de factibilidad de agua, alcantarillado y electricidad otorgados por las autoridades y organismos correspondientes. Asimismo, no se autorizarán cuando obstruyan o impidan una servidumbre legalmente reconocida o un servicio público. Será nulo de pleno derecho cualquier acto, contrato o convenio contrario a esta disposición.

**ARTÍCULO 350.** El Ayuntamiento o la autoridad competente, sólo autorizará la construcción o el funcionamiento de establecimientos en predios provenientes de relotificaciones, fusiones o subdivisiones, cuando éstas hayan sido previamente autorizadas conforme a lo dispuesto en esta Ley.

**ARTÍCULO 351.** Toda fusión o subdivisión de lotes y predios deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, en un plazo no mayor a seis meses, contado a partir de su autorización; en caso contrario quedará sin efectos dicha autorización. Una vez inscrito deberá presentarse una copia de la inscripción respectiva a la Dirección municipal para integrarla al expediente.

Asimismo, el solicitante, en coordinación con el notario público que haya protocolizado la subdivisión o fusión, deberá presentar a la autoridad catastral respectiva, las manifestaciones de predio correspondientes a cada una de las fracciones resultantes de una subdivisión o la manifestación de predio del terreno resultante de una fusión a efecto de determinar y modificar los registros catastrales individuales.

## **TÍTULO DÉCIMO SEXTO DESARROLLOS EN CONDOMINIO**

### **Capítulo Único**

**ARTÍCULO 352.** Para efectos de esta Ley se entiende por desarrollo en condominio, al conjunto de departamentos, viviendas, locales y naves de un inmueble, construido en forma vertical, horizontal o mixta susceptible de aprovecharse independientemente, por tener una salida propia de elementos comunes a la vía pública, pertenecientes a distintos propietarios, los cuales tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su área privativa; y de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble necesario para un adecuado uso.

Dicha modalidad también podrá darse únicamente sobre un predio o superficie de terreno que se encuentre físicamente delimitado, que cuente con la infraestructura urbana prevista para el tipo de fraccionamiento de que se trate y que cumpla con los lineamientos establecidos en el programa de desarrollo urbano y el reglamento correspondiente.

**ARTÍCULO 353.** La Dirección Municipal previo los requisitos que establece la presente Ley, otorgará la aprobación para construir desarrollos en régimen de propiedad en condominio, así como su ubicación, instalaciones, servicios, áreas de donación, espacios libres, zonas comerciales y demás requerimientos propios de los mismos, de conformidad con lo que establezca esta Ley y el reglamento municipal correspondiente.

**ARTÍCULO 354.** Los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, estarán sujetos a las disposiciones del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, a la presente Ley, y a los reglamentos respectivos, y se clasificarán en los siguientes tipos:

- I. **Habitacional:** Área destinada al uso exclusivo de vivienda;
- II. **Comercial o de servicios:** Área destinada a la comercialización o a dar una prestación según su giro;
- III. **Industrial:** Área destinada a la actividad manufacturera o de la transformación; y
- IV. **Mixto:** Área destinada a dos o más tipos de los anteriormente mencionados y compatibles.



**ARTÍCULO 355.** Los desarrollos en condominio de acuerdo a su tipo de construcción podrán ser:

- I. **Condominio vertical:** Es aquél edificado en varios niveles, en un solo terreno común, con unidades de propiedad exclusiva con derechos y obligaciones de copropiedad sobre el suelo y los demás elementos comunes del inmueble de conformidad con lo que establecen el Código Civil y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, y respecto del uso del suelo, densidad de población y coeficientes de ocupación y utilización del suelo estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, a la presente Ley y a la reglamentación municipal respectiva;
- II. **Condominio horizontal:** Es aquél que se construye con elementos horizontales, pudiendo o no compartir la estructura y los demás elementos medianeros; o el que se desarrolla sobre un terreno o inmueble con equipamiento e infraestructura urbana teniendo el condómino en ambos casos, derecho de uso exclusivo en la unidad privativa y derecho de copropiedad en las demás áreas comunes; y
- III. **Condominio mixto:** Es el que se conforma por condominios horizontales y verticales, pudiendo estar constituidos en grupos de propiedad exclusiva.

**ARTÍCULO 356.** Las obras de urbanización y de edificación de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio deberán cumplir con las normas y especificaciones que señala esta Ley y el reglamento correspondiente, así como con las disposiciones que al efecto establezcan los organismos prestadores de los servicios públicos correspondientes.

**ARTÍCULO 357.** Los condominios de tipo social y popular habitacional deberán contar con áreas para la dotación de equipamiento urbano y áreas verdes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, en el programa de desarrollo urbano, en su caso en el programa social respectivo, y en el reglamento municipal correspondiente.

## **TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DISPOSICIONES COMUNES A FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES**

### **Capítulo I Normas técnicas del proyecto**

**ARTÍCULO 358.** Los proyectos de urbanización y construcción en los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales deberán sujetarse en lo conducente, a los siguientes tipos de normas técnicas:

- I. De diseño, que son las que regulan el proyecto en cuanto a la lotificación y/o zonificación, dimensiones de lotes o predios y manzanas o áreas, densidades de población, construcción y de ocupación del suelo, restricciones y limitaciones urbanas y ambientales, equipamiento y mobiliario urbano, áreas verdes y de donación;
- IV. De sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial;
- V. De vialidad, y
- VI. De electrificación y alumbrado público.

**ARTÍCULO 359.** Las densidades de población, los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, los usos o destinos compatibles y la construcción de vivienda multifamiliar o edificios habitacionales en su caso, dentro de los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, se autorizarán por el Ayuntamiento a través de la Dirección Municipal, en las zonas y porcentajes que para tal efecto hayan sido determinadas y establecidas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en la licencia de uso de suelo respectiva, con base en esta Ley, y demás normatividad aplicables.

Los proyectos de condominios horizontales habitacionales de tipo unifamiliar, deberán considerar para el diseño de los predios condominales, las características de lotificación de los fraccionamientos habitacionales urbanos que establece esta Ley, salvo lo que dispongan los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, los reglamentos de construcción y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 360.** Cuando en un área o predio por fraccionar o desarrollar existan obras o instalaciones de servicio público, el fraccionador o promotor evitará la interferencia de sus propias obras o instalaciones con las existentes.

En caso de que se cause daño o deterioro a las obras o instalaciones existentes, el fraccionador o promotor será responsable de su reparación; para ello se fijará un plazo perentorio, según la naturaleza del daño causado y la urgencia de repararlo, a fin de que la obra conducente quede debidamente ejecutada a tiempo.

Si vencido el plazo que se señala en el párrafo anterior, no se hubiere concluido la reparación, ésta se ejecutará por el Ayuntamiento a cuenta del fraccionador o promotor. Lo dispuesto en este artículo, no exime al fraccionador o promotor de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole que deriven de las infracciones y los daños en que hubiere incurrido por la falta de prestación del o los servicios públicos afectados.

## **Capítulo II Áreas de Donación**

**ARTÍCULO 361.** Los ayuntamientos, a través de la Dirección Municipal, aprobarán la ubicación, destino y las características de las áreas de donación para infraestructura, equipamiento, servicios y áreas verdes en los fraccionamientos, o desarrollos inmobiliarios especiales, con base en el proyecto que le someta a su consideración el fraccionador o el promotor, revisado en su caso, por la mesa colegiada o grupo de revisión de proyectos, a fin de que dichas áreas respondan a la normatividad urbana y ambiental, así como a los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, a efecto de propiciar un mejor aprovechamiento, distribución, acceso y operación de los servicios públicos, la conexión de la vialidad y el equilibrio ecológico.

**ARTÍCULO 362.** Los municipios aprovecharán las áreas de donación que reciban por parte de los fraccionadores o promotores, consideradas en el dictamen y en la autorización correspondiente, para equipamiento, áreas verdes y servicios, en los porcentajes que establece esta Ley.

En caso de que el área de donación sea mayor de 10,000.00 metros cuadrados, la autoridad municipal solicitará un estudio de impacto urbano sustentable para aprobar el número de lotes en que se podrá otorgar.

**ARTÍCULO 363.** Las áreas verdes de los fraccionamientos, deberán equiparse por los fraccionadores, con base en el proyecto que presenten para su aprobación al Ayuntamiento, con la forestación que determine el Reglamento de Parques y Jardines o reglamento equivalente.

El proyecto de equipamiento de las áreas verdes deberá considerar el acondicionamiento básico de vegetación y jardinería, mobiliario e instalaciones mínimas indispensables para su aprovechamiento. Deberá utilizarse preferentemente riego con aguas tratadas o de aljibes de captación de agua pluvial.

El porcentaje del área de donación destinada a equipamiento conforme a esta Ley, se entregará limpia y sin escombros y deberá contar con tomas de agua, descarga de albañal, banquetas, guarniciones y alumbrado público. Dicha obligación formará parte del dictamen y la autorización correspondiente.

**ARTÍCULO 364.** La Dirección municipal al aprobar los terrenos que le deban ser donados para áreas verdes, equipamiento y servicios, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, al realizar la selección, deberá considerar aquellas áreas que satisfagan de mejor forma los servicios que requieran los colonos del propio fraccionamiento y la comunidad en general, y se ajusten a la zonificación respectiva prevista en los programas de desarrollo urbano.

El área de terreno que le deba ser donado, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Que se encuentre libre de gravamen y no esté sujeta a controversia ante la autoridad judicial o a la acción de las autoridades administrativas;
- II. Tener frente a la vía pública, en una proporción y topografía que la haga susceptible de aprovechamiento;
- III. Tener una ubicación, que permita su utilización; y
- IV. Que no exista ninguna afectación federal, estatal, ni municipal en el inmueble.

**ARTÍCULO 365.** Los ayuntamientos no deberán aceptar en donación predios afectados por fallas geológicas, derechos federales de vía, entre otros, como líneas de la Comisión Federal de Electricidad, cuerpos de agua, carreteras, vías férreas y polductos.

**ARTÍCULO 366.** Cuando la superficie a donar para infraestructura, equipamiento y servicios sea menor a tres mil metros cuadrados, no podrá en ningún momento establecerse en forma disgregada, salvo las áreas que se requieran para parques vecinales, espacios públicos abiertos, seguridad pública y los servicios de agua potable, plantas de tratamiento y limpia.

Tratándose de superficies mayores a tres mil metros cuadrados se donarán conforme lo apruebe el Ayuntamiento a través de la Dirección municipal, con base en el proyecto presentado por el fraccionador o promotor. Se propiciará la ubicación de áreas de donación que concentren equipamiento para la educación básica y los servicios de salud y abasto.

Las áreas de donación para vialidad al Municipio, son independientes y adicionales a las áreas de donación para equipamiento, servicios y áreas verdes.

**ARTÍCULO 367.** El cálculo de la superficie neta de donación se hará deduciendo del área total del fraccionamiento, la ocupada por vías públicas, obras hidráulicas sanitarias y de saneamiento incluyendo camellones y banquetas.

En el caso de que el fraccionamiento se localice en dos o más municipios las donaciones se harán proporcionalmente de acuerdo al Dictamen que para tal efecto emita la Comisión de Conurbación o de Zona Metropolitana;

La proporción del predio a fraccionar que se donará para equipamiento será a razón de la siguiente tabla:

TIPO DE FRACCIONAMIENTO	DONACIÓN (% del área vendible)	
	EQUIPAMIENTO	ÁREA VERDE
	%	%
<b>DENSIDAD MÍNIMA</b>	5	5
<b>DENSIDAD BAJA O CAMPESTRE</b>	5	5
<b>DENSIDAD MEDIA BAJA O RESIDENCIAL</b>	5	5
<b>DENSIDAD MEDIA</b>	7.5	7.5
<b>DENSIDAD MEDIA ALTA O POPULAR</b>	7.5	7.5
<b>DENSIDAD ALTA O ECONÓMICO</b>	9	9

**ARTÍCULO 368.** El área verde en condominios horizontales será el resultado de aplicar el quince por ciento al área total privativa del mismo; debiéndose escriturar dichas áreas como parte del indiviso en el régimen de condominio; las mismas serán utilizadas únicamente para equipamiento y áreas verdes, y se ubicarán dentro del propio desarrollo. Esta obligación y restricción deberá señalarse en la autorización respectiva. Dicha área será equivalente a la donación correspondiente que se establece en esta Ley para los fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios especiales.

**ARTÍCULO 369.** Las áreas verdes que sean donadas a los municipios al interior de los fraccionamientos especiales, serán entregadas en concesión gratuita a la administración de los mismos, con la obligación de conservarlas y únicamente aprovecharlas para ese destino, a fin de incrementar la calidad del ambiente en la zona. Esta obligación y restricción deberá señalarse en la autorización respectiva.

**ARTÍCULO 370.** Los fraccionadores y promotores de fraccionamientos especiales podrán formalizar en escritura pública las donaciones por etapas, previa autorización de la Dirección Municipal.

**ARTÍCULO 371.** La Dirección municipal a petición del fraccionador o cuando así lo requiera, podrá convenir, previa aprobación del Cabildo respectivo, con los fraccionadores y desarrollos inmobiliarios especiales, que cubran parte o la totalidad de los derechos municipales que se deriven de la autorización y urbanización del proyecto, con obras de equipamiento o infraestructura especial o adicional, como edificación de escuelas de educación básica, centros de salud, áreas deportivas y otras análogas.

Los ayuntamientos a través de la Dirección municipal, proporcionarán o le aprobarán al fraccionador o promotor los proyectos ejecutivos de obras de equipamiento y sus especificaciones y costos, a que se refiere este artículo; asimismo supervisarán su ejecución y recibirán la entrega de las mismas.

**ARTÍCULO 372.** Los bienes inmuebles que comprenden las áreas de donación de un fraccionamiento, o desarrollo inmobiliario especial, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que se encuentren destinados.

Las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como parques y jardines de donación, no podrán desafectarse ni cambiar de ese destino.

**ARTÍCULO 373.** En los fraccionamientos el Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de lo dispuesto y con base en el procedimiento que establecen la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables, únicamente en las superficies donadas para infraestructura, equipamiento y servicios en un porcentaje menor a lo

dispuesto en el artículo 367 de esta Ley y siempre y cuando se demuestre que se encuentra satisfecha la demanda de los mismos, y se tenga como finalidad cualesquiera de las siguientes:

- I. La enajenación a título oneroso o permuta para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios públicos a cargo del Ayuntamiento;
- II. El arrendamiento, donación o comodato, a favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social con un claro beneficio para la población y que no persigan fines de lucro;
- III. La permuta con la Federación o el Estado de inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan las necesidades de las partes;
- IV. La compra o permuta de bienes inmuebles que sean necesarios para la ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la realización o prestación de cualquier tipo de obra o servicio público; o
- V. La enajenación a título oneroso y en subasta pública de áreas de donación que por su extensión y superficie no puedan aprovecharse adecuadamente para infraestructura, equipamiento y servicios públicos.

**ARTÍCULO 374.** Toda enajenación a título oneroso de áreas de donación destinadas a infraestructura, equipamiento y servicios, se hará a valor comercial determinado por perito autorizado y deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo y autorizada por el Congreso del Estado.

**ARTÍCULO 375.** Queda prohibido a los ayuntamientos ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en las áreas de donación destinadas para áreas verdes, excepto cuando dichas áreas sean menores a quinientos metros cuadrados.

**ARTÍCULO 376.** Se considerará como parte de la donación que el fraccionador está obligado a donar al Ayuntamiento para infraestructura, equipamiento y servicios, las áreas de terreno que se requieran, entre otras, para limpia, seguridad pública, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable y plantas de tratamiento.

**ARTÍCULO 377.** Las obras de equipamiento que se deberán llevar a cabo en las áreas de donación de los fraccionamientos habitacionales urbanos, en proporción al número de habitantes previstos, serán:

- I. Jardín de niños,
- II. Escuela primaria,
- III. Unidad médica,
- IV. Juegos infantiles,
- V. Módulos o canchas deportivas,
- VI. Jardines y áreas arboladas.

En caso de que exista de forma suficiente el equipamiento a que se refieren las fracciones anteriores, los colonos con anuencia del Ayuntamiento podrán determinar el equipamiento complementario que sea de beneficio social.

**ARTÍCULO 378.** Los titulares de los fraccionamientos en coordinación con el Ayuntamiento deberán llevar a cabo las siguientes obras de urbanización en las áreas de donación:

- I. En el área de donación destinada a jardines se deberá de construir un sistema artificial de infiltración de agua pluvial al subsuelo cuando las condiciones físicas del terreno y de los escurrimientos hagan factible su operación; deberán entregarse al Ayuntamiento con tomas de agua, banquetas, guarniciones, botes o contenedores de basura urbana, arboladas y con alumbrado público;
- II. En caso de que el fraccionamiento no cuente con agua suficiente para el adecuado mantenimiento de jardines o áreas arboladas en el área de donación, se llevará a cabo la construcción de obras de equipamiento deportivo;
- III. Toda área de donación destinada a equipamiento deberá contar con tomas de agua, descarga de albañal, banquetas, guarniciones y alumbrado público.
- IV. Las obras de equipamiento para fraccionamiento industrial comprenderá: área ajardinada, módulo deportivo y centro de capacitación para trabajadores.

### **Capítulo III**

#### **Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje**

**ARTÍCULO 379.** Cuando en los fraccionamientos o condominios especiales, a excepción de los industriales, no sea posible realizar un sistema de alcantarillado por razones técnicas, en virtud de no contarse con un lugar adecuado para la descarga, u otro motivo similar, el Ayuntamiento podrá autorizar al fraccionador o promotor la construcción de una fosa séptica por lote o planta de tratamiento de agua residual, respetando los lineamientos que el mismo le señale.

**ARTÍCULO 380.** La perforación y aprovechamiento de pozos para el abastecimiento de agua potable en los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, sólo podrá realizarse mediante la autorización por escrito de la autoridad competente y respetando las especificaciones que ésta determine, con base en las disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión Estatal del Agua y demás autoridades y organismos operadores estatal y municipales, tendrán la intervención que les establece la Ley de Aguas para el Estado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

**ARTÍCULO 381.** Cuando en el predio por fraccionar, constituir un condominio o ejecutar un desarrollo inmobiliario especial, exista autorizada una fuente de abastecimiento para usos diferentes al que se pretende dar según el proyecto, deberá recabarse de la Comisión Nacional del Agua la autorización para el cambio de uso del aprovechamiento hidráulico correspondiente, en coordinación con las autoridades y organismos operadores estatal y municipales.

**ARTÍCULO 382.** El Ayuntamiento y o el organismo operador podrá conectar un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial a la red municipal de agua potable y alcantarillado cuando se garantice, previo estudio de factibilidad positivo, la suficiencia de ese servicio. El fraccionador o promotor deberá pagar los derechos de conexión correspondientes de acuerdo a la Ley de Aguas del Estado.

**ARTÍCULO 383.** En el caso de los fraccionamientos ubicados en centros de población con más de cien mil habitantes, la perforación y equipamiento de los pozos de agua potable que se requieran, será realizada directamente por el fraccionador, previo convenio que celebre con el organismo operador o en su caso con el ayuntamiento, de acuerdo a las normas y especificaciones que la autoridad competente en materia de Agua le determine.

El Ayuntamiento, igualmente, administrará y se hará cargo del mantenimiento de las fuentes de abastecimiento, lo mismo que de las redes de distribución y demás partes del sistema de agua potable, conforme sean puestas en operación, aún cuando no se haya municipalizado el fraccionamiento.

## **Capítulo IV Infraestructura**

**ARTÍCULO 384.** Se declara de utilidad pública, la expropiación de la superficie necesaria para establecer obras de liga, entre el área o predio en el que se pretenda hacer un fraccionamiento, condominio, desarrollos inmobiliarios especiales y otras zonas urbanizadas, siempre y cuando dicha liga sea estimada conveniente para el futuro crecimiento de esas zonas, en los diversos programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables. Las indemnizaciones correspondientes serán cubiertas por la autoridad expropiante con cargo proporcional al fraccionador o promotor y demás fraccionadores o desarrolladores inmobiliarios de esas zonas por urbanizar.

**ARTÍCULO 385.** Cuando por lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano, se requieran vialidades o calles con anchura superior a treinta metros, las superficies que excedan a esa extensión deberán ser descontadas de aquellas que el fraccionador o promotor del condominio o desarrollo inmobiliario especial deba donar para equipamiento, servicios y áreas verdes al Municipio.

Para la aplicación del párrafo anterior, deberá entenderse que los porcentajes para equipamiento, servicios y áreas verdes, a que hace referencia el artículo 367 de esta Ley, se deberán respetar, independientemente de los excedentes por anchura de calles.

**ARTÍCULO 386.** La postería de la red de electrificación, alumbrado público, teléfonos, señalamiento, indicadores, letreros o cualquier otro tipo similar, deberán ubicarse sobre las banquetas de las vialidades o calles en el área próxima a la guarnición y en la colindancia de los lotes o predios, sin interferir el área de circulación de los peatones; en caso de ser retirados, deberán eliminarse desde su base y de manera completa de forma que no constituyan obstáculos peligrosos para los transeúntes o la circulación vehicular en dichas zonas. En los casos posibles se promoverá que la red de electrificación y teléfonos sean subterránea.

## **TÍTULO DÉCIMO OCTAVO AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS**

### **Capítulo I Requisitos y Procedimiento para su Autorización**

**ARTÍCULO 387.** La autorización de fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios especiales y condominios será facultad de la Dirección Municipal, debiendo informar al Ayuntamiento de manera trimestral sobre las autorizaciones expedidas.

**ARTÍCULO 388.** La autorización para la construcción de un fraccionamiento sólo podrá ser otorgada a la persona física o moral propietaria de los terrenos en que se pretendan ejecutar las obras.

El solicitante podrá intervenir por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado en los términos de Ley. Si el solicitante fuere una persona jurídica, el representante legal deberá acreditar su legal constitución.

**ARTÍCULO 389.** La solicitud para la autorización de un fraccionamiento, desarrollo inmobiliario especial o condominio, deberá presentarse por escrito ante la Dirección Municipal del Ayuntamiento respectivo, la cual deberá ser acompañada, de los siguientes documentos por duplicado:

- I.** Licencia de uso de suelo;
- II.** Copia certificada de las escrituras de propiedad del inmueble o inmuebles debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Cuando no se cuente con el título de propiedad, se podrá acompañar a la solicitud una constancia notariada o judicial que acredite la legítima posesión del inmueble, debiendo anexarse posteriormente el relativo a la propiedad, sin el cual la autorización no será concedida;
- III.** Copia certificada del acta constitutiva de la empresa inmobiliaria solicitante, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando se trate de persona moral; si se trata de persona física, copia certificada de identificación oficial vigente, y CURP.
- IV.** Generales del compareciente: nombre, estado civil, nacionalidad, lugar de origen, profesión u oficio, domicilio, teléfono, registro federal de contribuyentes, así como identificación oficial;
- V.** En su caso el poder general para actos de administración para gestionar y asumir las obligaciones a nombre del propietario o propietarios del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud;
- VI.** Copia del recibo del Impuesto predial al corriente.
- VII.** Dictamen de impacto ambiental emitido por la autoridad competente, a que se refiere la Ley Ambiental del Estado, cuando sean fraccionamientos o condominios mayores a cincuenta viviendas, locales o predios; o cuenten con una superficie mayor a diez mil metros cuadrados;
- VIII.** Estudio de impacto urbano y vial, cuando sean fraccionamientos o condominios mayores a cincuenta viviendas, locales o predios; o cuenten con una superficie mayor a diez mil metros cuadrados;
- IX.** Garantías para la ejecución de las obras de urbanización, las que deberán permanecer vigentes hasta la entrega del fraccionamiento al Municipio;
- X.** Ubicación del inmueble o inmuebles en aerofoto o cartografía reciente;
- XI.** Plano de conjunto a escala 1:5,000 que contenga las vías de liga del fraccionamiento, con otras zonas urbanizadas;
- XII.** Plano topográfico del terreno o terrenos destinados al fraccionamiento, desarrollo especial o condominio, a escala 1:1,000, con coordenadas UTM, que contenga:
  - a.** El polígono o polígonos: indicando sus medidas y colindancias, así como, las longitudes de los lados, sus rumbos y los ángulos inferiores en los vértices;
  - b.** La configuración del terreno o terrenos con curvas de nivel a cada metro, y
  - c.** La superficie total del terreno o terrenos.
- XIII.** Plano de vialidad a escala 1:1,000, marcando el trazo de los ejes de las vías públicas referido geoméricamente a los linderos del terreno o terrenos, marcando:
  - a.** Los ángulos de intersección de los ejes;
  - b.** Distancia entre los ejes, y
  - c.** Las secciones transversales a escala 1:200 de las calles o vialidades.



**XIV.** El estudio de factibilidad positivo otorgado por el organismo operador de agua potable ó del Municipio según corresponda;

**XV.** Factibilidad de electrificación y alumbrado público avalada por las autoridades competentes;

**XVI.** Estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos;

**XVII.** Memoria de cálculo de reutilización de las aguas grises y de lluvia, para el caso de condominios mayores de 10,000 metros cuadrados y fraccionamientos habitacionales urbanos e industriales;

**XVIII.** Memoria de cálculo del proyecto de escurrimientos de aguas pluviales o aprovechamiento de las mismas;

**XIX.** Planos con especificaciones y memorias de cálculo de planta de tratamiento cuando el Ayuntamiento determine que no es factible conectarse a la red de drenaje municipal, y

**XX.** En el caso específico de fraccionamientos, además de los anexos citados con anterioridad, el solicitante deberá incluir los siguientes documentos por duplicado:

- a. Plano de lotificación a escala 1:1000, que marque lo siguiente:
  1. Propuesta del nombre del fraccionamiento y de la nomenclatura de las vialidades y calles;
  2. División de manzanas y su lotificación;
  3. Zonificación interna, que especifique los usos y destinos de suelo, así como las restricciones de uso o destino del suelo federales, estatales y municipales, y
  4. Áreas de donación propuestas, especificando las que corresponden a equipamiento y servicios y las de áreas verdes.
- b. Plano en el que se indique el número total de lotes del fraccionamiento; señalando además, el número de éstos en cada una de las manzanas, el lote tipo y el uso o destino de cada uno de ellos, así como los lotes propuestos para viviendas multifamiliares o lotes condominiales;
- c. En su caso, el plano de etapas del mismo; y

**XXI.** En el caso específico de condominios, además de los anexos correspondientes, el solicitante deberá incluir adicionalmente los siguientes documentos por duplicado:

- a. Plano de zonificación a escala 1:1000 que señale:
  1. Propuesta de nomenclatura de las vialidades;
  2. La localización de las áreas verdes, y
  3. Usos y destinos del suelo con cuadros de superficies y restricciones en su caso.
- b. La memoria descriptiva de bienes de propiedad exclusiva y de uso común, con las superficies, medidas y colindancias de los predios condominiales;
- c. La tabla de valores nominales e indivisos de los predios de propiedad exclusiva, y
- d. El reglamento de administración del condominio;

**XXII.** En caso de fraccionamientos de urbanización progresiva, los documentos que acrediten que se trata de un organismo de vivienda o asociación autorizada para llevar a cabo esta clase de desarrollos, y los relativos a la acreditación del estudio de impacto urbano cuando así se requiera, y

**XXIII.** Los demás requisitos o documentos que requiera el ayuntamiento conforme a esta Ley y Reglamentos municipales aplicables, y

**XXIV.** Los demás que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los planos a que se refiere este artículo deberán ser avalados además por el Director responsable de obra, según corresponda.

**ARTÍCULO 390.** En el supuesto de que el predio abarque el espacio territorial de dos o más municipios, el trámite se deberá realizar de conformidad con lo que establezcan los convenios de conurbación o de zona metropolitana celebrados entre los éstos atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El o los ayuntamientos y la Comisión Metropolitana y de Conurbación, deberán consultar a las autoridades u organismos competentes sobre el abastecimiento normal de agua potable, drenaje pluvial y saneamiento; las facilidades para el desagüe y las obras de conducción y distribución eléctrica necesarias. Además, harán un estudio del proyecto para soluciones urbanísticas, atendiendo a las necesidades presentes y futuras de la zona que se pretende fraccionar.

**ARTÍCULO 391.** Recibida la solicitud, será revisada por la Dirección Municipal para verificar que esté correctamente integrada, conforme a lo dispuesto en el artículo 389 de esta Ley; en caso de que falte alguno de los datos, documentos, requisitos o anexos, se le notificará por escrito al solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes a que presentó ésta, para que subsane la omisión.

**ARTÍCULO 392.** Integrado y revisado el expediente del fraccionamiento o condominio, la Dirección Municipal, a través de la mesa colegiada o grupo de revisión de proyectos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales o su equivalente que se constituya en cada Municipio, recabará la opinión técnica de las autoridades u organismos competentes que sean necesarias, en cada uno de los aspectos técnicos que se deban analizar e incluir en la autorización correspondiente, las que contarán con término de hasta quince días hábiles como máximo para emitirlos; en caso de no presentarlas dentro de dicho término se entenderá que están de acuerdo con la procedencia de la autorización.

**ARTÍCULO 393.** Una vez que se cuente con la opinión técnica de las diversas áreas, la Dirección Municipal procederá a analizar la solicitud, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia y las normas técnicas, de planeación urbana y de construcción a las que deberá ajustarse el proyecto, a efecto de resolver en definitiva sobre la autorización respectiva, lo que deberá realizar dentro del término de quince días hábiles siguientes a la recepción de las opiniones técnicas, siempre y cuando éstas determinen la procedencia de la misma.

Si de las opiniones técnicas se deriva que deban hacerse modificaciones al proyecto o complementar información o requisitos, los quince días para resolver a que se refiere el párrafo anterior, se contarán a partir de que dichas modificaciones se concreten o resuelvan por el promotor solicitante.

**ARTÍCULO 394.** El expediente definitivo del fraccionamiento deberá quedar integrado, con la documentación a que se refiere el proceso de autorización del fraccionamiento, bajo la supervisión y responsabilidad de la autoridad competente.

La documentación señalada en el presente artículo, deberá estar avalada, según corresponda, por un Director responsable de obra legalmente autorizado por la autoridad competente.

La información a que se refiere el presente artículo, podrá resguardarse en medios digitalizados.

**ARTÍCULO 395.** El ayuntamiento mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los noventa días siguientes a la aprobación de un fraccionamiento, la autorización definitiva de éste en versión abreviada.

La publicación de ésta autorización corre por cuenta del fraccionador, quien además estará obligado a difundirla dos veces, con un intervalo de cinco días, en cualquiera de los periódicos de mayor circulación en el Estado.

**ARTÍCULO 396.** La autoridad municipal para los efectos correspondientes hará del conocimiento de la Secretaría, del Instituto Registral y Catastral del Estado, de las Direcciones de Catastro Municipal, y en su caso, a la Comisión Metropolitana y de Conurbación o, las autorizaciones de fraccionamiento que expida.

En caso de que el fraccionamiento proyectado se encuentre ubicado en una zona de conurbación, el Dictamen de la Comisión de Conurbación o Metropolitana se fundamentará en la zonificación del programa de conurbación correspondiente.

**ARTÍCULO 397.** Para que la autoridad competente autorice un fraccionamiento alejado a más de quinientos metros de las zonas urbanizadas, el fraccionador deberá presentar estudio de impacto urbano y ejecutar de conformidad con lo pactado por el Ayuntamiento respectivo, las obras necesarias para el acceso vial y la conexión y/o fuentes propias del equipamiento y los servicios a que se refiere el Título Cuarto de la presente Ley, con la zona urbana más próxima del Municipio de que se trate; debiendo establecerse dicha obligación en la propia autorización del fraccionamiento.

**ARTÍCULO 398.** No se podrán autorizar fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles o predios, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, que pretendan ubicarse en zonas declaradas no urbanizables, reservas ecológicas, ni en zonas de riesgo y vulnerabilidad establecidos en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de ordenamiento ecológico.

## **Capítulo II Modificaciones**

**ARTÍCULO 399.** La dirección municipal podrá autorizar modificaciones al proyecto autorizado de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, siempre que se cuente con los elementos técnicos o jurídicos justificatorios.

Si durante la ejecución de la obra surgieran razones técnicas fundadas para modificar el proyecto o sus especificaciones, el fraccionador deberá solicitar y presentar por escrito a la Dirección Municipal el proyecto de modificación, según corresponda, la que de manera fundada y motivada deberá resolver previo dictamen técnico, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días contados a partir de la solicitud respectiva.

**ARTÍCULO 400.** El Ayuntamiento por resolución de la Dirección Municipal de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, podrá autorizar la ampliación de la superficie de un fraccionamiento o condominio, previo el cumplimiento de los requisitos legales y ajustándose en lo conducente al procedimiento que para su autorización establece este ordenamiento, siempre y cuando no se rebasen las densidades permitidas ni se contravenga lo dispuesto en la licencia de uso de suelo correspondiente.

**ARTÍCULO 401.** Cuando la solicitud de autorización, cesión o ampliación de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, haya sido rechazada, se notificará por la Dirección

Municipal al interesado los fundamentos y motivos del rechazo, señalándole al mismo tiempo, que podrá interponer los medios de impugnación que establece el Código Procesal Administrativo del Estado.

### **Capítulo III Garantías**

**ARTÍCULO 402.** El fraccionador deberá constituir a favor de la Tesorería Municipal garantías bajo cualquiera de sus modalidades, especificando plazo y monto en los siguientes casos:

- I. Si el fraccionador pretende efectuar operaciones de compraventa previas a la terminación del fraccionamiento y notificación de dicha autorización, por el total de la ejecución de las obras pendientes de urbanización;
- II. Para asegurar que ejecutará adecuadamente las obras de urbanización y cumplirá con todas y cada una de las obligaciones que determina la Ley, debiéndose garantizar por el monto equivalente el diez por ciento del total de las obras de urbanización;
- III. Cuando se autorice que un fraccionamiento se urbanice por etapas, la garantía se constituirá, en términos de la fracción anterior, antes de iniciar cada etapa por el monto de las obras pendientes de urbanización de la etapa respectiva, y
- IV. Para garantizar los vicios ocultos y defectos de las obras de urbanización realizadas, debiéndose garantizar por el monto equivalente el diez por ciento del total de dichas obras.

Para la cancelación de las garantías, será requisito la conformidad expresa de la autoridad competente.

**ARTÍCULO 403.** Concluido el fraccionamiento no obstante su recepción formal, el fraccionador quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos de la legislación aplicable.

Para tal efecto los vicios que de los trabajos resulten deberán estar cuantificados en dictamen técnico, dando vista al fraccionador para que en el término que determine la autoridad competente, inicie los trabajos de reparación de los defectos y vicios ocultos o bien exponga lo que a su derecho convenga. Si el fraccionador no manifiesta argumento alguno en su defensa, se dictará la resolución que corresponda, contra la que no procede recurso.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente se hará una visita de inspección y en su caso la recepción de los mismos.

Una vez transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, la autoridad municipal ordenará la cancelación de la garantía.

El cobro de las garantías citadas en el artículo anterior se harán efectivas, previo requerimiento al fiado, notificación a la institución afianzadora y liquidación formulada por el monto de las obligaciones exigibles, remitiendo el expediente a la Tesorería Municipal para el cobro de la garantía.

**ARTÍCULO 404.** La ejecución del proyecto definitivo del fraccionamiento o del desarrollo en condominio deberá hacerse bajo la responsabilidad directa de un Director Responsable y/o Corresponsable de la Obra autorizado por el Municipio en donde se ubique el fraccionamiento o condominio, para lo cual deberá expresar su consentimiento escrito.

**ARTÍCULO 405.** El Ayuntamiento o la autoridad competente tendrán la facultad de inspeccionar y vigilar a través de sus supervisores municipales autorizados, el desarrollo de las obras para cerciorarse del cumplimiento de las especificaciones del proyecto definitivo de fraccionamiento.

La autoridad competente contará con registro en protocolo que al efecto se establezca, con el objeto de llevar una bitácora de obra.

**ARTÍCULO 406.** Los fraccionadores deberán observar las indicaciones que realice la autoridad competente y tendrán derecho a recurrir las determinaciones que impliquen modificaciones al proyecto autorizado.

**ARTÍCULO 407.** Una vez autorizado el fraccionamiento, dentro de los sesenta días naturales siguientes al aviso de arranque de obra, del condominio o del desarrollo inmobiliario especial, el fraccionador o promotor, deberá constituir garantía ante la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal respectiva, a efecto de asegurar que ejecutará adecuadamente las obras de urbanización y cumplirá con todas y cada una de las obligaciones que asumió conforme a esta Ley y la resolución correspondiente del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 408.** Las garantías podrá consistir en:

- I. Fianza expedida por compañía autorizada, con valor del treinta por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización;
- II. Hipoteca de inmuebles que cubran el valor señalado en la fracción anterior sin que exista la posibilidad de que se ejerzan actos de dominio respecto de dichos bienes, hasta en tanto no se cancele la garantía correspondiente, o
- III. Depósito en efectivo por el veinte por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización.

**ARTÍCULO 409.** Cuando el Ayuntamiento resuelva que un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, se urbanice por etapas, la garantía se constituirá antes de iniciar cada etapa, tomando como base para fijar su monto, el presupuesto de las obras de la etapa por ejecutar; actualizando los precios al momento en que ésta se pretenda iniciar.

**ARTÍCULO 410.** La garantía a que se refiere el artículo 402 fracción IV de esta Ley, no podrá cancelarse sino hasta que hayan transcurrido un año, contado a partir de la fecha del acta terminación de obra expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano a fin de garantizar dichas obras contra vicios ocultos.

**ARTÍCULO 411.** Cumplido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el fraccionador o promotor solicitará al Ayuntamiento respectivo, la cancelación de la garantía que al efecto se haya constituido.

Tratándose de condominio o desarrollo inmobiliario especial en que se haya cancelado dicha garantía, serán responsables los condóminos, ocupantes o interesados de que las obras de urbanización correspondientes se encuentren en buen estado y los servicios respectivos se presten suficiente y adecuadamente.

La asamblea de condóminos o la asociación de ocupantes de locales o predios en desarrollo inmobiliarios especiales, acordará las medidas y lineamientos conducentes, a efecto de que la administración del condominio o del promotor del desarrollo inmobiliario especial cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior.

**ARTÍCULO 412.** El Ayuntamiento respectivo deberá hacer efectivas las garantías relativas a los trabajos de urbanización de un fraccionamiento a que se refiere esta Ley, cuando el fraccionador o promotor hubiera incurrido en cualesquiera de los siguientes supuestos:

- I. No cumpla con el calendario de obra autorizado;
- II. No concluya la urbanización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial en el término que establece esta Ley, o en su caso dentro de su prórroga;
- III. No se apegue a las especificaciones y características de las obras señaladas en esta Ley y en la autorización respectiva;
- IV. No acate las observaciones que las autoridades competentes le hagan, con motivo de la supervisión realizada durante la ejecución de las obras; o
- V. Deje de prestar suficiente y adecuadamente los servicios a que está obligado por esta Ley.

**ARTÍCULO 413.** El Ayuntamiento, con los recursos derivados de las garantías, ejecutará directamente las obras de urbanización que no haya ejecutado o corregido el fraccionador o promotor.

En el caso de que dichos recursos sean insuficientes para ejecutar las obras de urbanización, el fraccionador o promotor estará obligado a aportar los recursos que sean necesarios.

Si el Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización que se refieren en el primer párrafo con recursos propios, por ser insuficientes las garantías, los gastos que se deriven se harán efectivos como si se trataran de créditos fiscales, en términos de la legislación fiscal aplicable.

Lo anterior, independientemente de la imposición de las sanciones administrativas y responsabilidades civiles correspondientes.

**ARTÍCULO 414.** La Dirección Municipal deberá formular un dictamen técnico, previo a que se hagan efectivas las garantías de las obras de urbanización, a fin de fundamentar que el fraccionador o promotor incurrió en cualquiera de las situaciones señaladas en el artículo 412 de esta Ley.

Para tales efectos, deberá conceder audiencia al fraccionador o promotor, para que alegue lo que a su derecho convenga.

#### **Capítulo IV De la Mesa Colegiada o su Equivalente en los Municipios**

**ARTÍCULO 415.** La mesa colegiada o grupo de revisión de proyectos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales o su equivalente que se constituya en cada Municipio, se integrará si lo hubiere, por un representante de:

- I. La Dirección Municipal del Ayuntamiento respectivo, quien la coordinará;
- II. La dependencia de ingeniería de tránsito municipal o su equivalente;
- III. El organismo operador de agua potable o su equivalente;

- IV. La dependencia de servicios públicos municipales o su equivalente;
- V. El área encargada de ecología y medio ambiente;
- VI. La Unidad de Protección Civil municipal o su equivalente;
- VII. El Instituto Municipal de Planeación o su equivalente;
- VIII. En su caso el H. Cuerpo de Bomberos, cuando así se requiera a juicio de la Dirección Municipal, y
- IX. Del fraccionador a través de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) y/o la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), quien fungirá como testigo de la transparencia y cumplimiento de los términos que establece este Título y contará con voz, pero no con voto.

La mesa colegiada contará con un Secretario de Actas que levantará una minuta de cada sesión.

Cada área integrante de la mesa colegiada estará representada en la misma por su titular, el que podrá designar a un suplente para asistir a las sesiones de trabajo.

Los integrantes de la mesa colegiada o grupo o su equivalente, a que se refiere este artículo, coadyuvarán con la Dirección Municipal, para asegurar la transparencia y cumplimiento de los requisitos, procedimientos, tiempos, normas técnicas y disposiciones jurídicas aplicables, en la revisión de solicitudes de autorización de proyectos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales.

## **Capítulo V**

### **Procedimiento de Autorización**

**ARTÍCULO 416.** La revisión del proyecto de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, tendrá por objeto establecer su congruencia con las normas técnicas del proyecto que establece esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; la zonificación de los usos y destinos del suelo; las factibilidades de dotación y descarga de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, así como de suministro de energía eléctrica y el alumbrado público; la seguridad del suelo y la preservación y protección de los elementos naturales; la integración al contexto y a la imagen urbana; la incorporación a la traza urbana, estructura vial, de equipamiento e infraestructura y servicios urbanos, y los aspectos de protección civil y prevención de desastres.

Las observaciones que surjan de la revisión de los puntos anteriores deberán ser remitidas a la Dirección Municipal por los integrantes de la Mesa Colegiada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del expediente; para que sean analizadas y evaluadas por ésta directamente, para que en su caso se realicen las aclaraciones o rectificaciones al proyecto respectivo.

**ARTÍCULO 417.** Previo análisis y revisión de los requerimientos que establece el artículo 389 de esta Ley, la resolución que corresponda a la solicitud de autorización del proyecto de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, que emita la Dirección Municipal, deberá contener los siguientes aspectos:

- I. En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar el sentido de la misma si la solicitud y el proyecto no cumplen los requerimientos que establecen esta Ley y los reglamentos municipales aplicables;

II. En caso de aprobarse la solicitud:

- a. El cumplimiento de los requisitos, procedimientos, tiempos y disposiciones jurídicas aplicables de su autorización;
- b. La definición del tipo de urbanización que se autoriza: progresiva, por etapas o inmediata;
- c. La densidad, número de viviendas, mezcla de usos de suelo y tamaño de lotes;
- d. Las características y especificaciones de las obras de urbanización que deberán realizarse y el plazo para concluir las;
- e. La definición sobre la ubicación, superficies y características de los terrenos que deban ser donados al Municipio para vialidad, infraestructura, equipamiento, servicios y áreas verdes, en los porcentajes y extensiones que establece esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- f. La aprobación de la propuesta de nomenclatura del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, así como de las calles, vialidades y demás espacios públicos;
- g. La determinación de los derechos municipales que correspondan para la autorización del proyecto conforme a la legislación fiscal aplicable;
- h. La constitución de las garantías para caucionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, los reglamentos municipales aplicables y la propia autorización;
- i. La densidad y número de viviendas autorizadas;
- j. Las vialidades y demás condiciones de movilidad;
- k. En su caso las determinaciones para mitigar riesgos y las medidas de seguridad del fraccionamiento;
- l. Las obligaciones relativas a la prestación de servicios hasta en tanto se municipalice el fraccionamiento;
- m. En su caso las demás obligaciones y restricciones que deriven de la licencia de uso de suelo del fraccionamiento, y
- n. La obligación y el plazo para entregar el proyecto definitivo del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, en términos del artículo 418 de este Ordenamiento.

**ARTÍCULO 418.** El fraccionador o promotor entregará a la Dirección Municipal, dentro de los treinta días naturales siguientes en que se le notificó la resolución favorable, el original y tres tantos del proyecto definitivo del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, conforme a los lineamientos, características y especificaciones que se deriven de esta Ley y de la autorización respectiva, a efecto de que le sea firmado y sellado en definitiva por el titular de la misma.

El plano de lotificación o zonificación deberá contener las medidas físicamente reales y georeferenciadas del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial respectivo, realizado con las normas de georeferenciación vigentes y ligadas a la Red Geodésica Nacional Activa.



**ARTÍCULO 419.** Una vez autorizado el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, se remitirá por la Dirección Municipal copia simple, sellada y digitalizada de los planos definitivos de lotificación o zonificación y de la memoria descriptiva de lotes o predios al Instituto Registral y Catastral del Estado y al Catastro Municipal correspondiente.

**ARTÍCULO 420.** Los planos que se envíen al Catastro respectivo, deberán especificar la ubicación oficial del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, así como la nomenclatura autorizada de todas las calles o vialidades.

## **Capítulo VI Cesión de Derechos y Obligaciones**

**ARTÍCULO 421.** Los fraccionadores o promotores podrán ceder parcial o totalmente sus derechos y obligaciones respecto a su fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, previa autorización de la Dirección Municipal y habiendo cumplido o comprometido a cumplir el cedente y/o cesionario con los requisitos que establecen los artículos 453, 454, 455, 456, y demás relativos de esta Ley.

La Dirección Municipal no otorgará dicha autorización, si el cesionario cuenta con antecedentes de incumplimiento imputables a él, respecto del proyecto en cuestión u otros fraccionamientos, condominios o desarrollos inmobiliarios especiales.

La persona física o moral cesionaria, se subrogará parcial o totalmente en los derechos y obligaciones que le establecen esta Ley y la autorización respectiva al fraccionador o promotor original.

**ARTÍCULO 422.** Los propietarios de fraccionamientos, condominios o desarrollos inmobiliarios especiales, de cualesquiera de los tipos señalados en esta Ley, que hayan sido ejecutados sin la previa autorización, deberán solicitar la regularización de los mismos, acompañando a la solicitud, la documentación conducente que este ordenamiento señala, independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales a que se hagan acreedores, en términos de las leyes aplicables.

## **TÍTULO DÉCIMO NOVENO URBANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES,**

### **Capítulo I Urbanización**

**ARTÍCULO 423.** El fraccionador o promotor podrá pedir a la Dirección Municipal, una vez que cuente con la autorización del fraccionamiento, que le autorice la edificación de prototipos muestra de viviendas, departamentos o locales, la construcción de sus oficinas de comercialización y de accesos principales y monumentales.

**ARTÍCULO 424.** Una vez que se cuente con la autorización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, se solicitará la licencia de construcción para urbanizar el mismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 294 fracción VI de esta Ley.

En este caso, la licencia de construcción que se otorgue en términos del artículo citado, incluirá las edificaciones determinadas en la autorización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial y de las demás obras de urbanización autorizadas.

La licencia de construcción de las viviendas, si fuera el caso, se solicitará en términos de lo dispuesto en el artículo 267 de este Ordenamiento y se otorgará por el total de viviendas autorizadas, o en su caso por el número de viviendas autorizadas por prototipo.

**ARTÍCULO 425.** La ejecución de las obras de urbanización en los fraccionamientos, condominios o desarrollos inmobiliarios especiales, podrá autorizarse en las modalidades de urbanización inmediata, de urbanización por etapas, o de urbanización progresiva con excepción en este último caso de los condominios y desarrollos inmobiliarios especiales.

**ARTÍCULO 426.** La infraestructura faltante en fraccionamientos de urbanización progresiva que se haya determinado en la autorización respectiva, deberá ser ejecutada por el fraccionador o promotor con la cooperación de los adquirentes de los lotes o predios y con las autoridades, de conformidad con lo estipulado en los contratos de compra venta individuales y de acuerdo con el programa de urbanización autorizado.

La urbanización progresiva sólo se autorizará a instituciones gubernamentales, a asociaciones civiles sin fines de lucro, o a empresas inmobiliarias en coordinación con una institución gubernamental u organismo público de vivienda, y únicamente en los fraccionamientos habitacionales de vivienda popular o económica.

La urbanización progresiva en ningún caso se autorizará para la construcción de condominios ni desarrollos inmobiliarios especiales.

**ARTÍCULO 427.** El fraccionador o promotor ejecutará las obras de urbanización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, conforme a las características, especificaciones, temporalidad y calidad que le establecen esta Ley, el reglamento municipal de construcción, el proyecto definitivo aprobado y las demás disposiciones jurídicas y técnicas aplicables.

**ARTÍCULO 428.** Obtenida la licencia de construcción de las edificaciones en un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial autorizado, el propietario del mismo contará con un plazo de dos años para terminar las obras de edificación y urbanización de la etapa correspondiente, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique dicha autorización; si vencido el plazo no se han concluido dichas obras en su totalidad o parcialmente, se podrá conceder una prórroga hasta por el mismo período, en términos del artículo 434 de esta Ley.

Durante dicho plazo, el promotor deberá dotar de los servicios necesarios a las viviendas que se encuentren ocupadas aun cuando no se hubiera concluido la urbanización en la totalidad del fraccionamiento.

En caso de no concluir dichas obras al fenecer el plazo antes señalado, incluyendo en su caso la prórroga, la Dirección municipal procederá a hacer efectivas las fianzas correspondientes y podrá concluir las obras faltantes o incompletas utilizando las mismas, o si estas no fueran suficientes, con cargo al fraccionador.

**ARTÍCULO 429.** El fraccionador o promotor costeará por su cuenta, las obras de urbanización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, que le señale la autorización respectiva, incluyendo en su caso, la construcción de camellones y su respectiva jardinería, así como, la plantación del arbolado en las calles y vialidades, parques y zonas destinadas a ese fin.

**ARTÍCULO 430.** El perito designado para la ejecución de las obras de urbanización, será responsable solidario de las obligaciones que el fraccionador o promotor acepte con relación a las obras y a las licencias autorizadas, de acuerdo con esta Ley, el reglamento municipal de construcción y la autorización del proyecto.

**ARTÍCULO 431.** El fraccionador o promotor, durante el periodo de ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, mantendrá un residente en el lugar de las mismas, con carácter de representante debidamente autorizado, que atienda a los supervisores e inspectores en sus labores correspondientes, debiendo el fraccionador o promotor en todos los casos, asentar en la bitácora de la obra el nombre y datos de localización de los residentes que señale para tal efecto.

**ARTÍCULO 432.** La Dirección municipal autorizará el inicio total o parcial de las obras de urbanización, cuando el fraccionador o promotor haya cumplido con los requisitos que señala el artículo 453 fracciones IV y V de esta Ley y las demás que le hubiere establecido la autorización de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial correspondiente.

**ARTÍCULO 433.** El fraccionador o promotor contará con el plazo que le indiquen las leyes de ingresos municipales para enterar las obligaciones fiscales que correspondan de acuerdo con la autorización; en su defecto deberán enterarlas antes de que inicien las obras de urbanización autorizadas para el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial.

En el caso de haberse autorizado la urbanización por etapas, las obligaciones fiscales se fijarán y cubrirán por cada una de éstas, tomando como base el presupuesto actualizado de las obras de urbanización de la etapa correspondiente.

**ARTÍCULO 434.** En caso de que el fraccionador o promotor no realice las obras de urbanización en el plazo autorizado, podrá solicitar a la Dirección Municipal con un mes de anticipación y por escrito la prórroga que considere requerir, exponiendo los motivos que ocasionaron el retraso, así mismo deberá anexar un informe sobre el grado de avance de las obras; la Dirección dictaminará sobre la procedencia de dicha petición, misma que se podrá otorgar siempre que la prórroga no exceda de dos años y que el fraccionador o promotor actualice las garantías necesarias.

**ARTÍCULO 435.** Cuando las obras de urbanización hayan de ejecutarse por etapas, los trabajos se iniciarán por la primera previamente aprobada, y se deberá concluir íntegramente, de tal manera que ésta sea autosuficiente en todos sus servicios, prosiguiendo las subsecuentes etapas cumpliendo con la misma condición. Las etapas podrán ejecutarse de manera simultánea, únicamente cuando las mismas operen de manera independiente.

Cuando en el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial la primera etapa por urbanizar, no colinde con zona urbanizada, se incluirá la construcción de la calle o vialidad de liga y por la conexión de los servicios públicos necesarios.

## **Capítulo II Supervisión**

**ARTÍCULO 436.** La supervisión de las obras de urbanización que realice la Dirección Municipal en la ejecución de los proyectos autorizados de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, comprenderá:

- I. La supervisión de compatibilidad de proyecto: que consistirá en que las obras o servicios sean compatibles con el proyecto autorizado, y
- II. La supervisión de obra: respecto a la calidad y especificaciones de los materiales, servicios y obras realizadas, ejecutadas y utilizadas.

**ARTÍCULO 437.** El fraccionador o promotor atenderá las indicaciones que se deriven de la correspondiente supervisión oficial; pero tendrá derecho a pedir por escrito a la Dirección Municipal

que se reconsideren las determinaciones tomadas por los supervisores, cuando pudieran implicar cambios en el proyecto, haciendo las observaciones que considere necesarias.

Cuando por razones técnicas y fundadas se requiera la modificación del proyecto en sus especificaciones, deberá el fraccionador o promotor, proponerlas por escrito ante la Dirección Municipal, quien resolverá según proceda.

**ARTÍCULO 438.** El fraccionador o promotor realizará y reportará de inmediato las pruebas de calidad de los materiales, mano de obra y acabado de las obras de urbanización respectivas, de acuerdo al proyecto definitivo y las que, en su caso, les sean solicitadas por la Dirección Municipal, a efecto de garantizar la buena calidad de las obras y de los servicios.

Los originales de los reportes de laboratorio, correspondientes a las pruebas mencionadas en el párrafo anterior, deberán anexarse a la bitácora.

**ARTÍCULO 439.** El fraccionador o promotor entregará a la Dirección Municipal informes trimestrales del avance físico de las obras de urbanización y reportes de laboratorio de control de calidad, con base en el proyecto definitivo y al calendario de obra autorizado.

Asimismo, en los informes que señala el párrafo anterior, deberá hacerse mención a las correcciones que en su caso, se hayan derivado de las observaciones comunicadas al fraccionador o promotor por los supervisores autorizados; así como, deberá adjuntar copia de los reportes de laboratorio que garanticen la calidad de los materiales empleados, durante el periodo correspondiente.

**ARTÍCULO 440.** El fraccionador o promotor mantendrá en la obra, en lugar fijo y en forma permanente, el libro de bitácora debidamente foliado y autorizado por la Dirección Municipal hasta la conclusión total de las obras de urbanización.

**ARTÍCULO 441.** Cuando el fraccionador, promotor de condominio, de un desarrollo inmobiliario especial o de un predio subdividido haya ejecutado obras, construcciones, instalaciones o servicios en contravención a lo dispuesto a esta Ley, en la legislación urbana, en los programas de desarrollo urbano o en la autorización respectiva; la Dirección Municipal podrán ordenar la corrección de dichas obras, o bien, demolerlas total o parcialmente, sin ninguna obligación de pagar indemnización al fraccionador, promotor o desarrollador, quien deberá cubrir el costo de los trabajos efectuados, cuando éste no cumpla con el requerimiento de la autoridad competente, generándose a su cargo un crédito fiscal.

### **Capítulo III Dictaminación y Conclusión**

**ARTÍCULO 442.** Una vez concluida la totalidad de las obras de urbanización, el fraccionador o promotor solicitará por escrito a la Dirección Municipal los dictámenes técnicos de la ejecución de dichas obras, en cuanto a la calidad de los materiales, obras y servicios realizados, así como en lo correspondiente a la compatibilidad de las obras con el proyecto autorizado, respectivamente.

Cuando se trate de urbanización autorizada por etapas, los dictámenes técnicos podrán otorgarse cuando se concluya cada una de ellas, y a petición del fraccionador podrá procederse a la municipalización respectiva de la misma.

**ARTÍCULO 443.** Los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo anterior, tendrán por objeto verificar que el fraccionador o promotor, haya cumplido con todas las obligaciones que le señala esta Ley y ejecutado las obras de urbanización, conforme al proyecto definitivo del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial autorizado.

**ARTÍCULO 444.** Los dictámenes técnicos correspondientes serán expedidos por la Dirección Municipal en coordinación con las demás autoridades competentes u organismos operadores, según la naturaleza de los servicios de que se trate, debiéndose hacer del conocimiento del fraccionador o del promotor; además en su caso, de la asociación de colonos u ocupantes de locales o predios en desarrollos inmobiliarios especiales o de la asamblea de condóminos.

En el caso de que los dictámenes técnicos no aprueben la totalidad de las obras de urbanización, el fraccionador o promotor deberá corregir a su costa, las anomalías que se desprendan de dichos dictámenes, para que posteriormente solicite los dictámenes definitivos.

**ARTÍCULO 445.** Tratándose de condominios los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo anterior, en ningún caso implican la municipalización del mismo, toda vez que la prestación de los servicios urbanos básicos, será responsabilidad de la administración del condominio, o en su caso del promotor del mismo cuando así se haya convenido, bajo la supervisión de las autoridades competentes.

En caso de condominios habitacionales, se establece como excepción al párrafo anterior, que el sistema de agua potable pueda ser entregado al Ayuntamiento, previo convenio y aceptación de éste y de cuando menos el ochenta por ciento de los condóminos.

#### **Capítulo IV Servicios**

**ARTÍCULO 446.** Tan pronto como queden concluidas satisfactoriamente las obras de urbanización de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial y estén en uso los servicios públicos relativos, la Dirección Municipal se dirigirá a la autoridad competente a efecto de que proceda al reevalúo de la zona, en los términos de la legislación catastral.

**ARTÍCULO 447.** El fraccionador o promotor estará obligado a realizar las obras de electrificación, con estricto apego a las características y especificaciones que le señale la Comisión Federal de Electricidad.

**ARTÍCULO 448.** La constitución del régimen de propiedad en condominio o la ejecución de proyectos de desarrollos inmobiliarios especiales, solo se autorizarán en predios que cuenten a pie de terreno con los servicios urbanos indispensables, como son:

- I. Agua potable;
- II. Alcantarillado;
- III. Energía eléctrica;
- IV. Alumbrado público;
- V. Las áreas comunes que permitan la circulación adecuada de peatones y vehículos, y,
- VI. Equipo de limpia y aseo de áreas comunes.

**ARTÍCULO 449.** Se consideran también servicios urbanos indispensables, las áreas destinadas al estacionamiento vehicular o a actividades comerciales, educativas, de recreo y de vigilancia, en la extensión necesaria, cuando una o varias de dichas áreas deban existir a juicio del Ayuntamiento respectivo.

**ARTÍCULO 450.** Los servicios a que se refiere el artículo anterior, serán prestados permanentemente con cargo al fraccionador o a la administración del condominio cuando esta se haya constituido, por lo que no serán responsabilidad del Ayuntamiento respectivo.

Las autoridades competentes en la aplicación de esta Ley, exigirán que la prestación de los servicios en el condominio o desarrollo inmobiliario especial se haga de manera adecuada y suficiente por parte de la administración o fraccionador.

**ARTÍCULO 451.** El dictamen correspondiente y la resolución de autorización, determinará las especificaciones y características de construcción y de los pavimentos en las calles y vialidades internas de los condominios o desarrollos inmobiliarios especiales.

**ARTÍCULO 452.** Los fraccionadores o promotores deberán contar con la factibilidad expedida por la autoridad competente en materia de agua, que determine la existencia de una fuente de abastecimiento de agua potable para servir al fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, que sea suficiente a juicio del Ayuntamiento.

Asimismo, garantizarán en su caso, la existencia o construcción para su buen funcionamiento, de una red de distribución de agua potable para el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial y la instalación de tomas domiciliarias o prediales, así como la existencia o construcción para su buen funcionamiento, de una red de alcantarillado con salida de albañal.

En caso de que el Ayuntamiento cuente con la factibilidad técnica y operativa, autorizará la conexión de las redes de agua potable y alcantarillado de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial a las redes generales, previo pago de los derechos correspondientes.

## **TÍTULO VIGÉSIMO DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRACCIONADOR Y DE LOS PROPIETARIOS**

### **Capítulo I Obligaciones del Fraccionador**

**ARTÍCULO 453.** Para los efectos de la presente Ley, el fraccionador estará obligado, a:

- I. Cumplir con lo dispuesto en esta Ley, los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en las autorizaciones respectivas y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- II. Ejecutar, por su cuenta, y con las especificaciones aprobadas, las obras de urbanización que le correspondan, de acuerdo con el proyecto definitivo de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial que les hayan autorizado;
- III. Iniciar en tiempo las obras de urbanización, previa autorización de la Dirección Municipal y concluir las dentro del término que señala la presente Ley;
- IV. Otorgar las garantías conducentes, a efecto de asegurar la ejecución adecuada de las obras de urbanización y el cumplimiento de cada una de las obligaciones que les correspondan;
- V. Donar al Ayuntamiento, las superficies para equipamiento, servicios y áreas verdes que les señalan esta Ley y la autorización respectiva;
- VI. Pagar en tiempo y forma, las cargas fiscales que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación fiscal estatal y municipal;

**VII.** Informar trimestralmente a la Dirección Municipal del avance en la ejecución de las obras de urbanización; cuyo reporte deberá ser suscrito por el perito responsable de las obras;

**VIII.** Atender las observaciones y correcciones que los supervisores autorizados del Ayuntamiento les hagan, respecto de la ejecución de las obras de urbanización o de la prestación de los servicios que les correspondan;

**IX.** Informar por escrito a la Dirección Municipal respecto de cualquier irregularidad o anomalía que se suscite en el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial;

**X.** Enajenar los departamentos, viviendas, casas, locales, predios o áreas de fraccionamientos o condominios, de acuerdo a las características que le establecen esta Ley y la autorización respectiva;

**XI.** Garantizar que todo adquirente de un inmueble tenga información suficiente con relación a las discontinuidades geológicas que hubiera en el predio o cercanas a éste, así como a las obligaciones y derechos que adquieran como colonos o condóminos;

**XII.** Informar al adquirente de un inmueble el total de las características que tendrá el fraccionamiento o condominio aprobado por el Ayuntamiento; así como, de los diferentes usos o destinos del suelo que se permitirán en el mismo;

**XIII.** Entregar los sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, drenaje y alcantarillado a la autoridad correspondiente, cuando así se le requiera, con el objeto de interconectarlos a la red municipal y optimizar el aprovechamiento de su fuente de abastecimiento, independientemente de que el fraccionamiento esté o no municipalizado;

**XIV.** Realizar los trámites para la municipalización del fraccionamiento una vez que se hayan cumplido los requisitos correspondientes que establece esta Ley, y

**XV.** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de esta Ley, los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, normas técnicas y demás lineamientos jurídicos aplicables.

**ARTÍCULO 454.** El fraccionador o promotor estará obligado a su costa, a formalizar en escritura ante notario público, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la autorización respectiva, las donaciones para equipamiento, servicios y áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, a favor del Ayuntamiento correspondiente, en los lugares, superficies y características que de acuerdo al tipo de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial autorizado le sean señalados; así como, a escriturar las donaciones de las vías públicas y demás áreas de restricción o afectación que se le hayan indicado en la autorización respectiva, la que se podrá consignar en el mismo instrumento notarial. La obligación de escriturar podrá realizarse por etapas de acuerdo al proyecto autorizado.

**ARTÍCULO 455.** Cuando en los centros de población los propietarios de los predios vecinos pretendan aprovechar total o parcialmente las instalaciones de servicios públicos del Ayuntamiento u organismo operador de agua, previo avalúo, el fraccionador, estará obligado a cubrir proporcionalmente, los costos que representan las obras realizadas y urbanizar el frente de su propiedad.

Cuando para unir un fraccionamiento en proyecto con otras zonas urbanizadas, sea necesario abrir acceso o conducir servicios públicos a través de predios de terceros que no formen parte del terreno por fraccionar y no medie la anuencia del propietario o propietarios respectivos; el Ayuntamiento, podrá gestionar la expropiación de las superficies necesarias para accesos, vialidades o áreas para la conducción de los servicios públicos; de conformidad con la ley de la materia.

En este caso el fraccionador quedará obligado a urbanizarlas a su costa y a pagar el importe de la indemnización que corresponda.

**ARTÍCULO 456.** El fraccionador estará obligado a prestar gratuitamente los servicios que más adelante se señalan, en tanto no lleve a cabo la municipalización, o la entrega de los servicios respectivos al Municipio en términos de lo dispuesto en esta Ley:

- I. Agua potable con normalidad y suficiencia;
- II. Drenaje y alcantarillado, incluyendo su mantenimiento;
- III. Alumbrado público, incluyendo su mantenimiento;
- IV. Recolección de basura;
- V. Seguridad al interior del condominio;
- VI. Cuidado y conservación de las áreas verdes del fraccionamiento, y
- VII. Mantenimiento de las vialidades internas del condominio.

El Ayuntamiento respectivo podrá convenir con el fraccionador, la prestación total o parcial de los servicios a que se refiere el artículo anterior, previo pago de derechos que realice éste, mientras no se municipalice el fraccionamiento.

## **Capítulo II** **Obligaciones de los Propietarios de Lotes**

**ARTÍCULO 457.** Los adquirentes de lotes en los fraccionamientos gozarán de los derechos y cumplirán con las obligaciones que esta Ley les señala y deberán ajustar sus construcciones a las normas que establece este ordenamiento, los reglamentos municipales de construcción, los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 458.** En todos los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, los propietarios de los lotes sin construcción en los centros de población, deberán cercar su propiedad conservando y preservando el medio ambiente, los árboles y en general las áreas verdes de los mismos.

**ARTÍCULO 459.** Los propietarios o poseedores de los lotes baldíos y edificaciones tendrán la obligación de mantenerlos libres de escombros, basura, hierba y drenados adecuadamente; de no cumplir con esta disposición, previo requerimiento, el Ayuntamiento, a través del área competente, podrá hacerlo de oficio, con cargo al propietario o poseedor, costo que será aplicado al momento del cobro del impuesto predial.



**ARTÍCULO 460.** Los adquirentes de los lotes de los fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, al realizar las construcciones, deberán sujetarse estrictamente a las normas aplicables en la materia, observándose, en todo caso, las limitaciones de dominio, servidumbres, uso de suelo y características especiales de arquitectura y ornato, así como las restricciones propias del fraccionamiento a que se refiere la presente Ley.

**ARTÍCULO 461.** En todos los fraccionamientos, los adquirentes de lotes tendrán la obligación solidaria con el fraccionador y con las autoridades, de conservar los jardines y árboles plantados en las vías públicas y áreas verdes, en los tramos que le correspondan al frente de sus lotes; así como, mantener en buen estado las banquetas, pavimentos y la infraestructura y el equipamiento urbano del fraccionamiento; esto respetando siempre el libre tránsito peatonal y vehicular.

**ARTÍCULO 462.** Es obligación de los adquirentes de lotes, tramitar a su costa y ante las autoridades competentes, la contratación de los servicios públicos que deban prestarse individualmente en los lotes que hayan adquirido en el fraccionamiento.

**ARTÍCULO 463.** Será obligación de los adquirentes de lotes, respetar las características del fraccionamiento, en lo que respecta a las dimensiones de los lotes y no podrán subdividir los mismos en tamaños menores a los señalados por esta Ley o los programas respectivos; igualmente están obligados a respetar la zona libre al frente en caso de que se halle establecida, las características arquitectónicas y la densidad de población y de construcción.

Asimismo no podrá destinar el lote, área o manzana a un uso o destino distinto del autorizado por el Ayuntamiento, con base en la zonificación prevista en el plano de lotificación respectivo, la licencia de uso de suelo y en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables.

**ARTÍCULO 464.** En los fraccionamientos habitacionales de interés social o popular, construidos con programas estatales, municipales o federales, nadie podrá adquirir por sí o por interpósita persona, más de un lote o vivienda en los mismos, con excepción de los desarrolladores de vivienda, quienes podrán adquirir más de un lote, siempre y cuando la venta al usuario final sea realizada en forma directa por dicho desarrollador y no sea en fraccionamientos de urbanización progresiva y el fin sea para construir casas de interés social o popular.

**ARTÍCULO 465.** A los desarrolladores que no concluyan las construcciones respectivas en el plazo que determine el programa correspondiente partir de la firma del contrato; el que se celebrará con reserva de dominio hasta en tanto se cumpla la condición; se les devolverá la cantidad originalmente convenida, sin perjuicio de la penalización que corresponda conforme al contrato respectivo.

**ARTÍCULO 466.** Los adquirentes de lotes deberán cerciorarse de que la compra del lote o lotes que les transmitan los fraccionadores, cuenten con las condiciones de urbanización autorizadas por el Ayuntamiento respectivo al fraccionamiento; así como, que la compraventa correspondiente se haga con base en el plano oficial y acta de lotificación respectiva inscrita el Registro Público de la Propiedad, los cuales deberán ser mostrados por el fraccionador.

## **TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO VENTA, ESCRITURACIÓN PÚBLICA Y REGISTRO**

### **Capítulo I Venta**

**ARTÍCULO 467.** Para poder perfeccionar la venta al público los lotes o áreas privativas de un fraccionamiento, el fraccionador deberá:

- I. Concluir las obras de urbanización autorizadas por el Ayuntamiento;
- II. Contar con la constancia de terminación de obra;
- III. Haber iniciado el procedimiento de municipalización, y
- IV. Cubrir las garantías correspondientes de conformidad con la presente Ley.

Tratándose de fraccionamientos habitacionales de interés social podrán enajenarse los lotes siempre que exista la infraestructura mínima de agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado público, guarniciones y banquetas para delimitar los niveles de las viviendas y futuros pavimentos.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, deberá existir convenio con el Ayuntamiento respectivo, en el que se especificará si éste o el fraccionador otorgarán los servicios públicos en caso de que estuviere habitado y no se hubiera municipalizado en los términos establecidos en esta Ley.

La Dirección Municipal vigilará que en los fraccionamientos cuya urbanización haya sido autorizada por etapas, la venta de lotes, predios, departamentos, viviendas, casas, locales, predios o áreas según corresponda, se inicie en aquellas en las que se haya dictaminado técnicamente la ejecución total de las obras de urbanización.

### **Capítulo II Escrituración Pública y Registro**

**ARTÍCULO 468.** Para escriturar un fraccionamiento, los Notarios Públicos tendrán la obligación de contar con la autorización expedida por el Municipio para tal efecto, misma que será expedida por la dirección municipal correspondiente, debiendo contar en la misma:

- I. Los usos y destinos del bien o bienes inmuebles;
- II. Los datos de identificación de la autorización del fraccionamiento y el pago de derechos correspondientes;
- III. Las instrucciones para el perfeccionamiento de la donación gratuita de las áreas de donación, a costa del fraccionador; así como la señalización de las vías públicas, especificando el uso autorizado en la respectiva licencia para terrenos donados y consignando el carácter de inalienabilidad e imprescriptibilidad de dichos bienes; esto último salvo en los casos de fraccionamientos residenciales en régimen de propiedad en condominio;
- IV. Las limitaciones de dominio, relativas a la imposibilidad jurídica de subdividir los lotes adquiridos o que adquieran los compradores, a dimensiones menores que las dispuestas en esta Ley y el proyecto definitivo, así como las limitaciones de espacio que correspondan a las servidumbres reales, y

V. Acompañar los planos y datos necesarios para la debida identificación del fraccionamiento.

**ARTÍCULO 469.** Será responsabilidad de los registradores públicos, en el Estado, inscribir los testimonios de las escrituras de fraccionamientos a que se refiere este capítulo que reúnan los requisitos que establece el artículo inmediato anterior; debiendo negar el registro de aquellos que no acompañen las autorizaciones a que se refiere ésta Ley.

**ARTÍCULO 470.** Serán nulos todos los actos jurídicos u operaciones celebrados en contravención a las disposiciones de este capítulo, debiendo ser declarada por autoridad judicial, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor el fraccionador, conforme a este ordenamiento, así como de las responsabilidades civiles y penales que se constituyan.

## **TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS**

### **Capítulo Único**

**ARTÍCULO 471.** El fraccionador, habiendo concluido la urbanización total del fraccionamiento de conformidad con el proyecto definitivo y dentro del plazo que señala esta Ley, o en su caso el que señale la prórroga autorizada, solicitará al Ayuntamiento correspondiente, la municipalización del fraccionamiento respectivo.

Los fraccionamientos que se urbanicen por etapas, podrán municipalizarse parcialmente, siempre y cuando las mismas operen de manera independiente, lo que deberá establecerse desde la autorización del proyecto, o en su caso, mediante la modificación del plano correspondiente cuando la disposición del fraccionamiento así lo permita y lo autorice la Dirección municipal.

**ARTÍCULO 472.** En los casos en que los fraccionadores no inicien los trámites de municipalización conforme lo establece el artículo anterior, el Municipio a través de la Dirección municipal, podrá cuando así lo considere viable, iniciar la municipalización de manera oficiosa, aplicando en su caso la fianza correspondiente para concluir las obras de urbanización pendientes, debiendo notificar previamente esta circunstancia al fraccionador.

Para tal efecto el fraccionador comunicará por escrito a la autoridad competente la conclusión de las obras, con objeto de que las inspeccione, apruebe y las reciba, emitiendo la resolución correspondiente.

**ARTÍCULO 473.** El Ayuntamiento, a través de la dirección municipal, será la única autoridad competente para recibir los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e instalaciones destinados a los servicios públicos y las obras de urbanización de un fraccionamiento, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se celebre por parte del fraccionador, con la asociación de colonos u otra persona física o moral que contravenga esta disposición, será nulo de pleno derecho.

Tratándose de la transferencia de los bienes inmuebles destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el fraccionador deberá entregar éstos al Municipio, a través de su organismo operador, si lo hubiere, o en su caso al área competente de administrar dicho servicio, con el objeto de interconectarlos a la red municipal y optimizar el aprovechamiento de su fuente de abastecimiento.

**ARTÍCULO 474.** Una vez obtenida la resolución aprobatoria de las obras de urbanización y equipamiento, el fraccionador deberá tramitar la municipalización del fraccionamiento.

Mientras no se concluya el trámite de municipalización la conservación, el mantenimiento y la prestación de los servicios públicos corresponderán al fraccionador. No obstante, la Dirección Municipal podrá recibir previamente a la municipalización, mediante convenio suscrito con el fraccionador, algún servicio u obra de infraestructura o equipamiento, a efecto de que el Municipio se haga cargo del mismo para lograr mayor eficiencia, siempre y cuando se fundamente y motive el interés público de esta recepción parcial.

**ARTÍCULO 475.** A la solicitud de municipalización, el fraccionador deberá anexar la siguiente documentación:

- I. Copia certificada del escrito presentado ante el Notario Público que corresponda, con las instrucciones que contemplen la transmisión a título gratuito al Ayuntamiento, de las áreas de donación aprobadas en el proyecto;
- II. Original o copia certificada de las actas de recepción por parte del organismo operador del agua, de las obras de agua potable y alcantarillado sanitario; así como de las obras de red de distribución de energía eléctrica, aprobadas por la Comisión Federal de Electricidad u organismo análogo;
- III. Original o copia certificada de los asientos en bitácora que contenga la recepción parcial de las obras viales, alcantarillado pluvial, alumbrado público, señalamiento y equipamiento urbano;
- IV. La constancia de terminación de obras, expedida por la autoridad competente;
- V. Planos definitivos de las obras de urbanización y equipamiento ejecutados, en el caso de que en el transcurso de las obras se hubieren modificado, y
- VI. Planos autorizados por las autoridades respectivas, de los proyectos de red de agua potable, alcantarillado sanitario y red de distribución de energía eléctrica.

La autoridad competente revisará que la documentación se encuentre completa, previo a la admisión de la solicitud.

**ARTÍCULO 476.** La autoridad competente, evaluará la documentación presentada por el fraccionador; inspeccionará y verificará que las obras ejecutadas correspondan a las autorizadas en los planos modificados de las mismas y resolverá lo conducente.

**ARTÍCULO 477.** Para efectos del artículo anterior, a fin de contar con los suficientes elementos que le permitan integrar el dictamen sobre la procedencia de la municipalización, la Dirección Municipal, requerirá dentro de los tres días siguientes a la solicitud, la opinión técnica de las áreas de alumbrado público, protección civil, agua potable y saneamiento, ecología y sindicatura, e incluirá la propia respecto a urbanización, en cada uno de los aspectos técnicos que se deban analizar e incluir en el dictamen mencionado, conforme al proyecto del fraccionamiento autorizado. Asimismo, anexará el acta de recepción de las áreas de donación que haya expedido patrimonio municipal o el área competente, al momento de la escrituración y recepción física de las mismas, cuando así proceda.

El plazo máximo de respuesta de las opiniones técnicas de todas y cada una de las instancias que les hayan sido requeridas directamente por la Dirección Municipal, incluida la propia, no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados a partir de que se le solicitaron por ésta.

Transcurrido el plazo antes señalado, sin que se hayan obtenido las opiniones técnicas mencionadas, se entenderá que dichas autoridades u organismos no tienen objeción respecto a que la solicitud de municipalización sea resuelta por la Dirección Municipal.

La Dirección municipal deberá emitir el dictamen que resuelva la solicitud de municipalización dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo de diez días hábiles concedido a las áreas para entregar sus dictámenes; en caso de que la Dirección no resuelva dentro de dicho término, se entenderá que opera la afirmativa ficta a favor del solicitante.

**ARTÍCULO 478.** Para otorgar la constancia de municipalización del fraccionamiento, se solicitará al fraccionador la presentación de garantías que por un año aseguren la calidad de las obras ejecutadas, de conformidad con lo previsto en la presente Ley. Una vez que el fraccionador proceda a constituir las garantías señaladas, deberá de notificarlo a la autoridad correspondiente, la cual acusará recibo de la documentación recibida.

Si de la evaluación de la documentación o de la verificación de las obras, se concluyera la imposibilidad de otorgar la municipalización del fraccionamiento, deberá de notificarse la resolución al solicitante, fundando y motivando la negativa.

**ARTÍCULO 479.** Habiéndose municipalizado un fraccionamiento, deberá transcurrir un año, para proceder a la cancelación de la garantía a que se refiere el artículo 402 fracción IV de esta Ley, con el objeto de garantizar en su caso las correcciones que sean necesarias por vicios ocultos.

La Dirección Municipal a solicitud del fraccionador, presentará cuando menos dos meses antes de que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo anterior para la cancelación de la garantía, revisará el estado físico y de funcionamiento de las obras de urbanización en el fraccionamiento. En caso de existir vicios ocultos requerirá al fraccionador para que arregle los defectos en la urbanización como condición para cancelar la garantía respectiva.

**ARTÍCULO 480.** Cuando se emita resolución negativa la solicitud de municipalización, por considerar que las obras entregadas no fueron concluidas, el Ayuntamiento deberá indicar si se trata de problemas menores que no afecten el funcionamiento del fraccionamiento. En este caso, el fraccionador podrá solicitar que la entrega de las obras se apruebe mediante el otorgamiento de una garantía suficiente para la terminación de la obra, la que será cancelada una vez que se terminen las obras faltantes.

En este supuesto, la terminación de la obra no podrá exceder del plazo concedido.

El Ayuntamiento otorgará la constancia de municipalización de las obras, tan pronto éstas hubieren sido concluidas a satisfacción y se hubiere cumplido con la constitución de la garantía correspondiente.

**ARTÍCULO 481.** La constancia de municipalización del fraccionamiento contendrá como mínimo los siguientes elementos:

- I. Los datos de la licencia de fraccionamiento otorgada y de las modificaciones de la misma, si las hubiere; los datos de escritura pública del terreno sujeto a fraccionamiento y sus datos de inscripción; la información sobre las inconformidades que en su caso se hubieren presentado y el sentido en que fueron resueltas;
- II. La descripción de las obras efectuadas;
- III. La constancia de terminación de obras, expedida por la autoridad competente;

- IV. La relación de garantías que el fraccionador hubiere otorgado para la reparación de vicios ocultos, especificando plazos y montos y en su caso, el nombre de la institución afianzadora. Tratándose de garantías constituidas bajo alguna otra modalidad, las características de la misma, y
- V. La fecha a partir de la cual el Ayuntamiento se hará cargo de la prestación de los servicios públicos.

**ARTÍCULO 482.** La entrega-recepción final de un fraccionamiento al Municipio comprende los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización comprendidas en las áreas de dominio público del fraccionamiento, para que puedan operar dichos servicios. El Municipio se hará cargo en lo sucesivo de la prestación de los servicios públicos correspondientes, y en el caso de que se trate de un fraccionamiento en régimen de propiedad en condominio, lo hará únicamente al pie del desarrollo.

**ARTÍCULO 483.** El Ayuntamiento respectivo recibirá el fraccionamiento, mediante el levantamiento de un acta administrativa en la que intervendrán el Presidente Municipal, el síndico municipal que corresponda, el titular de la Dirección Municipal y el fraccionador, a fin de que previo dictamen técnico-jurídico se certifique que el fraccionador cumplió con todas las obligaciones derivadas de la autorización, así como que se encuentran en buen funcionamiento y calidad las obras de equipamiento e infraestructura y servicios que se entreguen.

El dictamen técnico-jurídico lo elaborará previamente la Dirección Municipal conjuntamente con el síndico que corresponda, con el auxilio de las dependencias y entidades municipales conducentes. Dictamen que se insertará en la respectiva acta administrativa, que deberá anexarse al expediente del fraccionamiento.

**ARTÍCULO 484.** El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para el aprovechamiento, en los porcentajes que establece esta Ley, de los terrenos donados por el fraccionador, programando la habilitación de las áreas verdes, la construcción de escuelas, parques, jardines, mercados, dispensarios y demás edificios para servicios públicos y sociales que hubieren sido previstos. Asimismo hará del conocimiento a las oficinas de correos, telégrafos y al Instituto Nacional Electoral, la nomenclatura aprobada para el fraccionamiento.

**ARTÍCULO 485.** En tanto no se realicen las obras a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, una vez municipalizado el fraccionamiento, el Ayuntamiento con la participación de las Juntas de Mejoras, estará obligado a cuidar el buen aspecto y limpieza de los lotes del dominio municipal, impidiendo se les dé otro uso y que se conviertan en receptáculos de basura y desperdicios; y procurando destinarlos provisionalmente como áreas verdes.

**ARTÍCULO 486.** Para efectos de su publicidad, el Ayuntamiento tramitará a costa del solicitante la publicación de la constancia de municipalización y del acta de entrega-recepción del fraccionamiento en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", lo que deberá realizar dentro de los siguientes cinco días hábiles de su expedición.

## **TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DENUNCIA CIUDADANA Y NULIDADES**

### **Capítulo I Denuncia Ciudadana**

**ARTÍCULO 487.** El Estado, a través de la Secretaría, la Contraloría General del Estado y demás dependencias y entidades competentes, promoverá mecanismos de contraloría o vigilancia social,

donde participen los vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas y los institutos y observatorios, en el cumplimiento y ejecución de normas oficiales mexicanas, de los programas a que se refiere esta Ley, aplicando los principios establecidos en ésta, y en su caso denunciando ante las autoridades competentes, cualquier violación a la normatividad aplicable.

**ARTÍCULO 488.** Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial y demás instancias estatales y municipales competentes, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los programas a que se refiere esta Ley. Igualmente tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes y solicitar ser representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que corresponda.

**ARTÍCULO 489.** La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito o en medio electrónico y contenga:

- I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante legal;
- II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
- III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y
- IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

**ARTÍCULO 490.** Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos denunciados, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que la autoridad les formule en tal sentido.

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad competente. En este supuesto, dicha autoridad deberá manejar la información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad.

**ARTÍCULO 491.** Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, Asentamientos Humanos o al Desarrollo Urbano, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley, las leyes estatales, las normas oficiales mexicanas o a los programas de la materia se hubieren ocasionado daños o perjuicios, las personas interesadas podrán solicitar a la autoridad competente, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio.

Toda persona que cause perjuicios o efectos negativos al ordenamiento territorial, a los Asentamientos Humanos, al Desarrollo Urbano o a sus infraestructuras, edificaciones e instalaciones, será responsable en términos del régimen de responsabilidades estatal, del Código Penal del Estado y estará obligada a la reparación de daños en los términos de dichas disposiciones y demás normatividad aplicable.

## **Capítulo II**

### **Régimen Sancionatorio y de Nulidades**

**ARTÍCULO 492.** La violación a esta Ley, a las leyes estatales en la materia y a los programas a que se refiere este ordenamiento, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la responsabilidad

y sanciones, en los términos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.

**ARTÍCULO 493.** No surtirán efectos los actos, convenios, contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley, la legislación estatal en la materia y los programas a que se refiere este ordenamiento.

**ARTÍCULO 494.** Serán nulos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que:

- I. Contravengan las disposiciones de los programas de Desarrollo Urbano en cualquiera de sus modalidades, así como a las Provisiones, Usos de suelo, Reservas o Destinos que establezcan;
- II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos para la Acción Urbanística que proceda, y
- III. Los actos jurídicos de traslación de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia a que se refiere los artículos 226 y 227 de esta Ley.

La nulidad a que se refiere este artículo, será declarada por las autoridades competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de procuración de justicia mediante el ejercicio de la denuncia ciudadana o a través de los procedimientos administrativos regulados en la legislación del Estado.

**ARTÍCULO 495.** Los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello, podrán autorizar definitivamente el instrumento público correspondiente a actos, convenios o contratos relacionados con la propiedad, posesión o derechos reales, en regímenes de derecho privado, público o social, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la utilización o disposición de áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la legislación estatal de Desarrollo Urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables; mismas que deberán ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos.

Así mismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que intervengan, cláusula especial en la que se hagan constar, las obligaciones de respetar los programas a los que se refiere esta Ley, en especial el uso o destino del predio objeto de tales actos, y el respeto a la definición de Área Urbanizable.

**ARTÍCULO 496.** No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado; o en los catastros municipales, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación de Desarrollo Urbano y en los programas aplicables en la materia.

**ARTÍCULO 497.** Las inscripciones del Registro Público de la Propiedad, así como las cédulas de identificación catastral, deberán especificar en su contenido los datos precisos de la zonificación, limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas en los programas de Desarrollo Urbano que apliquen a la propiedad inmobiliaria.

**ARTÍCULO 498.** Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal sujetarán la ejecución de sus programas de inversión y de obra a las políticas de ordenamiento territorial de los



Asentamientos Humanos y a los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que establece esta Ley.

## **Capítulo II Infracciones y Sanciones**

**ARTÍCULO 499.** Las autoridades que expidan los programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los derivados de éstos, que no gestionen su inscripción; así como las y los jefes de las oficinas de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 500.** En el supuesto de que no se atiendan las disposiciones a que se refiere esta Ley, la Secretaría podrá hacer del conocimiento público su incumplimiento y, en su caso, aplicar las medidas correctivas que se hayan establecido en los convenios o acuerdos respectivos y que se deriven de las disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 501.** Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de Población, autoricen indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área Urbanizable contenida en este ordenamiento, se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

**ARTÍCULO 502.** Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de resguardar los expedientes de las autorizaciones y procedimientos administrativos donde intervengan en materia del Desarrollo Urbano, así como proporcionar la información correspondiente a cualquier solicitante, con las reglas y salvaguardas de la legislación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

**ARTÍCULO 503.** Las violaciones e incumplimiento de sus obligaciones, cometidas por parte de supervisores, inspectores, y o verificadores municipales de las obras de urbanización y edificación, que actúen por delegación de la autoridad municipal, serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.

En caso de reincidencia serán suspendidos de su cargo o cesados de las funciones, según la gravedad del caso y de acuerdo con la legislación aplicable. Las sanciones administrativas se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que hubieren incurrido.

**ARTÍCULO 504.** En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, éstas serán nulas y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Dicha nulidad deberá ser declarada por la autoridad jurisdiccional competente.

**ARTÍCULO 505.** Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los Notarios Públicos; autorizar o autenticar actos, convenios y contratos sin cumplir con lo dispuesto en la presente Ley y sin contar con las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan conforme a esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 506.** Las sanciones administrativas aplicables a personas físicas o morales que agotado el procedimiento administrativo resulten responsables, podrán consistir en:

- I. Amonestación verbal o escrita;

**II.** Suspensión de las obras cuando no se ajusten a los programas de desarrollo urbano y a los requisitos y especificaciones contenidas en la aprobación del proyecto de traza, de urbanización y licencia de obra, de acuerdo al tipo de fraccionamiento o desarrollo aprobado;

**III.** Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, las construcciones, las obras y los servicios que se ejecuten en contravención de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, cuando se carezca de lo siguiente:

- a. La autorización de fraccionamiento;
- b. La autorización de lotificación en los términos de esta Ley; o
- c. El permiso de preventa correspondiente.

O se ejecuten actos en contravención a las disposiciones de esta ley, que puedan ser subsanables;

**I.** Clausura definitiva a quien:

- a. Realice actos de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones de terrenos, así como de desarrollos en régimen de propiedad en condominio, en predio ubicado en zona o área no permitida para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en los programas de desarrollo urbano, o declaratorias de uso de suelo, destino y reservas territoriales que emita el Ayuntamiento;
- b. Construya en contravención con el tipo de fraccionamiento o desarrollo autorizado por la autoridad municipal;
- c. Incumpla los plazos y condiciones de las medidas de seguridad, impuestos por la autoridad;
- d. Sea reincidente o incurra en desobediencia reiterada, y
- e. Realice cualquiera otro acto en contravención a las disposiciones de esta Ley, que sea de carácter irreparable.

**II.** Multa equivalente a uno y hasta veinte mil UMA, o de hasta el diez por ciento del valor comercial de los inmuebles; En caso de reincidencia la multa podrá duplicarse, y considerando la naturaleza y gravedad del asunto de que se trate podrá aplicarse la sanción que corresponda enumeradas en este artículo;

**III.** Demolición total o parcial de las obras efectuadas en contravención a las disposiciones de esta Ley, y los Reglamentos Municipales aplicables; o los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que la misma establece;

- IV.** Suspensión hasta por tres meses o revocación de las concesiones, autorizaciones, permisos, licencias o constancias otorgadas;
- V.** Cancelación de las concesiones otorgadas, o suspensión temporal de las mismas hasta por tres meses para prestar el servicio público concesionado;
- VI.** Pérdida de los beneficios fiscales;
- VII.** La intervención administrativa de la empresa concesionaria o desarrolladora inmobiliaria;
- VIII.** La suspensión o cancelación del registro de profesionistas en los padrones de Directores responsables de obra o corresponsables correspondientes, cuando el responsable de la obra de que se trate reincida en el incumplimiento de las disposiciones jurídicas y técnicas aplicables en la materia;

**IX.** La prohibición de realizar determinados actos u obras;

- X. El arresto hasta por treinta y seis horas, una vez que se hayan agotado las demás medidas de apremio; cuando el responsable o propietario del lugar objeto de una visita de inspección, se niegue a facilitar el acceso o a proporcionar los informes que le sean solicitados por la autoridad municipal o el inspector correspondiente.

**ARTÍCULO 507.** Las sanciones referidas en el artículo inmediato anterior, podrán aplicarse de manera indistinta o simultánea y no necesariamente en su orden, conforme a los criterios que se señalan a continuación:

- I. Para su aplicación, se tomará en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la reincidencia. Podrán imponerse al infractor, simultáneamente, las medidas de seguridad, las sanciones, así como el pago de la indemnización o la reparación del daño que correspondan, para lo cual se tomará en consideración la gravedad de la infracción, las particularidades del caso y las propias del infractor;
- II. Los daños que ésta cause al desarrollo urbano y al ordenamiento ecológico, su impacto en la zona en que se ubique el inmueble objeto de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia, si la hubiere;
- III. Cuando se imponga como sanción la suspensión de una obra, se ordenará al infractor que realice los actos o subsane las omisiones que motivaron la misma, fijando un plazo prudente para ello, a juicio de la autoridad competente, en la inteligencia de que dicha obra permanecerá suspendida hasta en tanto cumpla con lo ordenado;
- IV. Para su cumplimiento, las autoridades correspondientes podrán hacer uso de la fuerza pública, y
- V. El plazo de caducidad para la aplicación de las sanciones será de cinco años y empezará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.

**ARTÍCULO 508.** A quien que realice actos de promesa o traslativos de dominio de lotes o viviendas sin contar con la autorización correspondiente en términos de esta Ley, independientemente de las acciones legales que ejerzan el o los afectados, se le impondrá una multa de trescientos a quince mil días UMA.

**ARTÍCULO 509.** Serán nulos previa declaración judicial, todos los trámites administrativos y/o jurídicos que celebre el fraccionador, que tengan por objeto la venta de los lotes de un fraccionamiento, sin que previamente se hubieren satisfecho los requisitos que señala el artículo 467 de esta Ley y cuando no se hubieren concluido totalmente las obras de urbanización y que éstas no hayan sido aprobadas por el Ayuntamiento respectivo, en los términos de esta Ley.

**ARTÍCULO 510.** En el caso de que sea de estricta necesidad demoler total o parcialmente las construcciones, ampliaciones o reconstrucciones realizadas sin licencia, ni autorización, o en contravención a lo dispuesto por esta Ley, el costo de los trabajos será a cargo de los propietarios, fraccionadores, constructores o poseedores.

Tratándose de demolición total o parcial, suspensión o clausura temporal o definitiva, el personal encargado de ejecutarla, deberá levantar acta circunstanciada observando las formalidades establecidas para las inspecciones.

**ARTÍCULO 511.** Para la imposición de las sanciones administrativas se estará al procedimiento dispuesto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

**ARTÍCULO 512.** Cuando el fraccionador incurra en violaciones graves o sustanciales al proyecto definitivo, el supervisor dará cuenta inmediata al Ayuntamiento de las irregularidades descubiertas, para que se apliquen las medidas de seguridad y/o sanciones correspondientes. En caso de que no se corrijan las violaciones en el plazo fijado, se hará efectiva la garantía o garantías a que se refiere esta Ley.

Tratándose de violaciones al proyecto definitivo, que no sean graves o sustanciales, se impondrá a los infractores una sanción entre cincuenta a cien días UMA.

**ARTÍCULO 513.** Será nula la subdivisión de lotes en fracciones menores a las señaladas en los programas de desarrollo urbano, o en las disposiciones legales correspondientes, según el caso, así como las operaciones de traslación de dominio que se hubieren realizado sobre dichas fracciones.

## **TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO NOTIFICACIONES, INSPECCIONES Y VERIFICACIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

### **Capítulo Único**

**ARTÍCULO 514.** La Secretaría, los ayuntamientos y demás autoridades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento; para tal efecto, podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan.

**ARTÍCULO 515.** Las autoridades administrativas estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la facultad de ordenar visitas de inspección, verificación o supervisión a las obras en construcción de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y relotificaciones de terrenos, así como en los desarrollos en régimen de propiedad en condominio para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, reglamentos, programas, acuerdos y demás disposiciones jurídicas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para, en su caso, aplicar las medidas de seguridad, calificar las infracciones y responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

Las autoridades competentes deberán ajustar sus notificaciones a lo dispuesto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí. Las visitas de inspección y verificación se realizarán de conformidad con las disposiciones que señalan los artículos 196 al 203 y demás relativos del referido Código.

**ARTÍCULO 516.** La Secretaría y los ayuntamientos por conducto de la Dirección Municipal, o cualesquiera otra autoridad en el ámbito de su competencia, al tener conocimiento de la ejecución de construcciones, obras, acciones y servicios en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de la construcción de fraccionamientos o condominios no autorizados, ordenarán la suspensión inmediata de las acciones y obras, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en que hubiera incurrido la persona física o moral, pública o privada, que las hubiera ejecutado.

**ARTÍCULO 517.** En los fraccionamientos o condominios en que se vendan lotes, se realicen edificaciones, se abran calles o ejecuten obras de urbanización sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente, el ayuntamiento respectivo, al tener conocimiento de lo anterior, procederá de la siguiente forma:

- I. Ordenará la inmediata suspensión de las obras e instalaciones de que se trate;

II. Impondrá al fraccionador o promotor una multa del cinco al veinte por ciento del valor total que hubiere correspondido a la urbanización del fraccionamiento, sin perjuicio de obligarlo a demoler por su cuenta, una vez agotado el procedimiento que se establece en esta Ley para ello, las obras e instalaciones que hubiere realizado;

III. Deberá indemnizar a los afectados en los términos de la legislación aplicable;

IV. Fijará al responsable un plazo no mayor de quince días hábiles para que informe a la autoridad municipal, sobre la venta de lotes o predios que haya efectuado y sobre el estado que guarden las obras de urbanización del fraccionamiento o condominio;

V. Hará del conocimiento público que el fraccionamiento o condominios de que se trata se llevó a cabo sin autorización oficial, mediante avisos y publicaciones que por tres ocasiones consecutivas y con cargo al propietario o responsable del fraccionamiento o condominio, y

VI. Ordenará demoler, si el propietario o responsable no cumpliera con lo dispuesto en la fracción anterior, las obras e instalaciones realizadas, con cargo al infractor una vez agotado el procedimiento establecido en esta Ley.

**ARTÍCULO 518.** Si el Ayuntamiento respectivo considera que el fraccionamiento o condominio llevado a cabo sin su autorización, es factible de realizar dada su ubicación, de acuerdo a lo establecido en los programas de desarrollo urbano y demás regulaciones aplicables, el fraccionador o promotor, previo pago de la multa a que se refiere la fracción II del artículo anterior y sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones civiles y penales que procedan, podrán iniciar los trámites para la autorización del fraccionamiento o condominio por regularización en la forma prevista en esta Ley, sin perjuicio de demoler o inhabilitar las obras o instalaciones que no concuerden con las especificaciones relativas, o de reubicar las edificaciones realizadas conforme al proyecto que se apruebe.

**ARTÍCULO 519.** En contra de los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades administrativas del Estado o de los municipios en materia de esta Ley, de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables, los interesados afectados podrán interponer el recurso que establece el Código Procesal Administrativo del Estado, o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en dicho Ordenamiento.

## **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 7 de octubre del año 2000, y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

**TERCERO.** En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los ayuntamientos deberán adecuar todas las disposiciones reglamentarias relacionadas con los contenidos de este Decreto; aquellos con una población de cuarenta mil habitantes o más, deberán de expedirlos dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la misma.

La Secretaría deberá asesorar a los ayuntamientos en la elaboración de sus reglamentos, cuando éstos así lo soliciten, y emitirá su opinión sobre los anteproyectos que se le presenten.

**CUARTO.** Los Municipios del Estado, que no cuenten con reglamentos de construcción, aplicarán en tanto los expiden, las disposiciones de esta Ley y el Reglamento de Construcción del Municipio de la región de Estado a la cual pertenecen, de acuerdo a lo siguiente:

- I. Los municipios de la región Centro podrán utilizar el de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona o Villa de Reyes;
- II. Los municipios de la región Altiplano podrán utilizar el de Matehuala;
- III. Los municipios de la región Media podrán utilizar el de Rioverde o Ciudad Fernández, y
- IV. Los municipios de la región Huasteca podrán utilizar el de Ciudad Valles, Tamazunchale, Aquismón, Ébano o Xilitla.

Para su aplicación, los municipios que adopten el Reglamento de Construcción de otro municipio conforme a lo anterior, deberán hacerlo por acuerdo formal de Cabildo y remitir dicho acuerdo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, "Plan de San Luis", debiendo determinar en el mismo su entrada en vigor.

**QUINTO.** En tanto no se expidan los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se oponga a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

**SEXTO.** Dentro del término que señala el Transitorio Quinto de la Ley General, el Estado y los Municipios deberán formular o adecuar sus respectivos programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los demás que establece este ordenamiento, incluyendo todos los nuevos instrumentos de gestión, incluidos de manera primordial los instrumentos de participación democrática y ciudadana contenidos en esta Ley.

El Instituto Registral y Catastral del Estado estará a lo señalado en los artículos 93, 117 y 496 del presente Decreto, una vez que sean adecuados los programas mencionados en el párrafo anterior.

**SÉPTIMO.** En un plazo de seis meses, la Secretaría creará e iniciará las operaciones del Sistema de Información Territorial y Urbano de acuerdo al artículo 232 y 233 de la Ley que se expide.

**OCTAVO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para la Secretaría, se cubrirán con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 y los subsecuentes. Se faculta al ejecutivo del Estado a realizar las ampliaciones y ajusten presupuestales que se requieran para ese fin.

**NOVENO.** Los recursos y demás trámites se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Los asuntos relacionados con autorizaciones, licencias, procedimientos y constancias de compatibilidad, recursos y demás trámites que se encuentren en trámite y pendientes de resolución administrativa o técnica, seguirán tramitándose hasta su conclusión conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

**DÉCIMO.** Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de vigilar, denunciar y en su caso detener la construcción o conformación de fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, modificaciones y desarrollos en condominio, que contravengan la presente Ley.

**DÉCIMO PRIMERO.** Se reconoce plena validez a las autorizaciones y constancias de compatibilidad legalmente expedidas con base en la legislación que se deroga, durante la vigencia que le corresponda.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, podrán implementar programas de regularización de aquellos fraccionamientos que ya estén edificados.

El Gobierno del Estado deberá realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Decreto.

**DÉCIMO TERCERO.** El Congreso del Estado deberá armonizar las leyes estatales relacionadas con las materias que regula la presente Ley, tales como la Ley Ambiental, la Ley de Transporte, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código Penal del Estado, y demás que resulten necesarias, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Decreto.

**DÉCIMO CUARTO.** El Ejecutivo del Estado deberá revisar y evaluar el cumplimiento de la Estrategia Nacional y de la Agenda Urbana ONU-Habitat, en el Estado e informar de manera específica y por escrito al Congreso del Estado sobre los avances y logros alcanzados, dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, e incluir en los informes de gobierno subsecuentes sobre los avances en las mismas.

**DÉCIMO QUINTO** En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el titular del ejecutivo deberá implementar en Instituto Estatal de Planeación, conforme a las disposiciones de la presente Ley.

**DÉCIMO SEXTO.** A partir de la entrada en vigor de la presente Ley todos los Planes, Programas, Reglamentos que se encuentren en proceso de autorización deberán actualizarse reponiéndose el proceso, así como someterse al proceso de consulta ciudadana estando obligado a hacerse públicos el total de los documentos que los comprendan

En tanto los municipios no cuenten con los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Programas de Centros de Población actualizados conforme a las disposiciones de esta Ley, se aplicarán las disposiciones de la misma y dichos programas sólo se aplicarán en lo que no contravengan a este Ordenamiento.

**ATENTAMENTE**

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ**

**EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
ALEJANDRO LEAL TOVÍAS**

**EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
LEOPOLDO STEVENS AMARO**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA INICIATIVA DE LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, QUE PRESENTA EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN LA FECHA QUE CONSTA EN SU ACUSE DE RECIBIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018. CONSTA DE 229 FOJAS ÚTILES.

**SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

**LEGISLADORAS Y LEGISLADORES SECRETARIOS.**

**P r e s e n t e s .**

**María Lucero Jasso Rocha**, diputada integrante de esta Sexagésima Primera Legislatura y del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí**; 130 y 131 de la **Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado**; y 61, 62, 63 y 65 del **Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado**, elevo a la digna consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que **ADICIONA nuevas fracciones XIV y XV, al artículo 64 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la competitividad del Estado de San Luis Potosí**, con el objeto de **que la Secretaría de Economía promueva el uso de tecnologías de información y comunicación, así como establecer la diferenciación y la explotación de nichos de mercado como instrumentos de apoyo que ayuden a la adecuación y supervivencia en el mercado de las MIPYMES**; con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo a la CONDUSEF, las micro, pequeñas y medianas empresas abarcan un importante espacio del mercado nacional, y de hecho:

*“Son la columna vertebral de la economía mexicana. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) generan 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas suman 174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo.”<sup>1</sup>*

Su presencia es fundamental en los sectores de comercio y servicios, así como en la producción artesanal, ya que en muchas ocasiones estos rubros no necesitan organizaciones e inversiones a gran escala; sin embargo, y a consecuencia de esas actividades, son pieza clave en la comercialización y oferta turística en nuestro país.

En San Luis Potosí, por su parte, según el estudio “Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y San Luis Potosí,” de la Secretaría de Desarrollo Económico, existen 88 mil 153 unidades productivas que entran en la categoría de MIPYMES, y generan empleo para 420 mil 246 personas. De ellas el 47.2% se dedica al comercio y emplea al 29.7% de la población que

---

<sup>1</sup> <http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes> Consultado el 25 de febrero 2018.



labora en MIPYMES, mientras que el 40.9% de esas empresas está en el rubro de servicios y ocupa al 32.2% de la población activa en esas empresas. El resto se dedica a la manufactura y otros.<sup>2</sup>

Primeramente, se puede percibir la importancia de estas empresas por la cantidad de empleos que generan en nuestra entidad, lo que las vuelve un elemento de gran valor para la economía, el desarrollo y la generación de empleos en San Luis Potosí. Ahora bien, en segundo término se puede ver que la actividad de las MIPYMES potosinas está orientada al comercio y a los servicios, con poca participación en la manufactura y transformación, esto es un fenómeno propio de este tipo de empresas, ya que esos rubros no requieren grandes inversiones ni conocimiento altamente especializado para comenzar. De hecho, los analistas de este tipo de empresas han señalado varias características que tienen en común y que definen sus particularidades; como por ejemplo Leticia Cruz Montesinos señala las siguientes:

*“-Capacidad de generación de empleos, absorben una parte importante de la producción económicamente activa (PEA)*

*-Producción local y de consumo básico.*

*-Contribuyen al desarrollo regional (por su establecimiento en diversas regiones).*

*-Flexibilidad al tamaño de mercado (aumento o disminución de su oferta cuando se hace necesario).*

*-Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno económico como la inflación y la devaluación.*

*-Administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a cabo los propios dueños.”*

Así mismo y de manera puntual, la autora señala que:

*“La pequeña y mediana empresa cuenta con características y diferencias de las grandes organizaciones, que son sus debilidades en capitalización y mercadotecnia, aunque la pequeña y mediana se considera vulnerable en estos aspectos, no dejan de ser entidades de gran valor, ya que cumplen con una función económica y social importante.”<sup>3</sup>*

Por lo tanto las MIPYMES, tienen problemas y necesidades propios de acuerdo a su tamaño, diferenciación, lugar en el mercado, requerimientos legales y fiscales específicos, entre otros. Por ejemplo, la necesidad de asesoría especializada, acceso a datos útiles de mercado, conocimientos de mercadeo y usos prácticos de tecnologías de información y comunicación, para poder enfrentar sus problemas de establecimiento y permanencia en el mercado.

---

<sup>2</sup> <http://www.sdeslp.gob.mx/estudios/Las%20MIPYMES%20en%20Mexico%20y%20SLP.pdf> Consultado el 2 de marzo 2018.

<sup>3</sup> Importancia de la Mercadotecnia en la Pequeña y Mediana Empresa en México. Leticia Cruz Montesinos. En: [http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/15\\_PF497\\_Importancia\\_de\\_la\\_Mercadotecnia.pdf](http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/15_PF497_Importancia_de_la_Mercadotecnia.pdf) Consultado el 1 de marzo 2018.

Algunas de esas necesidades se encuentran previstas por la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable de nuestro estado, como la asesoría y el acceso a datos, pero hay otras que no han sido atendidos y se refieren más a la situación de esas empresas en el mercado. Por esos motivos, esta iniciativa tiene como propósito establecer nuevas acciones a emprender para la Secretaría de Desarrollo Económico respecto a las MIPYMES en la Ley citada, y agregar al conjunto de disposiciones, elementos derivados de las necesidades específicas de esas empresas, con el fin de complementar los esquemas de apoyo institucionales.

Así, se plantea una adición de elementos a las acciones que la Secretaría debe tomar en apoyo a las MIPYMES, y que son propios de sus características y necesidades. Por ejemplo, el impulso a la diferenciación, que es una estrategia de planificación para dirigirse a sectores particulares del mercado, lo que puede conformar un apoyo para generar o consolidar su presencia; la explotación de nichos, que puede asegurar beneficios en una porción específica del mercado, y por su parte el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs), es un elemento que, de acuerdo a varios analistas, no está suficientemente desarrollado en las MIPYMES, y puede aumentar el impacto y la presencia de la empresa en el mercado usando poca inversión.<sup>4</sup>

Esta propuesta, por medio de la implementación de acciones específicas que aumenten la adecuación y presencia de las MIPYMES al mercado local, busca expresar de manera concreta el objetivo de la Ley expresado en la fracción VIII del artículo 2º:

*ARTÍCULO 2º. Son objetivos particulares de la presente Ley los siguientes:*

*VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación y desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas promoviendo en su favor los instrumentos necesarios;*

Al contemplar la importancia de estas empresas en la economía del estado, por medio de la cantidad de trabajadores que emplean y su dinamismo, nos damos cuenta de la gran necesidad de proveerlas de herramientas de mercado para aumentar su desempeño, mejorar sus probabilidades de supervivencia y así apoyar la labor de la gran cantidad de trabajadores locales que dependen de ellas.

Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

## **PROYECTO DE DECRETO**

---

<sup>4</sup>Nivel de integración de las TICs en las MIPYMES. En: <http://admon.itc.mx/ojs/index.php/%20panorama/article/viewFile/150/161> Consultado el 1 de marzo 2018.

**ÚNICO.** Se ADICIONAN nuevas fracciones XIV y XV, y se reordena la numeración de la actual fracción XIV, pasando a ser XVI, al artículo 64 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la competitividad del Estado de San Luis Potosí para quedar como sigue:

**LEY PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**CAPÍTULO XIII**

**De las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas**

ARTÍCULO 64. La Secretaría emprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

...

**XIV. Promover el uso de tecnologías de información y comunicación en las MIPYMES.**

**XV. Promover la diferenciación y la explotación de nichos de mercado por parte de las MIPYMES.**

**XVI.** Las demás que emanen de las atribuciones del Consejo y el reglamento.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**MARÍA LUCERO JASSO ROCHA**

*Diputada Local*

*Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional*

**SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

**LEGISLADORAS Y LEGISLADORES SECRETARIOS.**

**P r e s e n t e s.**

**María Lucero Jasso Rocha**, diputada integrante de esta Sexagésima Primera Legislatura y del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí**; 130 y 131 de la **Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado**; y 61, 62, 63 y 65 del **Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado**, elevo a la digna consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que **ADICIONA nuevo artículo 4º a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí**, con el objeto de **reconocer los derechos de las personas receptoras de violencia familiar, sin menoscabo de otros esquemas de derechos aplicables, y establecer que las autoridades responsables de la aplicación de dicha Ley, deberán observar los derechos de las víctimas de violencia familiar, previniendo cualquier posible violación a los mismos así como condiciones de revictimización**; con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo a la exposición de motivos de Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, las víctimas de violencia en el ámbito familiar no son solamente mujeres, sino que:

*“La violencia familiar no se limita únicamente a las agresiones que el hombre le infiere a la mujer, o a la inversa, sino que hay además un poder agresivo que cometen la madre o el padre, contra las hijas o hijos, o viceversa y últimamente se han dado casos en que las o los abuelos son quienes padecen la agresión por parte de los nietos.”*

Lo que arroja como resultado una amplia variedad de víctimas, producto de un fenómeno que no se ha logrado abatir en nuestra entidad, y a causa de eso, es necesario fortalecer los derechos de las personas receptoras de violencia familiar en la Ley, que si bien se encuentran estipulados a través de los mecanismos de atención que la norma en comento contiene, resulta necesario establecer en la Ley, expresamente, el derecho de las personas receptoras de violencia familiar a recibir atención expedita de las autoridades encargadas de la aplicación de la norma, así como la complementariedad de otros esquemas de derechos compatibles, la obligación de las autoridades a observar tales garantías y un criterio preventivo sobre la revictimización.

De esta forma, se propone que el reconocimiento de derechos de víctimas y su observancia por las autoridades, se adicionen dentro del capítulo de los objetos de la ley, en coherencia con las estipulaciones constitucionales generales en la materia; ya que el artículo 20, letra C de la Constitución Política de México, establece los derechos de la víctima u ofendido que abarcan aspectos generales como: recibir asesoría jurídica y ser informado de los derechos en su favor, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica y psicológica de urgencia, reparación del daño, resguardo de su identidad y datos, solicitar las medidas para la protección de sus derechos, e impugnar omisiones y ciertas resoluciones; derechos generales que debido a la jerarquía de la Constitución también aplican a las víctimas de violencia familiar.

Por eso entre los elementos que componen esta reforma se encuentra el reconocimiento expreso de derechos de las víctimas en el conjunto de la legislación aplicable para esos casos, haciendo mención incluso a casos específicos como menores, personas con discapacidad y adultos mayores; como por ejemplo, los derechos que la Ley reconoce a las víctimas de violencia de género.

Por lo tanto, se pretende establecer el derecho de las personas receptoras de violencia, a la atención de parte de las autoridades, sin menoscabo de otros esquemas de derecho aplicables por medio de la legislación vigente. Tal adición se propone basándose en los principios jurídicos de complementariedad y de interpretación de las leyes *pro persona*.

Primeramente, se puede definir la complementariedad como una relación entre normas o leyes en la que:

*“una disposición remite o reenvía a otra para completar determinados aspectos de su regulación, sin que se excluya la aplicación de la norma remitente. Se da cuando las distintas normas, conservando cada una su rango y naturaleza, aparecen engranadas entre sí como piezas del mismo mecanismo normativo.”<sup>1</sup>*

La complementariedad, en el caso de las personas receptoras de violencia familiar permite que puedan gozar del derecho al acceso de los esquemas de atención en su calidad de tales, sin que por ello pierdan los derechos aplicables en su calidad de mujeres, menores, o personas con discapacidad por ejemplo. Siendo este, jurídicamente, un caso diferente a la antinomia jurídica, causada cuando las disposiciones legales son incompatibles o mutuamente excluyentes.

Además de lo anterior, esta propuesta también observa el principio *pro persona*, apoyándose en su orientación general de que en la interpretación de las leyes debe buscarse la más amplia en materia de protección de derechos, ya que, como la autora Laura Nahabetián lo sintetiza en un estudio:

---

<sup>1</sup> <http://www.derecholaboral.info/2013/03/suplementariedad-y-complementariedad.html> Consultado el 25 de febrero 2017.

*“Todas las normas sobre derechos humanos contenidas en nuestro ordenamiento jurídico deben ser interpretadas armónicamente con las respectivas fuentes normativas convencionales que son internacionales y, a la vez, derecho interno, ya que se han incorporado tales derechos por mandato del constituyente originario a nuestro orden jurídico”*

Señalando que, de hecho, los derechos humanos tienen una característica expansiva en su interpretación:

*“Los derechos humanos siempre tienen fuerza interpretativa expansiva, ya que como indica el Prof. Fernández Segado, el derecho siempre debe interpretarse del modo más amplio posible, partiendo además de la necesidad de interpretación más beneficiosa para maximizar el contenido del derecho.”<sup>2</sup>*

Ahora bien, al aplicar el principio *pro persona* y las características de los derechos humanos al caso de las víctimas de violencia familiar, en el que hay varios esquemas de derechos aplicables, se percibe que al existir diferentes normas que convergen en sus disposiciones sobre los derechos de personas receptoras de violencia familiar (al ser en muchos casos mujeres, menores o adultos mayores), la interpretación jurídica que busque el máximo beneficio para los derechos humanos, tiene como mejor opción apegarse al mencionado principio de complementariedad, y contemplar que una norma no es opuesta ni incompatible a la otra, sino que son complementarias. Por esos motivos se propone reconocer los derechos de las víctimas de violencia familiar sin menoscabo de los que se encuentran protegidos por otras leyes y aún por la propia Constitución, estableciéndolo de forma expresa y clara en la norma.

La adición propuesta también incluye otros elementos como la obligación de las autoridades a observar el derecho de las víctimas a recibir atención, en los términos que la propia Ley marca, especificando que ésta tiene que brindarse de forma expedita. Y por último, se incluye una disposición con el objetivo de prevenir la revictimización al momento de brindar la atención; propuestas realizadas bajo el mismo marco general de la prioridad de los derechos humanos de los víctimas.

Finalmente, esta propuesta busca expresar el compromiso de la Legislación con los derechos humanos, por medio de la aplicación del principio *pro persona*, llevando a cabo las adecuaciones necesarias para fortalecer tales derechos.

Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

### **PROYECTO DE DECRETO**

---

<sup>2</sup>Laura Nahabetián. Normas de Derechos Humanos: Colisión y complementariedad. En: Rev. Derecho no.14 Montevideo dic. 2016 [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2393-61932016000200002](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932016000200002) Consultado el 25 de febrero 2017.

**ÚNICO.** Se ADICIONA nuevo artículo 4º, y se reordena la numeración de los artículos subsecuentes, a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí para quedar como sigue:

**LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I  
Del Objeto de la Ley**

**ARTÍCULO 4º.-** Las personas receptoras de violencia familiar tienen derecho a recibir atención expedita de las autoridades estatales y municipales en conformidad con lo establecido en esta Ley, sin menoscabo de la legislación aplicable en materia de víctimas y derechos humanos, así como otras que tengan por objeto proteger los derechos de las víctimas u ofendido en general, y en lo específico de la mujer, del menor, de las personas de la tercera edad y de personas con discapacidad.

Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, deberán observar los derechos de las víctimas de violencia familiar, previniendo cualquier posible violación a los mismos y condiciones de revictimización.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**MARÍA LUCERO JASSO ROCHA**  
*Diputada Local*  
*Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional*

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

**P r e s e n t e s.**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, Juan Antonio Cordero Aguilar, Diputado local en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone *REFORMAR el inciso a) de la fracción I del artículo 95, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí*, con la finalidad de: **adicionar a las condiciones necesarias para obtener la suspensión condicional de la pena, que la condena no sea por delito de extorsión, con el propósito de que quienes sean hallados culpables por el delito de extorsión no puedan evitar la pena privativa de libertad.** Con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La extorsión, en sus diferentes modalidades, es un delito que ha aumentado dramáticamente en los últimos años en nuestro país, asociado a las diferentes problemas que las políticas de seguridad pública enfrentan a nuestro país. Es un delito que causa daños a la economía de los ciudadanos, lacera la percepción de seguridad y del Estado de Derecho en el país y, por otro lado, el que comete el delito puede obtener ingresos de forma rápida y con pocas probabilidades de enfrentar consecuencias. Por lo tanto, es una conducta delictiva que causa daños a la sociedad y grandes beneficios a quien lo comete.

En el estado de San Luis Potosí, los casos de extorsión tuvieron un aumento significativo durante meses pasados, sobre todo en la región huasteca, donde tuvieron lugar episodios de gran afectación para la ciudadanía.

Hay que señalar que con las reformas recientes en materia penal federal, la extorsión no se considera un delito grave, por lo que no merece pena privativa de libertad, facilitando que quienes cometan el delito puedan esquivar la acción de la procuración de justicia.



Lo anterior se debe a que la extorsión no se encuentra entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y de la misma forma, la extorsión no se contempla dentro de la catalogación de delitos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que cataloga actividades que por su naturaleza de actos organizados, ameritan prisión preventiva forzosa.

Por esos motivos, en esta iniciativa se propone una reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que permitiría que las sentencias por el delito de extorsión incluyeran el encarcelamiento, por medio de la no concesión del beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión.

Esto es debido a que en el artículo 95 del Código Penal, se aborda la Suspensión Condicional de la Pena de Prisión y se expone que:

*“La suspensión condicional es una facultad por la cual la autoridad judicial al emitir sentencia podrá suspender la ejecución de las penas de prisión y sanción pecuniaria. Tiene por objeto fundamental permitir al sentenciado su reinserción a la sociedad, cumpliendo así la sanción que se le impuso.*

*El otorgamiento y disfrute del beneficio de la suspensión condicional de la pena se sujetará a lo siguiente:*

*I. El juzgador, al dictar sentencia, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:*

*a) Que la condena se refiera a una pena de prisión que no exceda de cinco años y que no se trate de sentencias dictadas por delito grave, así como por los delitos de robo a casa habitación; robo de vehículo y robo de vehículo equiparado”*

En otras palabras, el inciso a), establece las condiciones que deben cumplirse para que el sentenciado pueda acceder a la suspensión condicional, y por lo tanto no deba ir a la cárcel; por lo que se propone incluir como una de esas condiciones que la condena no sea por el delito de extorsión, con eso se busca que aquellos que enfrenten una condena por ese ilícito, deban de cumplirla en la cárcel.

En el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se ha establecido un antecedente en la reforma de los requisitos para el acceso a la suspensión condicional, en atención a delitos que impactan a la ciudadanía, ya que el pasado 15 de diciembre del 2017, se aprobó un dictamen que incluye en esa disposición delitos de robo a casa habitación, robo de vehículo y robo de vehículo equiparado, por lo tanto esta

iniciativa, se apega a los alcances de ese antecedente y busca aplicarlo al delito de extorsión que requiere acciones urgentes nuestro estado. No se pueden dejar de mencionar las consideraciones del Dictamen de dicha reforma, sobre los problemas de la inseguridad en la sociedad y los efectos que se buscan con los cambios en el marco legal:

*“Se ha de combatir la inseguridad pública y la impunidad que tanto laceran a la sociedad, pues no es admisible que quienes incurren en la comisión de un ilícito se aproveche de los beneficios de la ley para obtener la libertad, y en muchos de los casos, al no aplicarse una sanción, vuelven a delinquir. Es así que la reforma propuesta tiene un doble efecto, preventivo y represivo, con el fin de alcanzar la paz social.”*

De acuerdo a cifras oficiales, la extorsión es uno de los delitos que muestran un mayor incremento nacional y local, además de que son de los que mayormente inciden en incrementar la percepción de inseguridad, es por eso mismo que no debemos de bajar la guardia frente a este delito, al contrario, debemos buscar la forma de aumentar la denuncia por parte de los ciudadanos e imponer castigos efectivos, para así disuadir y reducir una actividad recurrente y que causa daños económicos a los potosinos.

Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

## **PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** *Se REFORMA el inciso a) de la fracción I del artículo 95 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:*

### **CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

#### **TÍTULO QUINTO**

#### **APLICACIÓN DE LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

#### **CAPITULO IX**

#### **Suspensión condicional**

ARTÍCULO 95. Naturaleza y requisitos.

La suspensión condicional es una facultad por la cual la autoridad judicial al emitir sentencia podrá suspender la ejecución de las penas de prisión y sanción pecuniaria. Tiene por objeto

fundamental permitir al sentenciado su reinserción a la sociedad, cumpliendo así la sanción que se le impuso.

El otorgamiento y disfrute del beneficio de la suspensión condicional de la pena se sujetará a lo siguiente:

I. El juzgador, al dictar sentencia, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:

a) Que la condena se refiera a una pena de prisión que no exceda de cinco años y que no se trate de sentencias dictadas por delito grave, así como por los delitos de robo a casa habitación; robo de vehículo; robo de vehículo equiparado **y extorsión.**

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan las disposiciones anteriores sobre la materia, en lo que se opongan a lo establecido por la presente Ley.

### **A T E N T A M E N T E**

**DIP. JUAN ANTONIO CORDERO AGUILAR**

**DIPUTADOS SECRETARIOS  
DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTES.**

**JESÚS CARDONA MIRELES**, Diputado de la LXI Legislatura, Representante Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa de decreto que propone **REFORMAR** los artículos 123 BIS, primer párrafo, 127 BIS, y 127 QUATER, tercer párrafo de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El procedimiento para la evaluación de impacto ambiental es el mecanismo previsto por la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales puedan generar la realización de obras y actividades, con la finalidad de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a los ecosistemas y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Dicho procedimiento requiere de conocimientos técnicos especializados, ya que la autoridad deberá tomar en cuenta las disposiciones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio, los programas de desarrollo urbano, las declaratorias de áreas naturales protegidas, sus programas de manejo, las normas aplicables y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Para llevar a cabo una evaluación eficaz, se requiere que la autoridad cuente con el tiempo suficiente para verificar que las obras o actividades que se pretenden realizar no rebasen los límites establecidos en las disposiciones aplicables, y se establezcan las condiciones a las que se deban sujetar para de esta manera evitar que se causen desequilibrios ecológicos.

Actualmente la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, establece que la autoridad contará con un plazo de máximo de veinte días naturales para analizar, evaluar y resolver respecto de los informes preventivos, con la posibilidad de que una vez transcurrido dicho plazo, sin que se halla emitido resolución al respecto, opere la afirmativa ficta; también se establece para el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, que para la emisión de las resoluciones correspondientes, la autoridad contará con un plazo de sesenta días hábiles.

Esta diferencia en los términos que se ocupan para definir los días que se aplican a los plazos, genera incertidumbre tanto en los solicitantes como en los encargados de realizar la revisión de la documentación correspondiente, por eso considero pertinente la homologación de dichos términos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente:

**INICIATIVA DE DECRETO**

**ÚNICO:** Que reforma los artículos 123 BIS, primer párrafo, 127 BIS, y 127 QUATER, tercer párrafo, de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 123 BIS.** Analizado el informe preventivo, y en su caso, complementada la información requerida, la autoridad competente determinará en un plazo no mayor de **treinta días hábiles contados a partir de la recepción del informe:**

...

**ARTICULO 127 BIS.** Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días **hábiles.**

**ARTÍCULO 127 QUATER. ...**

...

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la autoridad requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por treinta días **hábiles** adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley, circunstancia que deberá notificarse al solicitante.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO** El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

### **ATENTAMENTE**

**DIPUTADO JESUS CARDONA MIRELES**

**DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S.**

El suscrito, **Oscar Bautista Villegas**, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo iniciativa que **REFORMA** la fracción IV al artículo 25 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; que sustento en la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La juventud es uno de los valores primordiales de nuestra sociedad, por ello la promoción de la investigación, desarrollo tecnológico, así como de creación científica es vital para que los joven vean potenciadas sus capacidades, en beneficio de ellos mismos y de sus congéneres.

En este sentido, sabemos que uno de los problemas básicos en materia educativa, es la fuga de talentos, lo cual ha propiciado que en diversas ramas de las ciencias los jóvenes obtengan apoyos por parte de diversas entidades gubernamentales extranjeras que al notar su potencial les ofrecen becas e incentivos para que desarrollen proyectos que al final son aplicados en otros países.

Por esto y como parte del compromiso gubernamental deben establecerse esquemas puntuales en cuanto a la aplicación de recursos en materia educativa, a efecto de evitar la fuga de talentos e incentivar la investigación, así como el aprovechamiento de los jóvenes potosinos, pues en la medida que cuenten con mayores apoyos, estaremos propiciando el impulso y crecimiento de los jóvenes y adolescentes en la entidad, garantizando con ello que el mejor capital humano se quede en nuestra entidad para colaborar con el desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones científicas.

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se REFORMA la fracción IV al artículo 25 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTICULO 25. Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deberán procurar:

I a III. ...

IV. Promover la investigación, formación y la creación científicas a través de becas, incentivos o programas de apoyo;

V. ..., y

VI. ...

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS**

San Luis Potosí, S.L.P., 05 de marzo de 2018

**CC. Diputados Secretarios de la LXI Legislatura  
Del Honorable Congreso  
Del Estado de San Luis Potosí,  
Presentes.**

**Dip. Fernando Chávez Méndez**, integrante de la LXI Legislatura y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que disponen los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y los artículos 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Soberanía, **Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí**, misma que fundamento en la siguiente:

**EXPOSICIÓN  
DE  
MOTIVOS**

***"Para todo mal, mezcal; para todo bien, también... y si no hay remedio: litro y medio"*, versa el famoso refrán entre los amantes del mezcal.**

En la época contemporánea el mezcal se ha convertido en un producto con identidad nacional, tradición, legado cultural y estandarte del trabajo de las manos mexicanas en el campo, que a través de esta actividad económica, logran el sustento de sus familias y con ello elevar la calidad de vida.

La palabra Mezcal tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl. Algunos sostienen que deriva de mexcalli (metl o meztl, significa Maguey, y de ixcalli, cocer). La traducción sería entonces Maguey cocido.

El Maguey, es una planta monocotiledonea perteneciente a la familia agavaceae, misma que cuenta con más de 273 especies.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), México es el centro de origen de la familia Agavaceae, a la cual pertenecen ocho géneros, entre ellos el género Agave, que a su vez, se subdivide en dos subgéneros, 20 grupos, 136 especies, 20 subespecies, 30 variedades y siete formas, de las cuales, en gran medida relacionado con la diversidad ecogeográfica del país, alrededor de 151 son endémicas



El mezcal se ha convertido en uno de los productos más representativos de México a nivel internacional, ya que su carácter artesanal y su variedad de presentaciones lo han convertido en una bebida altamente demandada en mercados nacionales y extranjeros.

En México, son ocho los estados productores de mezcal: Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, **San Luis Potosí**, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca, todos ellos cuentan con la denominación de origen del producto. Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, esta bebida se ha convertido en motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su mayoría, son pequeños productores, que con el crecimiento de la industria están obteniendo beneficios directos. Antecedente de la denominación de origen del mezcal:

- 1. El 28 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución mediante la cual se otorgó protección a la Denominación de Origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre, en la región geográfica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de Oaxaca, la zona denominada de la "Región del Mezcal", comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.**
2. Mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 1997, por el C. Jorge Guajardo Hesles, en nombre y representación de Comercializadora Jaral de Berrio, S.A. de C.V., se solicitó la modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, con el objeto de incluir en la región geográfica protegida por dicha denominación, al Municipio de San Felipe del Estado de Guanajuato; la resolución modificatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2001.
3. Mediante escrito presentado ante este Instituto el 07 de agosto de 1997, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, en nombre y representación de dicha Entidad Federativa, se solicitó la modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para incluir en la región geográfica protegida por dicha denominación, a los municipios de San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Jaumave, Tula, Cruillas, Jiménez y Méndez del Estado de Tamaulipas; la resolución modificatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2003.
4. Mediante escrito presentado ante este Instituto el 14 de noviembre de 2006, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, en nombre y representación de dicha Entidad Federativa, se solicitó la modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para incluir en la región geográfica protegida por dicha denominación, al Corredor geográfico del Mezcal al que pertenecen los municipios de Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa del Estado de

Michoacán; la resolución modificatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012.

5. Mediante escrito presentado ante este Instituto el 25 de marzo de 2015, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, en nombre y representación de dicha Entidad Federativa, solicitó la modificación a la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para incluir dentro de la región geográfica protegida por dicha denominación, al Municipio de San Luis de la Paz del Estado de Guanajuato. En dicha solicitud aportó la siguiente información: I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante El Estado de Guanajuato, por conducto de su Gobernador Constitucional, Lic. Miguel Márquez Márquez, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el inmueble ubicado en Paseo de la Presa número 103, segundo piso, zona centro, código postal 36000, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. II. Interés Jurídico del solicitante El Estado de Guanajuato, por conducto de su Gobernador Constitucional, con fundamento en los artículos 156, 158 fracción III, 159 fracciones I a III y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial y Quinto Resolutivo de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, solicita la modificación a la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal. III. Señalamiento de la Denominación de Origen "MEZCAL", protegida mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994. IV. Señalamiento de la modificación que se pide y causa que la motiva Se solicita incluir dentro de la región geográfica protegida con la Denominación de Origen al Municipio de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato. El municipio de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, está localizado entre las coordenadas geográficas extremas, 15/10/2015 definidas por los paralelos 21° 41'00'' (al Norte) y 21° 04'00'' (al Sur) de latitud Norte y los Meridianos 100° 12'00'' (al Este) y 100°45'00'' (al Oeste) de longitud Oeste. La solicitud de modificación es motivada en virtud de que en los términos actuales de dicha Declaración, el Municipio de San Luis de la Paz perteneciente al Estado de Guanajuato, presenta los mismos factores geográficos y componentes del medio biofísico exigidos por la Declaración, además de contar con grandes superficies donde prolifera de manera natural el Agave mezcalero denominado Salmiana, utilizado como materia prima en la elaboración de mezcal en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, ubicados en la misma región geográfica denominada Mesa Central. Asimismo, la solicitud de modificación considera que al haber otorgado el Estado Mexicano la Denominación de Origen Mezcal a los estados de Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y a ciertas regiones de los estados de Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, le concedió a estos lugares la exclusividad de siembra y cultivo del agave para la producción de mezcal. Si bien es cierto, geográficamente la extensión territorial de los Estados mencionados forma un corredor Norte Sur que colinda con la parte sur de San Luis Potosí, quien ya disfruta en algunos municipios de la Denominación de Origen del Mezcal. Las condiciones geográficas y humanas en que se produce el mezcal en Guanajuato mantienen una identidad muy clara, adaptándose por completo a las que se presentan en la declaratoria de Denominación de Origen Mezcal. Por lo que el municipio de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, al solicitar ser incluido dentro de la región geográfica protegida, lo hace aduciendo que cuenta con las condiciones tanto de carácter natural, en las que se incluyen el medio geográfico y biofísico, integrados en el componente definido como factores naturales y humanos suficientes para la producción de los agaves determinados en la Norma Oficial Mexicana aplicable a la bebida alcohólica "Mezcal" NOM-070SCFI1994. Como también cuenta en su territorio con seis de las siete especies existentes de agave en el Estado de Guanajuato. Aunado a lo anterior, la presencia de grandes poblaciones de agave silvestre en el territorio de San Luis de la Paz, los antecedentes históricos sobre la producción de Mezcal y las estadísticas sobre los volúmenes producidos de esta bebida principalmente a partir del siglo XVIII, motivaron hace más de una década a un grupo de productores de agave de este municipio a iniciar las gestiones para reactivar esta agroindustria. Misma que hoy busca ser incluida al solicitar la modificación de la Declaración de protección del Mezcal.

6. Habiéndose cumplido los requisitos establecidos en los artículos 159, fracciones I a III y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, con fundamento en sus artículos 161 y 166 del mismo ordenamiento y Quinto Resolutivo de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994, se publicó el 08 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, el "Extracto de la solicitud para modificar la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal", con el objeto de incluir dentro de la región geográfica protegida por dicha denominación, al Municipio de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato.
7. En términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgó un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación del Extracto, para efecto de que cualquier tercero que justificara su interés jurídico, formulara las observaciones u objeciones que estimara pertinentes y, en su caso, aportara las pruebas necesarias.
8. Dentro del plazo legal, el 7 de agosto de 2015, se presentó un escrito de objeción, con número de folio 0178543, de la Asociación Civil Integración de la cadena productiva maguey mezcal de México, A.C., representada por el C. Alfredo Conde de la Cruz, mediante el cual se realizaron diversas manifestaciones respecto a la improcedencia de la ampliación de la Denominación de Origen Mezcal. 9. Mediante oficio del 25 de agosto de 2015 con número de folio 26, este Instituto comunicó al representante de la Asociación Civil Integración de la cadena productiva maguey mezcal de México, A.C., que en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, se tenía por recibido el escrito de "objeciones en relación con la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación del 8 de junio de 2015, en relación con la publicación del Extracto de la Solicitud de Modificación de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal", por lo que se integraba al expediente respectivo, junto con su documentación anexa, a fin de ser tomado en cuenta en el análisis de la solicitud.<sup>1</sup>



Entre los beneficios que se identifican de los productos con denominaciones de origen está el del sector económico, ya que brindan mayores

<sup>1</sup> <http://www.crm.org.mx/PDF/NOM070/DOF021015.pdf>

<sup>2</sup> [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104879/DO\\_Orgullo\\_de\\_Mexico.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104879/DO_Orgullo_de_Mexico.pdf)

oportunidades al sector productivo en México, al mismo tiempo que se protege al consumidor.

Además, la fabricación de productos vinculados a nuestros orígenes culturales y procedencia, fortalecen la identidad nacional y las tradiciones de las regiones y desinhibe la migración, al brindar trabajo arraigado al territorio.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años las ventas nacionales de mezcal crecieron 110 por ciento, al pasar de 320 mil litro en 2010, a 650 mil el año pasado.

En tanto, las exportaciones aumentaron 137 por ciento al moverse de 414 mil litros a 980 mil en el mismo lapso referido. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Australia y Chile.

El mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene de la destilación del jugo fermentado de las cabezas o piñas de agave cocidas. La bebida está vinculada no solo con el ceremonial y la fiesta, al ser usado para limpiar las milpas, las construcciones y las cruces, sino también con aspectos medicinales.

El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves. Son famosos los mezcales de Oaxaca y los norteños, casi no hay lugar donde no se fabrique mezcal. Su proceso de producción en su forma tradicional se compone de cinco etapas: selección y corte del maguey maduro; horneado o cocimiento de las piñas de maguey; machacado o molienda de las piñas cocidas; fermentación y destilación. Hay una gran variedad de sabores, aromas y texturas en los mezcales, que depende de factores como el tipo de agave utilizado, de destilación, tiempo de añejamiento, etcétera.

Los más famosos son: blanco o minero, reposado y añejo, pero también están el mezcal de gusano que trae un chinicuilito al fondo de la botella; mezcal de pechuga y también las cremas de mezcal endulzadas con leche y miel.

Las diferentes maneras en que las comunidades rurales se refieren al maguey, los mitos y deidades relacionadas con los agaves y sus néctares, así como las actividades cotidianas relacionadas con los usos del maguey, forman parte del universo simbólico que trasciende lo material para revelar

la memoria, la herencia de las tradiciones y actividades artesanales de los pueblos de México.

Actualmente, nuestra Entidad tiene las famosas rutas del Mezcal del Altiplano Potosino, que son itinerarios culturales que nos llevan a conocer el corazón de México para descubrir uno de sus secretos mejor guardados, el mezcal. Aunado a ello, se convierte en un atractivo turístico, que permite atraer a nuestros visitantes tanto del interior del Estado y la República mexicana, como del exterior de nuestro país, que les permite conocer los lugares de esta famosa ruta y dejar una derrama económica digna de considerar.

El altiplano potosino representa la puerta de entrada al desierto de Chihuahua, una región semidesértica enclavada a dos mil metros de altura con una gran variedad de flora y fauna entre las que destacan las múltiples cactáceas y las pequeñas especies de roedores y aves, pero también, es un referente inmediato de gente trabajadora que proviene de la cultura del esfuerzo y sacrificio, que merecen oportunidades de desarrollo, y que para el particular caso que nos ocupa, requieren de la regulación en su actividad económica, incentivos a través de las dependencias que ya existen, promoción, fortalecimiento y protección a sus productos.

Las fábricas de mezcal del altiplano potosino tienen una historia de más de doscientos años y algunas no han dejado de producir este destilado que tiene fama de ser noble, austero y que se ha convertido en un referente cultural de nuestro país.

Visitar las fábricas con sus imponentes hornos de mampostería y oler las mieles del corazón de maguey recién cocido marcará para siempre la forma en la que beberás un cuernito de mezcal: dos siglos de vivencias contenidos en un elixir más claro que el agua pero más fuerte que un trueno.

El Mezcal es un referente económico, cultural y de desarrollo del Estado Potosino y de nuestro país; por ello el objeto de esta iniciativa se fundamenta en la regulación de la producción de este producto, la generación de empleos para quienes mantienen sus ingresos de esta actividad, y el establecimiento de políticas públicas con los recursos y medios ya existentes, direccionados a su fortalecimiento pleno, posicionándolo como un conexo cultural y turístico del Estado, y cumpliendo en todo momento con lo que dispone la Norma Oficial Mexicana respectiva.



**Ruta 1**

Centro Cultural Roberto Donis  
Fabrica de Mezcal Laguna seca  
Fabrica de Mezcal Z de Solis  
Fabrica de Mezcal Santa Isabel



Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:

**PROYECTO  
DE  
DECRETO**

**ÚNICO.** Se expide la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue

**LEY DEL MEZCAL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Título Único  
Objeto y Aplicación de la Ley**

**Capítulo Primero  
Disposiciones Generales**

**Artículo 1º.** La presente Ley es de observancia general, de orden público y de interés social. Tiene por objeto, sin menoscabo por lo establecido en la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado, lo siguiente:

**I.** Proteger la cadena productiva del mezcal en todas sus etapas;

- II.** Impulsar la comercialización del mezcal;
- III.** Identificar las zonas de producción del mezcal dentro de los municipios incluidos en la Denominación de Origen Mezcal;
- IV.** Fomentar el apoyo de las organizaciones de mezcaleros, a efecto de alcanzar la protección, y el aprovechamiento en la producción y comercialización del mezcal;
- V.** Coordinar a las dependencias estatales, en el apoyo de las organizaciones de productores y comercializadores del mezcal;
- VI.** Promover entre las organizaciones de productores y comercializadores, en coordinación, con los órdenes de gobierno, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables a la autenticidad y calidad del Mezcal;
- VII.** Incentivar las acciones pertinentes para mejorar la infraestructura y equipos en las unidades de producción de Mezcal, el desarrollo de marcas y la capacitación en proceso de producción y de organización empresarial, y
- VIII.** Fortalecer esquemas integrales de comercialización.

**Artículo 2º.** Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que realicen actividades relacionadas con la producción y comercialización del mezcal.

**Artículo 3.** La aplicación de esta Ley; corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- I.     **Certificación:**** Proceso a través del cual los organismos de certificación, acreditados, constatan que los sistemas de producción, manejo, procesamiento y comercialización, cumplen con las especificaciones de las normatividades vigentes aplicables en la materia;

- II. Certificado:** Documento que expide el organismo certificador con el cual asegura que el producto cumple con las especificaciones de la normatividad vigente;
- III. Consejo:** Organismo público para el Fomento a la Producción del Mezcal en el Estado, primordialmente en los municipios con Denominación de Origen Mezcal. El cual será además, una instancia para la participación de las dependencias gubernamentales competentes y los productores y organizaciones de mezcaleros para la planeación, programación, gestión y aplicación de los recursos que se obtengan en los tres órdenes de gobierno, en los términos de esta Ley, los cuales se destinen al apoyo de las inversiones en la cadena productiva del Mezcal;
- IV. Denominación de origen:** La denominación de origen designa un producto originario de una región específica, cuya calidad y características se deben únicamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos;
- V. Fábrica de Mezcal:** Unidad de Producción que incorporan innovaciones tecnológicas en los equipos que utiliza en alguna de las etapas de elaboración;
- VI. Inocuidad:** El control de las actividades de producción asociados a los productos destinados para el consumo humano a través de la ingestión, a fin de que no provoquen daños a la salud del consumidor;
- VII. Ley:** La Ley del Mezcal para el Estado;
- VIII. Mezcal:** Líquido de olor y sabor de acuerdo con su tipo obtenido por destilación de una planta de maguey; es una bebida alcohólica protegida con la denominación de origen dentro del territorio mexicano;
- IX. NOM:** Norma Oficial Mexicana, NOM-070-SCFI-1994.BEBIDAS ALCOHÓLICAS.MEZCAL.ESPECIFICACIONES, norma que establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y comercializar la bebida alcohólica destilada denominada mezcal;



- X. Organismo certificador:** Organismo acreditado y facultado para evaluar y auditar procesos y productos, de acuerdo con los ordenamientos legales vigentes en la materia, que emite en sentido positivo o negativo certificados mediante la atención y validación de las solicitudes respectivas;
- XI. Organizaciones de Mezcaleros:** las personas morales que, constituidas conforme la ley, se dedican a la producción, envase o comercialización de mezcal, independientemente que las realicen por separado o en conjunto, o bien, solo una etapa de cualquiera de las descritas, siempre que estén verificadas y certificadas dichas personas;
- XII. Producción y Comercialización del Mezcal:** El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos del Mezcal, considerando desde la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, hasta el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros y la prestación de servicios técnicos;
- XIII. Productor:** Persona física o moral que produce mezcal;
- XIV. Reglamento:** El Reglamento de la Ley de Mezcal para el Estado, y
- XV. Vinata:** Unidad de Producción que cuenta con equipo para elaborar Mezcal en sus diversas categorías.

**Artículo 5°.** Para efectos de la presente Ley, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, las siguientes atribuciones

- I.** Promover que los Gobiernos Municipales que cuentan con la Denominación de Origen Mezcal, apliquen su Ordenamiento Ecológico Territorial, con la finalidad de que participen activamente en las políticas instrumentadas para el desarrollo sustentable de la cadena productiva del Mezcal;
- II.** Diseñar programas y mecanismos para impulsar e incentivar a los productores con infraestructura, y equipamiento para la producción de, mezcal y envasado con marcas registradas para que cumplan con

los requerimientos exigidos por la NOM específica que regula la producción del Mezcal;

- III.** Diseñar e implementar programas de capacitación, asesoría técnica y consultoría para impulsar la competitividad de la cadena productiva del Mezcal;
- IV.** Coordinar y dar seguimiento a las actividades de fomento desarrollo de la cadena productiva del Mezcal;
- V.** Generar un padrón estatal de la cadena productiva del Mezcal, sistematizando la información, para que sirva como instrumento de planeación y registro para dirigir la aplicación de los apoyos;
- VI.** Impulsar la vinculación con las instituciones de educación superior y centros de investigación científica, para generar procesos de innovación y transferencia de tecnología con las actividades de conservación y producción del Mezcal, así como su transformación y comercialización;
- VII.** Celebrar convenios de concertación y suscripción de acuerdos con instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la cadena productiva del Mezcal; y,
- VIII.** Implementar acciones para la investigación, transferencia de tecnología en el cuidado del medio ambiente, en los procesos de la cadena productiva del Mezcal, en coordinación con las instituciones públicas y privadas.

## **Capítulo Segundo Políticas y Principios**

**Artículo 6°.** La cadena productiva del Mezcal, se fundamenta en las políticas y principios siguientes:

- I.** Promover el acceso a una mejor calidad de vida de los Productores de la cadena productiva del Mezcal;
- II.** Interactuar armoniosamente con los ecosistemas y ciclos naturales respetando la biodiversidad;

- III.** Promover que la producción del Mezcal, sea de acuerdo con los estándares de sanidad, inocuidad y calidad;
- IV.** Promover e incentivar el manejo adecuado de los residuos derivadas del proceso de destilación, como vinazas, bagazo, y otros desechos, para cumplir con las normas vigentes;
- V.** Planear e incentivar el aprovechamiento de magueyes silvestres, el establecimiento de plantaciones comerciales, la reproducción de plantas y planes de manejo para generar un equilibrio entre la producción del maguey y la capacidad de producción del mezcal;
- VI.** Promover la capacitación y profesionalización, como un eje transversal en toda la cadena productiva; y,
- VII.** Fortalecer los sistemas de producción, transformación y comercialización, económicamente rentables, ambientalmente sustentable y socialmente responsable.

### **Capítulo Tercero Consejo**

**Artículo 7º.** El Consejo estará integrado por:

- I.** El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
- II.** El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;
- III.** El titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;
- IV.** El titular de la Contraloría General del Estado;
- V.** Los representantes de las Organizaciones de Mezcaleros;
- VI.** Dos representantes de las instituciones de enseñanza superior e investigación con estudios y carreras vinculadas a la cadena de producción mezcal;
- VII.** Un representante del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C., y

**VIII.** El titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien participará como invitado permanente.

**Artículo 8°.** Para efectos de las funciones y tareas que desempeñara cada miembro del Consejo, se sujetara a los términos y disposiciones de su Reglamento Interior.

**Artículo 9°.** Los cargos que se desempeñen en el Consejo serán honoríficos.

**Artículo 10.** Son funciones del Consejo:

- I.** Emitir opinión sobre instrumentos regulatorios que incidan en la producción del Mezcal;
- II.** Fomentar la capacitación para la productividad y competitividad del Mezcal;
- III.** Proponer acciones y políticas que tengan como objetivo el fomento al desarrollo de la producción del Mezcal;
- IV.** Acompañar a los productores en los procesos para su constitución legal y certificación;
- V.** Impulsar la comercialización; y
- VI.** Los demás que le asigne la presente Ley y otras disposiciones que se deriven de la misma.

#### **Capítulo Cuarto Producción y Procesamiento**

**Artículo 11.** En los municipios con Denominación de Origen Mezcal, la producción se llevará a cabo de acuerdo con la demanda en el corto, mediano y largo plazo.

**Artículo 12.** En los programas e incentivos para la cadena productiva del Mezcal se observarán los lineamientos que para tal efecto publiquen la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y demás dependencias competentes en acuerdo con los demás integrantes del Consejo.

## **Capítulo Quinto Certificación**

**Artículo 13.** Las Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, fomentarán, asesorarán y apoyarán para la certificación de las Vinatas y Fábricas de Mezcal de los municipios protegidos en la Denominación de Origen.

**Artículo 14.** La Secretaria de Desarrollo Económico deberá crear un padrón de Productores de Mezcal certificados y otro de productores sin certificación; además podrá solicitar al organismo certificador o cualquier autoridad, informe de las acciones y los resultados de las gestiones realizadas por los mezcaleros potosinos.

## **Capítulo Sexto Promoción y Fomento**

**Artículo 15.** Los productores de la cadena productiva del Mezcal deberán ser considerados como sujetos de fomento y promoción por parte del Gobierno del Estado, para que realicen las actividades económicas y productivas de cada uno de los eslabones que la integran.

**Artículo 16.** El Gobierno del Estado, definirá en conjunto con el Consejo, el diseño y operación de programas relacionados con la atención de la cadena productiva del Mezcal.

**Artículo 17.** La Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Consejo, serán los responsables de coordinar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a todas las acciones de fomento y promoción de la cadena productiva del Mezcal.

**Artículo 18.** Las acciones de fomento y de promoción, que contribuyan a respaldar y facilitar el cumplimiento de esta Ley y de la normatividad aplicable, estarán destinadas a fortalecer y consolidar la actividad de la cadena productiva del Mezcal.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** El titular del Ejecutivo del Estado, dispondrá de ciento veinte días a partir de la publicación de la presente Ley, para expedir el Reglamento respectivo.

**TERCERO.** El titular del Ejecutivo del Estado dispondrá ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente Ley, para llevar a cabo la integración del Consejo.

**CUARTO.** El Ejecutivo del Estado, a efecto de garantizar el fomento y la promoción de la productividad y competitividad de la cadena productiva del Mezcal, materia de la presente Ley, deberá llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias a las Secretarías competentes, sin que esto implique una erogación adicional al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018.

**QUINTO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**ATENTAMENTE**

**DIP. FERNANDO CHÁVEZ MÉNDEZ**

# Dictamen con Proyecto de Decreto

## **CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, P R E S E N T E S.**

Las comisiones de, Gobernación; y Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 fracción XVI, 109, y 111, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 104, y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en adelante (Ley de los Trabajadores) se permiten elevar a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, el presente dictamen con base en los siguientes

### **A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO.** En Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete se turnó a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, el oficio número 3517/2017, suscrito por la Lic. Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el que solicita reelección en el cargo. (**Turno 4959**)

**SEGUNDO.** En Sesión Ordinaria verificada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, fue turnado a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, el escrito signado por la Lic. Gina Maribel Rocha Peñuelas, mediante el que manifiesta intención para ocupar el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turno 4996**)

**TERCERO.** En Sesión Ordinaria el veintiocho de septiembre del año próximo pasado, se turnó a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, el escrito que suscribe el Lic. Rodolfo Antonio Reyes Morales, mediante el que manifiesta intención para ocupar el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turno 5007**)

**CUARTO.** El veintisiete de septiembre del año inmediato anterior, fue recibido en la oficina de la Diputada María Rebeca Terán Guevara, curso signado por la Lic. Alma Angélica Gallardo Medina, mediante el cual hace del conocimiento la aspiración para ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, lo anterior, por considerar que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de los Trabajadores. Adjunta copias simples de, Diploma de Especialidad en Derecho del Trabajo, expedido por la Universidad Autónoma de Querétaro; Título de Licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y de la cédula profesional de Licenciatura en Derecho número 5599261, del treinta de julio de dos

mil ocho, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

**QUINTO.** En Sesión Ordinaria del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete se turnó a estas comisiones el escrito del Licenciado Pedro David Gómez Escobedo, por el que señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y solicita ser nombrado para ocupar el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turno 5151**)

**SEXTO.** En Sesión Ordinaria del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se turnó a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, escrito signado por el Lic. Miguel Ángel Coronado Tenorio, mediante el que agrega constancias a solicitud de participar como candidato a presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turnos 5171 y 5335**)

**SÉPTIMO.** En Sesión Ordinaria del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se turnó a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, escrito signado por la Licenciada Norma Angélica Ramírez Medellín, mediante el que presenta documentación para participar en la propuesta para presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turno 5886**)

**OCTAVO.** En Sesión Ordinaria del uno de marzo de dos mil dieciocho, fue turnado a las comisiones de, Gobernación; y Justicia, el escrito de la Licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez, mediante el que manifiesta su intención para que sea considerada en la elección de presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (**Turno 5932**)

Por lo que para emitir este instrumento parlamentario, las comisiones atendemos a las siguientes

## **CONSIDERACIONES**

**PRIMERA.** Que en el Decreto Legislativo 792 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre del dos mil catorce, la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, nombró a la Lic. Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

**SEGUNDA.** Que de conformidad con lo que establece el párrafo primero del artículo 104 de la Ley de los Trabajadores, el encargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene una duración de tres años; por lo que al haber sido nombrada la Lic. Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, el veintisiete de septiembre del dos mil catorce, tal nombramiento ha concluido; en consecuencia, es procedente designar a quien habrá de desempeñar el encargo en comento, para el periodo comprendido del once de octubre del dos mil diecisiete, al veintisiete de septiembre del dos mil veinte.

**TERCERA.** Que en atención a lo que establece el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores, los requisitos para ser miembro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y Presidente del mismo son :

***“ARTICULO 105.- Para ser miembro del tribunal se requiere:***

- I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;***
- II. Ser mayor de veinticinco años;***



- III. *No haber sido condenado por delito intencional; y*
- IV. *Haber cursado la educación básica.*

*El Presidente deberá tener título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional y amplia experiencia en derecho laboral. Los demás miembros del Tribunal deberán ser preferentemente Licenciados en Derecho”.*

**CUARTA.** Que en observancia de la disposición transcrita en la Consideración Tercera, se advierten los requisitos que habrá de colmar el o la profesionista que presida el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y es el caso que a la revisión del currículum y expediente que adjuntó el Licenciado Rodolfo Antonio Reyes Morales, se colige que los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores, se acreditan con el acta de nacimiento del profesionista mencionado, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadano mexicano, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores.

Acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Se colma el requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores, con la constancia de antecedentes no penales, expedida por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, de la Subdirección de la Unidad Jurídica del Fuero Común de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que el Lic. Rodolfo Antonio Reyes Morales, cuenta con cédula profesional de abogado número 08756872 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha seis de junio de dos mil catorce; sin embargo no se cubre el término de cinco años, señalado en el párrafo último del citado precepto.

En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula del abogado Rodolfo Antonio Reyes Morales, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo.

Asimismo, se desprende que el licenciado Rodolfo Antonio Reyes Morales, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; no obstante, al no colmarse los extremos que establece con precisión el párrafo último del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores, al no contar con la antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional, las dictaminadoras consideran no integrar en la propuesta a dicho profesionista. Ello en observancia a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra estipula: *"La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo"*. Que se concatena con lo que establece la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí, en sus artículos, 2º, 3 fracción II, y 5º; que disponen:

**"ARTICULO 2o.** *Quedan comprendidas en este ordenamiento legal, todas aquellas profesiones derivadas de la conclusión y posterior titulación de estudios de los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, o cualquier otro nivel o grado académico, provenientes de la educación universitaria, normal, tecnológica o de diversa naturaleza, que existan al amparo del Sistema Educativo Nacional."*

**"ARTICULO 3o.** *Para efectos de la presente Ley se entiende por:*

**I. ...**

**II. Título Profesional:** *el documento oficial expedido por instituciones autorizadas al efecto en términos de esta Ley, a través del cual se acreditan los estudios, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y experiencias, necesarios para ejercer legalmente las profesiones reconocidas y autorizadas en el Estado y en las demás Entidades de la República Mexicana;*

**III. a V. ..."**

**(Énfasis añadido)**

**"ARTICULO 5o.** *Para ejercer legalmente en cualquier parte del territorio del Estado de San Luis Potosí, sea de manera onerosa o gratuita, las profesiones a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley se requiere:*

**I. Contar con título o grado académico** *debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, expedido por las universidades a las que en términos constitucionales la ley da autonomía y por las demás instituciones de educación superior, incluyendo las que brindan educación normal, tecnológica o de otra naturaleza, que forman parte del Sistema Educativo Nacional;*

**II. Contar con la respectiva cédula profesional** *para el ejercicio de la profesión de que se trate, y*

**III. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles."**

**(énfasis añadido)**

Cabe mencionar que el tres de octubre de esta anualidad, se recibió el escrito del Licenciado Rodolfo Antonio Reyes Morales, mediante el que realiza manifestaciones para que sean tomadas en consideración en el dictamen que al efecto se emita. Manifestaciones que se expresan al tenor siguiente:

**H. LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
P R E S E N T E.**



**RODOLFO ANTONIO REYES MORALES**, ciudadano mexicano, con domicilio profesional en la Av. Prolongación Nereo Rodríguez Barragán No. 2345, Frac. Valle de Santiago de esta ciudad, teléfono 4441302459, respetuosamente comparezco para exponer:

Mediante escritos de fechas 26 y 27 de Septiembre presentados ante esta Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, el suscrito manifesté mi interés en participar en el procedimiento para la elección de la persona que ocupe el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para el periodo 2017-2020. Ahora bien, previo a resolver sobre la procedencia de mi solicitud, me permito realizar las siguientes manifestaciones, con el propósito de que sean tomadas en consideración en el dictamen que al efecto sea emitido:

El artículo 105 de la Ley de los trabajadores al servicio de las Instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí, establece que, para ser miembro del tribunal, deben cumplirse los requisitos siguientes:

- ARTÍCULO 105.- Para ser miembro del tribunal se requiere:*
- I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;*
  - II.- Ser mayor de veinticinco años;*
  - III.- No haber sido condenado por delito intencional; y*
  - IV.- Haber cursado la educación básica.*

*El Presidente deberá tener título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional y amplia experiencia en derecho laboral. Los demás miembros del Tribunal deberán ser preferentemente Licenciados en Derecho.*

Es decir, respecto del Presidente del tribunal, el citado numeral establece 3 requisitos adicionales, a saber: **a).**- Tener título de Licenciado en Derecho, **b).**- Una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional, y **c).**- Amplia experiencia en derecho laboral.

En el presente caso, el suscrito ha dejado debidamente acreditada la cabal satisfacción de los mencionados requisitos, mediante los siguientes instrumentos, presentados ante esta H. Soberanía:

**A).**- La copia certificada del título de licenciado en derecho expedido en mi favor por la **Universidad Potosina** y mediante el cual se satisface el primero de los requisitos previstos en la primera parte del último párrafo del artículo antes enunciado.

**B).**- Respecto del requisito consistente en "**una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional**", debo señalar lo siguiente:

i.- el suscrito acreditó haber concluido los estudios profesionales desde el año 2010, mediante copia certificada del título de licenciado en derecho, expedido en mi favor por parte de la **Universidad Potosina**, mismo en el que se hace constar que el suscrito "**terminó los estudios correspondientes el día 10 de Diciembre de 2010**".

ii.- Por otra parte, mediante el nombramiento que el C. Vicente Segura Ortega, en su carácter de Presidente Municipal de Tamasopo, S.L.P., expidió en favor del suscrito como "**Asesor**

---


**jurídico del Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. para el período 2012-2015”**, se acredita que desde el año 2009 fungí como asesor y apoderado jurídico de la citada institución pública, y que a partir del día 1º de Octubre del 2012, recibí formalmente el nombramiento respectivo.

iii.- Mediante las copias certificadas de diversas actuaciones procesales realizadas ante el Tribunal estatal de Conciliación y arbitraje que fueron anexadas a mi solicitud, justifico plenamente que desde el año 2009, he venido ejerciendo profesionalmente como abogado representante de diversas instituciones públicas. Al respecto es importante destacar que, **conforme a la ley de la materia vigente** en esa fecha, para ejercer legalmente la profesión de abogado en materia laboral ante el referido Tribunal, **no exigía mayor requisito que la mera designación mediante oficio**, y fue hasta el **25 de febrero del año 2014**, en que entró en vigencia la reforma a la Ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí, la cual estableció que a partir de esa fecha, para el ejercicio de dicha profesión, los apoderados de las partes deberían acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cedula profesional o contar con carta de pasante vigente expedida por autoridad competente.

De lo anteriormente expuesto se desprende que **desde el año 2009, no existió impedimento legal alguno para que el suscrito ejerciera profesionalmente** con el carácter de apoderado jurídico o en representación de cualquiera de las partes

---

contendientes en un juicio laboral, como tampoco existió limitante alguna para que el suscrito interviniera profesionalmente en la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales atinentes, tal y como consta con los anexos que obran glosados a la solicitud del suscrito y por ende, ***se acredita debidamente la legalidad del ejercicio profesional que, como apoderado y representante jurídico de instituciones públicas, el suscrito realizó desde hace más de cinco años.***



Siendo importante señalar que, pretender hacer nugatorio el derecho del suscrito a ocupar el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el establecimiento de parámetros o condiciones que, previo a la reforma del año 2014, ***eran inexistentes para el ejercicio de la profesión,*** constituiría una flagrante violación no solo a la garantía consagrada en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de manera preponderante se vulneraría en mi perjuicio el derecho previsto por el artículo 35 fracción VI de la carta magna, ya que el ejercicio oportuno de las obligaciones a cargo de las autoridades para mantener el orden público, ***constituye una garantía individual*** de los gobernados, por lo que la omisión de tal ejercicio, en condiciones extremas, implica una violación grave de garantías, al ser obligación de los órganos del Estado velar por la seguridad pública y por la protección del orden público, los cuales son fundamentales para la vigencia de las garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos fundamentales que podrían verse afectados en perjuicio del

---

suscrito, por una incorrecta aplicación restrictiva a mi derecho fundamental de poder ser nombrado al cargo público que he solicitado, a pesar de reunir las calidades establecidas por la legislación positiva.

**C).- Finalmente** y respecto del requisito consistente en una amplia experiencia en derecho laboral, también se ha dejado acreditado mediante las constancias certificadas por el tribunal estatal de conciliación y arbitraje, en las que consta que he actuado ante dicho órgano jurisdiccional, en representación de diversas instituciones públicas del estado.

Por todo lo anterior y en razón de haber acreditado la plena satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley de la materia, me permito solicitar a ese H. órgano parlamentario, tenga a bien ponderar mi petición y de no existir inconveniente alguno, en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 57, fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, **se designe al suscrito como presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.**

  
**LIC. RODOLFO ANTONIO REYES MORALES**  
San Luis Potosí, S.L.P., Octubre 3 del año 2017.

C.c.p. Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.  
C.c.p. Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

---

Como ya se precisó en párrafos anteriores, no es tema de duda la experiencia que en la materia laboral tiene el Licenciado Rodolfo Antonio Reyes Morales, sino el incumplimiento del requisito al que expresamente alude el último párrafo del ya invocado artículo 105 de la Ley de los Trabajadores, en el que se mandata: "**El Presidente deberá tener título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional y amplia experiencia en derecho laboral. Los demás miembros del Tribunal deberán ser preferentemente Licenciados en Derecho**".

A lo anterior se reitera lo manifestado en el párrafo sexto de esta Consideración Cuarta,

y es el caso que se requiere una antigüedad mínima para el ejercicio profesional, concepto que se define en el artículo 19 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí, que a la letra estipula:

**"ARTICULO 19. En términos de esta Ley se entiende por ejercicio profesional todo acto tendiente a ofrecer o prestar efectivamente, de manera onerosa o gratuita, a título profesional, cualquier servicio propio de alguna profesión.**

*No se entenderá por ejercicio profesional, el proveniente de cualquier acto espontáneo o emergente que se realice en caso de extraordinaria necesidad o gravedad, con el fin de brindar auxilio impostergable a la salud e integridad física de las personas".*

(Énfasis añadido)

Para robustecer lo señalado, cobran vigencia los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedidos al tenor siguiente:

**"DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.**

Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo [1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo [20, apartado A, fracción IX](#), del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales [8.2, incisos d\) y e\)](#), de la [Convención Americana sobre Derechos Humanos](#), y [14.3, incisos b\) y d\)](#), del [Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos](#), así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (\*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ["DEFENSA ADECUADA DEL INculpADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS."](#), y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el **ejercicio** eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de **profesional** en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado"



Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 26/2015 (10a.)  
Página: 240  
Jurisprudencia.

**"PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. AUTORIZACIÓN PARA EJERCER COMO PASANTE LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO.**

*De conformidad con el artículo [692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo](#), los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, que no tengan cédula profesional de abogado o de licenciado en derecho, deben acreditar estar autorizados para ejercer dicha profesión con carta de pasante vigente, expedida por la autoridad competente, pues la intención del legislador fue profesionalizar a los representantes de las partes que intervienen en el juicio, a fin de reducir el riesgo de que sean deficientemente representadas. Por otra parte, el artículo [5o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#), reconoce el derecho de toda persona para ejercer la profesión que le acomode y establece que las leyes de los Estados determinarán qué profesiones necesitan título para su ejercicio, los requisitos para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Así, de acuerdo con las legislaciones que rigen el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y en el Estado de Nuevo León, la constancia expedida por la universidad respectiva, donde se informa que quien comparece al juicio laboral en representación de la parte demandada "ha concluido el plan de estudios correlativo a la licenciatura en derecho", "ha cursado y aprobado todas las materias correspondientes a la carrera de licenciado en derecho" o contenga alguna expresión similar, no es documento idóneo para acreditar ser pasante autorizado para ejercer la profesión de abogado o de licenciado en derecho, pues no constituye la carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente a que se refiere el artículo legal citado, debido a que no la expidió la autoridad competente encargada de supervisar el ejercicio profesional de la carrera de licenciado en derecho que, en el caso, es la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Nuevo León".*

Contradicción de tesis 90/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero del Cuarto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 6 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Décima Época  
Registro digital:**2009361**  
Segunda Sala  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 19, Junio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 73/2015 (10a.)  
Página: 1000  
Jurisprudencia

**"HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO.**

*La acción de pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales tiene como elemento esencial que la parte actora esté autorizada para ejercer la profesión de licenciado*

en derecho, por lo que para su procedencia es necesario que el actor acredite fehacientemente, y no apoyado en presunciones, que tiene tal calidad a través de prueba directa e idónea como lo es la exhibición de la documental pública consistente en la cédula profesional, lo cual se justifica bajo las directrices del principio de certeza y seguridad jurídica, ya que el juzgador debe contar con todos los elementos necesarios que le permitan arribar a un conocimiento cierto de los hechos que prueban la acción intentada. Esto es así, toda vez que el [párrafo segundo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#) expresamente dispone que la ley de cada Estado determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, así como las condiciones para obtenerlo, sin que tal exigencia pueda considerarse como una carga excesiva para el actor, en virtud de que para poder ejercer legalmente la profesión es indispensable contar con la referida documental.

*Contradicción de tesis 85/2004-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 19 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías".*

Novena Época

Registro digital :178733

Primera Sala

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXI, Abril de 2005

Materia(s): Civil

Tesis: 1a./J. 16/2005

Página: 290

Jurisprudencia

**QUINTA.** Que respecto al ocurso presentado por la Licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, es preciso mencionar que el dos de octubre de dos mil diecisiete, presentó en la oficialía de partes de esta Soberanía, escrito por el cual anexa documentos con los que solventa los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores, para presidir el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Además, en alcance, el tres de octubre de dos mil diecisiete, adjunta nuevamente currículum vitae, y señala domicilio para oír y recibir notificaciones; posteriormente presentó plan de trabajo.

**SEXTA.** Que para los efectos previstos en los artículos, 57 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se propone, en estricto orden alfabético, a los profesionistas: Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa; Miguel Ángel Coronado Tenorio; Alma Angélica Gallardo Medina; Pedro David Gómez Escobedo; Norma Angélica Ramírez Medellín, Gina Maribel Rocha Peñuelas, y María Olvido Rodríguez Vázquez, para que de entre ellos se elija a quien ocupará el cargo de Presidenta o Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; función que ejercerá acorde a lo establecido por el párrafo primero del numeral 104 de la ley ya invocada.

**SÉPTIMA.** Que revisados escrupulosamente los expedientes conformados para verificar que los propuestas cumplen con lo establecido en los artículos citados en la Consideración que antecede, las comisiones que suscriben ponderan que entre los profesionistas: Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa; Miguel Ángel Coronado Tenorio; Alma Angélica Gallardo

Medina; Pedro David Gómez Escobedo; Norma Angélica Ramírez Medellín, Gina Maribel Rocha Peñuelas, y María Olvido Rodríguez Vázquez, es posible elegir al profesional idóneo para ocupar el cargo de Presidente o Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pues acreditan los requisitos de mérito con los currículos respectivos, en la siguiente forma:

**LICENCIADA ROSA DE GUADALUPE CERVANTES GAMBOA.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento de la profesionista propuesta, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadana mexicana, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

La profesionista propuesta acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del artículo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la carta de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y de entonces a la fecha no se tiene conocimiento que haya cambiado tal situación.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, cuenta con cédula profesional de abogado número 4817126 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha dieciséis de junio del dos mil seis, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto; y con estudios de maestría en derecho laboral, con cédula en trámite. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula de la abogada propuesta, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo, concluyendo recientemente el cargo de presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Como ya se mencionó en la Consideración Primera de este dictamen, la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, nombró a la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el periodo que concluyó el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que con fundamento en lo establecido en el párrafo primero del artículo 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en el supuesto de que la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa resultara electa para el cargo de presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, estaríamos en la hipótesis de una reelección, lo que en su caso se deberá asentar en el decreto correspondiente.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y

profesionalismo el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesta.

### **LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CORONADO TENORIO.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento del profesionista propuesto, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadano mexicano, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

El profesionista propuesto acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la carta de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que el Licenciado Miguel Ángel Coronado Tenorio, cuenta con cédula profesional de Licenciado en Derecho número 7607508, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha veintiuno de junio de dos mil doce, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la documentación adjunta del abogado propuesto, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que el Licenciado Miguel Ángel Coronado Tenorio, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesto.

### **LICENCIADA ALMA ANGÉLICA GALLARDO MEDINA.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento de la profesionista propuesta, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadana mexicana, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

La profesionista propuesta acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores, se colma con la carta de no antecedentes penales expedida por la Subdirección de la Unidad Jurídica del Fuero Común, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que la Licenciada Alma Angélica Gallardo Medina cuenta con cédula profesional de abogado número 5599261 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha treinta de julio del dos mil ocho, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto; y con estudios de especialidad en derecho del trabajo. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula de la abogada propuesta, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que la Licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesta.

#### **LICENCIADO PEDRO DAVID GÓMEZ ESCOBEDO.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento del profesionista propuesto, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadano mexicano, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

El profesionista propuesto acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la carta de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que el Licenciado Pedro David Gómez Escobedo, cuenta con cédula profesional de Licenciado en Derecho número 5048981 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha quince de febrero de dos mil siete, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la documentación adjunta del abogado propuesto, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que el Licenciado Pedro David Gómez Escobedo, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesto.

### **LICENCIADA NORMA ANGÉLICA RAMÍREZ MEDELLÍN.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento de la profesionista propuesta, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadana mexicana, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

La profesionista propuesta acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del artículo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la constancia de antecedentes no penales expedida por la Dirección del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, Subdirección de la Unidad Jurídica del Fuero Común, de la Secretaría de Seguridad Pública, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que la Licenciada Norma Angélica Ramírez Medellín, cuenta con cédula profesional de abogado número 1487258 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha once de septiembre de mil novecientos noventa, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto; y con estudios de diplomados en amparo. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula de la abogada propuesta, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que la Licenciada Norma Angélica Ramírez Medellín, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesta.

### **LICENCIADA GINA MARIBEL ROCHA PEÑUELAS.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento de la profesionista propuesta, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadana mexicana, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

La profesionista propuesta acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la constancia de antecedentes no penales expedida por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Subdirección de la Unidad Jurídica del Fuero Común, de la Secretaría de Seguridad Pública, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que la Licenciada Gina Maribel Rocha Peñuelas, cuenta con cédula profesional de abogado número 3831722 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto; y con estudios de diplomados en amparo. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula de la abogada propuesta, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo, desempeñándose actualmente como representante laboral.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que la Licenciada Gina Maribel Rocha Peñuelas, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesta.

### **LICENCIADA MARÍA OLVIDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.**

Los requisitos que establece la fracción I del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, se acreditan con el acta de nacimiento de la profesionista propuesta, en la que consta que nació en San Luis Potosí, S. L. P., por lo que es ciudadana mexicana, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que es mayor de veinticinco años, conforme lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Ley de los Trabajadores del Estado.

La profesionista propuesta acredita estar en pleno uso de sus derechos políticos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.

El requisito establecido en la fracción III del arábigo 105 de la referida Ley de los Trabajadores del Estado, se colma con la constancia de antecedentes no penales expedida por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Subdirección de la Unidad Jurídica del Fuero Común, de la Secretaría de Seguridad Pública, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

Se satisfacen los extremos que estipula la fracción IV del numeral 105 de la legislación laboral del Estado, ya que la Licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez, cuenta con cédula profesional de abogado número 1966560 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que cubre con amplitud el término de cinco años señalado en el párrafo último del citado precepto; y con estudios de diplomados en amparo. En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en la currícula de la abogada propuesta, las actividades profesionales en las que se ha desempeñado durante ese periodo, desempeñándose actualmente como directora general del trabajo, de la Secretaría del Trabajo en el Estado.

Asimismo, del análisis respectivo, se desprende que la Licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez, además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el que es propuesta.

Por lo expuesto, conforme lo establecido en los artículos, 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, los integrantes de las comisiones de, Gobernación; y Justicia, elevan a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente

## **D I C T A M E N**

**ÚNICO.** Es de designarse y se designa al (la) Licenciado(a) \_\_\_\_\_ para ocupar el cargo de Presidente(a) del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí.

## **PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Con fundamento en lo que dispone la parte relativa de los artículos, 57 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 15 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; así 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, el Honorable Congreso del Estado designa al (la) Licenciado(a) \_\_\_\_\_, como Presidente(a) del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el período del nueve de marzo del dos mil dieciocho, al ocho de marzo de del dos mil veintiuno.

## **T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** Este Decreto estará en vigor del nueve de marzo de dos mil dieciocho al ocho de marzo de dos mil veintiuno, y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".



**SEGUNDO.** Notifíquese al (a la) señor(a) Licenciado(a) \_\_\_\_\_, sobre la designación hecha a su favor, para presidir el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y cítesele al Recinto Oficial del Poder Legislativo Local, a fin de que se le tome la protesta de ley ante el Pleno, conforme lo mandata el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

**TERCERO.** Se abroga el Decreto Legislativo No. 792 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintisiete de septiembre del dos mil catorce.

**CUARTO.** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**DADO EN LA SALA DE REUNIONES PREVIAS, DEL EDIFICIO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, AL DÍA UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**



"2018, Año de Manuel José Othón"

**POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

NOMBRE	FIRMA	SENTIDO DEL VOTO
DIP. MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA PRESIDENTE		A FAVOR
DIP. OSCAR CARLOS VERA FABREGAT VICEPRESIDENTE		
DIP. ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS SECRETARIA		A FAVOR
DIP. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ VOCAL		A favor
DIP. XITLÁLIC SÁNCHEZ SERVÍN VOCAL		
DIP. JESÚS CARDONA MIRELES VOCAL		A FAVOR
DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS VOCAL		A FAVOR

*Dictamen por el que se emite lista de profesionistas propuestos (as) para que de entre ellos (as) se elija a quien presidirá el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, periodo 2018-2021*



"2018, Año de Manuel José Othón"

FOR LA COMISIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE

DIP. XITLÁLIC SÁNCHEZ SERVÍN  
PRESIDENTA

FIRMA

SENTIDO DEL VOTO

A favor

DIP. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ  
VICEPRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DIP. FERNANDO CHÁVEZ MÉNDEZ  
SECRETARIO

A favor

DIP. CECILIA DE LOS ÁNGELES  
GONZÁLEZ GORDOA  
VOCAL

A favor

DIP. JOSÉ RICARDO GARCÍA MELO  
VOCAL

A favor

Dictamen por el que se emite lista de profesionistas propuestos(as) para que de entre ellos(as) se elija a quien presidirá el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, periodo 2018-2021

# Dictamen con Proyecto de, Decreto; y Resolución

## **C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E S.**

- 1.** A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 4 de mayo del 2016, iniciativa que propone reformar la fracción VI del artículo 67, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Oscar Bautista Villegas, con el número de turno 1729.
- 2.** De igual manera a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y entonces de Derechos Humanos, Equidad y Género, les fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo del 2016, Iniciativa que insta reformar el artículo 74 en su párrafo primero, y adicionar al artículo 75 la fracción IV Bis, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Rubén Magdaleno Contreras, con el número de turno 1764.
- 3.** Asimismo, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue turnada en Sesión de la Diputación Permanente, de fecha 1 de septiembre del 2016, iniciativa, que requiere reformar los artículos, 7º en su párrafo segundo, y 22 en su fracción XXXVI, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legisladora María Graciela Gaitán Díaz, con el número de turno 2332.
- 4.** De igual forma, a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ecología y Medio Ambiente, les fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre del 2016, iniciativa que propone reformar el artículo 67, en sus fracciones, II, y VI, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Gerardo Serrano Gaviño, con el número de turno 2469.
- 5.** A su vez, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre del 2016, Iniciativa que insta reformar, los artículos, 22 en su fracción X, y 40 en su párrafo segundo, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legisladora Guillermina Morquecho Pazzi, con el número de turno 2664.
- 6.** De igual forma, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre del 2016, Iniciativa que insta reformar, los artículos, 22 en su fracción VI, 47, y 91 Ter en su fracción I; y adicionar al artículo 49 párrafo segundo, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legisladora María Graciela Gaitán Díaz, con el número de turno 2687.
- 7.** En Sesión Ordinaria, de fecha 3 de noviembre del 2016, le fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Iniciativa que pretende reformar el artículo 95 en sus fracciones XVIII, y XIX; y adicionar al mismo artículo 95 la fracción XX, de la Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Oscar Bautista Villegas, con el número de turno 2729.
- 8.** Fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre del 2016, iniciativa, que plantea reformar los artículos, 22 en sus fracciones, XL,

y XLI, y 95 en sus fracciones, XVIII, Y XIX; y adicionar a los artículos, 22 la fracción XLII y 95 fracción XX de la Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador José Luis Romero Calzada, con el número de turno 2913.

**9.** De igual manera a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Ecología y Medio Ambiente en Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero del 2017, les fue turnada iniciativa, que insta reformar el artículo 67 en sus fracciones, I, y II, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Jesús Cardona Mireles, con el número de turno 3545.

**10.** Así mismo, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue turnada en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de febrero del 2017, la iniciativa que plantea reformar el artículo 75 en sus fracciones, XV, y XVI; y adicionar a los artículos, 30 un párrafo, éste como tercero, por lo que los actuales tercero a octavo pasan a ser párrafos cuarto a noveno, y 75 la fracción XVII, de y a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el Diputado José Luis Romero Calzada, con el número de turno 3538.

**11.** A las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y entonces de Derechos Humanos, Equidad y Género; en Sesión Ordinaria de fecha 2 de marzo del 2017, les fue turnada la iniciativa, que busca reformar el artículo 9º en sus fracciones, XIX, y XX; y adicionar al mismo artículo 9º las fracciones, XXI, y XXII, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador José Luis Romero Calzada, con el número de turno 3603.

**12.** A las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y entonces de Derechos Humanos, Equidad y Género, les fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo del 2017, Iniciativa que insta adicionar párrafo al artículo 4º este como segundo, por lo que actual segundo pasa a ser párrafo tercero, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por la legisladora María Graciela Gaitán Díaz, con el número de turno 3723.

**13.** A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y la entonces Derechos Humanos, Equidad y Género; y Asuntos Migratorios, les fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo del 2017, Iniciativa, que requiere reformar los artículos, 4º en su párrafo primero, 22 en sus fracciones, IX , XL, y XLI, 74 en su párrafo segundo, 75 en su fracción IV, y 85; y adicionar a los artículos 22 la fracción XLII, y 84 los párrafos, segundo y tercero, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Héctor Mendizábal Pérez, con el número de turno 3876.

**14.** En sesión ordinaria de fecha 10 de abril de 2017, les fue turnado a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y tecnología; y entonces de Derechos Humanos, Equidad y Género. Iniciativa que plantea reformar el párrafo segundo del artículo 41, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentado por el legislador Oscar Bautista Villegas, con el número de turno 3964.

**15.** Así mismo, en sesión ordinaria de fecha 6 de abril de 2017, le fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, iniciativa que plantea reformar la fracción I del artículo, 96, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador José Luis Romero Calzada, con el número de turno 3908.

**16.** Les fue turnada a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y entonces de Derechos Humanos, Equidad y Género; en Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo del 2017, iniciativa que plantea adicionar párrafo cuarto al artículo 7º de la Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por el legislador Sergio Enrique Desfassix Cabello, con el número de turno 4188.

**17.** Así mismo, le fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre del 2017, iniciativa, que impulsa reformar el artículo 9º en sus fracciones, XIX, y XX; y adicionar al mismo artículo 9º la fracción XXI, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, presentada por la legisladora María Rebeca Terán Guevara, con el número de turno 5179

**18.** De igual manera a las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Ecología y Medio Ambiente; con copia al Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, en Sesión Ordinaria de fecha 8 de junio del 2017, les fue turnada la iniciativa, que busca reformar el artículo 9º en sus fracciones, XIX, y XX; y adicionar al mismo artículo 9º las fracciones, XXI, y XXII, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí presentada por el legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, con el número de turno 4370.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis de las referidas iniciativas, los integrantes de las dictaminadoras hemos llegado a los siguientes

### **CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** Que las Iniciativas precitadas se encuentran acorde a lo dispuesto en los artículos, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y correspondiente dictamen.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 fracciones X, V, IX, y III, 108, 103, 107, y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, estas comisiones son competentes para dictaminar las iniciativas expuestas.

**TERCERO.** Que las comisiones que dictaminan realizaron un estudio de las iniciativas propuestas por los legisladores y de los cuales se desprende que desde el punto de vista legislativo y jurídico, se considera, realizar un solo dictamen ya que las iniciativas planteadas corresponden a las disposiciones sobre una sola materia en un sólo cuerpo legal, que favorece con claridad y accesibilidad de la legislación del Estado de San Luis Potosí, criterio que no puede sino abonar a un mejor entendimiento y aplicación de la ley.

Bajo esas condiciones, el ordenamiento que se reforma a través de este dictamen, es responder y enriquecer la norma en la materia de educación con las aportaciones citadas.

**CUARTO.** La primera iniciativa citada en el proemio de este dictamen.

### **“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física para los niños y jóvenes de entre 5 a 17 años, es de cuando menos 60 minutos diarios, lo cual les brinda beneficio de salud, desarrollo mental y habilidades.

“Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda que:

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.

La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.

La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet\\_young\\_people/es/](http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/)

Resulta evidente que la actividad física en este grupo de edad es necesaria para un adecuado desarrollo, aunado también a que se evita el surgimiento de enfermedades vinculadas al sedentarismo tales como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, problemas de presión arterial, afectaciones psicológicas, entre otras.

Asimismo la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial y la obesidad representa el 5% mortalidad mundial<sup>2</sup>, situación que no puede dejarse pasar, y resulta evidente que como legisladores tenemos que comprometernos con nuestro niños, niñas y adolescentes, pues la promoción del deporte en centros educativos abona a que se cuente con mejores esquemas de salud y puedan además desarrollar actividades de manera recreativa, e incluso se fomente la práctica de algún deporte de manera profesional o amateur.

Por ello debemos realizar modificaciones en torno la promoción de cultura del deporte en los centros educativos pues con ello estaremos abundando a que nuestros niños y adolescentes sean más sanos y evitaremos el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, entre otras, lo cual lacera de manera grave la salud de nuestro baluarte social más importante."

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p style="text-align: center;"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 67.-</b> Las autoridades educativas estatal y municipal en el ámbito de su competencia realizarán acciones para:</p> <p><b>I-V ...</b></p> <p><b>VI.</b> Fomentar la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, en un mínimo de treinta minutos diarios.</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 67.-</b> Las autoridades educativas estatal y municipal en el ámbito de su competencia realizarán acciones para:</p> <p><b>I-V ...</b></p> <p><b>VI. Fomentar la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, en un mínimo de sesenta minutos diarios.</b></p> <p>...</p>

El proponente de la iniciativa plantea en la reforma, fomentar la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, aumentando, de treinta minutos diarios a un mínimo de sesenta.

Las dictaminadoras, declaran improcedente la iniciativa, tomando en cuenta el acuerdo dictado el 8 de marzo del 2008, por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas que aprobaron en la 12a.5 reunión del Consejo, en la cual, se estableció: **"...Las autoridades educativas estatales incentiven la operación del Programa Nacional de activación Física con sus correspondientes rutinas, como parte de la jornada escolar, teniendo como ideal la práctica de treinta minutos de activación física diaria (en dos sesiones de 15 minutos)..."**

Es por ello que, acorde con lo expuesto con anterioridad, consideramos que la iniciativa resulta improcedente. Aunado a que la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, ya considera los

<sup>2</sup> Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Organización Mundial de la Salud. 2010. Disponible en: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977\\_spa.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf)

horarios de treinta minutos diarios para las actividades físicas en todos los centros educativos del Estado, por lo que, dicha disposición, es congruente en lo determinado por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Activación Física Escolar. Máxime que existe un acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la Reunión 12a.5, que marca los parámetros para que las autoridades educativas estatales, implementen las rutinas como parte de la jornada escolar, teniendo como ideal la práctica de treinta minutos de activación física diaria en dos sesiones de quince minutos, por lo que, para armonizar dicho precepto, debe mantenerse en los términos que se encuentra nuestra legislación.

**QUINTO. En cuanto a la segunda Iniciativa en el proemio de este dictamen.**

#### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

Se estima que a nivel mundial, 93 millones de menores o 1 de cada 20 entre los que tienen hasta 14 años, viven con una discapacidad moderada o severa. En la mayoría de países con ingresos bajos y medios, los niños con discapacidades tienen más probabilidades de no escolarizarse que cualquier otro grupo de infantes. Las tasas de primera inscripción escolar de menores con discapacidades son muy bajas. Incluso cuando asisten a la escuela, los niños que sufren discapacidades son más susceptibles de abandonar y finalizar su escolarización prematuramente.

Tener una discapacidad puede reducir en más del doble las opciones de escolarización de un menor, si se compara con los que no la tienen. No es sorprendente que en muchos países la niñez con discapacidades constituyan la gran mayoría de los que no asisten a la escuela. Es una realidad que, para los niños discapacitados que consiguen ingresar en las aulas, la calidad y la forma de escolarización que reciben, puede agravar en extremo su exclusión de la sociedad dominante y confirmar nociones sociales preexistentes acerca de la discapacidad que sufren.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, resolver esta grave discriminación es un asunto urgente. En primer lugar, porque el negar el derecho a la educación es robar los futuros beneficios que conlleva la educación y la oportunidad de acceder a otros derechos a los menores. De igual forma restringe la plena participación social, exacerba la exclusión, y limita la posibilidad de que una persona escape de la pobreza, al no tener oportunidades de empleo por haber concluido su instrucción escolar.

Es común que, la exclusión de las aulas señale el principio de una vida de sustracción en todos los ámbitos sociales. Ésta y otras barreras con las que tropiezan las personas discapacitadas identifican a los que normalmente están entre los más pobres de los pobres. La falta de interés en educar a los niños discapacitados también afecta las posibilidades de hacer realidad la promesa internacional de conseguir la educación primaria universal, el objetivo acordado mundialmente y sellado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Educación Para Todos.

Es por ello que Nueva Alianza promueve la creación de sistemas de educación inclusiva, la cual pondrá en alto la calidad de los sistemas educativos en San Luis Potosí, adaptando los centros educativos con infraestructura necesaria para que los menores con discapacidad, puedan desarrollarse de la manera que lo hace cualquier menor que ingresa a la escuela, propiciando la integración y la convivencia, logrando desarrollar su propia identidad y descubriendo todo aquello que les rodea y que les permite crecer como personas.

Desde nuestra perspectiva como educadores estamos convencidos que integrar a un menor con discapacidad en una escuela pública es beneficioso para él, pero es más



para todos sus compañeros, ya que hace crecer en ellos valores de compañerismo y solidaridad, muy necesarios en nuestra sociedad, de aceptación, de comprensión, pero sobre todo de reconocimiento.

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 74.</b> Las autoridades educativas de la Entidad establecerán condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, de calidad de cada individuo, mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.</p> <p>...</p>	<p><b>ARTÍCULO 74.</b> Las autoridades educativas de la Entidad establecerán condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad, de cada individuo, mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, <b>adaptando escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos.</b></p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-IV ...</p> <p><b>IV BIS.</b> Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;</p>	<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-IV ...</p> <p><b>IV BIS.</b> Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, <b>estableciendo de forma progresiva y de conformidad con sus respectivos presupuestos, la existencia de escuelas y aulas accesibles para el desarrollo libre de dichas personas;</b></p>

Con esta iniciativa pretendemos que existan escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos, quitar de una vez por todas las barreras asociadas a las escuelas y las aulas normales que afectan las posibilidades de los niños discapacitados de obtener una educación incluyente por la falta de instalaciones apropiadas. Ello en virtud de que las infraestructuras inaccesibles también constituyen barreras físicas. Mejoremos la calidad de vida de las niñas y los niños con discapacidad e integrémoslos a la vida escolar."

El proponente establece en su exposición de motivos que **existan escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos, quitar de una vez por todas las barreras asociadas a las escuelas y las aulas normales que afectan las posibilidades de los niños discapacitados de obtener una educación incluyente por la falta de instalaciones apropiadas. Ello en virtud de que las infraestructuras inaccesibles también constituyen barreras físicas. Mejoremos la calidad de vida de las niñas y los niños con discapacidad e integrémoslos a la vida escolar.**

Por lo anterior, se considera que la propuesta viene a fortalecer los derechos de las personas con capacidades diferentes que logran ingresar a las aulas, en este sentido, los centros educativos deben contar con la infraestructura necesaria que haga realidad la promesa internacional de conseguir la educación primaria universal, el objetivo acordado mundialmente y sellado en los objetivos de

desarrollo del milenio y de la educación para todos, acorde con lo establecido por el artículo 1º del Pacto Federal, que señala que los mexicanos gozaran de los derechos humanos establecido en la Constitución y en los Tratados Internacional en los que el Estado Mexicano es parte.

Es por ello que, las dictaminadoras consideramos procedente, con modificaciones en el artículo 75, fracción IV bis, la iniciativa citada en el proemio de este dictamen.

**SEXO. Asimismo, en la tercera iniciativa, en el proemio de este dictamen.**

### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expide sus disposiciones en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y demás ordenamientos en la materia. Hablando de una característica en específico y tomando como fundamento esto, podemos deducir que en San Luis Potosí, la educación en el nivel básico, en teoría, es **gratuita**.

Sobre el particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es Estado Parte, expresa lo siguiente en el artículo 28:

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular.

a) Implementar la enseñanza primaria obligatoria para todos;...”

México va más allá, y el 11 de septiembre del 2013, el Poder Legislativo Federal modifico la Ley General de Educación en su numeral 6º a fin de **evitar que cuotas voluntarias o cualquier tipo de pago sea una condicionante para que el alumno acceda a recibir educación básica**, aspecto que fue adoptado en la ley de Educación de San Luis Potosí en enero del 2014. No obstante la gran mayoría de las escuelas en México y particularmente en San Luis Potosí carecen, de cierta forma, del calificativo de gratuidad por varias razones. Como legisladora he confirmado que, en algunas instituciones de educación públicas del Estado aun a sabiendas la existencia de las disposiciones que enuncié, las autoridades educativas condicionan o supeditan el ingreso al ciclo escolar e incluso la entrega de documentos que certifican la culminación de grado, por no cubrir el costo de inscripción que establecen año con año.

Cada inicio de ciclo el pago de inscripciones es un aspecto que preocupa a los padres, dada la situación económica que viven muchas familias en nuestro Estado. Como profesora estoy consciente que las cuotas- voluntarias. Se ocupan para mejoras al interior de la escuela y que, si bien es cierto, **el recurso empleado de la forma adecuada** es de beneficio para los educandos, existen instituciones públicas de nivel básico donde dichos montos son excesivamente altos y realmente sujetan a los papas al pago obligatorio, pasando por encima de la legislación vigente.

Debemos como legisladores, trabajar en conjunto para dotar a la máxima autoridad educativa de las herramientas que le permitan garantizar una educación verdaderamente gratuita en ese sentido y así, evitar perjudicar la economía de las padres de familia; por ello, propongo que la Secretaria de Educación del estado tenga la facultad de que, además de establecer los mecanismos para regular el destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias, aspecto ya dispuesto en el articulado de la ley, en caso de inscripción pueda supervisar y observar aquellos montos que considere excesivos y recomendar la disminución del mismo.

Cabe destacar que esta propuesta no vulnera el principio de la autonomía en la gestión educativa, mismo que permite a las escuelas públicas la libre toma de las decisiones al

interior; por el contrario, pretendo precisamente se respeten los principios de la educación en México emanadas de la Constitución Política Federal, y la Ley General de Educación.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 7º.-</b> Los servicios educativos que el Gobierno del Estado imparta serán gratuitos. Las aportaciones y donaciones destinadas a dicha acción en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 7º.-</b> Los servicios educativos que el Gobierno del Estado imparta serán gratuitos. Las aportaciones y donaciones destinadas a dicha acción en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.</p> <p><b>En cuanto a la cuota de inscripción que fije la autoridad escolar en el nivel básico, la Secretaria, por iniciativa o derivado de quejas recibidas por parte de padres de familia revisará aquellas que considere excesivas, pudiendo además recomendar la disminución de la misma.</b></p> <p>...</p> <p>....</p>
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes: <b>I-XXXV.-</b> ... <b>XXXVI.</b> Establecer los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias;</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes: <b>I-XXXV.-</b> ... <b>XXXVI.</b> Establecer los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias; <b>en el caso de la establecida por inscripción revisará y, en su caso, observara aquellas que considere excesivas, pudiendo además recomendar la disminución de la misma;</b></p> <p>...</p>

La proponente establece en su exposición de motivos, **“La Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expide sus disposiciones en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos en la materia. Departiendo de una característica en específico y tomando como fundamento esto, podemos deducir que en San Luis Potosí, la educación en el nivel básico, en teoría, es gratuita.**

La postulante pretende que quede establecido en los dispositivos 7º en su segundo párrafo; y 22 en su fracción XXXVI de la ley en cita:

Nuestro artículo 3º en fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que, toda la educación que el Estado imparta, será gratuita; asimismo, el Tratado Internacional relativo al **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**, del que México es parte, en su artículo 13, punto 2, establece que la educación que imparta el Estado es obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Por lo que si bien es cierto que, la Ley de Educación del Estado, refiere a que las asociaciones de padres de familia podrán reunir fondo para los fines de mejoramiento en la infraestructura escolar y que la falta de pago de aportaciones voluntarias, no

podrán condicionar ningunos de los derechos de los educandos; lo que se traduce en que a las autoridades educativas están vedadas a intervenir en todo lo relacionado con las cuotas voluntarias o donaciones que reciben la asociación de padres de familia, ya que como la misma ley lo establece es voluntaria; además, de que ha habido ya manifestaciones por parte de organismos u autoridades en materia de derechos humanos, ejemplo de ello es, la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en la cual señala que:

**“CUOTAS ESCOLARES EN ESCUELAS PÚBLICAS. ES INDEBIDO LA EXIGENCIA DE SU COBRO COMO CONDICIONANTE DE INGRESO O PEMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.**

Quien esto resuelve estima pertinente asentar que si partimos de la premisa de que la educación (pública) es de orden público, es inconcuso entonces que no se puede condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, esto es, resulta irregular que en algunas escuelas públicas se exija una cuota eufemísticamente denominada “voluntaria” o una aportación, tan es así que el artículo 3º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que señala en lo conducente: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado-federación, estados, Distrito federal y los municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria: IV.- Toda educación que el Estado imparta será gratuita”; sin embargo, y a pesar de que así se establece por mandato expreso de la Ley fundamental, este Organismo es sabedor de que en algunas escuelas públicas se exige por parte del personal administrativo o docente “cuotas voluntarias” y, en este sentido, no existe motivo alguno para que autoridades, directivos, personal docente o administrativo de escuelas públicas, dejen sin el servicio educativo a niñas y niños, con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia. Es decir, la conducta antes descrita se trata de un aspecto que ha sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no conforme con afectar su peculio, también son condicionados o amenazados con no entregarles las boletas de calificaciones de sus hijos o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar; de manera tal que -ante esa coerción-, no les queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, amén que en muchos de los casos no existe la debida claridad sobre el destino de los recursos recaudados por las sociedades de padres de familia. Ahora bien, aun cuando se pudiese argumentar que el criterio por el cual se establecen la cuotas constituye la necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar la precaria condición que en muchos de los casos existen en algunas de las instalaciones educativas, también lo es que tal función le corresponde –en forma primigenia- al Estado y, en este contexto, es dable exigir a las autoridades escolares para que en apego al mandato constitucional actúen con energía para erradicar la indebida costumbre de condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de familia, a cambio de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción de estudiantes en el siguiente grado. Asimismo, es oportuno recalcar que si los padres de familia desean coadyuvar en el proceso educativo de sus hijos, es menester precisar que tal colaboración debe ser siempre de forma voluntaria y nunca estará condicionada a la prestación de los servicios de educación que brinde el Estado, esto es, la educación constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento nacional, y un derecho constitucional que requiere del esfuerzo de las autoridades de todos los órdenes de gobierno; luego entonces, las acciones deben orientarse a mejorar los niveles de instrucción, poniendo énfasis no sólo en la cobertura y la ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad de los mismos, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regiones y, en tal virtud, se fortalecerán los principios de equidad y gratuidad de la educación pública. Por tanto, esta Procuraduría estima conveniente emitir una respetuosa Recomendación al Secretario de Educación del Estado, a fin de que gire instrucciones por escrito a quien corresponda para que se implementen todos aquellos mecanismos y acciones tendientes evitar situaciones como las aquí acontecidas (cobro de cuotas eufemísticamente llamadas “voluntarias”) y, con ello, se enaltezca aún más la loable e insigne función del personal docente y magisterial guanajuatense.

**EXPEDIENTE DE QUEJA 345/06-S”**

Por lo anterior, se considera que la propuesta aquí analizada resulta procedente, con modificaciones, de conformidad con lo que prevé la Carta Magna y el Tratado Internacional **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**, en el sentido de que, ambas son reiterativas en el sentido de que, la educación que el Estado imparta, será gratuita; además, se precisa, que las autoridades deberán intervenir en el caso que se violente la gratuidad de la educación, condicionando la entrega de documentos o de acceso a algún derecho de los educandos, en los términos del artículo 3 de nuestra Constitución Federal respecto a que la educación que imparte el Estado será gratuita.

Sin embargo, a fin de mantener una coherencia normativa en la Ley de Educación del Estado, se propone modificar el artículo 7 en su primer párrafo para incluir la figura de “cuotas voluntarias”, de esta forma, se evitan lagunas jurídicas que permitan el cobro indebido de dichas contraprestaciones. Además, bajo el mismo criterio de técnica legislativa se propone complementar las atribuciones de la autoridad educativa estatal, agregando a la regulación de las donaciones o cuotas voluntarias, la acción de revisar y en su caso, recomendar la disminución de las mismas, de conformidad con el artículo 22 fracción XXXVI de la citada Ley de Educación.

Por lo anterior, las dictaminadoras consideramos procedente, con modificaciones, la presente iniciativa.

**SÉPTIMO. De igual forma, en la cuarta iniciativa, en el proemio de este dictamen.**

**“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La presente iniciativa, tiene como objeto, realizar dos modificaciones y adiciones importantes en ésta Ley, la primera de ellas, buscando como fin primordial, el respeto a los animales y, la otra, promover eficientemente la activación física en los planteles educativos del Estado.

Recientemente han sucedido eventos desafortunados que han mostrado una necesidad de crear conciencia en el ser humano, sobre el respeto y cuidados que debemos dar a los animales, éstos seres vivos que en algunas ocasiones se logran ganar nuestro afecto y que se consideran parte ya fundamental en la convivencia y desarrollo de nuestras familias, estos compañeros leales, en algunos casos han sido abandonados, maltratados, mal cuidados, siendo esto lo que motive esta iniciativa.

Cada ser vivo que habita en la naturaleza, tiene una función y una misión especial, su estancia en éste lugar tiene un significado necesario para armonizar el ciclo de vida de nuestro medio ambiente.

Entonces, nuestra labor como seres racionales consientes de cada fin de cada uno de los seres vivos que habita nuestro planeta, es primordialmente salvaguardar sus derechos, respetando en primer término; su vida, su desarrollo y convivencia con nosotros. Consideramos que éstos objetivos pueden lograrse a través de la promoción de esquemas y acciones dentro de los programas educativos que establece esta legislación, por ello, proponemos que el tema sobre el respeto y el trato compasivo a los animales debe darse a conocer a través de esas herramientas y con ello, evitar su maltrato.

Sabemos de antemano que este objetivo no se contrapone en ningún sentido con el ciclo natural de la cadena alimenticia, sino por el contrario, la disposición aquí señalada tendrá como resultado, la conciencia y valorización del fin que cada ser vivo tiene en nuestro medio ambiente para armonizarlo, de ahí que se reitera la necesidad de este tipo de acciones y programas educativos que aquí se impulsan.

Ahora bien, la siguiente iniciativa persigue impulsar el desarrollo educativo de activación física, con ello se pretende estimular los hábitos del deporte, pero no nada más como parte de la vida diaria, sino que también, descubrir los talentos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

Hace poco se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde vimos cómo los países invierten cada vez más en este tipo de prácticas que sin duda mejoran el desarrollo de la salud, de la cultura y por supuesto ello se ve reflejado también en la convivencia humana.

Por ello creemos necesario que como la Ley contempla actualmente que las actividades físicas deben ser cuando menos de treinta minutos, consideramos que la letra de la presente Ley, sea más impositiva y no limitarnos a que establezca un fomento a la práctica, sino que sea una actividad ejercida y llevada a cabo, pero no solo por treinta minutos sino por una hora, la cual bien puede desarrollarse al término de la actividad académica.

Ello implicará un sano desarrollo en la salud, el deporte, la cultura y la sana convivencia, puesto que elevar la calidad del deporte, va inmerso un desarrollo como, Comunidad, Pueblo, Ciudad, como Estado y como Nación.

Nuestros niños, niñas y jóvenes, son talentosos en distintas disciplinas, en ellos hay creatividad, hay mucha energía, que debe encaminarse a que la misma crezca y los lleve a desarrollarse sanamente, logrando sus objetivos en un futuro, desarrollándose como persona, como niño y joven ahora, pero después como un ciudadano que aporte todo lo bueno que posee a su país."

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 67.-</b> Las autoridades educativas estatal y municipal en el ámbito de su competencia realizarán acciones para:</p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Estimular la promoción de esquemas y acciones en los programas educativos, con el objetivo de fomentar la cultura ecológica en todos los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en nuestra niñez y juventud; haciendo obligatoria la siembra de árboles y el cuidado de los mismos, a fin de lograr la preservación del medio ambiente;</p> <p>III-V...</p> <p>VI. Fomentar la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, en un mínimo de treinta minutos diarios.</p>	<p><b>ARTICULO 67...</b></p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Estimular la promoción de esquemas y acciones en los programas educativos, con el objetivo de fomentar la cultura ecológica en todos los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en nuestra niñez y juventud; haciendo obligatoria la siembra de árboles y el cuidado de los mismos, <b>así como la difusión del respeto y el trato compasivo que se debe prodigar a los animales y evitar su maltrato. Procurando siempre el cuidado de los mismos, a fin de lograr la preservación del medio ambiente;</b></p> <p>III-V...</p> <p><b>VI. Llevar a cabo de manera obligatoria la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, en un mínimo de sesenta minutos diarios, poniendo en práctica deportes como; atletismo, basquetbol, futbol, béisbol, entre otras. Las autoridades estatales y municipales llevarán a cabo las acciones necesarias para la implementación de espacios acordes para la práctica de éstas actividades.</b></p>

Por lo que respecta a la fracción II del artículo 67, que se propone, la Ley Estatal de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí, en su numeral 6º cita: "La protección a los animales deberá lograrse mediante programas educativos, impartidos desde los primeros tipos y modalidades contemplados en la Ley Estatal de Educación y por medio de cualquier medida preventiva que establezcan las autoridades competentes." Por lo que la intención del proponente que si bien es loable, la misma que se encuentra regulada en el ordenamiento específico de la materia relativa al cuidado de los animales en nuestro Estado. Y por lo que toca a la reforma a la fracción VI, del artículo 67, en obvio de repeticiones, se reitera lo dicho en el Considerando Cuarto de este dictamen, ya que se trata del mismo tema.

**OCTAVO. Así mismo, en la quinta Iniciativa en el proemio de este dictamen.**

**“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La actividad no escolarizada de los alumnos de un centro de educación superior, y que consistente en la prestación de sus servicios a la comunidad en algún asunto relacionado con el programa educativo que cursan, se le denomina servicio social. Se trata de una actividad creada bajo un espíritu meritorio, que busca primordialmente beneficiar a la sociedad contribuyendo, de alguna forma, a un mejor desarrollo, tanto de quienes lo prestan, como de quienes se benefician de él y del Estado en su conjunto.

Esta actividad social, es desempeñada principalmente por el estudiante de nivel superior, con base en los conocimientos adquiridos, y el fin adquirir una conducta de responsabilidad y conciencia social. Entre los objetivos del servicio social se encuentran; concientizar a los alumnos con las necesidades del país; extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad; consolidar la formación académica y capacitación profesional de los alumnos, y fomentar, en quien lo presta, una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece.

Los estudiantes de educación superior, a través del servicio social, tienen la oportunidad de retribuirle a la sociedad la oportunidad que ésta les otorga de formar parte de un sector privilegiado de la población con acceso a una educación a nivel licenciatura, ingeniería o técnica. Esta estrategia de educación, incide en el desarrollo social en regiones altamente marginadas y, en la formación personal y académica del estudiante.

En ese tenor, resulta indispensable que el servicio social sea una herramienta de apoyo para nuestra entidad, y que contribuya a llevar la educación a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, que regularmente son aquellos sectores con mayores rezagos, que se encuentran en condiciones de desventaja. En ese sentido, propongo que se cree este mecanismo de promoción del servicio social, para atender las necesidades de los grupos antes referidos, ya que actualmente uno de los principales retos que enfrenta San Luis Potosí es la desigualdad educativa de su población.

Por lo anterior, propongo la modificación del artículo 22 de la Ley de Educación, en su fracción X, y así las autoridades educativas puedan llevar a cabo acciones y establecer convenios con instituciones de educación superior, para que no solo sus egresados sino también sus estudiantes, del total de horas establecidas para prestar el servicio social, se destine un porcentaje de hasta un cincuenta por ciento a realizar actividades tendientes a disminuir el rezago educativo en escuelas de las comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y regiones habitadas por las comunidades indígenas de nuestro estado.

De igual forma, propongo la modificación al segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Educación, para que en el caso de la educación para los adultos, quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación, se les reconozca el derecho de acreditarlo como servicio social, ya sea con el total de horas o bien se les reconozca hasta en un 50%.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.</b>	<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.</b>
--	--

TEXTO VIGENTE	PROPUESTAS
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes: I-VIII.- ... <b>X.</b> Concertar acciones y establecer convenios con instituciones de educación superior, para que sus egresados presten servicio social en escuelas de las comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y regiones habitadas por las comunidades indígenas de la Entidad; ...</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes: I-VIII.- ... <b>X.</b> Concertar acciones y establecer convenios con instituciones de educación superior, <b>donde sus egresados y sus estudiantes podrán, del total de horas establecidas para prestar el servicio social, destinar un porcentaje de hasta un cincuenta por ciento a realizar actividades tendientes a disminuir el rezago educativo</b> en escuelas de las comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y regiones habitadas por las comunidades indígenas de la Entidad; ...</p>
<p><b>ARTICULO 40.</b> La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más, que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.</p> <p>Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación, tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.</p> <p>La Autoridad Educativa Estatal organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos, y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.</p>	<p><b>ARTICULO 40.</b> La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más, que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.</p> <p>Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación, <b>tendrán derecho a que se les acredite como servicio social, ya sea por el total de horas realizadas o hasta en un 50%.</b></p> <p>...</p>

Del análisis de la presente iniciativa, se desprende que la finalidad es coadyuvar con las comunidades o regiones altamente marginadas, y apoyar la educación para adultos; en ese tenor, resulta indispensable que el servicio social sea una herramienta de apoyo para nuestra entidad, y que contribuya a llevar la educación a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, que regularmente son aquellos sectores con mayores rezagos, que se encuentran en condiciones de desventaja. La iniciativa tiene como propósito crear un mecanismo de promoción del servicio social para aquellos estudiantes o profesionistas que deseen entrar a estos programas, para atender las necesidades de los grupos antes referidos, ya que actualmente uno de los principales retos que enfrenta San Luis Potosí es la desigualdad educativa de su población. En ese sentido, aquellos estudiantes o profesionistas que voluntariamente decidan participar en estos planes, se les podrá tomar en cuenta hasta un cincuenta por ciento del total de horas que le corresponde en los términos de las disposiciones generales que apliquen a la misma.



Por lo anterior, las dictaminadoras consideramos procedente con modificaciones, la presente iniciativa.

**NOVENO.** De igual forma, en la sexta Iniciativa, en el proemio de este dictamen.

**“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Uno de los ejes centrales de la Reforma Educativa, es resaltar y fortalecer el principio de la autonomía de gestión al interior de los planteles educativos. Con las recientes modificaciones a la Ley General de Educación en materia de calendario escolar, se propician condiciones para que alumnos, profesores y padres de familia se involucren, con la injerencia que debe tener la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en la decisión sobre los ajustes a su propio calendario escolar, siempre y cuando se respeten los planes y programas de estudio, y los días efectivos que deben cubrirse.

En cumplimiento de dichas modificaciones, la Secretaría de Educación Pública emitió dos acuerdos; ambos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 05 de junio de 2016, que expide los lineamientos específicos para que las autoridades educativas locales y escolares implementen el calendario escolar de 185 días; y el segundo, de fecha 06 de junio de 2016, que expide los lineamientos específicos para que las autoridades escolares soliciten autorización para realizar ajustes al calendario escolar.

En este sentido, y considerando que la armonización legislativa en las entidades federativas conforme a las normas de mayor jerarquía, debe considerarse como una obligación de los poderes legislativos locales, pues brindan certeza jurídica en la aplicación de las normas legales, es que pongo a consideración la iniciativa de mérito que, en términos generales, tiene como objetivo central ajustar la normativa local en materia educativa, respecto de las modificaciones a los artículos, 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, **publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016**, misma que se realizó con la finalidad de que el calendario y la jornada escolar en educación básica atiendan de manera prioritaria los fines pedagógicos, el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar y los requerimientos específicos de cada entidad federativa.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p><b>I a la V...</b></p> <p><b>VI.-</b> Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo en las escuelas oficiales, particulares incorporadas de educación primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación de maestros, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo en la entidad, con respeto a lo establecido por la</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p><b>VI. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y</b></p>

Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal; ...	<b>demás para la formación de maestros de educación básica;</b> ...
<b>ARTICULO 47.-</b> El Calendario Escolar Estatal será el que determine la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal, para cada ciclo lectivo aplicable en la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes; contiene 200 días de clases para los educandos y podrá ser ajustado más no reducido, por la autoridad educativa local cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la Entidad, conforme al artículo 51 de la Ley General de Educación.	<b>ARTÍCULO 47.-</b> El Calendario Escolar Estatal será el que determine la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal, para cada ciclo lectivo aplicable en la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes. <b>El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.</b>  <b>Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.</b>
ARTICULO 49.- La Autoridad Educativa Local publicará el calendario escolar para cada ciclo lectivo, en el Periódico Oficial del Estado y en diarios de circulación estatal, con el propósito de lograr la mayor cobertura; durante los primeros quince días del mes de agosto de cada año, después que la autoridad educativa federal lo haga en el Diario Oficial de la Federación.	<b>ARTICULO 49. ...</b>  <b>Así mismo, deberá publicar en los medios informativos citados en el párrafo anterior, las autorizaciones de ajustes que, en su caso, se hagan al calendario determinado por la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal.</b>
<b>ARTICULO 91 TER.</b> Los consejos escolares tienen las siguientes atribuciones; además de las conferidas por los lineamientos que para su organización y funcionamiento, expida la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí:  I. Conocer el calendario escolar, las metas educativas, y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el docente a su mejor realización; ...	<b>ARTICULO 91 TER.</b> Los consejos escolares tienen las siguientes atribuciones; además de las conferidas por los lineamientos que para su organización y funcionamiento, expida la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí:  <b>I. Conocer y opinar sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a la institución; y conocer</b> las metas educativas, y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el docente a su mejor realización; ...

La iniciativa de reforma a los artículos 22 fracción VI, 47 en su párrafo primero y, 91 Ter en su fracción I; y se adiciona párrafo segundo al artículo 47, y párrafo segundo al 49 de la Ley de Educación del

Estado de San Luis Potosí, mismos que tiene por objeto establecer atribuciones para que la autoridad estatal pueda autorizar los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Considerando que es necesaria la armonización legislativa en las entidades federativas conforme a las normas de mayor jerarquía, debe considerarse como un imperativo de los poderes legislativos locales, pues brindan certeza jurídica en la aplicación de las normas legales, la iniciativa de mérito que, en términos generales se propone, tiene como objetivo central ajustar la normativa local en materia educativa, respecto de las modificaciones a los artículos, 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, misma que se realizó con la finalidad de que el calendario y la jornada escolar en educación básica atiendan de manera prioritaria los fines pedagógicos, el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar y los requerimientos específicos de cada entidad federativa."

Por otra parte, la Ley General de Educación en su artículo 51, prevé que es atribución de la autoridad federal fijar el calendario escolar en toda la República y además señala, que **las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.**

Por lo que, las dictaminadoras consideramos procedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO.** De igual forma, en la séptima Iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

### **"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La educación es un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad pues es la base de los fundamentos y valores que como personas requerimos para construir un estado capaz de avanzar en un entorno adecuado, dotado de paz social, de cordialidad y sensibilidad ciudadana.

Un país sin educación, es un país condenado al atraso, a la pobreza, y en general con la predisposición al sometimiento de la inercia de los países de primer mundo, por ello nuestro país, preocupado por contar con mejores niveles educativos ha garantizado el acceso a la educación de manera gratuita, lo cual se encuentra contenido en nuestra carta fundamental como un derecho inherente a toda persona, un derecho inalienable, lo cual nos dota de la posibilidad de que los menores y jóvenes que cursan alguno de los niveles educativos que son gratuitos puedan contar con la mejor educación que pueda haber pues es un compromiso gubernamental el mejorar el sistema educativo.

En nuestra legislación, la ley de educación en su artículo 7 establece: "Los servicios educativos que el Gobierno del Estado imparta serán gratuitos. Las aportaciones y donaciones destinadas a dicha acción en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos, o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.", si bien es cierto se establece en el último párrafo que no puede condicionarse los servicios educativos prestados por el Estado, sigue sucediendo que en las escuelas en todo el estado se sigue impidiendo a los padres de familia la inscripción de sus menores hijos lo cual atenta contra la disposición invocada, dejando en estado de indefensión a los padres quienes forzosamente

deben cubrir las cuotas impuestas debido a que en la ley no se establece sanción alguna por dicha práctica, por ello se plantea incluir este aspecto dentro de las infracciones a la ley a fin de dar certeza a los menores y se garantice su derecho a la educación.

Lo anterior, brinda la certeza de que los servicios prestados por el sistema educativo en la entidad sean de carácter gratuito, pues es común que cada que inicia un nuevo periodo educativo se presentan quejas por parte de los padres de familia, debido a que se les condiciona el acceso a la educación al pago de diversas cuotas, generando con ello un esquema discriminatorio que incrementa la brecha de desigualdad entre los educandos menores propiciando el escarnio y las burlas debido a que no pueden ser inscritos por no contar con los recursos para el pago de estas cuotas.

Esta práctica además es usada como medio de presión pues muchas veces no se permite la entrega de documentos si no se cubren las cuotas o también se condicionada presentación de exámenes hasta el pago correspondiente.

Por ello a efecto de garantizar el acceso a la educación en nuestra entidad debe incluirse en nuestra legislación prescripción específica que inhiba estas prácticas que solamente perjudican a los menores y vulneran el derecho a la educación."

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 95.-</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p><b>I-XVII...</b></p> <p><b>XVIII.</b> Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección, y</p> <p><b>XIX.</b> Incumplir los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.</p>	<p><b>ARTICULO 95.-</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p><b>I-XVII ...</b></p> <p><b>XVIII. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección;</b></p> <p><b>XIX. Incumplir los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella, y</b></p> <p><b>XX. Condicionar la prestación de servicios educativos proporcionados por el Gobierno del Estado al pago de contraprestación alguna.</b></p>

Que de conformidad a los argumentos vertidos en el considerando sexto del presente dictamen, esta comisión determina viable la iniciativa que reforma el artículo 95 en su fracción XX; resulta así, a fin de garantizar la gratuidad de la educación. Por lo cual, se considera pertinente incluir en las infracciones cualquier condicionante en la prestación de los servicios educativos que vulneren los derechos de los educandos, siendo necesario inhibir, desde el marco normativo, esta prácticas que vulneran un derecho fundamental como lo es el de educación.

Por lo anterior, se aprueba con modificaciones la presente iniciativa

**DÉCIMO PRIMERO.** De la misma manera, la octava iniciativa, citada en el proemio de este dictamen.

### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Sistema Educativo Nacional reconfigura su estructura, planeación, operación y evaluación, en virtud de la reforma a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se fortalece de manera evidente con dicha reforma, el derecho de todo individuo a recibir educación **de calidad**, y se ratifica la responsabilidad del Estado, de garantizar dicho derecho fundamental.

Esta reforma constitucional nos conduce inevitablemente a la optimización permanente de la educación, para cuyos efectos es menester adoptar una actitud de evaluación constante de ciertas condiciones, como en su caso lo son: los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la docencia, como claves fundamentales para alcanzar el atributo que se pretende, es decir, la calidad educativa.

Luego entonces, si uno de los aspectos que deben desarrollarse para lograr la calidad educativa es *la organización escolar*, nos enfrentamos a una condición básica para tales efectos, como lo es el número de alumnos por grupo escolar.

Bajo tal contexto, resulta razonable considerar que los grupos conformados por un número reducido de alumnos, puede constituir una ventaja para el rendimiento académico, pues los maestros tienen mayor oportunidad de brindar atención personalizada a sus estudiantes.

Mucho se ha discutido sobre el tema, por un lado están los profesores y pedagogos, que defienden que el número de alumnos debe ser reducido para lograr el éxito académico (como Malcolm Gladwell); por el otro, están las instituciones y directores que aseguran que el número de alumnos no afecta para nada en su rendimiento; sin embargo, una gran mayoría, se inclinan por señalar que resulta adecuado 31 alumnos por aula.

Como dato adicional, es importante puntualizar que una de las organizaciones que ha estudiado como afecta el número de alumnos en clase, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), concluyendo que el número de alumnos no es la única variable que *mejoraría la calidad de la educación* (de lo que se deduce que, entre otra variables, ésta que nos ocupa, sí mejora la calidad), pues también existen otras variables claves para tales efectos, sin embargo señala que entre 2000 y 2009 fueron muchos los países que invirtieron en reducir el número de alumnos por aula.

Sin duda alguna, la calidad educativa se logra consolidando diversos factores tales como la preparación del profesor, la metodología de enseñanza, los recursos didácticos, las condiciones de equipamiento e infraestructura, pero sin duda, la reducción de alumnos por grupo resulta esencial para consolidar ese principio constitucional.

Por ello, la presente iniciativa propone incluir entre las atribuciones de la autoridad educativa estatal, previstas en el artículo 22 de la Ley de Educación del Estado, como fracción XLI (para que dicha fracción se recorra como XLII) la consistente en “*Vigilar*

que en los planteles educativos, el número de alumnos por grupo escolar no exceda de treinta”.

Dicha medida legislativa impactará en los siguientes aspectos:

- Optimizará el rendimiento escolar, al facilitar la aplicación de más técnicas pedagógicas al docente
- Incidirá en la atención individualizada del educando
- Mejorará el desempeño y el desarrollo de las habilidades del educando.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p><b>I-XL.-...</b></p> <p><b>XLI.-</b> Las demás que señalen las leyes y los reglamentos vigentes en el Estado.</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p><b>I-XL.-...</b></p> <p><b>XLI.-Vigilar que en los planteles educativos, el número de alumnos por grupo escolar no exceda de treinta.</b></p> <p><b>XLII.-</b> Las demás que señalen las leyes y los reglamentos vigentes en el Estado.</p>
<p><b>ARTICULO 95.-</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p><b>I-XIX ...</b></p>	<p><b>ARTICULO 95.-</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p><b>I-XIX ...</b></p> <p><b>XX.-Que sus grupos escolares excedan de treinta alumnos.</b></p>

La iniciativa en estudio, tiene como finalidad establecer que los grupos escolares no excedan de treinta alumnos por aula, siendo que la Ley General de Educación, señala que a través de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, en uso de sus atribuciones, publica las acciones de planeación regional para la planeación detallada, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de los servicios de tipo básicos para garantizar el Derecho Constitucional a la Educación a todos los niños del País, documento en el que se establece los parámetros del número de alumnos con los que debe contar el plantel educativo.

La Dirección General de Planeación en el documento relativo a las Acciones de Planeación Regional para la Promoción Detallada, refiere los parámetros por los cuales se establece el número de alumnos que deben integrar los grupos en las aulas, atendiendo al nivel educativo por ciclo escolar, preescolar, primaria, secundaria y media superior, así el citado documento, en la vinculación con programación detallada (PRODET), señala que, ésta consiste en integrar las propuestas generadas por el proyecto de acciones de planeación regional para la programación detallada del ciclo escolar correspondiente, con el resultado del sistema PRODET de cada entidad, el producto obtenido de este proceso se remite a la Dirección General de Planeación, para su dictaminación respectiva.

Por lo anterior, las dictaminadoras consideramos que la presente iniciativa es improcedente, ya que existe un mecanismo que mide y evalúa el tipo de nivel escolar para determinar el número de alumnos por aula.

**DÉCIMO SEGUNDO.** De igual manera, la novena iniciativa, citada en el proemio de este dictamen.

### “EXPOSICION DE MOTIVOS

Vivir en un medio ambiente sano como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no depende solo del Estado, es necesario que la sociedad participe poniendo en práctica sus valores y el respeto por el medio ambiente. Por ello es importante que desde temprana edad los niños reciban tanto en el hogar como en los centros educativos lo necesario para que adquieran la conciencia sobre la preservación del medio ambiente que lo rodea y que cuando crezca realice lo mismo con sus descendientes y contribuyan en la protección del medio ambiente.

Cada día se habla más sobre los efectos del calentamiento global y la sociedad en su conjunto debe trabajar haciendo equipo con el sector educativo, con el fin de evitar que este fenómeno siga avanzando, por esta razón buscamos por medio de estas propuestas de ley, establecer lineamientos para la preservación y protección del medio ambiente.

La escuela es parte fundamental para la educación de los niños y jóvenes pues desde la primaria hasta la preparatoria se van formando criterios y valores para luego ingresar a la sociedad ya sea ingresando a estudios universitarios o iniciar su vida laboral.

Uno de los principales valores que debemos inculcar desde la niñez es la cultura ecológica y el respeto al medio ambiente, enseñándoles a manejar adecuadamente todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, depositando y clasificando la basura y cuidar el medio ambiente que los rodea.

Por lo anterior, esta iniciativa va encaminada a que los alumnos desde nivel básico hasta media superior reciban suficiente información sobre la problemática ambiental y formar en ellos un criterio que pueda ayudarlos a preservar el entorno en que vivimos, además de implementar campañas por parte de las instituciones educativas como la plantación de árboles y el reciclaje de la basura en las escuelas y en su alrededor, con la finalidad de aportar un granito de arena en la protección del medio ambiente.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b>	<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b>
<b>ARTICULO 67.-</b> Las autoridades educativas estatal y municipal en el ámbito de su competencia realizarán acciones para:  I.- Promover y apoyar programas deportivos y de recreación, para preservar la salud física y mental de la niñez y la juventud;  II.- Estimular la promoción de esquemas y acciones en los programas educativos, con	<b>ARTICULO 67...</b>  I.- Promover y apoyar programas deportivos y de recreación, para preservar la salud física y mental de la niñez y la juventud; <b>además de implementar campañas de difusión y concientización, pláticas con expertos en materia ambiental y conferencias dentro de las escuelas para crear conciencia entre la población infantil, juvenil y padres de familia, sobre la protección del medio ambiente.</b>  II.- Estimular la promoción de esquemas y acciones en los programas educativos

el objetivo de fomentar la cultura ecológica en todos los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en nuestra niñez y juventud; haciendo obligatoria la siembra de árboles y el cuidado de los mismos, a fin de lograr la preservación del medio ambiente;

**fortaleciéndolos con la integración de pláticas y conferencias por expertos en la materia de protección al medio ambiente**, con el objetivo de fomentar la cultura ecológica en todos los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en nuestra niñez y juventud; haciendo obligatoria la siembra de árboles y el cuidado de los mismos, a fin de lograr la preservación del medio ambiente;

La presente iniciativa en estudio, que busca reformar el dispositivo 67 en sus fracciones I y II, de la Ley de Educación del Estado, adicionando a la fracción primera, lo relativo a que en la promoción y apoyos a programas deportivos y de recreación para preservar la salud física y mental de la niñez y la juventud, pretende adicionar un texto en el sentido de que se deberá además, **implementar campañas de difusión y concientización, pláticas con expertos en materia ambiental y conferencias dentro de las escuelas para crear conciencia entre la población infantil, juvenil y padres de familia, sobre la protección del medio ambiente.** Así como en la fracción II, se agrega la parte que señala que, **“...fortaleciéndolos con la integración de pláticas y conferencias por expertos en la materia de protección al medio ambiente...”**.

Las dictaminadoras la consideran improcedente, ya que el fin que pretende con esa iniciativa, se encuentra plasmada en los dispositivos 9 fracción XI, y 22 fracción I de la Ley de Educación del Estado, al señalar que las autoridades estatales y municipales, tienen como atribuciones la de elaborar y ejecutar las política y programas en materia educativa, cultural, recreativa, deportiva, **ecológica** y tecnológica; además, de inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sostenible, así como la valoración de la protección y conservación para el desarrollando armónico e integrar del individuo en la sociedad. En los programas que establecen los dispositivos anteriores, en apego a los presupuestos establecidos y aprobados, se puede implementar en el marco de esos programas, la realización de conferencias y pláticas en materia ambiental.

**DÉCIMO TERCERO.** Así mismo, la décima iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

El desarrollo integral de los niños y jóvenes potosinos depende en gran medida de los que hagamos hoy por su educación.

Por ello debemos implementar acciones reales que nos conduzcan a garantizar el derecho a una educación “de calidad”, que exige el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es bien sabido, desde el pasado Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se incluyó un programa nacional de inglés para alumnos de educación básica, con el fin de tomar medidas para fortalecer la capacidad y calidad educativa de los niños y los jóvenes de México, para competir en un mundo cada vez más globalizado.

En el mismo sentido, de la Estructura Pragmática del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos advertir que en el Ramo de “Educación Pública”, sigue contemplándose la partida presupuestaria “S270” con modalidad de “Programa Nacional de Inglés”, con finalidad de “Desarrollo Social”, Función “Educación”, Sub-función “Educación Básica”, y actividad institucional “Educación Básica de Calidad”.

Bajo tal contexto, esta Soberanía debe implementar las medidas legislativas que permitan, no sólo una educación de calidad, sino también una educación integral y



moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio biculturales, encaminados a lograr una real equidad y un verdadero acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática.

Lo anterior, sin perder de vista que nuestro Estado es un destino turístico excepcional y, por ende, cada año recibe a miles de extranjeros, especialmente en nuestra Zona Huasteca, por lo que este tema, del manejo pertinente del idioma inglés, es de gran relevancia para San Luis Potosí, como agente de transformación y movilidad académica, social y económica.

Es por ello, que a fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Estatal, mediante el marco legislativo local adecuado a las condiciones sociales y económicas actuales, es menester prever que los niños y adolescentes potosinos cursen obligatoriamente en el nivel básico, clases de una segunda lengua, específicamente el idioma inglés."

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 30.-</b> En el Sistema Educativo Estatal además, quedara comprendida la educación inicial, la educación indígena bilingüe e intercultural, la educación para adultos, la educación especial, la educación física, la de artes y oficios, escuelas de bellas artes, academias comerciales, técnicas y de capacitación para el trabajo, y toda aquella que en el Estado se imparta.</p> <p>La Educación Básica está integrada por el nivel Preescolar, el de Primaria y el de Secundaria.</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 30...</b></p> <p>...</p> <p><b>La educación básica, en sus tres niveles, promoverá la educación bilingüe e intercultural, con libros y materiales didácticos, además del español como lengua materna, en el idioma inglés.</b></p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-XV ...</p> <p><b>XVI.</b> Las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los</p>	<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-XVI ...</p> <p><b>XVII.- Promover el fortalecimiento a las capacidades en los alumnos de educación básica mediante la enseñanza del idioma</b></p>

propósitos señalados en el artículo anterior.	<b>inglés de manera obligatoria.</b>
---	--------------------------------------

La dictaminadora consideramos que, si bien es cierto, la presente iniciativa tiene por objeto que los alumnos de educación básica y media superior incluyan en su formación la enseñanza del idioma inglés de manera obligatoria, que es una parte importante para la formación de nuestros educandos, como lo exige el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “La educación es el medio fundamental para adquirir, conocimientos que nos permitan apoyar en la consecución de los fines y superación de nuestros educandos para un mejor desarrollo social; sin embargo, toda iniciativa que se proponga y que genere un gasto al erario público, debe ir acompañada de los estudios presupuestales que permitan garantizar su perfecta aplicación y no sea solo letra muerta. La presente iniciativa de ser procedente, implicaría no sólo un gasto para la contratación de profesores especializados, sino además, deberá considerarse el recurso económico para la capacitación de los mismos, y la adquisición de materiales didácticos necesarios para la impartición de dicha materia, que actualmente no se cuenta dentro de la estructura educativa.

Por lo que, las dictaminadoras consideran improcedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO CUARTO.** De igual manera, la décima primera Iniciativa, citada en el proemio de este dictamen.

#### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

El continuo desarrollo del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en casi todos los ámbitos del quehacer humano impulsa cambios sociales y oportunidades de crecimiento en las sociedades modernas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el censo del año 2014, arrojó como resultado un panorama general sobre el acceso a las tecnologías digitales, predominando la población joven del país: de los 12 a los 17 años, como usuarios de internet, en un 80%.

Del mismo censo se desprende que las tres principales actividades realizadas en internet reportadas en el 2014, las más recurrentes son la búsqueda de información con 67.4%, seguidas con las de acceso a redes sociales 39.6%, como medio de comunicación 38.5% y tanto actividades de apoyo a la educación como el entretenimiento con una proporción similar.

Lo anterior nos conduce a concluir que los jóvenes son los principales usuarios de las redes sociales, y por ello resulta imperativo realizar políticas públicas de la mano con autoridades educativas sobre el uso responsable de las redes sociales, o lo que es más, incluir, dentro de los fines de la Educación en nuestro Estado fomentar el uso adecuado de la tecnología.

El gran posicionamiento y carácter masivo de las redes sociales a nivel mundial, lleva consigo riesgos implícitos significativos y alarmantes, como los consistentes en la pérdida de privacidad, acceso a contenidos inadecuados que impactan en el desarrollo evolutivo de los menores de edad, contacto con usuarios malintencionados por medio de herramientas de mensajería instantánea, chats, foros o correo electrónico, intimidación psicológica u hostigamiento, que en ocasiones pueden terminar hasta en suicidios.

En ese orden de ideas, si el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, y que esta además deberá ser “de calidad” y que contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto a la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, podemos concluir que es una obligación del Estado contribuir a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, *en especial acerca del uso de las nuevas tecnologías como lo son la internet y las redes sociales, por lo que el Estado tiene la obligación de alertar a los usuarios de dichas tecnologías sobre el riesgo en el uso*

*inadecuado de las mismas, fomentando una mejor cultura de respeto y así apostar a la prevención desde el ámbito educativo sobre las conductas indeseadas expuestas en presente documento, esto es, prevenir la aparición del cyberbullying, ciber acoso, ciber grooming, entre otros.*

Es por ello, que la presente iniciativa propone adicionar el artículo 9º de la Ley de Educación del Estado, a fin de que contemple entre los fines de la Educación el fomento entre los educandos del uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales, así como los riesgos implícitos, a fin de prevenir la comisión de delitos juveniles en dicha materia."

Para mejor proveer se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la Ley y la propuesta:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
<p>ARTICULO 9º.- La educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo y tercero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I a la XX...</p>	<p>ARTICULO 9º.- La educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo y tercero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I a la XX...</p> <p><b>XXI.- Fomentar entre los educandos el uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto de las mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales</b></p> <p><b>XXII.- Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética advirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales.</b></p>

Las dictaminadoras coincide con el proponente de fomentar el uso adecuado y responsable de las tecnologías, ya que éstas tienen un gran impacto en la niñez y en los adolescentes por la facilidad de usar una computadora, tablet y teléfonos celulares, es por ello que, se debe tenerse un cuidado de las redes sociales; se debe incluir en los programas de educación, el buen uso de las nuevas tecnologías, para que el uso de las mismas, sea con responsabilidad y respeto, además, se debe revisar que los ajustes sean con la vigilancia correcta y crear reglas de uso; conocer los hábitos de los niños y adolescentes que utilizan la línea; que el uso sea en accesos abiertos; explicar cuáles son las líneas a evitar; monitorear el uso adecuado y responsable de la información en los centros educativos, fomentando el conocimiento y la conciencia respecto de las mejores prácticas para hacer uso del internet y de las redes sociales en los centros educativos.

La presente iniciativa busca prevenir la comisión de delitos cibernéticos, advirtiendo de los riesgos por el uso del INTERNET y redes sociales, se debe considerar que un centro educativo, es un lugar natural de convivencia, en el que interactúan maestros, alumnos, padres de familia y, en ocasiones, miembros de la comunidad cercana a la escuela; representantes de instituciones civiles y

gubernamentales; es por ello, que corresponde al personal docente y a los padres de familia en sus respectivos espacios, ser responsables de salvaguardar la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, orientando al buen uso de las nuevas tecnologías, así como el respeto a los derechos humanos que es la base de una convivencia democrática y participativa.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que muchas de las situaciones de riesgo pueden prevenirse y para las que no es posible anticipar, es necesario tener un plan de acción que permita la comisión de un delito cibernético, por el mal uso o información equivocada de la utilización del INTERNET y de las redes sociales, en ese sentido, la presente iniciativa tiende a fomentar y advertir de los riesgos por el uso del internet y las redes sociales.

Por lo que las dictaminadoras consideramos que la presente iniciativa es procedente.

**DÉCIMO QUINTO.** De igual manera, la décima segunda Iniciativa, citada en el proemio de este dictamen.

### **“Exposición de Motivos**

**El 08 de marzo de 1911**, se conmemoró en diversos países del mundo, por primera ocasión, el “Día Internacional de la Mujer”. No es sino hasta 1945, hace 72 años cuando, con la **firma de la Carta de las Naciones Unidas**, se dio el primer acuerdo internacional para afirmar el **principio de igualdad entre mujeres y hombres**. En México, este principio es uno de los Derechos Humanos consagrados en el Pacto Federal y en el de San Luis Potosí.

Desde ese momento, la constante de instancias gubernamentales y asociaciones no gubernamentales en el mundo, nuestro país y el Estado, **ha sido crear programas, estrategias y un marco legal dirigido a contribuir a la mejora de la condición social de las mujeres**. A 106 años de distancia del primer Día Internacional de la Mujer, es importante reflexionar sobre el camino recorrido, los logros, avances, y por supuesto las áreas de oportunidad en el tema.

El más grande desafío en la actualidad, sigue siendo el empoderamiento de la mujer para enfrentarse y salir adelante en todos los ámbitos de desarrollo: la sociedad, la política, economía y por supuesto, **la educación**.

En este sentido, me quisiera enfocar a un tópico específico: **la violencia por cuestiones de género en la educación**; con el fin de entender, en principio, el tema de violencia contra la mujer, es necesario identificar la concepción sobre dicho término, que se ha adoptado y aceptado a la fecha por la Organización de las Naciones Unidas, la cual define lo siguiente:

*“Violencia contra la mujer, es todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”*

En nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, define **“violencia contra las mujeres”** como: **“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”**, concepto adoptado en la ley local de la materia.

Ahora bien, concatenado con lo anterior, se ha expuesto en documentos de investigación sobre violencia de género, que uno de los ámbitos donde es posible

identificar la prevalencia de la violencia **es en las escuelas**, por lo que resulta necesario actuar en temas prioritarios, como lo es precisamente el de la atención a la violencia que vive la niñez y la adolescencia situada en centros educativos, lugar que sirve de escenario para muchas y muy diversas **interacciones de agresión**. Dicho fenómeno es conocido como **acoso escolar**, el cual *hace referencia a distintas situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente entre alumnos. Diferentes mediciones revelan la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad.*<sup>3</sup>

Lo anterior es aún más preocupante cuando, aunado al hecho de existir acoso escolar entre alumnos, **se presentan situaciones de violencia y discriminación por cuestiones de género**, las cuales se acrecientan dada la amplia diversidad cultural de la población escolar en nuestra Entidad. En este apartado, es prudente recordar los cuatro principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que son:

- I. La **igualdad jurídica** entre la mujer y el hombre
- II. El **respeto a la dignidad humana** de las mujeres
- III. La **no discriminación**, y
- IV. La **libertad** de las mujeres

Entonces, considerando que la escuela es uno de los pilares que van formando en niños y jóvenes un criterio que lo conducirá a lo largo de su vida y dada la responsabilidad que los docentes tienen frente al grupo que dirigen, considero deben procurar **crear medidas tendientes a garantizar una verdadera igualdad entre pares al interior del aula**, evitando situaciones violentas suscitadas con mayor frecuencia de hombres hacia mujeres, que generen daño o discriminación; por ello, propongo en el presente instrumento legislativo, que dicha especificación sea insertada en el numeral 4º de la Ley de Educación del Estado, y así los docentes generen protocolos sobre cómo debe actuarse desde la escuela **en caso de tener conocimiento de violencia de género entre las y los alumnos dentro del aula.**"

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE	LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS
<p><b>ARTÍCULO 4º.</b> Todos los individuos tienen derecho a recibir educación de calidad, con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.</p>	<p><b>ARTÍCULO 4º.</b> Todos los individuos tienen derecho a recibir educación de calidad, con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.</p> <p><b>Los docentes procurarán diseñar y aplicar las medidas conducentes a crear y propiciar relaciones de igualdad entre los educandos hombres y mujeres al interior de las aulas, a fin de identificar y prevenir situaciones violentas por</b></p>

<sup>3</sup> Cámara de Diputados. (2014). "**Violencia de género, juventud y escuelas en México: situación actual y propuestas para su prevención**". marzo 03, 2017, de LXII Legislatura Sitio web: <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/310934>

...	<b>cuestiones de género y, en consecuencia, evitar la discriminación.</b>	...
-----	---	-----

La presente iniciativa tiene por objeto fomentar el derecho de igualdad entre los educandos hombres y mujeres en el interior de las aulas, como lo cito la promovente en su exposición de motivos, que el 08 de marzo de 1911, se conmemoró en diversos países del mundo, por primera ocasión, el "Día Internacional de la Mujer". No es sino hasta 1945, hace 72 años cuando, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se dio el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. En México, este principio es uno de los Derechos Humanos consagrados en el Pacto Federal y en el de San Luis Potosí.

Desde ese momento, la constante de instancias gubernamentales y asociaciones no gubernamentales en el mundo, nuestro país y el Estado, ha sido crear programas, estrategias y un marco legal dirigido a contribuir a la mejora de la condición social de las mujeres. A 106 años de distancia del primer Día Internacional de la Mujer, es importante reflexionar sobre el camino recorrido, los logros, avances, y por supuesto las áreas de oportunidad en el tema.

Por lo que esta iniciativa busca garantizar que los docentes dentro de las aulas, fomenten el respeto y la no discriminación entre los educandos, propiciando una relación de igualdad entre los hombres y mujeres, creando una conciencia de igualdad que repercuta en beneficio de la sociedad.

En razón de lo anterior, las dictaminadoras consideran procedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO SEXTO.** Así mismo, la décima tercera iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **"EXPOSICION DE MOTIVOS**

Previendo las consecuencias de los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos de América, es una obligación del Estado, establecer mecanismos jurídicos tendientes a beneficiar la movilidad académica de los connacionales, que regresan a nuestro País, para que a su vez estos puedan incorporarse en un ambiente laboral competitivo, aprovechando sus conocimientos, sin importar su status migratorio.

A manera de homologar la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto y los trabajos realizados por el Senado de la Republica y la Cámara de Diputados me permito someter a esta Honorable soberanía, que en uso de nuestras atribuciones, se realicen las modificaciones a la Ley de Educación del Estado de

San Luis Potosí, cabe señalar que en la exposición de motivos del Presidente, se toma en consideración lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2013- 2018, en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo.

Las dictaminadoras establecen como parámetro lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, fortalecen los instrumentos jurídicos internacionales, las recomendaciones y convenciones, con la finalidad de que se promueva la educación de calidad de manera equitativa y sin discriminación.

Se arrojan datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014, que hace referencia a la migración internacional, menciona que la población emigrante a Estados Unidos, en el periodo agosto 2009 a septiembre 2014, fue de 532 mil 763 hombres

y 186 mil 479 mujeres. Sobre esos datos se realizó la segmentación, siendo el resultado, que el mayor grupo de edad que tiende a emigrar, es entre los 15 a los 29 años.

En este orden de ideas, se propuso facilitar el acceso, tránsito y permanencia de las niñas, niños, y jóvenes migrantes, la simplificación de los trámites y regulaciones en la revalidación de estudios, por lo que de una correcta aplicación de los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, es factible armonizar la ley de Educación del Estado, para que todos los habitantes del Estado, reciban educación de calidad, con las mismas oportunidades, con el solo hecho de satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales.

Con la presente iniciativa se incorpora el término “transito”, a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que hace referencia a la movilidad estudiantil, se regula la simplificación de los procedimientos de revalidación, validación y autenticidad de documentos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y accesibilidad.

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p style="text-align: center;"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 4°.</b> Todos los individuos tienen derecho a recibir educación de calidad, con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.</p>	<p><b>ARTÍCULO 4°.</b> Todos los individuos tienen derecho a recibir educación de calidad, <b>en condiciones de equidad y transito</b> con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.</p>
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p>I-VI.- ...</p> <p><b>VII.</b> Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p>I-VI.- ...</p>
<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p>I-XIII.- ...</p> <p>IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación de maestros de educación</p>	<p><b>ARTICULO 22.-</b> Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:</p> <p>I-XIII.- ...</p> <p>IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación de maestros de educación</p>

<p>básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal expida;</p> <p>X-XLI ...</p>	<p>básica. <b>Asimismo, podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales de la Administración Pública Federal.</b></p> <p>X-XLI ...</p> <p><b>XLII.-Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia de acuerdo a los lineamientos de la ley general.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 74.</b> Las autoridades educativas de la Entidad establecerán condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, de calidad de cada individuo, mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.</p> <p>Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo y que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.</p>	<p><b>ARTÍCULO 74.</b> Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, <b>tránsito</b> y permanencia en los servicios educativos.</p> <p>Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, <b>dispersos o</b> que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, <b>físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.</b></p>
<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-III ...</p> <p><b>IV.</b> Con enfoque de equidad y género prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la educación, preescolar, primaria, secundaria, y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso;</p>	<p><b>ARTICULO 75.-</b> Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>I-III ...</p> <p><b>IV.</b> Con enfoque de equidad y género prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la educación, preescolar, primaria, secundaria, y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso <b>aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento</b></p>



	<p>de servicios educativos de calidad. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior.</p>
<p><b>ARTÍCULO 84.-</b> De acuerdo con las normas y criterios generales, determinados por la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios cuando estén referidos a planes y programas de estudio que se impartan en el sistema educativo estatal.</p>	<p><b>ARTÍCULO 84.-</b> De acuerdo con las normas y criterios generales, determinados por la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios cuando estén referidos a planes y programas de estudio que se impartan en el sistema educativo estatal.</p> <p><b>Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.</b></p> <p><b>Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional. Lo anterior en términos de la Ley General de Educación.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 85.-</b> Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.</p> <p>La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.</p>	<p><b>ARTÍCULO 85.-</b> Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, <b>para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en la ley general de educación.</b></p> <p>La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados <b>o ciclos</b> escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. <b>La cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Estatal.</b></p>

La presente iniciativa tiene por objeto establecer los mecanismos jurídicos tendientes a beneficiar la movilidad académica de los connacionales, que regresan a nuestro País, para que a su vez, estos puedan incorporarse en un ambiente laboral competitivo, aprovechando sus conocimientos, sin importar su status migratorio.

A manera de homologar la iniciativa preferente del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos y los trabajos realizados por el Senado de la Republica y la Cámara de Diputados es que existe la necesidad de realizar las modificaciones a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

Las dictaminadoras consideramos viable la propuesta e igualmente, se toman en cuenta los parámetros lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, para fortalecen los instrumentos jurídicos internacionales, las recomendaciones y convenciones, con la finalidad de que se promueva la educación de calidad de manera equitativa y sin discriminación.

En este orden de ideas, dicha iniciativa propone facilitar el acceso, tránsito y permanencia de las niñas, niños, y jóvenes migrantes, la simplificación de los trámites y regulaciones en la revalidación de estudios, por lo que de una correcta aplicación de los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, es factible armonizar la ley de Educación del Estado, para que todos los habitantes del Estado, reciban educación de calidad, con las mismas oportunidades, con el sólo hecho de satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales.

Con la presente iniciativa se incorpora el término “*transito*”, a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que hace referencia a la movilidad estudiantil, se regula la simplificación de los procedimientos de revalidación, validación y autenticidad de documentos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y accesibilidad.

Por lo que consideramos las dictaminadoras procedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** De igual manera, la décima cuarta Iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Eliminar la violencia en los centros educativos ha sido una necesidad en las recientes fechas donde se han documentado un sinnúmero de casos al interior de los centros escolares, lo cual ha propiciado no solamente afectación emocional de los niños, niñas y adolescentes sino incluso la muerte de maestros y estudiantes.

Por ello es preeminencia establecer parámetros y lineamientos que nos ayuden a detectar los posibles casos de violencia, pero además capacitar adecuadamente a los docentes para reaccionar antes los casos que pudiese presentarse.

En este sentido, es labor del legislativo velar por la estabilidad de los menores y sobretodo velar por que su desarrollo se lleve a cabo de una manera sana y sin contratiempos y rodeados de ambientes seguros.

En este orden de ideas se plantea establecer en la legislación local aspectos puntuales en este sentido para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en todos y cada uno de los centros educativos existentes en la entidad, pues nuestros niños son el recurso más valioso con el que contamos y por ende debemos en todo momento velar por su seguridad y estabilidad.

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b>	<b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b>
<b>ARTICULO 41.-</b> En la impartición de educación para menores de edad, se	<b>ARTICULO 41...</b>

<p>tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.</p>	<p>Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos, y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación, <b>para lo cual se impulsará la elaboración de programas para identificar, prevenir, tratar, reaccionar, sancionar y erradicar los malos tratos hacia los educandos y que se garantice con ello la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación.</b></p>
<p>Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos, y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.</p>	

Una vez analizada la presente iniciativa se advierte que, la misma tiende a impulsar la elaboración de programas para identificar, prevenir, tratar, reaccionar, sancionar y erradicar los malos tratos hacia los educandos y que se garantice con ello la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación; sin embargo, la propuesta en estudio, se encuentra regulada en la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y municipios de San Luis Potosí, en su artículo 2, fracción IV que establece el objeto de dicha norma.

Por lo que las dictaminadoras consideran improcedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO OCTAVO.** Así mismo, la décima quinta, iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **“EXPOSICION DE MOTIVOS**

En fecha 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 Constitucional y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los Estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

Dicho Decreto estableció en su artículo cuarto transitorio la obligación de realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de la competencia de las Legislaturas de los Estados, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

La finalidad inicial de la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las diversas disposiciones legales en las entidades federativas, es desvincular el salario mínimo de su función como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para mejorar su poder adquisitivo en términos reales, pues el salario mínimo es mucho más que una simple unidad de medida.

La desindexación del salario mínimo tiene como finalidad desvincular la unidad de salarios mínimos y sustituir a ésta, por otra unidad de referencia, en el establecimiento de los precios de trámite, multas, impuestos, prestaciones, entre otros; con el objetivo de evitar que el salario mínimo se siga utilizando para dichos efectos. Con lo cual se contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo de forma gradual la pérdida acumulada por más de treinta años.

Esta medida pretende revertir la distorsión que se le ha dado a esta figura al contemplarla como un referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional a favor de trabajadores y cuyo aumento se ha fijado por decreto a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAM).

En ese sentido se crea una Unidad de Medida y Actualización, que permite la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica, para ser utilizada por las leyes federales y de las entidades federativas, así como en todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores; de tal modo que los salarios mínimos queden liberados de una indebida carga histórica.

Es importante mencionar que la determinación de la Unidad de Medida y Actualización, ha sido otorgada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual funge como organismo responsable de medir la inflación en nuestro país, y que para tal efecto, aplicará el procedimiento previsto en la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2016, la cual establece que el valor actualizado de la UMA, se calculará y determinará anualmente por dicho Instituto.

La Legislatura en funciones, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto 373 tuvo a bien aprobar dicha reforma constitucional, sin embargo, es innegable la obligación de adecuar la legislación local con el propósito de que las menciones al salario mínimo general vigente en el Estado, sean eliminadas como unidad de cuenta, índice, base, medida, referencia y se sustituyen por la correspondiente Unidad de Medida y Actualización.

En términos de lo anterior, la presente iniciativa propone la reforma al artículo 96, fracción I de la Ley de Educación del Estado, para sustituir el término de "salario mínimo general vigente en el Estado", por el de "de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización".

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS</b></p>
<p><b>ARTICULO 96.-</b> Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con: I.- Multa hasta por el equivalente de 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; o ...</p>	<p><b>ARTICULO 96.-</b> Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con: I.- Multa hasta por el equivalente a 1,000 veces <b>el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente</b> en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; ...</p>

La presente iniciativa tiene por objeto armonizar con la legislación federal el cambio que se ha venido dando con el propósito de que las menciones al salario mínimo general vigente en el Estado, sean eliminadas como unidad de cuenta, índice, base, medida, referencia y se sustituyen por la correspondiente Unidad de Medida y Actualización

Es importante señalar que la determinación de la Unidad de Medida y Actualización, ha sido otorgada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual funge como organismo responsable de medir la inflación en nuestro país, y que para tal efecto, aplicará el procedimiento previsto en la **Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2016, la cual establece que el valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por dicho ente en términos del método previsto por el artículo 4 del citado ordenamiento. Asimismo, la ley en comento, establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrará en vigor dichos valores el 1 de febrero de dicho año.

Por lo anterior, las dictaminadoras consideramos procedente la presente iniciativa.

**DÉCIMO NOVENO.** De la misma forma, la décima sexta, iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La SEP ha indicado que no es obligación de las escuelas solicitar una vestimenta precisa para poder dar los servicios educativos, más los tutores expresan que muchas escuelas lo toman como requisito indispensable para poder ingresar a sus hijos a los centros de enseñanza pública.

La directora del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Griselda Álvarez indicó que no se condiciona la entrada a los niños que no lleven el material de la lista de útiles, explicó, pero es importante dejar en claro que el uso del uniforme sí es obligatorio para los alumnos.

Además de que nunca se ha condicionado el ingreso, la permanencia o la entrega de documentos por esta situación dentro del SEER y que de hacerlo se puede llegar a sancionar a los directivos que estén incurriendo en este tipo de actividades.

En cuanto al uso del uniforme, la titular del SEER indicó que este es un medio de seguridad e identificación del alumno, así como un ahorro para no comprar ropa en para el ciclo escolar, además del interés del personal docente y directivo porque se uniforme a los niños para que se trate por igual y sin hacer diferencias.

La Secretaría de Educación a través de una circular dirigida a los directores de escuelas primarias y secundarias informó que para el ciclo escolar 2016-2017 en los planteles oficiales no es obligatorio el uso de uniforme.

No se le puede negar el acceso a ninguna niña, niño o joven por usar vestimenta distinta al uniforme, ni tampoco se pueden utilizar expresiones de violencia verbal, psicológica o de otro tipo por la falta de uso del mismo en los planteles

En este sentido, muchas veces los ingresos económicos se ven rebasados por estas compras, teniendo que sacrificar vacaciones, arreglos en sus hogares o retrasos en rentas y pago de créditos, con tal de satisfacer las necesidades escolares. A esto se le suma el gasto “voluntario” de cuotas, libros de texto, transporte, alimentos, materiales de laboratorio, entre otros, que se realizan al inicio y durante el transcurso de cada ciclo.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TEXTO VIGENTE	LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PROPUESTAS
<p><b>ARTICULO 7º.-</b> Los servicios educativos que el Gobierno del Estado imparta serán gratuitos. Las aportaciones y donaciones destinadas a dicha acción en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 7º.-</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>Se prohíbe a las autoridades educativas, así como a las y los docentes de instituciones públicas y privadas de cualquier nivel en el Estado condicionar el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos por falta de uniforme completo.</b></p>

La iniciativa en comento, tiene por objeto que las instituciones públicas no condicionen a los educandos el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos por falta de uniforme completo, lo anterior, por contravenir lo dispuesto por el artículo 3 Constitucional.

Por lo que consideramos las dictaminadoras procedente la iniciativa con modificaciones.

**VIGÉSIMO.** De la misma forma, la décima séptima, iniciativa, citada en el proemio de este dictamen

#### **“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Recientemente hemos vivido por situaciones sumamente duras en cuanto a catástrofes y fenómenos naturales, mismos que han cobrado la vida de un sinnúmero de personas, cifras entre las que lamentablemente se encuentra una gran cantidad de menores.

Ante estos hechos, es necesario tomar acciones contundentes y sobretodo preventivos en materia de protección civil, por lo que, se plantea una modificación en este sentido para que en nuestra legislación se inserte dentro de los objetivos de la educación el que se cuente con nociones de primeros auxilios y prevención de accidentes, ello para que los menores cuenten con elementos básicos ante alguna contingencia y puedan en un momento dado apoyar a sus compañeros e incluso a ellos mismos en un situación de siniestro.

Por lo anterior y a efecto de evitar que en caso de presentarse afectaciones de algún tipo en las instalaciones educativas lo menores cuenten con capacitación mínima para poder reaccionar ante tales eventos, además de que en caso de que algún menor se encuentre lastimado sus compañeros puedan apoyarlo o sepan reaccionar ante tal eventualidad.”

Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI VIGENTE	LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PROPUESTA
ARTICULO 9º.- La educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo y tercero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:	ARTICULO 9º ...
I a la XVIII....;	I a la XIX....;
XIX. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, así como las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos, y	XX. ...,y
XX. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad, o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.	XXI. Coordinar con las diversas autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación en materia de primeros auxilios y prevención de accidentes.

El Gobierno del Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación, preescolar, primaria, secundaria, y media superior, Además de integral, será dinámica y de permanente cambio, propiciando en el educando la capacidad para adquirir certeza en su futuro, dentro de un marco de oportunidades reales. Ante estos hechos, es necesario tomar acciones contundentes y sobretodo preventivos en materia de **primeros auxilios y prevención de accidentes**, por lo que, se plantea una modificación en este sentido para que en nuestra legislación se inserte dentro de los objetivos de la educación el que se cuente con nociones de primeros auxilios y prevención de accidentes, ello para que los docentes y los educandos cuenten con elementos básicos ante alguna contingencia y puedan en un momento dado apoyar a sus compañeros e incluso a ellos mismos en una situación de siniestro, como lo prevé la Ley de Protección Civil para el Estado en su artículo 4º, que señala que, el Sistema Estatal de Protección Civil observará las políticas públicas que dispone la Ley General y se regirá bajo los siguientes principios: en su fracción V, refiere que, esas políticas públicas se regirán por los principios de Cultura y educación, con énfasis en la prevención en la población en general.

Por lo que las dictaminadoras consideramos procedente la presente iniciativa.

**VIGÉSIMO PRIMERO.** De la misma forma, la décima octava, iniciativa, citada en el proemio de este dictamen.

#### **“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cambio climático es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

La anterior definición, pareciera un concepto muy simple, sin embargo, encierra uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, que enfrenta no solo nuestro país, sino el mundo entero, generado por causas naturales, o como resultado de las actividades humanas.

Ciertamente, la influencia humana es evidente al tenor de las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el forzamiento radiactivo positivo y el calentamiento observado.

La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado.

Así, tenemos que el calentamiento global es la manifestación más evidente del cambio climático, y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global; al efecto, tenemos que en las tres últimas décadas, la superficie de la tierra se ha vuelto cada vez más cálida, y se han superado los registros de cualquier época precedente. Así dicho fenómeno generará sequías, huracanes, tornados, hambre, pobreza y en pocas palabras, destrucción del mundo.

Por ello, es ahora que debemos actuar juntos para aportar soluciones, en beneficio de las generaciones futuras y en consecuencia de la propia tierra, y al ser una problemática que afecta a todos los seres vivos, requiere ser atendida ya.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, señaló que el cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.

También estableció que las temperaturas extremas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias; que por su parte, los niveles de polen y otros alérgenos, también son mayores en caso de calor extremo, que pueden provocar asma, y que las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría; un claro ejemplo de ello, es el aumento de casos de dengue, zika y chikungunya, que se han presentado no solamente en nuestro estado, -sobre todo en la región huasteca-, sino a nivel mundial, causante por el mosquito "Aedes aegypti", siendo que conforme a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente la mitad de la población mundial, corre el riesgo de contraer dengue.

El cambio climático, también genera el aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias, lo trae como consecuencia la reducción de la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres, lo que traerá como consecuencia el aumento del problema relativo a la malnutrición y desnutrición.

Es claro, ya no podemos hablar de una hipotética amenaza de borrar la mitad de las especies animales y de plantas que hoy habitan en la Tierra, sino de una problemática actual; al respecto, el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF), declaró que las poblaciones de vertebrados – peces, pájaros, mamíferos, anfibios y reptiles – han caído en un 58% entre 1970 y el 2012, y que si no hacemos nada por invertir la tendencia, este declive podría continuar agravándose hasta alcanzar un 67% al 2020.

Así, en el año 2016, el propio Fondo Mundial por la Naturaleza, reveló en un informe que entre 1970 y 2016, se registró una disminución general de 58% en el número de peces, mamíferos, aves y reptiles alrededor del mundo.



Oficialmente se ha dado a conocer que la foca monje del Caribe (*Monachus tropicalis*) se extinguió; lo mismo sucedió con el Oso del Atlas (*Ursus arctos crowtheri*), el león de melena negra, entre otros.

Incluso, es común y muy lamentable, escuchar historias como la de Solitario Jorge, nombre del último espécimen conocido de la subespecie de la Tortuga de Galápagos, macho de unos 70 u 80 años de edad, que murió en el año 2012, que al ser el único de su subespecie que se había encontrado, se complicaba mucho poder evitar su desaparición. Estuvo en cautiverio a la espera de poder encontrar alguna hembra viva, incluso se acudió al otorgamiento de una recompensa para quién confirmara algún avistamiento de una hembra para salvar esta subespecie.

Son muchas especies animales que se encuentran en peligro de extinción, entre otros, el oso polar; siete especies de abejas de cara amarilla, que entraron en la lista roja de especies en peligro de extinción en el año 2016, situación que presenta consecuencias gravemente devastadoras para el suministro de alimentos del planeta, ya que recordemos que las abejas son responsables de la polinización de más de un tercio de los alimentos del mundo; las jirafas, cuya población se redujo 40% en 30 años; la *Phocoena sinus*, mejor conocida como vaquita marina, mamífero considerado como el más amenazado del mundo y solamente vive en aguas mexicanas, específicamente, en el Alto Golfo de California; el Loro gris Africano, respecto del cual también en diciembre de 2016, la **Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)**, reveló que el 11% de las especies de esta ave recién descubierta, ya se encuentran en peligro; la guacamaya roja; el lobo gris mexicano (*Canis lupus baileyi*), el jaguar (*Panthera onca*), la tortuga caguama (*Caretta caretta*), entre otros muchos más.

Por ello, el objeto de la presente idea legislativa, es el que además de los fines precisados en el párrafo segundo y tercero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, la educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tenga los relativos a formular, regular, dirigir e implementar programas de educación y comunicación educativa acerca del cambio climático en el sistema de educación del Estado, en los tipos básico y medio superior y además, participar y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático.

Lo anterior es determinante, si tomamos en consideración que en las últimas dos décadas, a nivel mundial, la educación sobre el cambio climático y ambiental y la Educación para el desarrollo sostenible, se han convertido en herramientas importantes para proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible. Al respecto tenemos que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, confirmó el papel indispensable de los niños en el logro de un desarrollo sostenible, de ahí que la educación es sustentable en la medida que posibilita que no solo los adultos o los jóvenes, sino también nuestros niños, elaboren un juicio crítico frente a los principales problemas ambientales, y sean capaces de adoptar actitudes y comportamientos dentro de una concepción responsable y humanista.

No olvidemos, los niños de hoy son los adultos de mañana, por eso, enseñarles desde pequeños a cuidar y respetar el medio ambiente, les convertirá en personas conscientes de los peligros que conlleva el mal uso de los recursos naturales y con ello podremos contribuir a contrarrestar la serie de consecuencias graves que genera el cambio climático.

Y es que como se verá a continuación, no se requiere de la realización de tareas complicadas, sino por el contrario, muy fácil y sencillo.

Ciertamente, entre otras actividades que podríamos realizar y en las que nuestros niños podrían apoyar, serían tales como usar menos energía (apagando la televisión o cualquier aparato electrónico que no estemos utilizando), limitar el consumo del agua (por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, utilizar un vaso o recipiente para el agua, y así no tener abierta la llave durante todo el proceso), sembrar árboles, reciclar envases, adquirir productos sin empaque, usar papel reciclado, hacer uso eficiente del automóvil o salir en bicicleta, etc.

Sin embargo, para que nuestros niños conozcan la importancia de **reciclar, reutilizar y reducir** el consumo y emisiones contaminantes, requieren conocer de qué forma se contribuye a ello, qué consecuencias tiene el no aplicar y observar esas medidas y qué beneficios traerá como consecuencia su observancia; así el día de mañana serán nuestro niños, los vigilantes de que sus padres o los adultos en general, cumplan con esas mínimas reglas que contribuyan a contrarrestar el problema que nos ocupa.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Honorable Asamblea, el presente:

#### **PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO. Se adiciona la fracción XXI y XXII al artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:**

**ARTICULO 9º.- La educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo y tercero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:**

...

**XXI.- Formular, regular, dirigir e implementar programas de educación y comunicación educativa acerca del cambio climático en el sistema de educación del Estado, en los tipos básico y media superior; y**

**XXII.- Participar y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático.”**

Los relatores coincide con el proponente de que las autoridades educativas deben implementar programas de educación para formular, dirigir y comunicar acerca del cambio climático en el sistema de educación del Estado, en los niveles básico y media superior, y participar y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos, con la finalidad de propiciar la prevención, mitigación y adaptación del mismo, mediante la expedición de un programa educativo estatal, con la finalidad de prevenir que es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y buscar preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; por ello es que, es necesario implementar programas educativos que fomenten entre las instituciones educativas la adopción de medidas de prevención control y combate a los efectos del cambio climático, participar y realizar campañas en la adopción de políticas, estrategias y acciones que el Gobierno del Estado emita a través de los centros educativos.

Es por ello, que consideramos viable jurídicamente la propuesta de adición al artículo 9º de la Ley de Educación de San Luis Potosí.

## DICTAMEN

**ARTÍCULO PRIMERO.** Son de desecharse y, se desechan por improcedentes las iniciativas identificadas en el proemio con 1, 4, 8, 9, 10, 14.

**ARTICULO SEGUNDO.** Son de aprobarse y se aprueban los numerales con modificaciones, las iniciativas identificadas con los numerales: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estas adecuaciones tienen como base no sólo el análisis de la Ley de Educación del Estado vigente, sino del estudio comparado con normas de diferentes entidades y la propia legislación federal, así como las aportaciones técnicas de las instituciones públicas oficiales, en especial de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Gobierno.

En este tenor, resulta necesario su modificación ante los constantes cambios sociales y económicos, y al crecimiento de las poblaciones rurales como urbanas, que actúen de conformidad con lo establecido en los preceptos normativos, garantizando a la población una educación de calidad, de acuerdo a las políticas y programas gubernamentales dentro de un marco de legalidad.

Se fortalece el marco jurídico que establece las bases para una mejor enseñanza educativa en todos sus niveles; asimismo, se encamina a fortalecer lo relativo a la infraestructura de los centros educativos e, igualmente, a la seguridad y prevención de los educandos.

Es por ello que, con estos ajustes se implementan acciones reales que conduzcan a garantizar el derecho a una educación "de calidad", que exige el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El más grande desafío en la actualidad, es la educación, que es el pilar para enfrentar y salir adelante en todos los ámbitos en una sociedad; considerando destacable la aplicación y el ejercicio de los valores universales desde la educación inicial hasta los niveles terminales, teniendo como base la dignidad humana.

## PROYECTO DE DECRETO

**ÚNICO. REFORMA** los artículos, 4º, 7º en su párrafo primero, 22 en sus fracciones, IX, y XXXVI, 40 en su párrafo cuarto, 74 en su párrafo primero, 75 en sus fracciones, IV, IV Bis, XV, XVI, y XL, 85 en sus párrafos primero y segundo, 95 en sus fracciones, XVIII, y XIX, y 96 en su fracción I; y **ADICIONA** a los artículos, 7º el párrafo cuarto, 9º fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV; 22 dos fracciones, estas como XLI, y XLII, por lo que actual XLI pasa hacer fracción XLIII, 75 una fracción, ésta como XVII, por lo que actuales XVII a XX, para ser fracciones VIII a XXI, 84 párrafos segundo y tercero y 95 la fracción XX, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí para quedar como sigue

**ARTÍCULO 4º** Todos los individuos tienen derecho a recibir educación de calidad, **en condiciones de equidad y tránsito**, con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

**Los docentes procurarán diseñar y aplicar las medidas conducentes a crear y propiciar relaciones de igualdad entre los educandos, hombres y mujeres al interior de las aulas, a fin de identificar y prevenir situaciones violentas por cuestiones de género y, en consecuencia, evitar la discriminación.**

**ARTÍCULO 7°** Los servicios educativos que el Gobierno del Estado imparta serán gratuitos. Las aportaciones, donaciones y cuotas voluntarias destinadas a dicha acción, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

...

...

**Se prohíbe a las autoridades educativas, así como a las y los docentes de instituciones públicas de cualquier nivel en el Estado, condicionar el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos, o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos por falta de uniforme completo o del pago de aportaciones, donaciones y cuotas voluntarias.**

**ARTÍCULO 9°.** ...

I a la XXI...

**XXII. Fomentar entre los educandos el uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto de las mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales;**

**XXIII Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética advirtiéndolo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales;**

**XXIV. Formular, regular, dirigir e implementar programas de educación y comunicación educativa acerca del cambio climático en el sistema de educación del Estado, en los tipos básico y media superior;**

**XXV. Participar y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático, y**

**XXVI. Coordinar con las diversas autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación en materia de primeros auxilios y prevención de accidentes.**

**ARTÍCULO 22.** ...

I a VIII...

**IX. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales de la Administración Pública Federal.**

**X a XXXV.** ...

**XXXVI. Establecer los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias; y, en su caso, revisar aquellas que considere excesivas, pudiendo emitir observaciones y recomendar la disminución de las mismas;**

**XXXVII a XL.** ...

**XLI. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia, de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Educación;**

**XLII. Coordinar con las diversas autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación en materia de primeros auxilios y prevención de accidentes, y**

**XLIII. ...**

**ARTÍCULO 40. ...**

...

...

**Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación, tendrán derecho a que se les acredite como servicio social, ya sea por el total de horas realizadas o hasta en un cincuenta por ciento.**

...

**ARTÍCULO 74.** Las autoridades educativas de la Entidad establecerán condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad, de cada individuo, mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, **tránsito** y permanencia en los servicios educativos, **adaptando escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos.**

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, **dispersos** o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, **físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.**

**ARTÍCULO 75. ...**

**I a III...**

**IV.** Con enfoque de equidad y género prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la educación, preescolar, primaria, secundaria, y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, egreso y **tránsito, aún cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;**

**IV BIS.** Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, **implementando de forma progresiva, de conformidad con sus respectivos presupuestos, la existencia de escuelas y aulas accesibles para su libre desarrollo;**

**V a XIV...;**

**XV...;**

XVI...;

XVII. ...;

#### **ARTÍCULO 84...**

**Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.**

**Además promoverá la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional. Lo anterior en términos de la Ley General de Educación.**

**ARTÍCULO 85.-** Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, **para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en la Ley General de Educación.**

**La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados o ciclos escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. La cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el sistema educativo estatal.**

#### **ARTÍCULO 95. ...**

**I a XVII. ...;**

**XVIII. ...;**

**XIX. ..., y**

**XX. Condicionar la prestación de servicios educativos proporcionados por el Gobierno del Estado al pago de aportaciones, donaciones o cuotas voluntarias.**

#### **ARTÍCULO 96...**

**I. Multa hasta por el equivalente a mil veces del valor diario de la unidad de medida de actualización vigente en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o**

**II...**

**...**

**...**

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis."



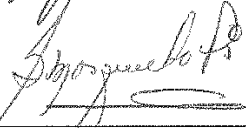

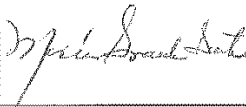
**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DADO EN LA SALA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.**

**POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO, DADO EN LA SALA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.**

**POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DADO EN LA SALA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

**POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DADO EN LA SALA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS SEÍS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**

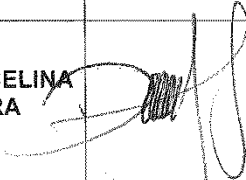
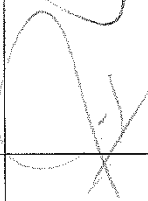
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SENTIDO DEL VOTO	RÚBRICA
DIP. JOSÉ RICARDO GARCÍA MELO PRESIDENTE	a favor	
DIP. MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA VICEPRESIDENTE	A FAVOR	
DIP. GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI SECRETARIA	A favor	
DIP. JORGE LUIS MIRANDA TORRES VOCAL	A favor	
DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ VOCAL	Al favor	
DIP. GERARDO SERRANO GAVIÑO VOCAL		

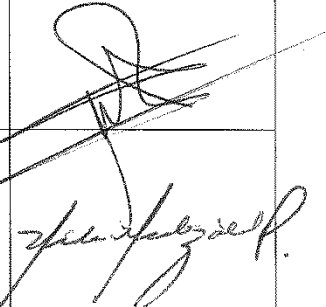
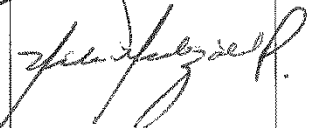
HOJA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA DICTAMINAR  
LOS TURNOS 1729, 1764, 2332, 2469, 2464, 2687, 2729, 2913, 3545, 3538, 3723, 3876, 3964, 3908, 4188 y 5179



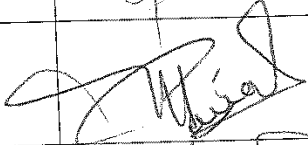

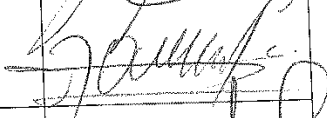
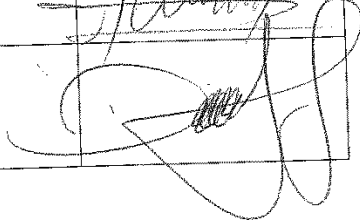
Dictamen que resuelve procedente diversas iniciativas que modifican disposiciones de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

**POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,  
IGUALDAD Y GÉNERO**

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA PRESIDENTA			
DIP. JOSEFINA SALAZAR BÁEZ VICEPRESIDENTA			
DIP. MARTHA ORTA RODRÍGUEZ SECRETARIA			

POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	SENTIDO DEL VOTO	RÚBRICA
DIP. JESUS CARDONA MIRELES PRESIDENTE	EN CONTRA	
DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ VICEPRESIDENTE	En contra	
DIP. GERARDO SERRANO GAVIÑO SECRETARIO		

HOJA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DICTAMINAR LOS TURNOS 2469, y 3545, 4370

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS	SENTIDO DEL VOTO	RÚBRICA
DIP. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ PRESIDENTE	a favor	
DIP. LUCILA NAVA PIÑA VICEPRESIDENTA	A FAVOR	
DIP. JOSE RICARDO GARCIA MELO SECRETARIO	a favor	
DIP. JOSE LUIS ROMERO CALZADA VOCAL	A Favor	
DIP. DULCELINA SANCHEZ DE LIRA VOCAL	A FAVOR	

HOJA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL TURNO 3876

# Dictamen con Proyecto de Decreto

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,  
P R E S E N T E S.**

A la Comisión de Hacienda de Estado le fue turnada en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, iniciativa que busca reformar el párrafo segundo del artículo 2º, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; presentada por el Diputado Jesús Cardona Mireles.

En tal virtud, al entrar a su estudio y análisis, de esta iniciativa los diputados integrantes de la comisión llegaron a los siguientes

## **C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO.** Que con fundamento en lo estipulado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a la comisión que se turnó esta iniciativa tiene atribuciones para conocerla y proponer lo procedente sobre la misma.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa cumple con los requisitos estipulados en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y dictamen.

**TERCERO.** Que a fin de conocer la iniciativa se cita enseguida su contenido y exposición de motivos:

### **"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*La concordancia entre las diferentes Leyes es de suma importancia, sobre todo, las que de alguna manera son vinculatorias. Tal es el caso de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.*

*La Ley de Auditoria Superior del Estado ha sido abrogada, por lo tanto, considero necesario actualizar lo correspondiente a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí."*

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI	PROPUESTA
<p>ARTÍCULO 2º. Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de este Ordenamiento deberán observar que la administración de los recursos públicos, se realice con base en criterios de, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas.</p> <p>La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y la Ley de la Auditoría Superior del Estado.</p>	<p>ARTÍCULO 2º. ...</p> <p>La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y <b>la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.</b></p>

**CUARTO.** Que la dictaminadora al realizar el análisis de la propuesta llega a los siguientes razonamientos.

- Que el pasado 10 de abril de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Entidad en la que se mandato en su artículo tercero transitorio lo siguiente:

**Se abroga la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2006, conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes; y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente Ley**

- De lo anterior se desprende que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios en el párrafo segundo del artículo segundo se establece lo siguiente:

*“La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; **y la Ley de la Auditoría Superior del Estado.**”*

- Por lo anterior esta dictaminadora resuelve como procedente la reforma en estudio a fin de mantener armonizado nuestro marco estatal y evitar posibles confusiones en su aplicación.

Por lo expuesto, con fundamento en lo estipulado por los artículos, 92 párrafo segundo, y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 85 y 86 fracciones I y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente

## DICTAMEN

**ÚNICO.** Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa descrita en el preámbulo.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La concordancia entre las diferentes leyes es de suma importancia, sobre todo las que de alguna manera son vinculatorias. Tal es el caso de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.

El 10 de abril de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Entidad, la que mandato en su tercero transitorio lo siguiente:

**“Se abroga la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2006, conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes; y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente Ley.”**

Por lo anterior, para esta Soberanía es necesario actualizar lo correspondiente a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

## PROYECTO DE DECRETO

**ÚNICO.** Se **REFORMA el artículo 2º** en su párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue

### **ARTÍCULO 2º. . . .**

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.


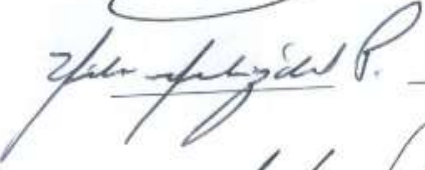





## TRANSITORIOS

**Primero.** Este Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO EN LA SALA "JAIME NUNÓ", DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

LISTA DE VOTACIÓN  
COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

	FIRMA	SENTIDO DEL VOTO
DIP. ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS PRESIDENTA		A FAVOR
DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ VICEPRESIDENTE		A favor.
DIP. MARIANO NIÑO MARTÍNEZ SECRETARIO		FAVOR
DIP. GERARDO LIMÓN MONTELONGO VOCAL		Favor
DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS VOCAL		A FAVOR
DIP. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ VOCAL		
DIP. MANUEL BARRERA GUILLÉN VOCAL		

Dictamen que resuelve procedente la iniciativa que busca reformar el párrafo segundo del artículo 2º, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por el Diputado Jesús Cardona Mireles. (Asunto 5294)

# Dictámenes con Proyecto de Resolución

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,  
P R E S E N T E S.**

A las comisiones de, Desarrollo Económico y Social; y Hacienda del Estado les fue turnada en Sesión Ordinaria del 29 de septiembre del 2016, iniciativa que impulsa adicionar los artículos 83 Bis a 83 septendecim, de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; presentada por el legislador, José Luis Romero Calzada.

En tal virtud y al entrar al análisis de la citada iniciativa, para emitir el presente la comisión dictaminadora atiende a los siguientes

## **CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** Que la iniciativa cumple con los requisitos estipulados en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y correspondiente dictamen.

**SEGUNDO.** Que conforme a lo dispuesto por artículos, 104 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones de Desarrollo Económico y Social; y Hacienda del Estado son competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el preámbulo.

**TERCERO.** Que al entrar al estudio de la iniciativa se identifica que su propósito reside en reglamentar dentro de la Ley la integración Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado; definir su órgano superior y sus cargos internos; el desarrollo y modalidad de sus sesiones; las facultades y obligaciones del, Comité Técnico; del Director del Fideicomiso, del Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Congresos; del Ejecutivo de Ventas de la Oficina de Congresos y Convenciones; de la Unidad de Apoyo Administrativo; de la Unidad de Avances Operativos y establecer obligaciones al Comité Técnico del Fideicomiso en materia de transparencia y acceso a la información pública

**CUARTO.** Que a efecto de allegarse de mayores elementos para la resolución del presente asunto, se solicitó opinión de la Consejería de Jurídica del Estado, la cual mediante del oficio No. CJE 015/00/2017 realizó las consideraciones que se transcriben a continuación.

*“En atención a su escrito de fecha 11 de enero de 2017, recibido el 12 del mismo mes y año en la Consejería Jurídica del Estado a mi cargo, previene sobre las consideraciones que se examinaron en la iniciativa que impulsa adicionar los artículos 83 Bis al 83 Septendecim, a la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; con la finalidad de*



que la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y Social cuente con mayores elementos para resolver lo conducente y al efecto expongo respetuosamente las siguientes

### CONSIDERACIONES

1.- Se advierte que la iniciativa traslada los artículos 3°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 14, 15, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 del Reglamento Interior del Comité Técnico y Dirección de Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo de Turismo (FIDETUR), para ser adicionados a la Ley de Turismo del Estado en los artículos 83 Bis al 83 septendecim, con muy pocas adiciones y reformas, que son las que se tocan en la exposición de motivos de la misma.

Previamente a manifestar una opinión jurídica sobre el particular, es importante precisar que la finalidad de los reglamentos es facilitar la aplicación de la ley, detallándola y operando como instrumentos idóneos para llevar a efecto su contenido. Es decir, los reglamentos imponen las regulaciones de operación y funcionamiento, que solo tendrá vida y sentido de derecho, en tanto se deriven de una norma legal a la que reglamentan en el seno administrativo.

En el caso que nos ocupa, el objetivo del Reglamento del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo del Estado (FIDETUR), es el de fijar las bases para su operación y funcionamiento, así como para su administración; temas que consideramos que por su naturaleza no deben ser incluidos o adicionados en la Ley de Turismo del Estado, por ser de carácter reglamentario y no legal.

Por lo antes referido, y una vez analizada la iniciativa que nos ocupa, se considera innecesario trasladar quince artículos del Reglamento del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo del Estado (FIDETUR), para ser adicionados a la Ley de Turismo del Estado, aún con las adiciones y modificaciones propuestas, porque el contenido de los artículos refieren a la organización, funcionamiento del fideicomiso, así como las facultades y obligaciones de sus unidades administrativas e integrantes; temas que son relativos y de competencia de un reglamento y no propios de una Ley.

2.- A continuación se expone un cuadro comparativo sobre la relación de los artículos que se proponen adicionar a la Ley de Turismo del Estado, con los dispositivos equivalentes del Reglamento del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo del Estado (FIDETUR), es decir, sin la debida justificación jurídica para ello, por lo que no consideramos procedente en atención al principio de jerarquía de normas de reproducir temas de carácter operativo del ámbito de un reglamento, en una Ley.

<b>Ley de Turismo del Estado</b>		<b>Reglamento del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo del Estado.</b>
Artículo 83 Bis	=	Artículo 3°
Primer párrafo del artículo 84 quater	=	Artículo 6°

<i>Segundo y tercer párrafo del artículo 84 quater</i>	=	<i>Artículo 7°</i>
<i>Sexto párrafo del artículo 84 quater</i>	=	<i>Artículo 8°</i>
<i>Artículo 83 quinquies</i>	=	<i>Artículo 9°</i>
<i>Primer párrafo del artículo 83 sexies</i>	=	<i>Artículo 10°</i>
<i>Segundo y tercer párrafo del artículo 83 septies</i>	=	<i>Segundo y tercer párrafo del artículo 11</i>
<i>Cuarto párrafo del artículo 83 septies</i>	=	<i>Artículo 12</i>
<i>Artículo 83 octies</i>	=	<i>Artículo 14</i>
<i>Artículo 83 nonies</i>	=	<i>Primer párrafo del artículo 15</i>
<i>Primero párrafo del artículo 84 undecies</i>	=	<i>Artículo 18</i>
<i>Segundo párrafo del artículo 83 undecies</i>	=	<i>Artículo 19</i>
<i>Artículo 83 duodecies</i>	=	<i>Artículo 20</i>
<i>Artículo 83terdecies</i>	=	<i>Artículo 21</i>
<i>Artículo 83quaterdecies</i>	=	<i>Artículo 22</i>
<i>Artículo 83quindecies</i>	=	<i>Artículo 23</i>
<i>Artículo 83sexdecies</i>	=	<i>Artículo 24</i>

3.-Las adiciones y reformas que defieren de lo ya establecido en el Reglamento del FIDETUR, son únicamente las plasmadas en los siguientes artículos:

<b><i>Iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Turismo</i></b>
<i>Artículos 83 Ter</i>
<i>El cuarto y quinto párrafo del artículo 83 Quater</i>
<i>El primer párrafo del Artículo 83 Septies</i>
<i>Las fracciones I, II, III, X Y XI Artículo 83 Octies</i>
<i>El segundo párrafo del Artículo 83 Nonies</i>
<i>El segundo párrafo y fracciones II y III del Artículo 83 Undecies.</i>
<i>Artículo 83 Septies decies</i>

Dichas adiciones y reformas propuestas, en atención a su exposición de motivos, no justifican la necesidad de considerarlas viables para ser plasmadas en la Ley de Turismo del Estado; toda vez que refieren a temas de integración, organización y funcionamiento del Fideicomiso y de las facultades y atribuciones de sus integrantes, entre otras, las cuales son propias de los reglamentos.

4.-Finalmente, el artículo 83 septendecim propone incorporar que el Comité Técnico del Fideicomiso difunda de manera pública, permanente y actualizada en sus página de internet, la información a que se refiere el Título Cuarto de dicho Ordenamiento, con las reservas y criterios de confidencialidad que el mismo prevé; en cumplimiento de la obligación derivada de la fracción XXXV del artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

*La adición del artículo antes citado a la Ley de Turismo es redundante, porque dicha obligación ya se encuentra impuesta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, es por ello que, aun cuando no se encuentre expresamente plasmada en la Ley de Turismo y/o en el Reglamento del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo del Estado, es obligación del Comité Técnico Fideicomiso cumplir no solo con la fracción XXXV del artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, si no como todas las obligaciones que le impone la misma al fideicomiso.*

*En espera de que estas consideraciones puedan apoyar con mayores elementos de juicio el dictamen que deba recaer a la iniciativa que han tenido a bien remitirlos, y sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y expresarle la seguridad de mi consideración y respeto.”*

**QUINTO.** Que los que dictaminan señalan que la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí contiene disposiciones generales que establecen las finalidades del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado sin llegar a pormenores puesto que no le corresponde a la Ley fijar disposiciones de esta naturaleza, es decir reglamentarias, como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte, al establecer que “las leyes no pueden regular cuestiones pormenorizadas de lo que previenen; la finalidad del reglamento es tomar el mandato previsto por la ley y desarrollarlo, concretizándolo cuanto sea necesario, para hacer efectivos los mandatos de aquella...”<sup>1</sup>

**SEXTO.** Que los que dictaminan coinciden con la opinión de la Consejería Jurídica del Estado en cuanto a que fijar las bases para la operación y funcionamiento del citado Fideicomiso Público, así como para su administración; son temas que por su naturaleza no deben ser incluidos o adicionados en la Ley de Turismo del Estado, por ser de carácter reglamentario y no legal.

Asimismo en lo que respecta específicamente al contenido propuesto del artículo 83 septendecim, resulta redundante, debido a que, al ser el citado Fideicomiso sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ya tiene la obligación que se promueve establecer en la Ley de Turismo, así como lo demás establecido en la Ley de Transparencia.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos, 85, y 86, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, ponemos a consideración del Honorable Pleno, el siguiente

## **DICTAMEN**

**ÚNICO.** Es de rechazarse y, se rechaza, la iniciativa citada en el preámbulo.

---

<sup>1</sup> LEYES Y REGLAMENTOS. FINALIDAD DE ESTOS RESPECTO DE AQUELLAS. (Apéndice 1917-, 1ª parte, Precedentes, Pleno, p. 985)

**COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**DADO EN LA SALA “LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

**COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO**

**DADO EN LA SALA “JAIME NUNÓ”, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**



**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

<b>Nombre</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>
Dip. Gerardo Serrano Gaviño <b>Presidente</b>			
Dip. Mariano Niño Martínez <b>Vicepresidente</b>			
Dip. Martha Orta Rodríguez <b>Secretaria</b>			
Dip. Jorge Luis Miranda Torres <b>Vocal</b>			

*Firmas del Dictamen que rechaza la iniciativa que impulsa adicionar los artículos 83 Bis a 83 septendecim, de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; presentada por el legislador, José Luis Romero Calzada.*



"2018, Año de Manuel José Othón"

LXI LEGISLATURA  
SAN LUIS POTOSÍ

LISTA DE VOTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

	FIRMA	SENTIDO DEL VOTO
DIP. ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS PRESIDENTA		A FAVOR
DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ VICEPRESIDENTE		A favor.
DIP. MARIANO NIÑO MARTÍNEZ SECRETARIO		FAVOR
DIP. GERARDO LIMÓN MONTELONGO VOCAL		Favor
DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS VOCAL		A FAVOR
DIP. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ VOCAL		
DIP. MANUEL BARRERA GUILLÉN VOCAL		

Dictamen que resuelve improcedente la iniciativa que impulsa adicionar los artículos 83 Bis a 83 Septendecim, de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí; presentada por el Diputado José Luis Romero Calzada. (Asunto No. 2451)

**C. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S.**

A las comisiones de, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Desarrollo Económico y Social; y Hacienda del Estado, les fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio del 2017, iniciativa que propone expedir la Ley de Promoción y Desarrollo del Arte Cinematográfico del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por los ciudadanos, Carlos Alejandro Guevara Requena, y Omar Miguel Esparza Velducea, con el número de turno 4508.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis de la referida Iniciativa, los integrantes de las dictaminadoras han llegado a los siguientes

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** Que la iniciativa precitada se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos, 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y correspondiente dictamen.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 98 fracciones X, VI, XII, 108, 104 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, estas comisiones son competentes para dictaminar la iniciativa expuesta.

**TERCERO.** Las que dictaminan realizaron un estudio de la iniciativa propuesta por los ciudadanos Carlos Alejandro Guevara Requena, y Omar Miguel Esparza Velducea, de la que desprende expedir la Ley de Promoción y Desarrollo del Arte Cinematográfico del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objeto de regular las acciones de promoción, fomento, financiamiento y desarrollo del arte cinematográfico en la Entidad, y en sus diversas manifestaciones, misma que deberá de realizarse en los términos y condiciones previstos en la propuesta y, a su vez, deberá ser acorde con la Ley Federal de Cinematografía y su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

**CUARTO.** Que la iniciativa citada en el proemio se sustenta en la siguiente

**“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El cine además de ser la manifestación de todas las artes, tiene un importante rol en la vida social, económica y cultural. El cine es cultura popular, espectáculo y arte que mediante imágenes en movimiento y sonido pretende reflejar la vida bajo la perspectiva del director, ayudado por un equipo de producción.

San Luis Potosí, ha sido pionero en la producción cinematográfica, en el año de 1896, el cine llega a la entidad. Así, en este año se proyectan las primeras películas en una casa ubicada en la calle, llamada actualmente Álvaro Obregón, esquina con Allende, propiedad del señor Salaices, quién de acuerdo a los comentarios de la época filmó una película (ahora extraviada), en varias calles de la ciudad.

En aquellos años existían los denominados "salones" que era donde se exhibían las películas, lugares más o menos improvisados pero que funcionaron varios años, como el "Salón Pathe", en la calle de Escobedo; el "Salón Popular" en la calle de Santa María; el "Salón París", que sería después el "Cine Othón" Y el "Salón Dorado" en la calle 5 de Mayo, pero es el Teatro "O'Farril" ubicado en la calle de Álvaro Obregón, en donde la gente prominente acudía a las funciones de cine.

Es así, que en San Luis Potosí, la producción y proyección cinematográfica ha estado presente por años, probablemente se hicieron más películas en los albores del cine que no han quedado registradas, pero si se conocen algunas como "Más allá del amor" del año 1944, de Adolfo

Fernández, protagonizada por Domingo Soler, basada en una historia del potosino Pascual García Peña y que cuenta la historia del "El Gallo Maldonado", filmada parcialmente en el centro histórico.

Personalidades Como Carlos Amador Martínez de fuerte influencia en el cine mexicano, Lupe Veléz, actriz reconocida internacionalmente, Silvia Derbez, actriz potosina que también tuvo renombre internacional, entre muchos Otros, colocan a San Luis Potosí como parte de la historia fílmica mexicana.

Las salas de cine, son otros de los elementos característicos de la tradición cinéfila potosina, desde el Cine Azteca, hasta el San Luis 70, pasando por el Cine Avenida, el Potosí, el Othón y el Teatro Alameda (hoy Cineteca) fueron punto de encuentro de muchos potosinos de todos los niveles socioeconómicos, en épocas donde la experiencia de presenciar un filme estaba más al alcance de toda la población.

De los años 70 a la fecha, San Luis Potosí, ha tenido otra función dentro de la industria fílmica nacional e internacional: la locación. Todo el Estado, cuenta Con una riqueza visual que es sumamente apreciada por los realizadores, cuenta con sobresalientes piezas arquitectónicas, maravillas naturales y paisajes que van de la aridez a la exuberancia.

A demás desde el año 2009 se ha visto una fuerte atracción de los potosinos, que cada vez están más especializados y profesionalizados en su apreciación sobre todo jóvenes, por no solo asistir al cine, si no de crear películas con producciones locales, lo cual tiene como resultado un público más conocedor, además de realizadores que han surgido como profesionales directores, con apoyo de talentosos equipos de producción, como "Potosí" del productor José Lomas, "Peyote" de Omar Flores, "Realidades de Humo" de Joaquín Lostaunau, "Sacúdanse las Penas" de Andrés Ibáñez, "Las Heridas" de Oscar Araiza, "Aquelarre" de Sebastián Rodríguez, "Cero en Geometría" Isaac Betancourt, "4x4" Roberto Pacheco, "Cuba" Guillermo Padilla, "Envueltos en Xilitla con el Sabor del Zacahuil" Dulcia Rivel, "Vicious Crime" Obed Hernández y José Luis Rivera, solo por mencionar algunos directores y trabajos en donde al menos por proyecto participan 15 a 50 personas, además de la existencia de al menos 3 productoras, 2 festivales vigentes, y una asociación civil (Daguerrotipo AC), que a la fecha continua apoyando a estos y otros realizadores y equipos de producción, que a su vez tienen otros proyectos que como los mencionados, han dado presencia a nuestro estado tanto en concursos como festivales nacionales e internacionales.

Esto es un pequeño recuento introductorio de la importancia que la cultura cinematográfica ha tenido en San Luis Potosí.

Desde el espectador hasta los productores, desde el camarógrafo hasta el tradicional "cácaro" la presencia del cine ha tenido y sigue teniendo un peso definitivo en la creación y disfrute artístico de muchas generaciones de potosinos.

En este sentido, el Estado de San Luis Potosí, al estimular el interés por el arte cinematográfico y brindar las condiciones adecuadas para atraer producciones fílmicas a la región, generará beneficios financieros, y a la vez permitirá posicionar a la capital y a sus 58 municipios como centros de atracción turística y cultural.

Esta iniciativa de crear una Ley de Promoción y Desarrollo del Arte Cinematográfico en San Luis Potosí, resulta innovadora, ya que permite contar con un instrumento jurídico que fomente, promueva, difunda, exhiba, promocióne, incentive y motive el desarrollo del arte cinematográfico en el Estado y los municipios de San Luis Potosí.

En el país, actualmente existe carencia de leyes que regulen recursos financieros suficientes para el desarrollo del cine, por ello, la necesidad de que el Gobierno del Estado incentive la promoción de este arte, a fin de que se desarrollen nuevos proyectos y que la entidad se identifique como líder precursor en este rubro. La Nación y cada Estado, ejercen recursos anuales, mismos que son regulados a través de sus presupuestos de egresos para incentivar programas sociales y culturales, entre otros. De esta



manera, resulta pleno, un proyecto mediante un respaldo jurídico que impulse el arte cinematográfico, para que así puedan generar ingresos económicos para los potosinos a través de empleos directos e indirectos.

En los Estados de nuestro país, se encuentran muy aislados los apoyos de aquellas personas que se dedican a la rama del cine ya que no cuentan con estímulos para su creación, promoción, difusión y exhibición. El Estado potosino carece de fomento a este arte, por lo cual se busca una legislación para brindar respaldo a este sector, en la difusión de nuevos proyectos que den a la sociedad potosina una revolución cinematográfica de calidad en nuestra entidad.

Para la producción de cintas filmicas, se requiere de las nuevas tecnologías, es por ello, que todo lo necesario para su desarrollo implica el movimiento de la economía en el país y en el Estado, de esta forma se incentiva el turismo nacional e internacional, incluso inversiones que lleguen a destinar los grandes empresarios para la promoción y difusión en la entidad que amparen los proyectos filmicos.

Este cuerpo normativo, surge de la necesidad de generar un elemento de carácter legal que establezca lineamientos para brindar incentivos y estímulos económicos a instituciones públicas y privadas, asociaciones y organizaciones civiles de nuestro Estado, quienes en su momento se encargaran de presentar proyectos locales y nacionales para su realización.

Busca promover la participación de los productores, creadores, organizadores y emprendedores interesados en la industria cinematográfica; así como retener el talento de los creadores potosinos mediante acciones de inclusión y equidad.

Dentro de los beneficios de esta Ley, se plantea que todos los trámites, asesorías, información, permisos, autorizaciones y apoyo logístico para la filmación de proyectos cinematográficos en el Estado y municipios de San Luis Potosí sean gratuitos siempre y cuando la producción se encuentre a cargo de realizadores locales o se cuente con un 40% de artistas locales distribuidos en distintos rubros, lo que permite motivar a la industria filmica y a particulares a tener como referente a la Entidad como sede para la realización de sus proyectos, sin dejar de lado las producciones locales y a los artistas potosinos, lo que traería una derrama económica y generación de empleos directos e indirectos.

A la vez, en esta Ley se le otorga, al Ejecutivo del Estado la atribución de crear el Fondo para la Promoción y Desarrollo del Arte Cinematográfico del Estado y los municipios de San Luis Potosí, así como dictar las medidas necesarias para la Creación del Comité Técnico, el cual se encargará de la administración y asignación de los recursos del fondo.

Este proyecto, es una iniciativa que resultó de un ejercicio de derecho comparado de las legislaciones existentes en el país en esta materia, del trabajo de análisis e investigación de un grupo interdisciplinario interesado en promover un cuerpo normativo que fomente el arte cinematográfico.

Esta nueva norma, cumple con los requisitos necesarios para ser considerada una Ley innovadora en esta materia, además es un ordenamiento concreto y preciso que respeta el principio de democracia e inclusión de todos los sectores involucrados en el séptimo arte, así como el público en general. “

**QUINTO.** Que del análisis que se realiza a esta iniciativa, la misma trata de crear un nuevo marco jurídico para la Entidad, que regule la promoción y desarrollo del arte cinematográfico, en el que se prevea además, la creación de un Fondo para la Promoción y Desarrollo del Arte Cinematográfico en el Estado y Municipios; entre otros, argumentan los proponentes en su exposición de motivos, que dicho ordenamiento respetará lo previsto en la legislación federal en materia de cinematografía; sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al establecer en su artículo 73, fracción X, con respecto a las atribuciones del Congreso de la Unión que, tratándose de la Industria Cinematográfica, sólo ese Órgano Legislativo Federal es la autoridad competente para legislar en esa materia, atento a lo previsto por el artículo 124 de la misma Constitución, en el sentido de que, las facultades que no están expresamente

concedidas a la Federación, se entenderán concedida a los Estados; empero, en la especie no sucede así, ya que la Federación es la que cuenta con la facultad de legislar en materia de la industria cinematográfica para toda la República, es decir, al no existir tampoco competencia concurrente, no es atribución de los congresos de los estados legislar en esta rama; por lo que deviene improcedente dicha iniciativa.

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos, 85, 86, y 87 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

### **DICTAMEN**

UNICO. Es de desecharse y, se desecha improcedente, la iniciativa citada en el proemio.

Notifíquese.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DADO EN LA SALA “FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA” DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

**POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO, DADO EN LA SALA “JAIME NUNÓ” DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DADO EN LA SALA DE PREVIAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA UNO DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

"2018, Año de Manuel José Othón".

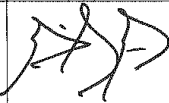

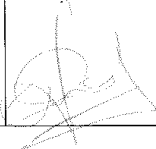
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SENTIDO DEL VOTO	RÚBRICA
DIP. JOSÉ RICARDO GARCÍA MELO PRESIDENTE	a favor	
VICEPRESIDENTE		
DIP. GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI SECRETARIA	A favor	
DIP. JORGE LUIS MIRANDA TORRES VOCAL	A FAVOR	
DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ VOCAL	A favor	
DIP. GERARDO SERRANO GAVIÑO VOCAL		

Hoja de firmas de la comisión de comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el turno 4508.



"2018, Año de Manuel José Othón".

POR LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. GERARDO SERRANO GAVIÑO PRESIDENTE			
DIP. MARIANO NIÑO MARTINEZ VICEPRESIDENTE			
DIP. CECILIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ GORDOA SECRETARIO			
DIP. JORGE LUIS MIRANDA TORRES VOCAL			

HOJA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS TURNOS 4508



"2018, Año de Manuel José Othón".

FOR LA COMISION DE HACIENDA DEL ESTADO

	FIRMA	SENTIDO DEL VOTO
DIP. ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS PRESIDENTA		A FAVOR
DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ VICEPRESIDENTE		A favor.
DIP. MARIANO NIÑO MARTÍNEZ SECRETARIO		Favor
DIP. GERARDO LIMÓN MONTELONGO VOCAL		Favor
DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS VOCAL		A FAVOR
DIP. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ VOCAL		
DIP. MANUEL BARRERA GUILLÉN VOCAL		

# Puntos de Acuerdo

**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA, Diputado Local de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, **PUNTO DE ACUERDO** que se expone a continuación, que sustento en los siguientes:

## **A N T E C E D E N T E S**

Como es bien sabido, la Iniciativa de la Carta de la Tierra es un movimiento global de organizaciones e individuos que avalan una declaración internacional de valores y principios para guiar la transición hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico.

En la actualidad dominan los patrones de producción y consumo que causan devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies.

Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

Es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.

Resulta una medida urgente que toda la comunidad mundial comparta una visión ética sobre las conductas adecuadas tendientes a lograr una vida sostenible global.

Ese es precisamente el objetivo de la “Carta de la Tierra”: ejercer influencia en el concepto de sostenibilidad, obviamente con el respaldo de las Naciones Unidas.

Dicha declaración internacional ha venido conformándose desde 1987, y arrancó con el Informe Nuestro Futuro Común (Comisión Brundtland)) de las Naciones Unidas, en el cual se habla del desarrollo sostenible y se expresa la necesidad de una nueva carta o declaración internacional sobre ambiente y desarrollo que guíe las conductas estatales e interestatales en la transición hacia el desarrollo sostenible.

En 2003, con el apoyo de España, la UNESCO reconoció que la Carta de la Tierra constituye una importante referencia ética para el desarrollo sostenible y apoyó su contenido.

Posteriormente en 2005 la UNESCO incorporó la “Carta de la Tierra”, como instrumento educativo, en el Proyecto de Aplicación Internacional del “Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005- 2014)” (DEDS), que había declarado la ONU en 2002.

Los principios fundamentales de dicho instrumento son:

## **I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA**

## **II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA**

## **III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA**

## **IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ**

Ahora bien, en el 2002 la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) publicó dicha “Carta de la Tierra”, en cuya conclusión invitaba a todos los ciudadanos a involucrarse y participar, expresando su apoyo a dicho documento, y comprometiéndose con las metas y espíritu mismo ahí establecidos, *así como en hacerla parte de todas las organizaciones de negocios, asociaciones e instituciones gubernamentales relacionada con la misma.*

En ese sentido, cabe reconocer a Estados como Michoacán, Morelia, Monterrey y Aguascalientes que han venido trabajando con dichos principios mediante diversas acciones como talleres y conferencias, entre otros.

El Municipio de Aguascalientes en concreto, es un ejemplo de un gobierno local que ha estado utilizando los principios de la “Carta de la Tierra” para su planificación estratégica, políticas y proyectos.

En ese tenor, sería relevante que nuestro Estado, en el marco de declaraciones internacionales de tal trascendencia, avale y exprese formalmente su apoyo a la esencia y los propósitos de tales instrumentos y se comprometa con los mismos.

Lo anterior en la inteligencia de que la condición de avalar dicha declaración está abierta tanto a personas que quieran vincularse en lo individual como a organizaciones, asociaciones e instituciones gubernamentales relacionadas con la misma.

En tal virtud, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), como órgano de la administración pública del estado, encargada de conducir y evaluar la política ambiental estatal, precisamente en aras de un desarrollo económico y social sustentable, debe compartir la visión de dicha Carta de la Tierra, comprometerse a promoverla e implementar estrategias en su respectiva jurisdicción.

## **J U S T I F I C A C I Ó N**

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 que cuenta con 17 ambiciosos objetivos globales (objetivos de desarrollo sostenible) para transformar nuestro mundo, entre los que se menciona, entre otros, el medio ambiente.

## **P U N T O S E S P E C Í F I C O S D E L A C U E R D O**

**ÚNICO.-**Se exhorta a al Titular del Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) se adhiera, avale y/o exprese formalmente su apoyo a la esencia y los propósitos de la “Carta de la Tierra” a fin de asumir dicha declaración internacional como un instrumento orientador en la toma de decisiones sustentables, además de fomentar su contenido.

**A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**



**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI  
LEGISLATURA DE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA, Diputado Local de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, **PUNTO DE ACUERDO** que se expone a continuación, que sustento en los siguientes:

<b>A N T E C E D E N T E S</b>
--------------------------------

La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada el 13 de septiembre del 2012, cuya última reforma se publicó el 20 de septiembre del 2016, crea, el *Registro Estatal de las Personas con Discapacidad* y el *Sistema Estatal de Información de las Personas con Discapacidad*, **con objeto de contar con un padrón a considerar, para todos los servicios a los que pueden acceder en el Estado y en el orden nacional este grupo vulnerable.**

El artículo 10, fracción XII de dicho Ordenamiento, señala entre las atribuciones del *Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia* la consistente en “llevar, coordinar y administrar el Registro y Censo Estatal de Personas con Discapacidad, así como el *Sistema Estatal de Personas con Discapacidad*”.

Dicho registro o censo facilitará *la creación de políticas públicas focalizadas para cada sector de este grupo vulnerable, pues ello permite determinar qué tipo de discapacidad padecen y en dónde se encuentran, además de constituir fundamentalmente un sustento real para proyectar el presupuesto que debe destinarse a los programas sociales orientados a personas con discapacidad para el ejercicio fiscal del año 2019.*

Como podemos observar, el presupuesto de egresos para este ejercicio 2018, no hace referencia alguna a datos derivados de dicho Registro, no obstante que la Ley relativa creó tal Registro, Censo o Padrón desde el 2012.

La Ley del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, en su apartado “8.4” denominado “Inclusión de Personas con Discapacidad” se limita a señalar, sin abundar en datos reales y consisos, que “*El Estado de San Luis Potosí sigue manteniendo una especial atención a los sectores vulnerables de la población; a través de la alineación de*

*los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 se han logrado avances significativos en la materia a lo largo de la presente administración estatal”.*

....

....

*“Con estas acciones el Estado da cumplimiento a lo que establece el artículo 9° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, adoptando las medidas pertinentes y necesarias para asegurar el acceso a los entornos físicos, al transporte, la información y las comunicaciones en zonas urbanas y rurales. Muestra de ello es la instalación del Comité Técnico de Implementación de la Normatividad de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, en donde se analizan y diseñan políticas públicas orientadas a la integración plena de quienes viven con discapacidad”.*

Un real avance significativo sería que efectivamente se encuentre integrado el Registro Estatal de Personas con Discapacidad, y que en base en él:

- Se diseñen políticas públicas orientadas a la integración plena de quienes viven con discapacidad, y
- Se proyecte el presupuesto que debe destinarse a los programas sociales orientados a personas con discapacidad para el ejercicio fiscal del año 2019

Lo anterior, en virtud de que nuestros presupuestos deben de ser ciertos y precisos, y sin una referencia como el Registro Estatal de Personas con Discapacidad, resulta vago el destino exacto de los recursos para cada sector o tipo de discapacidad que conforma dicho grupo vulnerable en nuestro Estado, pues no se sustenta en una real plataforma de información.

De la página virtual del Sistema Estatal de Personas con Discapacidad, no se advierte la existencia de tal registro, lo cual crea la incertidumbre sobre su debida integración, o “status” que guarda a la fecha, o bien sobre su actualización, en su caso.

Si bien es cierto, que de la página virtual del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí ( <http://rutys.slp.gob.mx>) relativa al “Registro Único de Trámites y Servicios” encontramos un trámite y servicio denominado “Credencial para identificación de personas con discapacidad”, que ofrece el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, no menos cierto lo es, que de la fundamentación jurídica que ahí se señala, no se desprende con precisión nada relativo al Registro Estatal de Personas con

Discapacidad, esto es, algún vínculo entre la expedición de credenciales y el Censo que debe existir por Ley.

En tal página virtual podemos observar como fundamentación jurídica: los artículos 16 fracción II inciso i) de la Ley de Asistencia Social para el Estado (P.O.E. 19 de enero del 2002); 32, fracción II del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 10, fracción III de la Ley Estatal para las personas con discapacidad (P.O.E. 29 de marzo del 2011).

Independientemente de que tanto la Ley de Asistencia Social para el Estado, como la Ley para las personas con Discapacidad señaladas fueron abrogadas, por decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de junio del 2017 y el 13 de septiembre del 2012 (ahora la Ley Estatal para la Inclusión de las personas con discapacidad), respectivamente, cabe puntualizar que de dicho fundamento jurídico se advierte que dicha Credencial se expide básicamente para dos fines:

- a) Diseñar, construir y operar las rutas de atención para personas con discapacidad en materia de asistencia social;
- b) Acreditar la discapacidad de las personas que así lo soliciten, para hacer uso de los beneficios especiales que se les otorgan

Luego entonces, si bien es cierto que el objetivo de este trámite también resulta ser una medida pertinente para proporcionar acceso a las personas con discapacidad a distintas necesidades, no menos cierto lo es, que el mismo consiste en una simple “acreditación” y no hace las veces de un “Registro Estatal de Personas con discapacidad”, cuyo objeto esencial de naturaleza **estadístico o censal**, es contar con una base de datos **ciertos y determinables**.

Es por ello que el Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia deberá evaluar el estado que guarda la figura creada por la Ley Estatal para la Inclusión de las personas con discapacidad vigente: “*Registro Estatal de Personas con Discapacidad*”, e implementar las acciones relativas, en su caso, para la debida integración del mismo, en concordancia con dicho Ordenamiento y con lo preceptuado por el artículo 12.3 de la Convención de las Personas con Discapacidad.

## JUSTIFICACIÓN

Es menester dar seguimiento a las medidas que se han venido adoptando y legislando, en cumplimiento a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo uso adecuado de los mecanismos o figuras creados para tales efectos, pues el

alcance de tales medidas responderán a los parámetros de apropiadas políticas públicas y a la efectiva asignación de recursos, para la debida integración y acceso de dicho grupo vulnerable a la sociedad.

<b>PUNTOS ESPECÍFICOS DEL ACUERDO</b>
---------------------------------------

**ÚNICO.**-Se exhorta a al Titular del Ejecutivo del Estado para que a través del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, en concordancia con lo previsto por el artículo 10, fracción XII de la Ley para la Inclusión de la Personas con Discapacidad en el Estado, evalúe el Estado que guarda el *“Registro Estatal de Personas con Discapacidad”* e implemente las acciones relativas, en su caso, para su debida integración así como del Sistema Estatal de Información acerca de personas con discapacidad, a fin de contar con el sustento real para diseñar políticas públicas orientadas a la integración plena de quienes viven con discapacidad, así como proyectar el presupuesto que se destinará a los programas sociales orientados a personas con discapacidad para el ejercicio fiscal del año 2019.

**A T E N T A M E N T E**

**DIPUTADO JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA**

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
PRESENTES.**

**GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI**, diputada local por la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente Punto de Acuerdo.

**ANTECEDENTES**

El día 08 de marzo de cada año, se conmemora el día Internacional de la Mujer, y es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Es una fecha en la que las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras, se unen para celebrar su día, siendo esta, una tradición de no menos de noventa años, en la que se ha buscado igualdad, justicia, y desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la historia; siendo la Revolución Francesa uno de los antecedentes que más se recuerdan y que fue cuando las parisenses que pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

En concreto, la idea de un día internacional de la mujer, que surgió al final del siglo XIX, ha ido creciendo y expandiéndose principalmente gracias a nuestro mundo cada vez más globalizado; lo que empezó como una lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, hoy día ha logrado penetrar en el consiente de la sociedad y en prácticamente todos los ámbitos donde la mujer se desenvuelve, permitiendo avanzar en la importancia del rol femenino y su gran aporte en la construcción del México actual.

**JUSTIFICACION**

En el marco del día internacional de la mujer, considero importante referirme a su incorporación al mercado laboral, lo que ha propiciado modificaciones en la realidad económica de nuestro país y, por supuesto, en la individualidad familiar. A pesar de ello, no hemos sido capaces de garantizarles una igualdad sustantiva en un aspecto tan primordial como es el laboral, y en consecuencia en el salarial.

De acuerdo con el informe “Brecha Mundial de Género 2017”, que realiza el Foro Económico Mundial, las mujeres mexicanas ganan menos de la mitad que los hombres haciendo el mismo trabajo, lo que ubica a nuestro país en el lugar 81 de 144, en lo que se refiere a la desigualdad salarial.

Todavía más, el referido informe destaca que el 61.5 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen sin recibir pago alguno, mientras que en el caso de los hombres esta cifra es de 19.4 por ciento. Datos que concuerdan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que advierte que en México la brecha laboral y salarial se observa con mucho más fuerza que en el resto de países que integran la dicha organización.

Actualmente contamos con leyes que prohíben la discriminación salarial por cuestión de género, sin embargo la realidad de millones de mujeres es que hoy por hoy siguen siendo una parte del mercado laboral vulnerable a los abusos de empleadores, que tienden a frenar la mejora salarial de este importante segmento de la población.

El crecimiento del país, así como la estabilidad social, depende en gran medida de la oportunidad que tenga cada ciudadano para desarrollarse a plenitud y en igualdad, en ese sentido, la igualdad debe entenderse como la aplicación de las mismas condiciones laborales para todos los empleados, hombres y mujeres, sin distinción, así como también sin distinción deben tener el derecho a recibir un mismo salario.

Estamos convencidos que una misma remuneración no solo debe ser un asunto de equidad, sino de desarrollo, toda vez que cuando las mujeres se empoderan en la sociedad, otros sectores de la población se enriquecen de esta situación, logrando así mejores condiciones de vida.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo, tiene como finalidad hacer un llamado a nuestras autoridades estatales para que, en aras de reforzar el marco normativo, determinen o bien desarrollen un mecanismo de verificación para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad salarial entre géneros, para que las empresas de los sectores social y privado den cumplimiento a dicho principio, y evitar con ello cualquier tipo de discriminación salarial en perjuicio de la mujer.

Con lo anterior, estoy segura que estaremos dando un paso más hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y coadyuvando en la construcción de una sociedad respetuosa de su trabajo y, por consiguiente, de sus derechos.

#### **PUNTO DE ACUERDO**

**UNICO.** Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que, en apego al marco normativo laboral, determine o bien desarrolle un mecanismo de verificación para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad salarial entre géneros dentro de las empresas de los sectores social y privado en San Luis Potosí, poniendo especial atención en el rubro de la mujer por ser éste un grupo vulnerable.

San Luis Potosí, S.L.P., 28 de febrero de 2018

**DIP. GUILLERMINA MORQUECHO PAZZI**

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DE LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI  
PRESENTES. -**

**ESTHER ANGELICA MARTINEZ CARDENAS**, Diputada integrante de esta H. Legislatura y miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en ejercicio de la facultades que me concede la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 71, 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí someto a la consideración de esta Honorable Soberanía: **Proposición con Punto de Acuerdo** bajo la siguiente

**EXPOSICION DE MOTIVOS:**

Hace un año hice uso de esta tribuna para impulsar varias iniciativas en materia de igualdad de género y protección a los derechos políticos de las mujeres mismas que como parte de la reforma político electoral que esta legislatura votó y el día de hoy son parte de la ley. Sin embargo hay un tema preocupante en el que insistiré nuevamente, la violencia política en contra de las mujeres.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones — incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Con la implementación de medidas afirmativas que fomentaron el aumento de la participación política de las mujeres, las reformas electorales, la Interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que obstaculiza el ejercicio

Lamentablemente durante los procesos electorales donde cada día más mujeres contienden por cargos de toma de decisiones, los casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con arma de fuego a personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradoras, así como familiares de candidatas son una constante que debe parar.

Tomando en cuenta las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades mexicanas se percataron de la falta de una ley específica en México sobre el tema y como medida emergente se emitió un protocolo en el que se establecieron las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres.

Dicho protocolo fue presentado desde el 25 de noviembre de 2017 y si bien en él se señalan las autoridades que deberán adoptar, mínimamente, las acciones señaladas, las autoridades en el nivel local aun no cuentan con la información, capacitación y no se ha diseñado un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en los estados lo cual podría complicar su efectiva aplicación.

Por lo antes mencionado considero necesario proponer el siguiente:

### **PUNTO DE ACUERDO**

**Uno.** - Se gire oficio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), para sensibilizar, capacitar e implementar una estrategia para difundir el “Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres” y diseñar un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en el estado de San Luis.

San Luis Potosí, a 05 de marzo 2018

**ATENTAMENTE**

**DIP. ESTHER ANGELICA MARTINEZ CARDENAS**



**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA DE CONGRESO  
DEL ESTADO  
P R E S E N T E S.-**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, Diputado **Hector Mendizabal Perez**, integrante de esta LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, **PUNTO DE ACUERDO** por el que **EXHORTA**, a la **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (SEDECO)** bajo lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

El pasado 18 de enero del presente año, un grupo de ciudadanos presento un escrito dirigido al suscrito en carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia del Honorable Congreso del Estado, en el cual, solicitaban que la Comisión que tengo a bien en presidir en el uso de las atribuciones consagradas en distintos ordenamientos, investigue y documente la venta de Predios en la Zona Industrial del Potosí, así como también se exhorte a la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí y Auditoria Superior del Estado, para que informen, documenten y expliquen la situación de la “Noria San José”, situación que encuentra relación con una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

En este orden de ideas, en la más reciente reunión de la Comisión de Vigilancia se dio lectura y cuenta del asunto, por lo que se acordó lo siguiente;

**JUSTIFICACION**

Visto que el escrito de cuenta, se fundamentó en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el cual al ser una garantía individual del gobernado, cumpliendo con las diversas formalidades que son; que se haya formulado de manera pacífica y respetuosa así como la constancia de fecha cierta de la solicitud, con el fin de no trasgredir el derecho de petición del ciudadano , guardando las estrechas proporciones con el fin de no intervenir en la investigación y curso en caso de existir una denuncia, así como no invadir esferas jurídicas competentes a otros entes gubernamentales como lo son; la de investigar, perseguir y sancionar las probables comisiones de delitos, se propone exhortar a la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, para que en uso de sus atribuciones en termino breve haga llegar a la Comisión de Vigilancia del Honorable Congreso del Estado toda y cada una de la documentación y secuencia que tenga en su poder, respecto a la supuesta venta y participación de dichos predios, esto es así, en su carácter de ente auditable del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis potosí. lo anterior con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 en sus fracciones II, V, IX y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, articulo 1 y 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. Por lo que se procede a elevar a punto de acuerdo lo solicitado.

Por lo anterior someto a Consideración de esta Honorable Soberanía lo siguiente.

**PUNTOS ESPECIFICOS.**

**PRIMERO.-** Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (SEDECO) remita a la Comisión de Vigilancia en termino breve toda y cada una de la documentación respecto a la supuesta participación y venta de predios en la zona industrial del Potosí en relación a la Noria San José.

**SEGUNDO.-**Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad señalada para los efectos administrativos correspondientes.

**ATENTAMENTE**

**DIPUTADO. HECTOR MENDIZABAL PÉREZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ**

<sup>1</sup> DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO